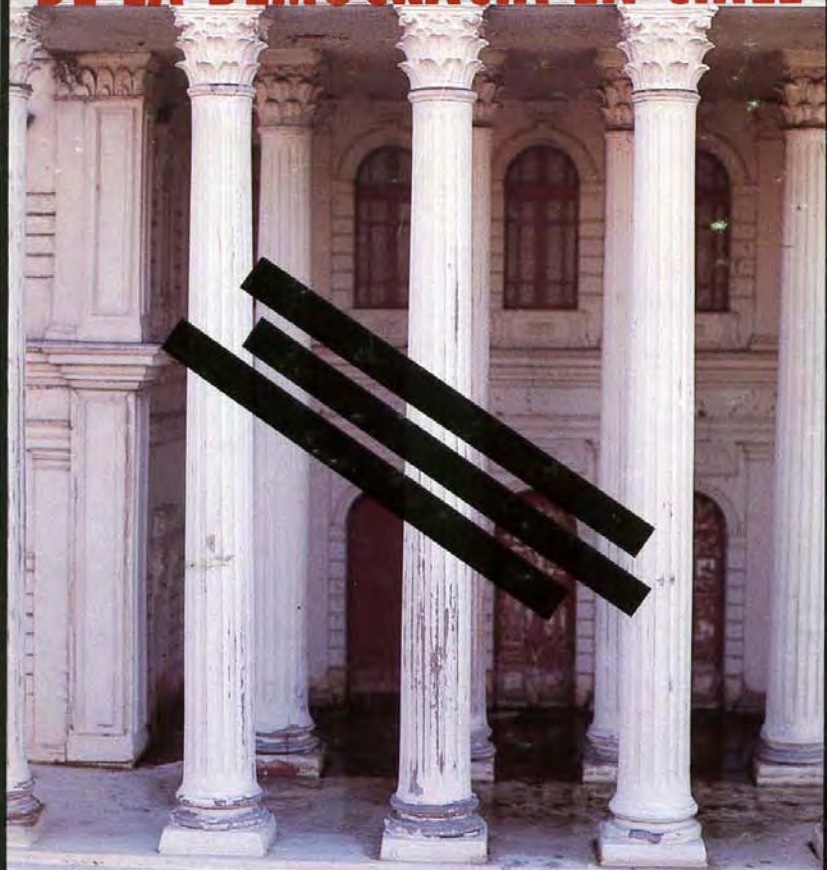


EL QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA EN CHILE



ARTURO VALENZUELA

FLACSO

EL QUIEBRE DE LA DEMOCRACIA EN CHILE



ARTURO VALENZUELA

**EL QUIEBRE
DE LA DEMOCRACIA
EN CHILE**

21.-

FLACSO
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

Esta obra es traducción del libro
The Breakdown of Democratic Regimes. Chile.
Original English - language edition published
by The Johns Hopkins University Press.
Copyright © 1978 by The Johns Hopkins University Press.

Diseño de portada: Ximena Subercaseaux
Diseño de páginas: Patricio Andrade
Traducción: Josiane Bonnefoy
Composición: Centro Integrador de Datos Ltda.
Producción: Darío Osés

ISBN 956 - 205 - 029 - 6

Impresor: Salesianos, Bulnes 19, Santiago.
Impreso en Chile / Printed in Chile.

INDICE

PRESENTACION. Angel Flisfish	9
PREFACIO DE JUAN LINZ	13
INTRODUCCION	21
NOTA DEL AUTOR PARA LA TRADUCCION	33
CAPITULO I. LA POLITICA CHILENA A MEDIADOS DE SIGLO	35
CAPITULO II. FIN DE LOS AÑOS SESENTA Y LA ELECCION DE ALLENDE: EL CAMBIO SOCIECONOMICO Y LA CRISIS POLITICA	81
CAPITULO III. EL PASO A UNA SOCIEDAD SOCIALISTA Y LA EROSION DEL CENTRO POLITICO	143

CAPITULO IV.	
LOS MILITARES CHILENOS, LA ELECCION DE 1973 Y EL QUIEBRE INSTITUCIONAL	219
INDICE DE NOMBRES Y MATERIAS	291

PRESENTACION

¿Por qué la publicación hoy, a comienzos de 1989, de un libro que busca explicar el colapso de nuestra democracia hace ya más de quince años? Muchos pueden pensar que su valor es meramente historiográfico, sin un interés político contemporáneo, puesto que atañe a un pasado irrevocablemente cancelado. Otros, quizás piensen que su publicación es inoportuna. Después de todo, hurgar en las causas de un desenlace que enfrentó trágicamente a unos chilenos contra otros, si bien es ya historia, a la vez continúa poseyendo una actualidad indeseable, ¿no significa reavivar querellas, animosidades y divisiones en un período que exige alternativas, o según algunos, aun olvidarlas?

Afortunadamente, el *Prefacio* del Dr. Juan Linz, una de las figuras eminentes de la ciencia política contemporánea, escrito especialmente para la presente traducción del libro de Arturo Valenzuela, exime de la tarea de enunciar detalladamente las razones que le confieren una clara relevancia práctica para la situación política nacional de los próximos años, en

términos de proporcionar lecciones que, bien aprendidas, no pueden sino favorecer la probabilidad de una consolidación de la democracia en Chile.

Es esa relevancia para la política chilena de esta etapa de transición y consolidación democrática que estamos viviendo uno de los elementos que principalmente ha llevado a FLACSO a poner a disposición del público chileno la obra de Arturo Valenzuela.

Su lectura atenta y reflexiva no podrá dejar de convencer que la política no es ni el reino de la libertad absoluta -donde en consecuencia sólo importa la voluntad de los actores-, ni tampoco el dominio de la necesidad ciega, con la implicación de estricto determinismo que esa idea conlleva. Por consiguiente, quienes hacen la política son responsables por sus resultados porque ejercen una libertad que es importante, pero no absoluta, y porque el carácter de esos resultados está condicionado por el sentido de realidad que se esfuerzan por adquirir e imprimir a sus acciones. Si la publicación y difusión de este libro contribuye a generalizar el convencimiento sobre la validez de esta proposición, influyendo sobre los modos con que se aborden los desafíos de construcción institucional que Chile enfrenta, sólo ese logro bastaría para concluir que nuestro esfuerzo editorial no ha sido en vano. No obstante, nuestro optimismo nos hace pensar que superaremos con creces esa meta, y que muchos extraerán diversas otras lecciones de la lectura de este libro.

Detrás de este esfuerzo editorial nuestro hay otra motivación, no menos importante que la primera.

El libro de Arturo Valenzuela es de una notable calidad académica. Está atravesado por una lógica de análisis que integra datos empíricos, elementos historiográficos, descripciones institucionales, distintas duraciones temporales, consideraciones de nivel micro y de nivel macro, circunstancias políticas, socioeconómicas y culturales, premisas teóricas y modelos analíticos, de modo tal como para hacer confluír, con gran rigor y apego a la evidencia disponible, en una explicación global, que es a la vez coherente y convincente.

Estas virtudes otorgan al libro un valor paradigmático en el dominio de las actividades académicas politológicas latinoamericanas. Se trata de un análisis ejemplar, que conjuntamente con aportar nuevos conocimientos, es digno de ser imitado, en cuanto al estilo empleado para construir una explicación científicamente solvente para un fenómeno complejo, por las nuevas generaciones de latinoamericanos que comienzan a iniciarse en la disciplina. Por ello, pensamos que al publicar la presente traducción estamos prestando un servicio a todos nuestros colegas que, de una u otra manera, son responsables por la formación docente de esas nuevas generaciones de politólogos y sociólogos políticos.

Finalmente, hay que subrayar que al momento de su publicación en lengua inglesa, en 1978, la obra de Arturo Valenzuela significó un aporte original al conocimiento sobre la vida política chilena. El elemento de mayor originalidad reside quizás en la proposición que afirma que un elemento explicativo central del colapso de la democracia chilena reside en el pluralismo polarizado que ha caracterizado su sistema

de partidos, y que la génesis de ese pluralismo polarizado se origina en un desplazamiento de un centro político flexible y pragmático por un partido ideológico.

Como bien señala Juan L. Linz en su *Prefacio*, quien destaca que ese análisis vio la luz por vez primera en un seminario de la Universidad de Yale en diciembre de 1973, esta contribución de Arturo Valenzuela ha tenido una fuerte influencia en los estudios posteriores sobre la política chilena. Además, de la exactitud de esta apreciación del profesor Linz, es también cierta que la paternidad de esa contribución no ha sido constatada con toda la fuerza que ella merece.

La acreditación de la paternidad (o maternidad) de un conocimiento original por la comunidad de pares académicos no es una cuestión baladí, ni un asunto de vanidad. Es parte esencial de la ética académica. En este sentido, la traducción de la obra de Arturo Valenzuela le hace justicia a un aporte pionero del cual nos hemos beneficiado, directa o indirectamente, todos quienes hemos hecho de la comprensión de la realidad política chilena nuestro oficio.

ANGEL FLISFISCH

PREFACIO DE JUAN LINZ

El estudio del quiebre de los regímenes democráticos y la transición del autoritarismo a la democracia ha llegado a ser una preocupación central de la sociología política contemporánea. El libro sobresaliente de Arturo Valenzuela sobre el quiebre chileno forma parte de un esfuerzo multinacional más amplio de investigación académica que se inició en la década de 1960 en la Universidad de Columbia, cuyo objetivo era el de explicar por qué y cómo tiene lugar el derrumbe de regímenes. Recurriendo a las percepciones explícitas en la obra monumental de Carl Dietrich Bracher respecto a la caída de la República de Weimar en Alemania, este esfuerzo tuvo como premisa la hipótesis que los quiebres democráticos no se pueden comprender fijando la atención simplistamente sobre las tensiones socioeconómicas en la sociedad, o descartando los factores políticos como epifenómenos que sólo reflejan fuerzas sociales más amplias¹. La obra de Bracher, a la vez que

1. Véase el ensayo teórico-histórico de Karl Dietrich Bracher "Auflosung einer Demokratie: Ende der Weimarer Republik als Forschungsproblem", in *Faktoren der Machtbildung*, ed. por Arkadij Gurland (Berlín: Duncker y Humbolt, 1952).

numerosos estudios históricos y monografías acerca de las transiciones de regímenes, apuntaba a la consideración de los factores políticos como variables independientes fundamentales por derecho propio. Esto no significa que las características estructurales subyacentes de las sociedades, incluyendo la desigualdad social y económica, la concentración del poder económico o profundas crisis económicas y sociales no afecten las perspectivas de estabilidad de los regímenes. Lo importante es que estas características estructurales de las sociedades -sus conflictos actuales y latentes- pueden ser mejor comprendidos como parámetros que proveen una serie de oportunidades y obstáculos que afectan al conjunto y la naturaleza de las decisiones que efectúan los actores sociales y políticos. Estas opciones, a su vez, pueden conducir a distintos desenlaces que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de la continuidad y estabilidad de un régimen. El modelo sugerido por la obra de Bracher era probabilístico, no determinista.

Para examinar en forma sistemática las premisas de este modelo, el grupo de Columbia invitó a especialistas académicos a presentar trabajos en una reunión especial organizada por el Comité de Sociología Política en el Séptimo Congreso Mundial de Sociología celebrado en Varna, Bulgaria, en 1970. Los casos considerados en esa sesión preliminar incluyeron los de Finlandia, Italia, Alemania, España, Austria, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Portugal, Francia y Grecia.² En Varna, Juan Linz y Alfred Stepan, los organiza-

2. Los académicos participantes incluyeron a Eric Allardt, Paolo Farneti, Rai-

dores del proyecto de investigación, concluyeron que debieran agregarse casos adicionales para explorar aún más al fondo la hipótesis central que informaba el estudio y que una conferencia internacional debiera realizarse para evaluar el progreso en lo que se estaba realizando. Otros especialistas fueron invitados a contribuir con trabajos sobre Argentina y Venezuela.³ A Arturo Valenzuela se le solicitó un estudio sobre el quiebre de la democracia en Chile.

Cuando las Fuerzas Armadas de Chile derrocaron al gobierno de Salvador Allende en septiembre de 1973, los directores del proyecto le solicitaron al profesor Valenzuela que dejara de lado su manuscrito inconcluso respecto al quiebre de 1924 y que preparara un trabajo analizando el derrumbe de 1973 para la Conferencia que iba a tener lugar en la Universidad de Yale en diciembre de 1973. El caso chileno era considerado vital para el proyecto porque era el caso más reciente de quiebre democrático; era también la democracia más perdurable en el mundo que había sufrido un colapso de régimen. La publicación final derivada de nuestro esfuerzo de investigación se dividió en cuatro tomos: una introducción teórica por este autor que sintetiza la labor del proyecto y bosqueja sus contribuciones teóricas, una colección de ensayos que tratan los casos de quiebres europeos, una colección de ensayos sobre los derrumbes de América Latina y, en consi-

ner Lepsius, Walter Simon, Peter Smith, Alfred Stepan, Alexander Wilde, Arend Lijphard y Juan Linz.

3. Los investigadores invitados fueron Guillermo O'Donnell, Julio Collier y Daniel Levine.

deración a su importancia, un volumen separado sobre el caso de Chile.⁴

El libro de Valenzuela, que ha tenido seis impresiones en el idioma inglés, y es ampliamente conocido en círculos académicos internacionales, pronto se estableció como obra definitiva acerca de la crisis chilena y una contribución esencial para nuestra comprensión del proceso de derrumbes de regímenes.⁵ El estudio documenta elocuentemente algunas de las generalizaciones más importantes que emergen de las reflexiones teóricas del proyecto de investigación. Después de examinar minuciosamente y descartar otras hipótesis competitivas que subrayan los determinantes socioeconómicos en las crisis de regímenes el estudio documenta la importancia de los factores políticos para explicar el derrumbe del régimen chileno. También confirma otra tesis central de nuestra labor: que el factor más responsable en última instancia de la destrucción de un régimen político democrático no es la presión de las fuerzas extremistas o democráticas, sino la erosión de las fuerzas moderadas o centristas "pro-régimen" y la politización de las instituciones "neutrales" (como los tribunales de justicia y las fuerzas militares que deben estar sobre la

4. Los trabajos publicados en el proyecto sobre quiebres incluyen Juan J. Linz, *The breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilibration*; Juan J. Linz and Alfred Stepan, *The Breakdown of Democratic Regimes: Europe; The Breakdown of Democratic Regimes: Chile*; Los estudios fueron terminados en 1976 y publicados por la Johns Hopkins University Press en 1978.

5. Una edición italiana, que publicó la versión original del trabajo de Valenzuela para la conferencia de la Universidad de Yale es *Il crollo della democrazia in Cile*, traducido con una introducción por Leonardo Morlino (Torino: Centroi Di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, 1977).

contienda política), con la consiguiente polarización total de la población, es lo que más influye en la caída de un régimen democrático. Al presentar este argumento, Valenzuela evita la trampa de una interpretación puramente "voluntarista" de la política chilena. Más bien delinea cuidadosamente los parámetros económicos, políticos e institucionales que formaron el marco dentro del cual los actores políticos efectuaron las decisiones individuales y grupales que condujeron al desenlace fatal.

El libro de Valenzuela, de admirable brevedad, es también uno de los mejores estudios de determinado sistema político que se pueda encontrar en la literatura de la ciencia política. Es lectura obligada para comprender cómo se desarrolló el sistema político chileno y cómo funcionaba antes del golpe militar. Como tal describe con sofisticación analítica las características fundamentales del sistema partidista e institucional chileno tal como éste había evolucionado hacia mediados del presente siglo. El autor abre nuevo terreno al aplicar el concepto de un sistema polarizado de partidos políticos, provenientes de la obra en Italia de Giovanni Sartori, para explicar el funcionamiento del sistema partidista chileno. El subraya el papel fundamental que los partidos de centro pragmático jugaron históricamente en la supervivencia de las instituciones democráticas de Chile y la seria amenaza que surgió para la estabilidad política del país al ser reemplazadas estas fuerzas pragmáticas por un centro ideológico empeñado en transformar la política chilena, contribuyendo en el proceso, mayormente de manera no intencional, a la erosión de los

mecanismos de acomodo y transacción tradicionales en la nación. El análisis de la política partidista polarizada, y de la erosión de un centro pragmático y de la política consensual de centro en Chile, realizado por primera vez en el seminario de Yale en 1973, ha tenido fuerte influencia en los estudios que se han realizado posteriormente sobre política chilena, al punto que es hoy considerado como uno de los elementos fundamentales en la interpretación más aceptada del quiebre de la democracia en ese país.

Pero el trabajo de Valenzuela es más que un simple análisis esencial de las reglas y procedimientos de la vida política e institucional de Chile; también contiene una excelente descripción del desarrollo de la crisis en la política chilena que tuvo su fuerte escalada después de la elección de Salvador Allende. Valenzuela muestra cómo, en forma dialéctica, las acciones de un grupo o serie de grupos condujeron a las reacciones de otros grupos, lo que, a su vez, alteró la correlación de fuerzas y redujo el espacio de maniobra y acomodo. Sin embargo, aunque subraya los enormes obstáculos y desafíos que confrontaban las élites chilenas frente a una crisis económica y social que iba en escalada y la acción negativa de las fuerzas no-democráticas, el autor no comparte el punto de vista que el sistema chileno estaba inevitablemente destinado al colapso. El deja lugar para la acción opcional, para individuos que evitan los errores, y el rescate de un sistema político que había sido forjado por todos los chilenos a través de muchas generaciones.

Como tal, el caso chileno sirve como lección para otros

pueblos. También sirve como lección para la generación actual de chilenos a medida que se esfuerzan por recuperar un proceso político que era tan admirado alrededor del mundo. Este libro debe servir como lección del hecho que ideologías que pretenden instaurar utopías suelen conducir a trágicos desenlaces, particularmente cuando los que se embarcan en estos proyectos son una minoría que trata de imponer su utopía sobre la sociedad entera. Pero también debe ayudarnos a recordar que pequeños intereses de grupo y ambiciones personales frecuentemente ciegan a los actores políticos a sus responsabilidades mayores -que es importante que los líderes asuman riesgos en el esfuerzo por crear y proteger las instituciones democráticas.

El período posterior al plebiscito es un buen tiempo para poner este libro a disposición de un público chileno y de lengua castellana. Es de actualidad porque los líderes chilenos deben examinar su pasado reciente con mucha acuciosidad para juzgar qué fue lo que se hizo equivocadamente y cómo se pueden evitar los mismos errores en el futuro. Claramente Chile precisa de un esfuerzo por crear un proceso político más consensual, que facilite la toma de decisiones en un contexto de fuertes divisiones ideológicas sin caer en continuas crisis que amenacen la supervivencia misma del régimen. Los líderes políticos chilenos, en un momento crítico de transición institucional, debieran considerar muy seriamente la opción de instituir un régimen parlamentario.⁶ Es muy po-

6. Valenzuela ha desarrollado esta tesis en su estudio *Orígenes y características del sistema de partidos políticos en Chile: una proposición para un gobierno par-*

sible que si Chile hubiera tenido un régimen parlamentario en 1973 el gobierno hubiera caído, pero no el régimen. Un sistema parlamentario provee los incentivos para la creación de mayorías gobernantes y soluciones de transacción cuando no existe mayoría absoluta, en lugar de incentivos para crear programas presidenciales que cada seis años tratan de forjar una nueva utopía. A ese fin, los chilenos debieran examinar cuidadosamente el proceso de transición en España y su instauración de una democracia parlamentaria en un país con una tradición democrática mucho más breve que la de Chile.

JUAN J. LINZ

Profesor de Ciencias Políticas y Sociales

Universidad de Yale

EE.UU.

Noviembre de 1988

lamentario, *Estudios Públicos* N° 18 (Otoño 1985), pp. 87-154. Para una discusión teórica general sobre este tema, véase el trabajo preliminar de Juan Linz, *Democracy, Presidential or Parliamentary: Does it Make a Difference?*. Estudio preparado para el seminario sobre "Partidos Políticos en el Cono Sur" realizado en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C. septiembre 9-12 con el auspicio de la Fundación Mundial para la Paz.

INTRODUCCION

En la mañana del 11 de septiembre de 1973, aviones de la Fuerza Aérea de Chile bombardearon e incendiaron La Moneda, el palacio presidencial, y el símbolo más elocuente de las instituciones históricas de Chile. Los escombros humeantes marcaron el fin de Salvador Allende, un socialista profundamente convencido que podía conducir a su país a una mayor justicia social, dentro del marco de sus tradiciones democráticas, pluralistas y libertarias. La trágica muerte de Allende, tras el fracaso de su experimento, marcó no sólo el fin del gobierno de la Unidad Popular, sino también el violento derrumbe de una de las democracias más antiguas del mundo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué dejó de existir una institucionalidad ampliamente admirada en el extranjero?

Los golpes de Estado y regímenes militares, frecuentes en otros países latinoamericanos, casi no existieron en Chile desde la tercera década del siglo XIX. A partir de esa fecha, las élites chilenas habían logrado forjar un conjunto de instituciones viables que permitieron a la gran mayoría de los pre-

sidentes completar su mandato y entregar el mando al sucesor debidamente elegido.¹

Este proceso se vio facilitado por la ausencia de divisiones sociales y económicas agudas en la clase dirigente chilena. Tanto las elites terratenientes tradicionales como los nuevos intereses mineros y comerciales estaban igualmente comprometidos con una economía de exportación. Los conflictos surgieron, básicamente, en torno a cuestiones relacionadas con la expansión de un Estado laico y centralizado. Ya a mediados de la década de 1850, los caciques locales y la Iglesia se alarmaban cada vez más por la creciente injerencia del Estado en la sociedad. La revolución de 1891 apuntaba, en gran medida, a la restitución de la autonomía de los poderosos intereses regionales.² Si bien la revolución debilitó la autoridad

1. Para una discusión de esta tesis véase Claudio Véliz, *La mesa de tres patas, Desarrollo Económico*, 3(1-2): 173-230, abril-septiembre de 1963. Este tema también es abordado en Armand Mattelart, Carmen Castillo y Leonardo Castillo, *La ideología de la dominación en una sociedad dependiente* (Buenos Aires: Ediciones Signos, 1970); Norbert Lechner, *La democracia en Chile* (Buenos Aires: Ediciones Signos, 1970); y Julio Samuel Valenzuela, *The Determinants of Suffrage Expansion in Chile: The 1874 Law* (Documento no publicado, Columbia University, 1972). (Versión en castellano: *Democratización vía reforma: La expansión del sufragio en Chile* (Buenos Aires, Ediciones del Ides, 1985).

2. Un excelente artículo sobre la historiografía de la guerra civil de 1891 es Harold Blakemore, *The Chilcan Revolution of 1891 and its Historiography*, *Hispanic American Historical Review*, 45 (3): 393-421, agosto de 1965. Las interpretaciones tradicionales de la guerra ponen énfasis ya sea en la ideología y personalidad de Balmaceda y los actores parlamentarios, o bien en el conflicto institucional entre el gobierno y el Congreso. Los investigadores marxistas, como Hernán Ramírez Necochea, han propuesto una interpretación revisionista. Ramírez sostiene que Balmaceda fue un nacionalista que quería que la industria salitrera quedara en manos chilenas. Sus intenciones fueron combatidas por los inversionistas extranjeros (británicos) de la industria salitrera, quienes, de hecho, pudieron conseguir la colaboración

presidencial, ésta no destruyó el compromiso para con las instituciones representativas. El Parlamento aumentó su prestigio e influencia, contribuyendo, a su vez, a la expansión de partidos políticos de carácter nacional. Ya a fines del siglo diecinueve, los partidos chilenos de clase media, a diferencia de sus contrapartes en Argentina, participaban plenamente en el proceso político. Estos surgieron antes que se desarrollara una poderosa burocracia estatal y una fuerte demanda de participación por parte de los sectores populares. Esto permitió que los partidos pasaran a ser los nexos fundamentales entre las clientelas políticas y el creciente aparato estatal.³

Si bien los partidos fueron instrumentos eficaces para canalizar y controlar la movilización social, y para moderar el conflicto político entre los sectores dirigentes, es necesario destacar que la democracia chilena no se caracterizaba precisamente por su paz social. Amplios sectores de la población continuaban privados de plenos derechos ciudadanos y en ocasiones el incipiente movimiento obrero era fuertemente

de algunos sectores del Congreso chileno. Ver su obra *Balmaceda y la contrarrevolución de 1891*, 2a. ed. rev. (Santiago: Editorial Universitaria, 1969). Aunque ambas interpretaciones tienen mucho mérito, el autor cree que una tercera interpretación, que pone el énfasis en la importante lucha entre el centro y lo local, merece que se le otorgue mucho más atención. Ver Valenzuela, *Political Brokers in Chile*, cap. 8.

3. Discusiones generales sobre la evolución de los partidos políticos chilenos se encuentran en Galdames, *A History of Chile*; Federico Gil, *The Political System of Chile* (Boston: Houghton Mifflin Co., 1966); Alberno Edwards y Eduardo Frei, *Historia de los partidos políticos chilenos* (Santiago: Editorial del Pacífico, 1949); Germán Urzúa Valenzuela, *Los partidos políticos chilenos* (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1968); Sergio Guillisastu Tagle, *Partidos políticos chilenos* (Santiago: Editorial Nascimento, 1964).

reprimido.⁴ La democracia política nunca fue acompañada por una verdadera democracia social, puesto que una marcada desigualdad y un bajo nivel de vida para la gran mayoría de la población continuaron siendo características importantes de la sociedad chilena. Sin embargo, la liberalización de las reglas de la política competitiva y la legitimidad de las instituciones, permitieron el desarrollo de partidos marxistas legítimos, ligados al proletariado urbano y minero. El apoyo de la izquierda, a su vez, le dio a los partidos de clase media el impulso necesario para llegar al poder y para efectuar una serie de reformas importantes en beneficio de la clase obrera. El surgimiento de una izquierda poderosa tuvo como resultado la polarización de la política chilena. Los partidos marxistas, no obstante, respetaron las reglas del juego democrático, y a mediados del siglo habían logrado aumentar considerablemente su fuerza electoral.⁵ En los años sesenta, importantes reformas, especialmente las relacionadas con el sector rural, consolidaron aún más los avances de los sectores previamente marginados.

El propósito del presente estudio es analizar el cómo y el porqué del quiebre de la democracia chilena. Para este efecto, describiremos, lo más escuetamente posible, los aconteci-

4. Para estudios que describen la represión de los trabajadores, véase Hernán Ramírez Necochea, *Historia del movimiento obrero. Siglo XIX. Antecedentes* (Santiago: Talleres Gráficos Lautaro, 1956), y Julio César Jobet, *Ensayo crítico del desarrollo económico social de Chile* (Santiago: Editorial Universitaria, 1955).

5. Sin embargo, en 1948 los partidos de clase media viraron y se aliaron con la derecha, y proscribieron al Partido Comunista por temor a la creciente fuerza electoral de la izquierda. Para referencias ver nota 10, cap. I.

mientos políticos acaecidos durante el período inmediato antes del golpe de Estado. Al hacerlo, pondremos especial énfasis en las actuaciones de los actores claves y en la influencia tanto del proceso político como de la situación económica sobre el resultado final. El estudio, sin embargo, no puede restringirse a una simple revisión de los acontecimientos importantes correspondientes a los meses anteriores al colapso. La descripción de los años del gobierno de Allende debe ser antecedida por un análisis minucioso de las características principales de la política chilena a mediados del siglo. Sólo a partir de una comprensión previa de la institucionalidad política chilena y su *modus operandi* es posible fundamentarse en la experiencia chilena para extraer lecciones significativas sobre el funcionamiento y las crisis de los regímenes democráticos competitivos. Para alcanzar esta adecuada comprensión es necesario contestar algunas preguntas fundamentales. En primer lugar, ¿constituye este quiebre una crisis fundamental del régimen democrático o fue ésta sólo una más en una serie de "crisis" recurrentes, como las que habitualmente caracterizan a algunos sistemas políticos en América Latina? La historia ya ha dado su respuesta. Segundo, en esta crisis fundamental, ¿sería una tensión o debilidad al interior del sistema político como tal lo que precipitó o agravó la crisis? O, ¿se debió la crisis política más bien a dificultades socioeconómicas y acciones externas hostiles experimentadas durante el período próximo a la intervención militar? O, en tercer lugar, ¿fueron los errores o la conducta irresponsable de personeros políticos en puestos claves los que ocasionaron la crisis? Si

son varios los factores involucrados, ¿de qué modo se relacionan éstos entre sí? Resulta evidente que sólo a través de una reflexión exhaustiva acerca de los principales factores en juego en el sistema político es posible precisar el grado en que éstos definen o moldean las acciones de los individuos y los grupos, los líderes y los seguidores. En última instancia, necesitamos conocer cuáles son los parámetros del libre accionar humano: ¿Hasta qué punto estuvieron los actores de este drama humano destinados a vivir su destino o en qué medida podrían ellos haber escogido un desenlace diferente?

Durante el transcurso de la investigación realizada para este libro, pronto se hizo evidente que mientras el contexto y el marco histórico del sistema chileno podían presentarse en términos esencialmente estáticos, el proceso mismo del quiebre, en cambio, sólo podía ser analizado en forma dinámica. Es por esto que este trabajo está organizado básicamente en forma cronológica. Dado el contexto de cambios vertiginosos en la política chilena, los principales factores y características del sistema podían cambiar de manera sustancial en cualquier momento. El proceso era dialéctico. Las acciones realizadas por un conjunto de actores, en el contexto de una estructura de reglas del juego e instituciones en un tiempo A, eran seguidas por acciones opuestas realizadas por otros actores, las cuales no sólo alteraban la correlación de fuerzas sino que cambiaban las propias reglas del juego para el tiempo B. Por ejemplo, el sistema que existía en 1971 fue distinto al que se creó después del paro de octubre de 1972 y la incorporación de militares al gabinete. Otros cambios fundamentales ocu-

rrieron tras las elecciones de marzo de 1973 y el intento fallido de alzamiento militar del 29 de junio de 1973. Para desgracia de aquellos que deseaban evitar un desenlace fatal del régimen democrático representativo, a medida que el sistema evolucionaba, el rango de opciones también disminuía. Con el tiempo, el desenlace final se tornó cada vez más definitivo.

La tesis fundamental de esta obra es que el quiebre de la democracia chilena confirma el juicio de Juan Linz que la supervivencia de un régimen democrático exige la efectiva participación en el poder de un centro pragmático, y políticas de acomodo, junto con un respeto mayoritario por las reglas del juego democrático, impidiendo así que una aguda polarización política lleve a la imposición de una solución de fuerza, con el triunfo violento de uno de los extremos y la instauración de un régimen autoritario represivo. La característica principal del sistema político chileno era su marcada polarización política. Sin embargo, el conflicto y las confrontaciones estaban mediatizados por una red de instituciones y por el respeto al veredicto del sistema electoral que definía el derecho de los grupos políticos para acceder al poder. Inicialmente, la polarización se circunscribía a las elites; con el tiempo, ésta invadió las distintas esferas de la sociedad civil. La polarización se intensificaría aún más al disolverse la coalición pragmática de centro y al surgir la Democracia Cristiana como un partido ideológico de centro. La competencia política precedió y, de hecho, aceleró el conflicto de clases. Generalmente, las crisis económicas preceden a las crisis políticas; en este caso, el proceso fue a la inversa. Ciertas ca-

racterísticas del escenario institucional chileno, incluyendo las elecciones de tipo "suma cero", contribuyeron al establecimiento de una tendencia centrífuga (usando el concepto de Giovanni Sartori) que ejerció una presión enorme sobre la totalidad del sistema, y llevó a su fatal derrumbe.

El caso chileno apoya el argumento de Juan Linz, quien sostiene que las acciones de los grupos extremos de la derecha y de la izquierda no son en sí mismas las que provocan el quiebre de los regímenes democráticos.⁶ No cabe duda que estas acciones fueron en Chile tremendamente destructivas; no se puede negar que crearon dificultades extraordinarias para quienes creían que el cambio era posible sin salirse de los parámetros institucionales tradicionales. Sin embargo, los extremos eran algo constante en el sistema político. El quiebre como tal fue mayormente producto de la erosión del centro pragmático y de la incapacidad de las fuerzas centristas -los demócratas en ambos lados del muy dividido sistema político- de percibir la lógica de la espiral de la crisis, o, dicho de otra manera, prever las consecuencias desastrosas que traería la alternativa de un régimen autoritario represivo. Y en la medida que predominaron los intereses de grupos, mezquinos intereses, el espacio para negociar se redujo drásticamente. La hecatombe que todos temían secretamente, pero que rehusaban encarar, se hizo realidad.

Este estudio cuestiona algunos supuestos en boga sobre el caso chileno y sobre los regímenes democráticos en gene-

6. Ver Juan Linz, *The Breakdown of Democratic Regime; Crisis, Breakdown and Reequilibration*. (Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1978).

ral. El hecho que los sectores de centro no lograran acuerdos que salvaran al sistema, no implica que el desenlace fuese inevitable. A menudo los obstáculos fueron enormes y de hecho aumentaron cada vez más. Sin embargo, hubo ciertas coyunturas críticas en las cuales existió el espacio necesario para efectuar acciones tendientes a salvar el sistema. Es un mito sostener que el resultado hubiera sido diferente si Allende, siguiendo los consejos de los maximalistas de su coalición, hubiera procurado acelerar una confrontación violenta de clases. Semejante estrategia, al socavar más rápidamente el sistema tradicional, simplemente habría apresurado el golpe de Estado. También es un mito que cambios y políticas progresistas hubieran sido imposibles dentro del marco institucional vigente. Por supuesto que algunos de los cambios de fondo, pretendidos por ciertos sectores, eran imposibles. Sin embargo, dado el corto lapso, ellos son extraordinariamente difíciles de lograr en cualquier régimen, incluso en los más avanzados. La triste ironía es que no sólo desapareció la esperanza de una transformación fundamental en el futuro inmediato, sino que gran parte del genuino progreso realizado en Chile durante largo tiempo fue gravemente cercenado. El peor mito de todos es aquel que sostiene que en Chile la clase trabajadora no había realizado ningún progreso real bajo un régimen democrático.

Pero también es un mito que la democracia es un fracaso porque permite inevitablemente el surgimiento de fuerzas populares de izquierda capaces de consolidarse electoralmente. Aquellos que condenan a las instituciones y procedimien-

tos chilenos porque permitieron la participación de "ideologías foráneas" en la política chilena, no logran ver cuán integradas estaban estas fuerzas en el seno de la sociedad chilena, y tampoco ven el gran espacio que ellas tenían dentro del sistema. Al interpretar el quiebre de la democracia como inevitable, los propagadores de estos mitos pueden justificar con mayor facilidad las injusticias y los abusos del presente. El autor espera que otros actores, en otros tiempos y en otros lugares, extraerán la lección básica del caso chileno. Es difícil crear un sistema democrático y, quizás, es aún más difícil conservarlo. Sin embargo, si su alternativa es el autoritarismo, bien vale la pena cualquier esfuerzo por mantenerlo.

Muchas son las personas que me ayudaron en la realización de este estudio. Mi mayor deuda es con muchos políticos, funcionarios públicos y estudiosos chilenos, quienes me cedieron generosamente su tiempo para entregarme sus versiones sobre lo ocurrido. Para muchos, el recordar y reflexionar sobre lo ocurrido en Chile fue un proceso doloroso. Estoy profundamente agradecido por la apertura y franqueza de nuestras conversaciones. Ellas me permitieron armar el trágico rompecabezas, aunque fuera de manera incompleta. Varios de mis informantes estarán, y algunos ya lo están, en profundo desacuerdo con ciertos juicios expuestos en este estudio. Naturalmente, yo soy el único responsable de estos juicios.

Las entrevistas variaron desde un ex presidente, miembros de los gabinetes de Frei y Allende; pasando por anteriores dirigentes de rango medio, tales como parlamentarios, je-

fes y subalternos de reparticiones públicas y dirigentes sindicales; hasta ex funcionarios y dirigentes municipales de Santiago y de una muestra de ocho comunas del sur de Chile. Además, el autor se benefició con numerosas conversaciones con colegas que en Chile, los Estados Unidos y Europa desde hace años han seguido de cerca el proceso político chileno. Las entrevistas realizadas en Chile tuvieron lugar en julio de 1972, febrero de 1974 y durante una estada más prolongada desde julio de 1974 hasta febrero de 1975. La primera parte de este estudio también utiliza extensamente una investigación realizada en Chile durante 1969. Muchos de los entrevistados solicitaron el anonimato. Debido a la represión bajo el gobierno de la Junta Militar, he decidido no revelar por el momento el nombre de los entrevistados. Por lo menos una de estas personas fue brutalmente asesinada y otras han sido perseguidas o arrestadas. A lo largo del trabajo se especifica cuáles son las secciones que se basan principalmente en las entrevistas. Porque gran parte del debate político chileno fue amplia y abiertamente cubierto por la prensa libre, aunque tal vez no con exactitud total, ha sido posible usar estas fuentes públicas para la mayor parte del estudio.

Quisiera agradecer públicamente la asesoría de J. Samuel Valenzuela durante el largo y arduo proceso de escribir este libro. Su juicio certero, su preocupación genuina y su evaluación franca constituyen un aporte invaluable. El compartir conmigo todos los méritos del trabajo, no obstante, queda exonerado de las deficiencias. Mi padre, Raimundo Valenzuela, también me entregó un estímulo indispensable. Su lectura in-

cisiva de un primer borrador y del manuscrito, así como su conocimiento enciclopédico de los asuntos chilenos, me salvaron de cometer más de un error. Juan Linz y Alfred Stepan también me ayudaron y apoyaron desde la concepción inicial del proyecto. El caso chileno revela cuán precisa y perceptiva era la teorización de Juan Linz sobre la naturaleza de las crisis de los regímenes democráticos. Alfred Stepan no sólo me entregó su apoyo intelectual, también fue quien posibilitó la publicación del proyecto del cual este estudio forma parte.

La realización de este libro habría sido difícil sin el generoso aporte del Committee on Latin America del Social Science Research Council, lo que me permitió estar varios meses en Chile durante 1974. También destaco el apoyo del Duke University Research Council, que posibilitó la realización del análisis cuantitativo.

Duke University, Durham, N.C., 1975

NOTA DEL AUTOR PARA LA TRADUCCION

Esta versión en español del libro *The Breakdown of Democratic Regimes CHILE* es copia fiel del texto original redactado en el período 1973 a 1975, y publicado por the Johns Hopkins University Press en 1978, salvo pequeñas modificaciones para mayor claridad y para que el libro sea más comprensible en el mundo de habla castellana. He revisado cuidadosamente la traducción, la cual cuenta con mi aprobación. Deseo expresar mi agradecimiento a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales por su interés en publicar este libro en Chile. Es un gran privilegio para mí estar asociado de esta manera a un centro de investigación de tan alto prestigio internacional. En particular quiero reconocer el valioso estímulo personal de tantos amigos y colegas de FLACSO con quienes he sostenido un diálogo continuo a través de los años, y de quienes he aprendido mucho sobre la realidad chilena e internacional. También quiero manifestar mi gratitud a Josiane Bonnefoy por su abnegada labor de traducción y de revisión de las citas originales en castellano. Finalmente, tengo

una deuda muy especial con mi padre, el Dr. Raimundo Valenzuela Arms, por su excelente e indispensable labor editorial en esta traducción y por su fe en las tradiciones democráticas del pueblo chileno que me ha inspirado en los momentos más difíciles.

Georgetown University
Washington, D.C., EE.UU.
Noviembre, 1988.

CAPITULO I

LA POLITICA CHILENA A MEDIADOS DEL SIGLO

El sistema de partidos

Los estudiosos de la política latinoamericana suelen comentar que el sistema político de Chile se distinguió en forma significativa del resto de los sistemas del continente. Federico Gil, en su libro clásico sobre la política chilena, señala que esta diferencia se debió en gran medida al sistema chileno de partidos, "en el cual, al igual que en varios países europeos, las fuerzas políticas estaban clara y nítidamente alineadas". Según Gil, "es sorprendente la similitud entre el sistema de partidos chileno y el de buena parte de los países de Europa, y particularmente con el sistema existente en Francia durante la Tercera y la Cuarta Repúblicas".¹ El sistema de partidos de Chile estaba presente en todos los ámbitos; no sólo determinaba el proceso de reclutamiento político para cargos nacionales de importancia, sino que también estructuraba las opciones de liderazgo en instituciones tan diversas como las reparticiones públicas, los sindicatos profesionales e indus-

1. Federico Gil, *The Political System of Chile* (Boston: Houghton Mifflin Co., 1966), p. 244.

triales, las organizaciones vecinales e incluso en los establecimientos de enseñanza secundaria. Los partidos llegaron a ser un rasgo constitutivo de la vida nacional, al punto que en una encuesta realizada en Santiago sólo el 22,2% de sus habitantes opinó que era posible gobernar el país prescindiendo de ellos.²

Una característica importante del sistema partidista chileno era su alto grado de competitividad. En la década de 1930 existían más de treinta organizaciones políticas. Para 1970 este número se había reducido a diez a raíz de las reformas de la ley electoral y de la consolidación del poderío de los partidos más grandes. A pesar de esta reducción, ningún partido chileno había obtenido más del 30% de los votos en las elecciones parlamentarias o municipales desde la adopción de la Constitución de 1925,³ excepto la Democracia Cristiana en la elección parlamentaria de 1965 y la municipal de 1967, en las cuales obtuvo el 42,3% y el 35,6%, respectivamente. Sin embargo, su apoyo electoral decayó en elecciones posteriores. Estas cifras globales, sin embargo, no revelan la magnitud de la penetración del sistema partidario a nivel nacional. En efecto, la estructura partidista se hacía presente en todas las elec-

2. La encuesta fue realizada por Eduardo Hamuy en Santiago, Chile, a mediados de 1958. Los datos primarios se obtuvieron del International Data Library and Reference Service, Survey Research Center, University of California, Berkeley. El capítulo I se basa en gran parte en el artículo del autor: *Political Constraints and the Prospects for Socialism in Chile*, Proceedings of the Academy of Political Science, 30(4): 65-82, agosto de 1972.

3. Toda la información electoral presentada en este capítulo se basa en material primario obtenido principalmente de documentos mimeografiados de la Dirección del Registro Electoral, Santiago, Chile.

ciones, incluso las de las municipalidades más pequeñas y atrasadas. Un análisis estadístico de datos agregados muestra que el fraccionamiento del voto no variaba mucho con respecto a las cifras nacionales, aun controlando el tamaño o nivel de desarrollo socioeconómico de las comunas. Además las contiendas electorales correspondientes al gobierno municipal eran tan intensas y competitivas como las contiendas para el Congreso Nacional.⁴

En 1970, el sistema se componía de cinco partidos principales y varios partidos menores, que en su conjunto abarcaban la totalidad del espectro ideológico. La derecha estaba representada por el Partido Nacional, formado en 1966 mediante la fusión del Partido Conservador y el Partido Liberal, en un esfuerzo por superar la continua erosión de su apoyo electoral. Aunque los nacionales debían lealtad a las reglas chilenas del juego democrático (que ellos mismos habían contribuido a forjar), ellos también tenían un claro compromiso con el sistema socioeconómico vigente, el cual le había otorgado a sus dirigentes su situación privilegiada en la sociedad.⁵

4. Véase Arturo Valenzuela, *The Scope of the Chilean Party System*, *Comparative Politics*, 4(2): 179-99, enero de 1972. La evidencia empírica del caso chileno contradice influyentes teorías en las ciencias sociales que sugieren que las comunidades subdesarrolladas son menos diferenciadas políticamente. Ver, por ejemplo, S.N. Eisenstadt, *Social Change, Differentiation, and Evolution*, *American Sociological Review*, 29(3): 375-87, junio de 1964.

5. Sobre la derecha chilena véase Ignacio Arteaga Undurraga, comp., *Partido Conservador - XIV Convención Nacional-1947* (Santiago: Imprenta Chile, 1947), que incluye resúmenes de todas las convenciones conservadoras desde 1878 a 1947, listas de los parlamentarios y ministros conservadores desde 1831 a 1949, la plataforma del partido y notas generales sobre la convención de 1947. Ver también Marcial Sanfuentes Carrión, *El Partido Conservador* (Santiago: Editorial Universitaria,

La izquierda en Chile estaba constituida principalmente por los partidos Comunista y Socialista. El primero era el partido comunista más grande de América Latina, fuera del cubano, y se adhería fielmente a las directrices de Moscú. El Partido Socialista, caracterizado por continuas rencillas internas desde su creación, tenía una base más heterogénea que los comunistas. En 1956, después de años de intensa rivalidad, interrumpida sólo por acuerdos ocasionales, los dos partidos marxistas establecieron el Frente de Acción Popular (FRAP), que respaldó la fracasada candidatura de Salvador Allende en la elección presidencial de 1958. El FRAP fue el antecesor inmediato de la coalición de la Unidad Popular, la cual logró finalmente en 1970 elegir a Allende al más alto cargo de la nación.⁶

El centro estaba compuesto por los radicales de orientación anticlerical, por un tiempo el partido preponderante del sistema político chileno, que había sufrido un notorio descenso en su base electoral, primero al surgir el populismo de Car-

1957), y José Miguel Prado Valdés, *Reseña histórica del Partido Liberal* (Santiago: Imprenta Andina, 1963). Una referencia muy valiosa para los numerosos partidos y fragmentos de partidos a través del espectro ideológico es Lía Cortés y Jordi Fuentes, *Diccionario político de Chile* (Santiago: Editorial Orbe, 1967).

6. Existen numerosos libros sobre la izquierda chilena. Por ejemplo, véase Julio César Jobet, *El Partido Socialista de Chile*, 2a. ed., 2 vols., (Santiago: Ediciones Prensa Latinoamericana, 1971); Raúl Ampuero, *La izquierda en punto muerto*, 3a. ed., (Santiago: Editorial Orbe, 1969); Salomón Corbalán, *El Partido Socialista* (Santiago: Imprenta Atenea, 1957); Alejandro Chelén Rojas, *Trayectoria del socialismo* (Buenos Aires: Editorial Austral, 1967); Hernán Ramírez Necochea: *Origen y formación del Partido Comunista de Chile* (Santiago: Editorial Austral, 1965); Luis Corvalán Lepe, *Camino de victoria* (Santiago: Sociedad Impresora Horizonte, 1971); Ernst Halperin, *Nationalism and Communism in Chile* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1965).

los Ibáñez en la década de los cincuenta, y luego con el triunfo del Partido Demócrata Cristiano en los años sesenta. Los demócrata cristianos surgieron como un movimiento reformista de centro, de fuerte inspiración católica, propiciando una "revolución en libertad". El miedo a los partidarios marxistas de Allende contribuyó a la enorme votación en favor del candidato presidencial de la Democracia Cristiana en 1964. Sin embargo, hacia el término del mandato de Eduardo Frei, la fuerza electoral del Partido Demócrata Cristiano disminuyó rápidamente, a la vez que tanto la derecha como la izquierda aumentaban su proporción del electorado.⁷

Es evidente que el sistema partidario chileno no sólo era altamente competitivo sino que también estaba fuertemente polarizado. Una importante proporción del electorado apoyaba a partidos comprometidos con una transformación radical de las estructuras sociales y políticas, o bien a partidos que se oponían vehementemente a cualquier cambio del statu quo.

7. Para estudios sobre el Partido Radical ver Luis Palma Zúñiga, *Historia del Partido Radical* (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1967); Florencio Durán Bernalles, *El Partido Radical* (Santiago: Editorial Nascimento, 1958); Germán Urzúa Valenzuela, *El Partido Radical: Su evolución política* (Santiago: Academia de Ciencias Políticas y Administrativas, 1961). Sobre la Democracia Cristiana véase Leonard Gross, *The Last Best Hope: Eduardo Frei and Chilean Christian Democracy* (New York: Randon House, 1967); George Grayson, *El Partido Demócrata Cristiano chileno* (Buenos Aires: Editorial Francisco de Aguirre, 1968); Eduardo Frei Montalva, *Pensamiento y acción* (Santiago: Editorial del Pacífico, 1958); Jaime Castillo Velasco, *Las fuentes de la Democracia Cristiana*, 2a. ed., (Santiago: Editorial del Pacífico, 1968); Arturo Olavarría Bravo, *Chile bajo la Democracia Cristiana* (Santiago: Editorial Nascimento, 1966); Suzanne Bodenheimer, Stagnation in Liberty en *North American Congress on Latin America*; New Chile (Berkeley: NACLA, 1972), pp. 118-29; Arpad von Lazar y Luis Quiroz Varcla, Chilean Christian Democracy: Lessons in the Politics of Reform Management, *Inter-American Economic Affairs*, 21 (4): 51-72, primavera de 1968.

Cuadro 1
Autoidentificación de encuestados en Santiago de Chile
en cuanto a preferencia política y clase social, 1958.

Preferencia política	CLASE SOCIAL											
	Alta		Media alta		Media baja		Obrera		No responde		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Derecha	11	78,6	67	33,0	98	32,8	60	29,4	17	54,8	253	31,4
Centro	3	21,4	63	31,0	59	19,7	19	9,6	0	0,0	144	17,8
Izquierda	0	0,0	37	18,2	58	19,4	100	31,1	3	9,7	198	24,5
Otras	0	0,0	4	2,0	4	1,3	3	0,7	1	3,2	12	1,5
No responde	0	0,0	32	15,8	80	26,8	78	29,2	10	32,3	200	24,8
Total muestra	14		203		299		250		31		807	

Fuente: International Data Library and Reference Service, Survey Research Center, "1958 Presidential Election Survey in Santiago, Chile" (University of California, Berkeley). [Encuesta de Eduardo Hamuy].

La encuesta realizada en Santiago en 1958, mencionada anteriormente, reveló que el 31,4% de los encuestados se clasificaba a sí mismo como derechista y un 24,5% se clasificaba como izquierdista. Una cifra menor, un 17,8%, se identificaba con el centro del espectro político, mientras que un cuarto de los encuestados no entregó una respuesta específica. Como muestra en el cuadro 1, en todas las categorías sociales se registra una polarización significativa, con la excepción del pequeño grupo de la clase alta. James Prothro y Patricio Chaparro han comparado los datos de Hamuy con cifras más recientes y concluyeron que la distribución de la opinión pública, en el continuo izquierda-derecha, se mantuvo marcada-

mente estable durante el período comprendido entre 1958 y 1970.⁸

La polarización de la política chilena también se evidencia en el veredicto del electorado. Bajo el sistema de representación proporcional de la Constitución de 1925, los partidos Socialista y Comunista aumentaron su apoyo electoral, especialmente en las comunas urbanas y mineras, mientras que la derecha mantuvo su hegemonía en las áreas rurales más atrasadas y conservó la lealtad de varios sectores de la creciente clase media. Entre los años 1938 y 1970, la derecha obtuvo un promedio de alrededor del 30% de la votación, en contraste con el 20% de la izquierda. Para 1973, sin embargo, el aumento de simpatizantes de la izquierda revirtió esas proporciones. El cuadro 2 muestra las divisiones del electorado chileno en las distintas elecciones parlamentarias efectuadas entre 1937 y 1973, y en él se comprueba la permanente polarización. El cuadro revela cómo los partidos de centro crecieron a expensas tanto de la derecha como de la izquierda; no obstante, exceptuando la elección de 1965, los partidos de centro nunca recibieron más del 50% de la votación.

Durante este período se puede observar la presencia de tres tendencias centristas importantes. La primera está representada por el Partido Radical, que dominó la política chilena desde 1938 hasta 1952. Pese a su alianza con la izquierda para ganar las elecciones presidenciales de los años treinta y cuarenta, el Partido Radical comenzó a inquietarse cada vez

8. *Public Opinion and the Movement of the Chilean Government to the Left, 1952-1972*, en Arturo Valenzuela y J. Samuel Valenzuela, *Chile: Politics and Society* (New Brunswick, N.J.: Transaction, Inc., 1976), pp. 67-144.

Cuadro 2
Participación relativa de los partidos de derecha, centro e izquierda sobre el total de votos en las elecciones parlamentarias chilenas de 1937 a 1973.

ELECCIONES DE DIPUTADOS											
Porcentaje del total de votos											
Partido	1937	1941	1945	1949	1953	1957	1961	1965	1969	1973	Prom.
Derecha ^a	42,0	31,2	43,7	42,0	25,3	33,0	30,4	12,5	20,0	21,3	30,1
Centro ^b	28,1	32,1	27,9	46,7	43,0	44,3	43,7	55,6	42,8	32,8	39,7
Izquierda ^c	15,4	33,9	23,1	9,4	14,2	10,7	22,1	22,7	28,1	34,9	21,5
Otros	14,5	2,8	5,3	1,9	17,5	12,0	3,8	9,2	9,1	11,0	8,7

Fuente: Dirección del Registro Electoral, Santiago, Chile.

a. Derecha: Conservador, Liberal, Nacional después de 1945.

b. Centro: Radical, Falange Nacional, Demócrata Cristiano, Agrario Laborista.

c. Izquierda: Socialista, Comunista.

más por el aumento de la fuerza electoral de los comunistas, especialmente después de la elección municipal de 1947.⁹ Reflejando esta inquietud el Presidente Gabriel González Videla, elegido en 1946, logró que el Congreso declarara ilegal al Partido Comunista, y el Partido Radical viró bruscamente ha-

9. El día después de la elección municipal de 1947 el Presidente Gabriel González Videla manifestó personalmente su preocupación por el éxito electoral del Partido Comunista al dirigente del partido Volodia Teitelboim cuando le dijo: "No puedo permitir que el Partido Comunista acceda al poder a través de los canales democráticos." Ver la cita en Ampuero, *La izquierda en punto muerto*, p. 24. Una discusión sobre la proscripción del Partido Comunista se puede encontrar en Chelén Rojas, *Trayectoria del socialismo*, pp. 114-19. Una discusión fascinante sobre la controvertida elección de 1938 en la que el Frente Popular accedió al poder se encuentra en Marta Infante Barros, *Testigos del treinta y ocho* (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1972).

cia la derecha. Este acontecimiento, sumado al desgaste de los sucesivos períodos presidenciales, debilitó al partido de centro.¹⁰ Los radicales fueron reemplazados en el centro por el espectacular triunfo del ex Presidente Carlos Ibáñez, quien logró la presidencia en 1952 a la cabeza de una coalición heterogénea, de grupos que variaban desde el ala más izquierdista del Partido Socialista hasta grupos estrechamente vinculados al movimiento nazi chileno. El movimiento centrista de Ibáñez, sin embargo, no sobrevivió a su administración de rumbo indefinido, y hacia el final de su mandato, la izquierda, que ahora incluía al Partido Comunista nuevamente legalizado, había recobrado su fuerza electoral.¹¹

Con la disolución de la coalición de Ibáñez, la Democracia Cristiana pasó a ser el nuevo movimiento de centro, esta vez basándose principalmente en el apoyo de elementos de la derecha. Como mencionamos anteriormente, a fines de los años sesenta su fuerte apoyo también había mermado.

Giovanni Sartori, basándose en sus estudios sobre la política italiana, subraya la importancia del fenómeno de la polarización y el papel que en ella juegan los partidos centris-

10. Para el período radical, véase John R. Stevenson, *The Chilean Popular Front*, (Philadelphia: The University of Pennsylvania Press, 1942); Alberto Baltra Cortés, *Pedro Aguirre Cerda* (Santiago: Editorial Orbe, 1962); Alberto Cabero, *Recuerdos de don Pedro Aguirre Cerda* (Santiago: Editorial Nascimento, 1948). Ver también Arturo Olavarría Bravo, *Chile entre dos Alessandri*, 2 vols. (Santiago: Editorial Nascimento, 1962).

11. Un buen recuento del período de Ibáñez no se ha escrito aún. Ver obras generales como Gil, *Political System of Chile*; Alberto Edwards y Eduardo Frei, *Historia de los partidos políticos chilenos* (Santiago: Editorial del Pacífico, 1949); y Ricardo Donoso, *Desarrollo político y social de Chile* (Santiago: Imprenta Universitaria, 1943).

tas para entender las dinámicas de los sistemas multipartidistas.¹² Sartori sostiene que en un contexto altamente polarizado, donde hay una derecha y una izquierda claramente definidas con apoyo significativo en el electorado, el impulso principal del sistema político es centrífugo. Esto significa que un país polarizado tiende a moverse hacia los extremos, hacia una mayor división de la sociedad. A diferencia de los sistemas de partidos donde no han surgido tendencias abiertamente antagónicas, el sistema partidario polarizado no tiene un impulso centrípeto fuerte, no hay un consenso de centro dominante. Paradojalmente, los sistemas polarizados sí tienen polos de centro ocupados por uno o más partidos. Sin embargo, Sartori argumenta que bajo tales circunstancias, el centro no representa una tendencia política significativa en sí, sino que tiende a componerse de fragmentos provenientes de los polos de izquierda y derecha. Sartori agrega que el "centro es principalmente la retroalimentación de los impulsos centrífugos que predominan en el sistema" y que "es más bien una convergencia negativa, una suma de exclusiones, que un agente positivo de instigación".¹³ El análisis de Sartori es ex-

12. Véase Giovanni Sartori, *European Political Parties: The Case of Polarized Pluralism*, en Joseph Lapalombara y Miron Weiner, eds., *Political Parties and Political Development* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1966), cap. 5. Un intento preliminar por aplicar el modelo de Sartori al caso chileno se encuentra en Rafael López Pintor, *El sistema de partidos en Chile: Un caso de pluralismo extremo*, mimeo (Santiago: INSORA, 1968). Cuando López escribió su artículo los demócrata cristianos todavía no habían sufrido su brusco descenso. Por esta razón, él considera que el centro político chileno es más afín con el caso italiano de 1963 que con los casos de la república del Weimar y España en los años treinta, donde el centro era considerablemente más débil.

13. Sartori, *European Political Parties*, pp. 156.-164.

tremadamente útil para comprender el caso chileno, porque explica el repetido surgimiento de movimientos centristas en la política chilena a expensas tanto de la derecha como de la izquierda. Puesto que dichos movimientos centristas representaban sólo mínimamente una tendencia centrista viable y de hecho eran básicamente reflejos de la erosión de ambos polos extremos, estos movimientos se disolvían, sólo para dar lugar a una nueva coalición centrista. A su vez, la inestabilidad de los movimientos de centro contribuía a las dificultades para estructurar políticas públicas comunes, debido a la fragilidad del consenso centrista a nivel de toma de decisiones. La erosión del consenso del centro se aceleró notablemente durante el período de Allende y contribuyó en forma directa a la crisis que culminó con el colapso del régimen.

Es importante destacar que el sistema polarizado de partidos tuvo un resultado distinto en el sistema presidencialista de Chile, al que tuvo en el sistema parlamentario italiano, estudiado por Sartori. Pese a la competitividad, la polarización y la inestabilidad de las opciones de centro, en Chile el gobierno no corría peligro de "caer" si no ganaba el apoyo mayoritario del Congreso o si perdía el que ya tenía. Las coaliciones mayoritarias, que en Italia se formaban en el Parlamento después de una elección general, en Chile se tenían que estructurar antes de una elección presidencial. Como se señaló anteriormente, ningún partido o tendencia era capaz de acceder a la presidencia por sí solo. O la ganaba un partido por mayoría simple o se estructuraban coaliciones mayoritarias con agrupaciones de centro. Los presidentes provenientes de

partidos de centro fueron elegidos con el apoyo de la izquierda en las elecciones presidenciales de 1938, 1942 y 1946; con el apoyo de la derecha en las de 1932 y 1964; y con el apoyo de elementos de ambos bandos en 1952. Sólo en dos ocasiones en este período ganó la presidencia un candidato representante de la derecha o la izquierda: en 1958 cuando fue elegido el derechista Jorge Alessandri y en 1970 cuando ganó el marxista Salvador Allende. En ambos casos, los polos rechazaron el consenso y los partidos de centro pensaron erróneamente que podrían triunfar por sí solos. El sistema político chileno fue capaz de manejarse exitosamente con la presidencia de Alessandri, porque los grupos centristas pronto se incorporaron a su gestión. Como se verá más adelante, durante el período de Allende nunca se logró estructurar con éxito la indispensable coalición de centro.

En un clima de gran incertidumbre política, las alianzas preelectorales, estructuradas fundamentalmente para ganar la elección, tendían a desintegrarse después de unos pocos meses de asumir el nuevo gobierno. A menudo los conflictos ideológicos ocasionaron quiebres en estas alianzas, en la medida que los partidarios de una fórmula rechazaban las proposiciones provenientes de otros partidos de su misma coalición. No obstante, también eran importantes las consideraciones netamente políticas. Como el Presidente no podía ser reelegido, pronto se hacía evidente para el liderazgo de los otros partidos de una coalición presidencial, que ellos podrían mejorar sus posibilidades de triunfo en las elecciones municipales o parlamentarias siguientes si tomaban distancia de un Ejecuti-

vo abrumado por los desafíos de una sociedad con múltiples problemas económicos. Porque al final de cuentas, sólo demostrando su fuerza en las urnas podía cada partido dejar constancia de su importancia en la formación de coaliciones futuras.

La desintegración de las alianzas preelectorales conducía inevitablemente a nuevas coaliciones temporales con los partidos o grupos que ofrecían apoyo político, parlamentario o general, para el Ejecutivo, a cambio de concesiones presidenciales. Por ejemplo, el Presidente González Videla se alió con los liberales después de disolver su alianza con los comunistas. Carlos Ibáñez también viró hacia la derecha, cuando aceptó el apoyo del Partido Conservador en un momento crítico a mediados de los años cincuenta. El Presidente Alessandri, elegido por la derecha, se vio forzado finalmente a llegar a un acuerdo con los radicales de centro para mantener un gobierno viable. Es evidente que las elecciones en Chile se caracterizaban por la política de la mejor oferta, puesto que la suerte de un gobierno no dependía de un voto perdido en el Parlamento, como lo sería en un sistema parlamentario. En un esfuerzo por asegurarse un mejor resultado en las elecciones, los partidos se esmeraban en criticar a los funcionarios en ejercicio, y para ello aprovechaban cada aumento inflacionario, cada incidente de represión policial y cada denuncia de partidismo o corrupción. La retórica de la prensa controlada por los partidos y de los hábiles oradores de las cúpulas políticas, solía alcanzar proporciones desmesuradas. En semejante clima, los partidos de centro, con orientaciones

básicamente pragmáticas, que oscilaban entre la oposición y el apoyo al gobierno, sufrieron un elevado costo político. Quizás, más aun que en un sistema parlamentario, las fuerzas del "pluralismo polarizado" contribuyeron, con sus tendencias centrífugas, a una mayor polarización de la sociedad entera.

Paradojalmente, a la luz de esta discusión sobre la competitividad y la polarización, el sistema partidario chileno también se caracterizó por la importancia central de las transacciones particularistas que involucraban pequeñas gratificaciones y recompensas a cambio de un apoyo político. Los funcionarios electos, de todos los grupos y facciones, dedicaban gran parte de su tiempo a obtener montepíos para viudas, cargos para profesores, aumentos salariales para sindicatos o asociaciones gremiales, puentes para municipalidades y un sinnúmero de otros favores y reivindicaciones. Lo anterior lo realizaban a título personal o sirviendo de intermediarios frente a la compleja y ubicua burocracia estatal. En Chile, el advenimiento de un estilo político basado en ideologías y programas no reemplazó a la política particularista de los años anteriores, simplemente agregó una nueva dimensión al sistema político.

En términos analíticos, podemos concebir al sistema de partidos como dividido nítidamente en dos escenarios.¹⁴ En el escenario central, situado principalmente en la capital, predominaban las mayores controversias sobre materias tales co-

14. Para la documentación sobre esta característica del sistema partidista chileno, véase Arturo Valenzuela, *Political Brokers in Chile: Local Government in a Centralized Polity* (Durham, N.C.: Duke University Press, 1977), cap. 7.

mo la legislación redistributiva, la sobrevivencia de los gabinetes y la estructuración de nuevas alianzas presidenciales. Los actores principales eran los ministros, los altos funcionarios públicos, los dirigentes políticos, los líderes juveniles y los parlamentarios. Muchos de estos líderes debían sus carreras, directa o indirectamente, al apoyo prestado por pequeños grupos de activistas y militantes que controlaban a las organizaciones partidistas. Algunas personalidades nacionales, como Eduardo Frei o Salvador Allende, operaban casi exclusivamente en este ámbito, prestando poca atención al lado más prosaico de la política. Otros, incluyendo a la mayoría de los parlamentarios que no detentaban cargos de importancia en el partido, se debatían entre ambos escenarios, a menudo con grandes dificultades.

En contraste, en el escenario local las retribuciones y los favores políticos constituían la actividad primaria de la política. En realidad, gran parte del estilo chileno de campaña electoral dependía del contacto, cara a cara, entre candidatos y adherentes; se trataba de traducir los favores particularistas en votos y lealtad para el partido. Los candidatos a cargos parlamentarios en circunscripciones grandes, con frecuencia usaban intermediarios de niveles inferiores, tales como los regidores municipales, para asegurar el apoyo a sus candidaturas. A su vez, los dirigentes locales esperaban que los diputados o senadores los ayudaran a satisfacer las necesidades de su propia clientela política, actuando directamente, o como intermediarios, ante la burocracia o a través de la acción parlamentaria. El escenario local no se limitaba a las peticiones in-

dividuales, también incluía las demandas de un sinnúmero de grupos organizados, muchos de los cuales estaban vinculados estrechamente a los partidos. En Chile, las organizaciones propias de la sociedad civil variaban desde las asociaciones profesionales, organizaciones empresariales y agrupaciones juveniles y estudiantiles, hasta sindicatos, grupos de la Iglesia y juntas vecinales.

La mayoría de estos grupos estaba organizada en confederaciones nacionales. Por ejemplo, las sociedades de profesionales crearon la Confederación de Asociaciones Profesionales, destinada a defender los intereses de todos los profesionales universitarios ante el gobierno y el público en general. La poderosa Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) incluía numerosos grupos industriales regionales así como miembros individuales y afirmaba representar a la mayoría de la industria privada chilena.¹⁵ Los sindicatos de empleados públicos, particulares y campesinos también estaban organizados en varias confederaciones nacionales, la mayoría de las cuales estaba, a su vez, afiliada a la Central Unica de Trabajadores.¹⁶ El proceso de la reforma agraria, iniciado en el go-

15. Para una discusión sobre la relación entre la empresa privada y el gobierno, véase Constantine C. Menges, *Public Policy and Organized Business in Chile: A Preliminary Analysis*, *Journal of International Affairs*, 2(2): 343-65, 1966. Una detallada discusión sobre las confederaciones empresariales y los colegios profesionales se puede encontrar en David F. Cusak, *La interacción entre el sector público y los agentes mediadores en el sistema político chileno*, parte 2, mimeo (Santiago: INSO-RA, 1968); y David F. Cusak, *The Politics of Chilean Private Enterprise under Christian Democracy* (Tesis doctoral, University of Denver, 1970).

16. Sobre el movimiento obrero chileno, ver Alan Angell, *Politics and the Labour Movement in Chile* (London: Oxford University Press, 1972); Jorge Barría Serán, *Trayectoria y estructura del movimiento sindical chileno, 1946-62* (Santiago:

bierno de Frei, agregó a la vasta estructura institucional un impresionante nuevo conjunto de sindicatos rurales, cooperativas y asentamientos.

Los dirigentes políticos y los funcionarios públicos estaban asediados continuamente por un abrumador número de peticiones; por ejemplo, una empresa particular que pedía una rebaja de impuestos, un sindicato que solicitaba el establecimiento de un fondo de pensiones, una asociación profesional en pos de su reconocimiento legal o una municipalidad tras una nueva represa. Los partidos constituían, sin duda, los nexos claves para dar curso a tales demandas, canalizándolas, generalmente, a través de los distintos niveles de la jerarquía del partido. Como se señaló más arriba, los parlamentarios eran los intermediarios nacionales de mayor importancia y constituían el vínculo principal entre los dos escenarios.¹⁷

Este sistema dual, enraizado en la política patrón-cliente de la República Parlamentaria de principios del siglo, se veía continuamente reforzado por la naturaleza altamente centralizada del sistema político y administrativo chileno y la

INSORA, 1963); James O. Morris, *Elites, Intellectuals, and Consensus: A Study of the Social Question and the Industrial Relations System in Chile* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1966); Henry Landsberger, Manuel Barrera, y Abel Toro, *El pensamiento del dirigente sindical chileno* (Santiago: INSORA, 1963); Hernán Ramírez Necochea, *Historia del movimiento obrero en Chile* (Santiago: Talleres Gráficos Lautaro, 1956); Julio Samuel Valenzuela, *The Chilean Labour Movement: The Institutionalization of Conflict*, en Valenzuela y Valenzuela, Chile: *Politics and Society*.

17. Para la documentación sobre estos vínculos verticales y el rol del Congreso Nacional, ver Valenzuela, *Political Brokers in Chile*, caps. 5-7.19. Ver *ibíd.* Para una evolución del sistema a lo largo del tiempo, ver cap. 8.

escasez de recursos de su débil economía.¹⁸ Diversos aspectos del sistema electoral también contribuyeron a la mantención de esta dualidad; en especial, la ausencia de la votación acumulativa en la versión modificada empleada en Chile del sistema D'Hondt de representación proporcional. Aunque cada partido presentaba una lista que podía incluir tantos candidatos como escaños se disputara, los electores sólo podían votar por un candidato. El total de sufragios para todos los candidatos de cada lista se usaba para decidir cuántos escaños podía ocupar cada partido. Si un partido tenía derecho a uno o más escaños, aquellos candidatos que recibían el voto individual más alto resultaban triunfadores.¹⁹ De este modo, en el intento por asegurar la mayor votación para el partido, los candidatos no sólo competían con los candidatos de los partidos de oposición, sino también con los de la lista de su propio partido. Los adherentes que seguían a un partido por razones ideológicas o de tradición, solían decidir su preferencia por determinado candidato, por sobre el resto de la lista del partido, en relación a la capacidad del candidato para satisfacer sus demandas particulares.

En ausencia de encuestas adecuadas, es difícil precisar la importancia relativa de los aspectos clientelísticos por un lado y de los compromisos ideológicos por otro, en la consolidación de las lealtades partidarias y en la determinación de la conducta electoral. Indudablemente, ambos elementos se

18. Ver *ibíd.* Para una evolución del sistema a lo largo del tiempo, ver cap. 8.

19. Para una detallada discusión sobre los elementos del sistema electoral y las reformas de 1958, véase Bernaschina, *Cartilla electoral*.

entrelazaban con otros, como la identificación con un partido por razones de tradición familiar o por la influencia de grupos de referencia, como sindicatos, clubes sociales o la Iglesia, y tenían efectos diversos en distintos grupos de votantes. Al considerar el rol central de las transacciones particularistas en la política chilena, es importante recalcar que la polarización partidista no obedecía solamente a las escisiones ideológicas imbricadas en la sociedad civil. Un factor muy importante, en moldear y perpetuar la continua polarización a nivel de la sociedad, fue la aguda polarización ideológica propia del escenario central. Las elites políticas altamente ideologizadas eran las que controlaban las poderosas organizaciones partidarias, y estructuraban las opciones del electorado. En tal medio, los partidos pequeños, los candidatos independientes y las facciones que se separaban de partidos más grandes, tenían pocas posibilidades de sobrevivir. La mayoría de los ciudadanos tenía una tendencia política, ya fuera a raíz del clientelismo político o por inclinación ideológica o por ambos factores. Por esa sola razón la estructuración de nuevas opciones hubiera sido tremendamente difícil. Pero lo que hizo virtualmente imposible marginarse del sistema polarizado fue la creciente polarización de los activistas de los partidos, quienes, a su vez, polarizaban aún más el sistema a nivel de las masas, produciéndose así un círculo vicioso. Por ejemplo, la baja en el apoyo político a la Democracia Cristiana no se debió sólo a la pérdida del apoyo popular al representar el partido una tendencia ambigua de centro. Se debió también a las repetidas divisiones de la cúpula del partido, agravadas por

las defecciones de elementos que deseaban identificarse más estrechamente con los partidos marxistas. Esto debilitó cualquier posibilidad de capitalizar la frágil fuerza del partido para llegar a ser una alternativa de centro viable. La aguda polarización de los militantes del Partido Radical en los años sesenta, lo dividió en dos facciones principales prácticamente indistinguibles de los polos extremos del sistema partidario, y condujo a la formación de dos partidos: el Radical y la Democracia Radical. Esta escisión impidió cualquier vuelta de los radicales hacia su tradicional posición centrista.

Esta descripción del sistema partidario chileno es análoga, en algunos aspectos, a lo descrito por Duncan MacRae en su estudio del sistema francés bajo la Cuarta República. MacRae afirma que las agudas divisiones de la política francesa no eran un simple reflejo de las fuertes divisiones de la sociedad. Por supuesto que las divisiones latentes existían y existen hoy en la sociedad francesa, pero como MacRae señala, ellas "constituyeron una condición permisiva pero no suficiente para la división política". Las escisiones políticas reales dependían de otros factores, especialmente de "la existencia de dirigentes políticos intermedios divididos en torno a cuestiones nacionales, hablando de los problemas nacionales en términos diferentes unos de otros, y no penetrándose unos con otros".²⁰ En Chile, al igual que en Francia, la fuerte ideologización de los activistas acentuaba las divisiones latentes de la sociedad, intensificando la pola-

20. Duncan Mc Rae, *Parliament, Parties, and Society in France, 1946-1958* (New York: St. Martin's Press, 1967), p. 16.

rización del sistema.

La importancia de las transacciones particularistas y la lealtad de muchos electores a determinado partido basada en una tradición familiar, que frecuentemente se extendía por varias generaciones, ayuda a explicar una última característica del sistema partidario chileno: la heterogeneidad de su base de sustentación. A su vez, esta base de sustentación heterogénea acrecentaba la importancia del rol de las transacciones particularistas, al tratar los dirigentes de conservar la lealtad de sus simpatizantes, siempre cortejados por otras colectividades que pretendían representar mejor sus intereses. Sin duda, los partidos Socialista y Comunista recibían un apoyo significativo de la clase obrera. Esto se debía principalmente a una creciente conciencia de clase así como al simple hecho que los partidos de izquierda fueron los primeros en acercarse y ofrecer servicios y beneficios a los grupos urbanos y mineros previamente carentes de derechos ciudadanos. De manera similar, el Partido Nacional era apoyado en mayor medida por los sectores más privilegiados de la sociedad. Sin embargo, las encuestas confirman que la mayoría de los partidos, particularmente los de centro y de derecha, contaban con un apoyo pluriclasista, obteniendo numerosos votos en los sectores de bajos ingresos tanto urbanos como rurales. Alejandro Portes, por ejemplo, en su estudio sobre los barrios marginales de Santiago en 1969, encontró que el Partido Demócrata Cristiano tenía tanto apoyo en los sectores populares como los comunistas y socialistas juntos.²¹ La encuesta

21. Alejandro Portes, *Urbanization and Politics in Latin America*, *Social Science Quarterly*, 52(3): 697-720, diciembre de 1971. Ver también su estudio

Cuadro 3
Distribución según categoría ocupacional de la preferencia política
manifestada por una muestra de chilenos en 1958.

Preferencia Política	Empleadas domésticas		Obreros no calificad.		Trabajadores independ.		Obreros calificad. y semi- calificad.	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Derecha	13	38,2	26	22,4	71	40,1	26	27,1
Centro	2	5,9	11	9,5	22	12,4	9	9,4
Izquierda	6	17,6	44	37,9	36	20,3	35	36,5
Otro	0	0,0	1	0,9	2	1,1	1	1,0
Otro y no responde	13	38,2	34	29,3	46	26,0	25	26,0
Total	34	4,2	116	14,4	177	21,9	96	11,9

Fuente: International Data Library and Reference Service, Survey Research Center, "1958 Presidential Election Survey in Santiago, Chile" (University of California, Berkeley).

de Hamuy realizada en 1958, aporta resultados similares: una proporción considerable de la clase obrera apoyaba a la derecha. Los datos de Hamuy, presentados en el cuadro 3, también revelan que un número considerable de profesionales universitarios y ejecutivos de mando medio, tenían mayor probabilidad de apoyar a la izquierda que a la derecha. Sólo los obreros no calificados, y los pequeños y los grandes empresarios tenían preferencias políticas más consistentes con sus presuntos intereses de clase.

El análisis estadístico de datos agregados (electorales y censales), por un lado confirma que la izquierda contaba con

Occupation and Lower Class Political Orientation in Chile, en Valenzuela y Valenzuela, *Chile Politics and Society*.

Empleados		Pequeños empresar.		Gerentes empresas medianas (y profes.)		Gerentes grandes empresas		No responde		Total	
N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
67	37,7	23	37,7	15	20,5	10	58,8	2	66,7	253	31,4
58	25,2	19	31,1	20	27,4	3	17,6	0	0,0	144	17,8
49	21,3	4	6,6	21	28,8	2	11,8	1	33,3	198	24,5
3	1,3	2	3,3	3	4,1	0	0,0	0	0,0	12	1,5
53	23,0	13	21,3	14	19,2	2	11,8	0	0,0	200	24,8
230	28,5	61	7,6	73	9,0	17	2,1	3	0,4	807	100,0

mayor apoyo en la clase obrera y que el mayor aporte de la derecha provenía de grupos de clase alta; pero también respalda la tesis que gran parte del apoyo partidario era muy heterogéneo. Como se aprecia en el cuadro 4, las categorías correspondientes a la clase obrera no explican en términos estadísticos la variación de la votación para ningún partido, con la excepción de los comunistas, cuyo voto era fuertemente determinado por la población minera.²² Estos resultados apoyan

22. Para otro detallado estudio del comportamiento electoral chileno que también destaca la base heterogénea de sustentación, véase Robert Ayres, *Unidad Popular and the Chilean Electoral Process*, en Valenzuela y Valenzuela, *Chile: Politics and Society*, pp. 30-67. Es necesario destacar que los socialistas tenían una base de sustentación mucho más heterogénea que los comunistas y operaban, especialmente en los primeros períodos, principalmente con la política del clientelismo tradicional. Para documentación al respecto, véase Chelén Rojas, *Trayectoria del socialismo*.

Cuadro 4
Variación en los votos recibidos por los partidos principales o alianza electoral en una elección nacional y una local explicado según indicadores socioeconómicos (en porcentajes).

Elección	Nacionales	Radicales	Demócrata cristianos	Comunistas	Socialistas
Elección parlamentaria de 1969	28,3	8,5	18,5	22,6	9,8
Elección municipal de 1967	22,8	13,5	17,1	40,0	12,2

Nota: N = 287 comunas.

Los coeficientes de determinación (R²) están expresados en porcentajes. Todos los coeficientes de correlación múltiple (R) son significativos al nivel de 0,001.

Las variables independientes son: asistencia médica, vivienda con baños, asistencia escolar, fuerza de trabajo empleada en: la industria, la construcción, el sector servicios y la minería; nivel educacional y tamaño de la población. Las variables dependientes son los porcentajes de los votos obtenidos por cada partido o alianza, en cada elección y en cada comuna.

Fuente: Información electoral proveniente de la Dirección del Registro Electoral, Santiago, Chile.

aún más la teoría que sostiene que la polarización en Chile, si bien canalizaba y en gran medida reflejaba las escisiones latentes de la sociedad, era afectada más directamente por la polarización de las opciones estructuradas por las elites y los militantes de partido.

El contexto institucional y las reglas del juego

La política chilena se caracterizó por un sistema partidario altamente competitivo y polarizado. En tal clima, el con-

senso centrista siempre fue frágil y las coaliciones se desintegraban fácilmente, a la vez que los partidos y los grupos, en su intento por obtener apoyo electoral, luchaban entre sí en una competencia por favorecer al mejor postor. No obstante, sería un grave error describir la política chilena sólo en términos de partidos y grupos, líderes y simpatizantes. La existencia de enfrentamientos ideológicos y las exigencias de grupos de interés no deben opacar el hecho que el sistema político chileno también estaba muy institucionalizado. Las poderosas instituciones gubernamentales tenían un rol preponderante en el proceso de la formulación de políticas públicas. Asimismo, los actores políticos más relevantes aceptaban la validez tanto de las reglas y procedimientos estatuidos como de las innumerables prácticas informales que habían evolucionado a través de generaciones para racionalizar el proceso político.

El Estado chileno se componía de un imponente conjunto de estructuras e instituciones. Incluso antes de ser elegido Salvador Allende como presidente, el Estado ejercía un rol más importante en la economía nacional que en cualquier otro país de América Latina, con la excepción de Cuba. A fines de los años sesenta, la inversión pública directa superaba el 50% del total de la inversión bruta, y el Estado controlaba más del 50% del crédito total. Más aún, la participación relativa del Estado sobre el PGB era del 14% y empleaba a un 13% de la población económicamente activa.²³ La Corporación de Fo-

23. Oficina de Planificación Nacional, *Plan de la economía nacional: Antecedentes sobre el desarrollo chileno, 1960-70* (Santiago: ODEPLAN, 1971), pp. 7, 170-76, 372, 383. Este volumen es un excelente resumen del estado de la economía

mento de la Producción (CORFO), entidad estatal, poseía acciones en ochenta de las principales empresas e instituciones del país y era accionista mayoritaria en treinta y nueve de ellas.²⁴ La mayoría de los grupos e instituciones privadas estaban fuertemente reguladas por el Estado y contaban con sus disposiciones favorables. El Estado trazaba el curso del crecimiento económico e intervenía en la fijación de precios; además, estaba a cargo de los principales programas de seguridad social y ejercía un rol predominante en las negociaciones colectivas.

Pero lo importante respecto del sistema institucional chileno no es sólo su tamaño. El punto clave es que la política chilena no era una política pretoriana. A diferencia de la política de algunos de sus vecinos, donde los golpes de Estado valían más que el veredicto del sufragio, la chilena no contemplaba una cruda confrontación de fuerzas políticas, donde cada una, ante la existencia de estructuras de autoridad transitorias incapaces de defender, ni siquiera en la manera más elemental, el bien común, buscaba maximizar sus pro-

chilena y el rol del sector público hasta 1970. Para un estudio que utiliza muchas de las mismas cifras e información comparativa de otros países de América Latina, véase Sergio Bitar, *La estructura económica chilena y la transición al socialismo*, Mensaje, 20 (202-3): 404-12, septiembre-octubre de 1971.

24. Para esta información, y otra sobre países latinoamericanos, ver el excelente estudio *Public Enterprises: Their Present Significance and their Potential in Development*, *Economic Bulletin for Latin America*, 15(2): 1-70, 2º semestre de 1970. Tampoco debe minimizarse la importancia de un sector privado empresarial y financiero altamente concentrado. Véase Ricardo Lagos Escobar, *La concentración del poder económico* (Santiago: Editorial del Pacífico, 1961); y Maurice Zeitlin y Richard Ratcliff, *The Concentration of National and Foreign Capital in Chile*, en Valenzuela y Valenzuela, *Chile: Politics and Society*, pp. 297-337.

pios intereses a través de la acción directa.²⁵ Tanto los funcionarios públicos electos como los no electos eran capaces de olvidar las ásperas agresiones verbales de reuniones políticas en tempranas horas de la tarde, y luego reunirse nuevamente al atardecer, ya fuera en algún salón del Congreso o cenando en un restaurant santiaguino, para llegar a acuerdos. Después de violentos intercambios verbales sobre la naturaleza de la revolución cubana, la guerra del Vietnam, la explotación obrera o la nacionalización del cobre, se pasaba a arduas negociaciones sobre el próximo reajuste salarial o un proyecto de ley complementario del presupuesto o una estrategia conjunta para construir un nuevo hospital para la comunidad de Mulchén. Al mismo tiempo, los poderosos organismos fiscales estaban en gran medida al margen del control político y de los conflictos partidarios, ejerciendo importantes funciones gubernamentales basados en la autoridad formal y en el poder institucional. Por ejemplo, el Contralor General podía obtener el arresto del alcalde y de todos los regidores de la ciudad de Ancud por el simple hecho de haber otorgado un bono de Navidad, utilizando fondos destinados a otros proyectos.²⁶ Asimismo, la Dirección del Trabajo podía dictar un número impresionante de normas y procedimientos de "conciliación", a fin de resolver algún conflicto laboral.²⁷

25. Para una definición del pretorianismo y una influyente discusión sobre la institucionalización política, véase Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968), especialmente cap. 4.

26. Para el debate del Congreso Nacional sobre este incidente, véase *El Mercurio*, 27 de junio de 1969, p. 13.

27. Ver J.S. Valenzuela, *The Chilean Labor Movement*, en Valenzuela y Valenzuela, *Chile: Politics and Society*, pp. 135-171.

Una descripción detallada del contexto institucional chileno excedería los límites de este libro.²⁸ No obstante, antes de pasar a la discusión sobre "las reglas del juego", y dada la importancia del Poder Legislativo en el proceso político, es necesario mencionar brevemente a las instituciones estatales de mayor importancia.

Además del Presidente y el Congreso, la Constitución chilena consagraba la existencia de dos órganos adicionales: el Poder Judicial y la Contraloría General de la República. El Poder Judicial poseía una larga tradición de independencia del Poder Ejecutivo y constituía un baluarte para la protección e interpretación de un código legal muy detallado, dedicado, en gran medida, a la preservación de las instituciones tradicionales y al funcionamiento de las relaciones económicas. Los nombramientos del personal judicial, en todos los niveles de la jerarquía, se basaban en criterios de antigüedad y mérito. Los nombramientos los decidía la propia institución y la injerencia del Poder Ejecutivo se limitaba a escoger al candidato a partir de listas propuestas por la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones respectivas. El cargo de Ministro de la Corte Suprema era de carácter vitalicio; y sólo la Corte tenía la facultad de remover a los magistrados por irresponsabilidad ministerial. Si bien la facultad de revisión jurídica de la Corte era limitada en comparación a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte podía declarar inconstitucional la aplicación de un precepto legal en un caso específico.²⁹

28. La mejor descripción de las instituciones chilenas antes del golpe es Gil, *Political System of Chile*.

29. Alejandro Silva Bascuñán, *Tratado de derecho constitucional*, 3 vols. (Santiago: Editorial Jurídica, 1963).

Uno de los órganos autónomos más distintivos del gobierno chileno era la Contraloría General de la República. Los empleados públicos pertenecientes a esta entidad, cuyo número superaba los 750, eran funcionarios de carrera, y el Contralor General era designado en su cargo de por vida. Las funciones de la Contraloría eran muy diversas, variaban desde la fiscalización de los fondos públicos hasta el control de la legalidad de los decretos emanados por el Ejecutivo y la asesoría al Congreso sobre la constitucionalidad de sus proyectos de ley. A diferencia de los Tribunales, que sólo intervenían una vez que se entablaba una acción judicial, la Contraloría también atendía consultas informales provenientes de funcionarios electos, grupos de oposición o particulares. Este prestigioso organismo gozaba del respeto de la mayor parte de los funcionarios públicos chilenos, quienes tenían su escrupulosa defensa de la legalidad y de la frugalidad, la que a veces era mantenida a expensas de la racionalidad y la imparcialidad. Un empleado público, que erraba en el gasto de los fondos públicos podía ser suspendido por la Contraloría y, además, ésta podía exigir la reposición de los dineros malgastados. Si el delito era de índole criminal, y ya no meramente administrativo, el funcionario era demandado por la Contraloría y procesado por el Poder Judicial.

El Presidente, con el acuerdo unánime de su gabinete, podía insistir en que se diera curso a cualquier decreto rechazado por la Contraloría (Decreto de Insistencia), con excepción de los decretos relacionados con el gasto público. La insistencia, sin embargo, sólo se ejercía muy ocasionalmente,

puesto que exponía a los miembros del gabinete a recibir una acusación constitucional, la que podía redundar en la destitución del cargo. En una sociedad caracterizada por una nutrida y compleja legislación, así como por agudas divisiones ideológicas, la Contraloría llegó a constituirse en el intérprete de la legislación vigente y en el "garante" de la legalidad.³⁰

Para los propósitos de la siguiente discusión, quizás aún más importante que la autonomía de los Poderes consagrados en la Constitución, fue la marcada autonomía de muchas entidades y organizaciones dependientes del propio Ejecutivo.³¹ Lo sorprendente en la burocracia chilena no era tanto el poder entregado al primer mandatario, sino lo difícil que era para él controlar las actividades diarias del aparato burocrático. Esto ocurría porque la mayoría de los organismos fiscales eran "organismos descentralizados", es decir, estaban fuera de la acción directa del Ejecutivo. Dichas entidades, aunque dependieran nominalmente de alguno de los catorce ministerios, es-

30. Para una discusión sobre la Contraloría, véase Enrique Silva Cimma, *Derecho administrativo chileno y comparado*, 2a. ed. vol. 2. (Santiago: Editorial Jurídica, 1969). Según Silva Cimma, desde 1959 a 1969 los presidentes chilenos no emitieron decretos de insistencia para sobreponerse a dictámenes de la Contraloría (ver p. 368). Sobre la administración financiera del sector público en Chile, véase Hugo Aráñeda Dörr, *La administración financiera del Estado* (Santiago: Editorial Jurídica, 1966). Sobre las finanzas municipales y el rol de la Contraloría, véase A. Valenzuela, *Political Brokers in Chile*, cap. 2.

31. Existen varios excelentes estudios sobre la burocracia chilena. Ver Germán Urzúa Valenzuela y Ana María García Barcelatto, *Diagnóstico de la burocracia chilena* (Santiago: Editorial Jurídica, 1971); Germán Urzúa Valenzuela, *Evolución de la administración pública chilena* (Santiago: Editorial Jurídica, 1970); Rafael López Pintor, *Development Administration in Chile: Structural, Normative and Behavioral Constraints to Performance* (Tesis doctoral, University of North Carolina, 1972) y su libro *Una explicación sociológica del cambio administrativo: Chile, 1812-1970* (Madrid: Documentación Administrativa, N° 168, 1975).

taban facultadas para decidir sobre gran parte de su presupuesto y sobre las contrataciones de personal. En Chile existían más de cincuenta de estas entidades semifiscales, que empleaban a un 40% de los funcionarios públicos del país. Generalmente, ellas administraban el grueso de los servicios sociales y económicos para áreas tales como la agricultura, la vivienda, la seguridad social y el desarrollo económico. Estas entidades aceptaban gustosas cualquier esfuerzo del gobierno por ampliar su jurisdicción o sus funciones; en cambio, rechazaban fuertemente cualquier intento de reducción o cualquier cambio drástico en la forma de programación de sus proyectos o en su modo de operar. Muchos de los proyectos innovadores de los demócrata cristianos, en vivienda, desarrollo urbano, etc., se vieron frustrados por la resistencia de las entidades semifiscales a seguir nuevas pautas de planificación e inversión.³²

Por ley, el presidente no podía despedir a los empleados públicos para reemplazarlos por un nuevo cuadro de funcionarios más afines a los objetivos de su programa político. Por esta razón, cada nuevo presidente se veía forzado a crear nuevos organismos para llevar a cabo sus programas. A menudo, el nuevo organismo duplicaba las funciones del más antiguo complicando aún más el problema de la coordinación e intensificando la competencia por la participación en el limitado presupuesto fiscal.³³

32. Véase A. Valenzuela, *Political Brokers in Chile*, cap. 6.

33. Para una discusión sobre algunos de estos problemas desde el punto de vista del planificador, ver Osvaldo Contreras Strauch, *Antecedentes y Perspectivas de la Planificación en Chile* (Santiago: Editorial Jurídica, 1971). Esta obra muestra una fuerte influencia del pensamiento de Osvaldo Sunkel.

Otra característica de las instituciones semifiscales chilenas era la inclusión oficial de representantes de intereses privados en los directorios y organismos estatales, reforzando así su autonomía y contribuyendo a la "institucionalización" del proceso de toma de decisiones. El resultado fue que áreas claves de la economía quedaron en manos de lo que eran esencialmente "gobiernos privados". La composición de los directorios de varios organismos estatales incluía representantes de los intereses privados, del gobierno y especialistas técnicos, correspondiéndoles un tercio de la participación a cada uno. Un estudio revela que, durante el período 1958-1964, las cuatro organizaciones empresariales más poderosas estaban presentes, con derecho a voto, en los directorios de las mayores entidades financieras y planificadoras, incluyendo el Banco Central, el Banco del Estado y la CORFO.³⁴ Además, cada grupo empresarial estaba facultado para participar en las votaciones de los organismos fiscales relacionados con su particular sector económico. Con anterioridad a la promulgación de la Ley de Reforma Agraria en 1966, era difícil llevar a cabo cualquier reforma del sector rural porque el 30% de las votaciones en los organismos pertinentes estaba controlado por grupos cuyos intereses económicos se veían afectados negativamente por las reformas.³⁵ El gobierno de

34. Ver Menges, *Public Policy and Organized Business in Chile*.

35. Jacques Chonchol, *Poder y reforma agraria en la experiencia chilena*, en Aníbal Pinto et al., *Chile hoy* (México: Siglo XXI, 1970), p. 296. Según Chonchol, cuando los demócrata cristianos asumieron el poder, la política agrícola estaba a cargo de veintiún organismos distintos que dependían de cinco ministerios. Todavía en 1966 el Ministerio de Agricultura controlaba sólo el 11% del crédito agrícola y sólo el 2% de la inversión rural (ver pp. 303-4). Este es uno de los mejores estudios disponibles sobre las complejidades del gigantesco sector público.

Frei intentó aumentar la representación efectiva de organizaciones de la clase media y obrera en dichos organismos estatales.

El entrelazado de lo público y lo privado en el sector estatal también se vio reforzado por la existencia de poderosos colegios profesionales y organizaciones sindicales. Los grupos profesionales llegaron a influir notablemente en muchas materias importantes de los organismos fiscales. Por ejemplo, los arquitectos predominaban en el Ministerio de la Vivienda. El Ministerio de Obras Públicas era dominio casi exclusivo de los ingenieros civiles, y el Ministerio de Agricultura era manejado por agrónomos y algunos veterinarios. En varias instituciones públicas, el título universitario era un requisito para un cargo o un ascenso; de este modo, se garantizaban las privilegiadas oportunidades de empleo para un pequeño grupo de individuos. Las pautas profesionales y los puntos de vista de un cuerpo colegiado, sumado a sus intereses creados, contribuían a la determinación de políticas públicas que a menudo diferían en forma significativa de las que eran propiciadas por el Ejecutivo y sus aliados políticos.³⁶

En otros países de América Latina también tuvo lugar el desarrollo de poderosas instituciones estatales y la fragmentación del proceso de elaboración de políticas, pero sin disminuir la tendencia a la política pretoriana. La clave del sistema chileno, que lo diferenció notablemente de lo acontecido en

36. Ver los comentarios de Carmen Lazo, una popular diputado socialista, criticando la excesiva tecnocracia del sector público durante el período de Allende y demandando un mayor rol para los no especialistas, en *Ercilla*, 11 de julio de 1973, p. 11. Ver también Chonchol, *Poder y reforma agraria en la experiencia chilena*.

otros países, como Argentina, fue la importancia permanente de las redes de los partidos políticos y la existencia de espacios viables de transacción, especialmente el Congreso.³⁷ A simple vista, los partidos parecen haber representado sólo una capa más dentro del complejo andamiaje del pluralismo político chileno. De hecho, las estructuras partidarias, que permeaban todos los niveles de la sociedad, se constituyeron en el mecanismo de enlace clave que vinculaba a organizaciones, instituciones, grupos e individuos con el centro político. Los grupos de base de todos los partidos participaban activamente en cada nivel de la burocracia, en cada sindicato, en cada federación estudiantil y en cada colegio profesional. Los partidos a menudo se apoderaban de una organización de la sociedad civil o establecían una paralela. Cuando surgía una materia de fondo que afectaba los intereses de la organización o grupo, los partidos eran los conductos mediante los cuales se canalizaban las demandas de la organización o grupo a los centros de toma de decisión, proceso en el cual el Congreso ejercía un rol fundamental.

El Congreso chileno, ya a mediados del siglo XIX, comenzó a establecer una tradición de independencia respecto del Ejecutivo al demorar la aprobación del presupuesto fiscal

37. Sobre los aspectos pretorianos de la política argentina, véase Eldon Kenworthy, *Coalitions in the Political Development of Latin America*, en Sven Groenings, E. W. Kelley y Michel Leiserson, eds., *The Study of Coalition Behavior: Theoretical Perspectives from Four Continents* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970), pp. 103-4. Para una discusión fascinante del imposible juego político argentino, véase Guillermo O'Donnell, *Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics* (University of California at Berkeley: Institute of International Studies, 1973), cap. 4.

enviado por el presidente, a cambio de concesiones en otras materias legislativas.³⁸ Aunque perdió la hegemonía que gozaba durante las primeras décadas del siglo, siguió siendo, a mediados del siglo veinte, uno de los cuerpos legislativos más fuertes del mundo. El Congreso mantenía la última autoridad en la generación de las leyes. Podía crear nuevos programas, acabar con los antiguos y reducir o modificar los presupuestos. El Poder Legislativo jugó un papel decisivo en la creación de un sistema de seguridad social complejo y voluminoso; y hasta las reformas constitucionales de 1970, era la arena clave para las importantísimas negociaciones sobre reajustes salariales. El Senado podía incluso impedir que el Presidente viajara al exterior, lo que hizo durante el gobierno de Frei. Las comisiones legislativas no sólo jugaban un papel importante en la elaboración de proyectos legislativos, sino que también actuaban como un cuerpo investigador. Asimismo, los acuerdos entre el Ejecutivo y la oposición sobre los asuntos de mayor importancia, como la reforma agraria y la nacionalización del cobre, se estructuraban en los salones del Congreso o a través de los buenos oficios de diputados o senadores de todos los partidos. Y aún más significativo para la estabilidad del sistema, era que en el Congreso se lograban los acuerdos entre diversas facciones partidistas sobre materias menos importantes, pero de beneficio mutuo para las

38. Sobre el Senado chileno véase Weston Agor, *The Chilean Senate* (Austin: University of Texas Press, 1971). Un estudio valiosísimo de la operativa del Congreso chileno es Jorge Tapia Valdés, *La técnica legislativa* (Santiago: Editorial Jurídica, 1960). Para una discusión sobre el rol del Congreso en la política chilena, con especial énfasis sobre la importancia de la República Parlamentaria en la institucionalización de la política chilena, véase A. Valenzuela, *Political Brokers in Chile*, cap. 8.

clientelas y distritos electorales.

Si bien el espíritu de conciliación y acuerdo alcanzado en las sesiones y comisiones legislativas puede atribuirse en parte a una socialización de "normas institucionales", la importancia de las normas compartidas para explicar el funcionamiento del sistema fue mucho menor que la de otros factores. La permanente relevancia del cuerpo legislativo como un lugar de transacción se debió al hecho de que ningún partido o coalición era capaz de desplazar a los demás. Sencillamente no había gigantes en el sistema político, y quedaba en claro que era más ventajoso para todos trabajar al interior de los mecanismos vigentes en vez de intentar destruirlos. Esto era cierto porque al final de cuentas el triunfo electoral era lo que verdaderamente medía el poder de cada partido. Además, para maximizar sus resultados electorales, cada partido o coalición debía ofrecer beneficios concretos a sus adherentes. El equilibrio de las fuerzas políticas estaba, entonces, acompañado por una fuerte necesidad de dar curso a una gran cantidad de favores para individuos o clientelas a través de las redes de los partidos. El pragmatismo de algunos partidos de centro facilitaba este proceso, y todos los partidos tenían especialistas entre los parlamentarios que se hacían cargo de este lado más mundano de la política. Como se mencionó anteriormente, los beneficios se obtenían no sólo a través del intercambio de favores políticos en el parlamento, sino también a través de gestiones directas que realizaban los legisladores ante la burocracia, aprovechando la vulnerabilidad de esta última frente a la influencia del Parlamento y de sus líderes en materias relacionadas con asignaciones presupuestarias o

distribución de cargos. Una abrumadora mayoría de los legisladores estaban convencidos de que para asegurar sus carreras políticas y la continuidad del apoyo electoral a sus partidos, debían preocuparse de sobremanca por la atención personal de "su gente".³⁹

El asunto fundamental alrededor del cual giraban gran parte de las políticas de entendimiento mutuo era la satisfacción de las reivindicaciones de grupos e individuos.⁴⁰ La mayor parte de éstas eran reivindicaciones de tipo salarial, uno de los puntos más críticos en una economía acosada por una alta tasa de inflación. El cuadro 5 muestra las variaciones anuales del Índice de precios al consumidor desde 1952 a 1970. La inflación se mantuvo relativamente baja durante los tres primeros años de la década del sesenta, pero alcanzó un 46% en 1964, con un promedio de un 25,7% durante ese decenio.⁴¹ Al mismo tiempo, Chile experimentó una lenta tasa

39. Este argumento se desarrolla en Arturo Valenzuela y Alexander Wilde, *Presidentialist Politics and the Decline of the Chilean Congress*, en Joel Smith y Lloyd Mussolf, ed., *Legislatures and Political Development*, (Durham, N.C.: Duke University Press, 1978).

40. Tomado del derecho romano, significa la búsqueda de legítimas compensaciones para la injusticia o la obtención de demandas justas a través del proceso legal.

41. Un excelente resumen y análisis del extenso debate sobre la inflación chilena, que se remonta al siglo diecinueve, puede encontrarse en Albert O. Hirschman, *Journeys Toward Progress* (New York: The Twentieth Century Fund, 1963). Un estudio clásico de la inflación a comienzos del siglo XX es Frank W. Fetter, *Monetary Inflation in Chile* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1931). Los estudios importantes en el tema de la inflación son Osvaldo Sunkel, La inflación chilena: Un enfoque heterodoxo, *El Trimestre Económico*, N° 25, octubre-diciembre de 1958; Luis Escobar, Desocupación con Inflación: El caso chileno, *Panorama Económico*, agosto de 1959; Nicolás Kaldor, *Problemas económicos de Chile*, *El Trimestre Económico*, N° 26, abril-junio de 1959.

Cuadro 5
Tasas anuales de inflación, de 1952 a 1970 (en porcentajes).

Año	Indice de precios al consumidor		Indice de precios al por mayor	
	Fines de año	Promedio anual de variación	Fines de año	Promedio anual de variación
1952	12,1	22,2	20,9	24,0
1953	56,1	25,3	35,2	23,0
1954	71,1	72,2	65,3	56,9
1955	83,8	75,1	82,8	76,3
1956	37,7	56,1	45,9	63,1
1957	17,3	26,8	34,5	43,2
1958	32,5	25,9	25,3	25,5
1959	33,3	38,6	25,2	30,0
1960	5,4	11,6	1,6	5,3
1961	9,7	7,7	1,6	0,8
1962	27,7	13,9	26,8	8,3
1963	45,4	44,3	45,4	53,7
1964	38,4	46,0	43,7	50,6
1965	25,9	28,8	24,5	24,4
1966	17,0	22,9	19,7	22,9
1967	21,9	18,1	19,8	19,3
1968	27,9	26,6	33,1	30,5
1969	29,3	30,6	39,4	36,5
1970	34,9	32,5	33,7	36,1

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos, encontrados en Ricardo Ffrench-Davis, *Políticas económicas en Chile, 1952-1970* (Santiago: Ediciones Nueva Universidad, 1973), pp. 242-46. Ffrench-Davis realiza pequeñas correcciones de estos índices. Se utilizan las cifras oficiales con el objeto de compararlas con los índices del período de Allende.

de crecimiento económico, con un crecimiento del producto geográfico per cápita que alcanzó un estimado de un 1,6% desde 1915 a 1964, pese a que el Índice de crecimiento indus-

trial fue de un 4,3% en el mismo período.⁴² A comienzos de los años sesenta, este último Índice subió en un 7%, pero decayó a un promedio de un 2,4% de 1967 a 1970. La distribución del ingreso también se mantuvo agudamente sesgada. Un 60% de la población percibía el 28% del ingreso nacional, y un 14% percibía el 42%. De hecho, el 2% de la población chilena disfrutaba del 12,5% del ingreso de la nación. En consecuencia, la principal preocupación de los sindicatos y de otros grupos públicos y privados era lograr reajustes de sus ingresos proporcionales o, en lo posible, superiores al aumento estimado del costo de la vida. La inflación, por lo tanto, establecía los parámetros básicos para el sistema de negociación colectiva. Como el gobierno y sus organismos regulaban tanto los aumentos salariales como los aumentos de precios, la batalla sobre los reajustes se llevaba a cabo en la arena pública y los acuerdos principales se elaboraban en el Congreso.

Considerando la intensidad de la polarización partidista de Chile, es muy probable que no habría sido posible crear una institución como el Congreso a mediados del siglo vein-

42. Un excelente estudio reciente sobre la industrialización de Chile es Henry W. Kirsh, *The Industrialization of Chile, 1880-1970* (Tesis doctoral, University of Florida, 1973); Oscar Muñoz, *Crecimiento Industrial de Chile, 1914-1965* (Santiago: Universidad de Chile, Instituto de Economía y Planificación, 1968), p. 26. Entre las muchas buenas obras generales sobre la economía chilena, ver Francisco A. Encina, *Nuestra inferioridad económica* (Santiago: Editorial Universitaria, 1955); Aníbal Pinto Santa Cruz, *Chile: Un caso de desarrollo frustrado* (Santiago: Editorial Universitaria, S.A., 1959); ídem, *Chile: Una economía difícil* (México: Fondo de Cultura Económica, 1964); Ricardo Ffrench-Davis, *Políticas económicas en Chile, 1952-1970* (Santiago: Ediciones Nueva Universidad, 1973); Oscar Muñoz et. al., *Proceso a la industrialización chilena* (Santiago: Centro de Estudios de Planificación Nacional, 1972); Markos Marmalakis y Clark Reynolds, eds., *Essays on the Chilean Economy* (Homewood, III: Richard D. Irwin, 1964); José Cademartori, *La economía chilena* (Santiago: Editorial Universitaria, 1968).

te. Pero el Poder Legislativo como un lugar de acomodación y como el principal foco de la política partidista, surgió antes que la polarización del sistema de partidos. También precedió al desarrollo de las poderosas instituciones estatales y a la burocracia centralizada. Como se destaca en un trabajo anterior:

"Esto tuvo un profundo efecto en el desarrollo posterior. Significó que pese al desarrollo de organismos burocráticos, creados para promover el desarrollo económico y para redistribuir la riqueza, los partidos políticos vinculados al Congreso continuaron siendo los intermediarios más importantes del sistema. Si bien las facultades de los legisladores para generar recursos en el propio Congreso se limitaron bastante, los parlamentarios conservaron su rol como los nexos claves entre los electores y la burocracia. En consecuencia, esto reforzó la viabilidad de las instituciones representativas. En los países donde una burocracia poderosa surgió antes que el sistema partidario, como en Brasil y Argentina, las posibilidades de desarrollo de redes de vínculos informales u oficiales al margen de la representación popular fueron mucho mayores. En tales circunstancias, las posibilidades de mantener o promover instituciones democráticas se debilitaron severamente."⁴³

43. Citado en Valenzuela y Wilde, *Presidentialist Politics*. Hans Daalder desarrolla un argumento similar al diferenciar la evolución política de varios países europeos. Ver su artículo *Elites, Parties and Political Developments in Western Europe*, en Lapalombara y Weiner, *Political Parties and Political Development*, p. 60.

La perpetuación de la política de acomodación y compromiso fue posible gracias a la existencia de un Poder Legislativo viable y con larga tradición, a la permanente polarización y competitividad de la política chilena, y a la necesidad de acomodar en el sistema una serie de demandas particularistas. En Chile, la polarización y la competitividad partidaria hicieron necesaria la acomodación política. Por su parte, el "clientelismo" de la política electoral la hizo posible.

En tal sistema de acomodación, el cambio sólo podía ser incremental. Que los programas políticos fueran reformistas u orientados hacia la mantención del statu quo dependía de la coalición que se formara y de la posición que el partido de centro adoptara en el momento. En un país donde había disponibilidad de recursos sólo para un reducido número de nuevos proyectos, la constante presión por atender las demandas particularistas hacía casi imposible encontrar el financiamiento adecuado para desarrollar proyectos de largo plazo o atender situaciones de urgencia. En Chile existía una discrepancia entre la necesidad de transformaciones y cambios estructurales, y la realidad de un sistema de negociación que sólo permitía un cambio incremental.⁴⁴ Esta disonancia contribuía a un sentimiento generalizado de "crisis permanente" que caracterizaba a la política chilena.

44. En Estados Unidos una ideología de incrementalismo inconexo parece ser congruente con la de una toma de decisiones incrementalista. Véase Charles E. Lindbloom, *The intelligence of a Democracy* (New York: The Free Press, 1965). Sobre la ideología de planificación global en Chile y otros países, véase el provocativo análisis de Hirschman en *Journeys toward Progress*.

Sin embargo, porque aceptaban el voto como el instrumento legítimo y fundamental para generar el poder público, y porque veían la necesidad de negociación en un ambiente altamente competitivo y polarizado, entrabado con un patrón de cambios incrementales como los únicos posibles, los dirigentes chilenos supieron conciliar sus diferencias y evitar confrontaciones serias cuando éstas parecían inminentes.

La política chilena y los militares chilenos

En el devenir de la política chilena, las Fuerzas Armadas se mantuvieron al margen del proceso político. Después del período 1924-1931 éstas no habían intervenido directamente en la determinación de la suerte de los gobiernos. Incluso entonces, las Fuerzas Armadas gobernaron directamente sólo durante un brevísimo tiempo. El gobierno del general Ibáñez (1927-31) fue un gobierno elegido, que descansaba en el apoyo tácito más bien que activo de los militares. Se basaba más en la figura política del líder que en la participación organizada de la institución en la gestión gubernamental.⁴⁵

Por lo general, la oficialidad se relacionaba poco con el liderazgo de las instituciones sociales, económicas y políti-

45. Para la historia de los militares chilenos, ver Frederick M. Nunn, *Chilean Politics, 1920-31: The Honorable Mission of the Armed Forces* (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1970); e idem, *The Military in Chilean History* (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1976).

cas.⁴⁶ Aunque se les respetaba como soldados profesionales y como los portadores de una gloriosa tradición militar, generalmente las otras elites los miraban en menos porque los consideraban de criterio estrecho y de escasa cultura humanista.⁴⁷ Sin embargo, esto no significa que los militares no tuvieran injerencia sobre importantes áreas de la política pública, particularmente aquellas relacionadas con los asuntos militares. Históricamente, los militares han tenido un buen pasar en Chile. En años recientes el gasto militar per cápita de Chile ocupaba el sexto lugar en América Latina, y el tamaño de las Fuerzas Armadas en relación al tamaño de la población ocupaba el quinto lugar.⁴⁸

No obstante, la tradición de no intervención en los asuntos políticos no debe considerarse como una prueba de que los militares chilenos estaban por sobre la política de conspiraciones. En efecto, desde la década de 1930 prácticamente todos los gobiernos sufrieron incidentes militares, lo que revela que sectores de la oficialidad habrían prescindido de bue-

46. En una encuesta realizada en 1967 la abrumadora mayoría de los encuestados señaló que los militares no tenían un rol político. Véase Roy Allen Hansen, *Military Culture and Organizational Decline: A Study of the Chilean Army* (Tesis doctoral, University of California at Los Angeles, 1968), cap. 4. Basando sus observaciones en una extensa encuesta aplicada a oficiales en retiro, Hansen señala que los oficiales escogieron a sus cinco mejores amigos casi exclusivamente entre sus compañeros oficiales.

47. Este sistema aparecía reiteradamente en las entrevistas con políticos chilenos realizadas por el autor en 1969 y 1974. Hansen, sin embargo, señala que la población de su muestra opinó que cualidades como honradez y confiabilidad estaban más presentes en los militares que en otras elites, incluyendo a los políticos, (ver *ibid*).

48. Charles Lewis Taylor y Michael C. Hudson, *World Handbook of Political and Social Indicators* (New Haven: Yale University Press, 1972). pp. 35, 39.

na gana de los políticos. A mediados de los años cincuenta se desarrolló en el Ejército un importante movimiento, Línea Recta, cuyo propósito era gobernar con el apoyo del Presidente Ibáñez.⁴⁹ Históricamente, existió una tensión permanente entre los llamados elementos "golpistas", que abogaban por la intervención directa, y los "constitucionalistas" que defendían la "neutralidad" de las Fuerzas Armadas.

Durante los gobiernos de Alessandri y Frei las relaciones cívico-militares se deterioraron significativamente. La participación del gasto militar sobre el presupuesto nacional descendió en forma brusca; durante Alessandri, descendió de más del 15% a un promedio de un 9,8% y en el mandato de Frei bajó a un promedio de 5,3%.⁵⁰ La pública disconformidad de las Fuerzas Armadas, por sentirse postergadas por el gobierno, provocó la renuncia del comandante en jefe de la Armada en 1967. Y el 21 de octubre de 1969 el general Roberto Viaux avanzó con sus tropas desde el regimiento Tacna hacia el palacio presidencial. Este fue el primer acto de insubordinación militar en décadas. Si bien el movimiento fue controlado rápidamente, en sí reflejaba un estado de descon-

49. Ver los trabajos de Nunn mencionados en la nota 46. Este punto es planteado enérgicamente en un buen artículo sobre los militares chilenos después del golpe, ver Jorge Neff, *The Politics of Repression: The Social Patology of the Chilean Military*, *Latin American Perspectives*, 1(2): 59-63, verano de 1974. Ver también el trabajo de Alain Joxe, *Las fuerzas armadas en el sistema político de Chile* (Santiago: Editorial Universitaria, 1970).

50. Las estadísticas del período anterior a Alessandri han sido tomadas de Gil, *Political System of Chile*, p. 178. Las estadísticas más recientes se pueden encontrar en Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, Balance consolidado del sector público.

tento entre los militares. El general Viaux, el comandante en jefe de la Armada y el jefe de la guarnición de Santiago, tuvieron más tarde un rol protagónico en un intento de golpe, poco después de la elección de Allende, para impedir que la Unidad Popular asumiera el poder.⁵¹

Es muy probable que la mayor parte de la oficialidad chilena compartiera los puntos de vista de un ex comandante en jefe del Ejército quién señalaba lo siguiente: "No sólo el Ejército -se lo garantizo-, sino todas las Fuerzas Armadas tienen una doctrina bien clara: el poder militar es conscientemente subordinado al poder político, a la Constitución y las leyes (...). Nunca nosotros podríamos intervenir por cuenta propia, porque somos disciplinados. Por otra parte, la historia nos demuestra que jamás esa intervención ha sido necesaria, porque en nuestros gobernantes existe el sentido común y el buen juicio".⁵²

El último comentario es muy relevante. La no intervención estaba condicionada al desempeño de los dirigentes civiles, pero no a un principio definido de lealtad a la autoridad civil. Los oficiales chilenos se veían a sí mismos como los guardianes de la Constitución. En una encuesta realizada en 1967 a generales en retiro, el 84% estuvo de acuerdo (64% muy de acuerdo) que "los militares son necesarios para el país,

51. Ver capítulo II.

52. *Ercilla*, 15-21 septiembre de 1965, p. 8. Citado en Arturo Valenzuela, *The Chilean Political System and the Armed Forces, 1810-1925* (Tesis de Magister, Columbia University, 1967), p. 144.

incluso si no hay guerra, porque ellos actúan como los guardianes de la Constitución en caso de que el gobierno intente violarla". Sólo el 16% de los generales entrevistados estuvo en desacuerdo con esta afirmación.⁵³

53. Hansen, *Military Culture and Organizational Decline*, p. 254. De este modo, los militares chilenos concebían su rol en términos similares a los militares brasileños y a los otros militares latinoamericanos. Para una brillante discusión sobre el rol guardián en Brasil, véase Alfred Stepan, *The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1971), parte 2.

CAPITULO II FIN DE LOS AÑOS SESENTA Y LA ELECCION DE ALLENDE: EL CAMBIO SOCIOECONOMICO Y LA CRISIS POLITICA

Juan Linz señala que las investigaciones sobre los requisitos para una democracia estable y las causales del quiebre de los regímenes democráticos privilegian los factores socioeconómicos subyacentes como las variables independientes más importantes. Linz no niega la importancia de los elementos socioeconómicos o estructurales; pero advierte que para explicar fenómenos complejos como los quiebres políticos, un simple determinismo conlleva un grave peligro, porque considera a la política como un elemento estético, obviando la importancia de variables como el liderazgo o las dinámicas del proceso político. Linz sostiene que "las características estructurales de las sociedades, los conflictos concretos y los la- tentes, constituyen para los actores sociales y políticos, individuos e instituciones, una serie de oportunidades y limitaciones que pueden conducir a distintos desenlaces. Comenzaremos por suponer que aquellos actores tienen ciertas opciones, las que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de permanencia y estabilidad de un régimen."¹

1. Ver Juan Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis Breakdown, and Reequilibration*. (Baltimore, Md.: Johns Hopkins, University Press, 1978)

Hasta ahora nos hemos concentrado en la descripción de algunas de las principales características estructurales del sistema político chileno de mediados del siglo. Se señaló el grado de competitividad y polarización de los partidos, con su tendencia a erosionar el centro pragmático. Se esbozó la diferenciación y autonomía del sector institucional. Se describió, también, el funcionamiento de la política acomodaticia, entendiéndola como el resultado de un impase político y de la necesidad de redistribuir los limitados recursos de una sociedad relativamente pobre a las diversas fuerzas sociales. Al respecto, se enfatizó la consecuente precariedad del proceso político, cuando éste esté inserto en una sociedad donde las demandas de los grupos sociales exceden las capacidades económicas del sistema, produciendo altos índices de inflación. No obstante, Chile sobrevivió por décadas con este sistema. Y por último, terminó convirtiendo la política acomodaticia en un arte. Por ende, cabe preguntarse ¿es posible que una grave crisis socioeconómica haya sobrepasado la política acomodaticia ocasionando la ruptura de la democracia en Chile? Recordando la advertencia de Juan Linz, no podemos proceder sin una evaluación de las dimensiones socioeconómicas de la sociedad chilena durante el período inmediatamente previo a la elección de Salvador Allende.

Lo escrito sobre el tema sugiere que para evaluar las posibles presiones económicas, se debe considerar, al menos, dos dimensiones del cambio económico que son aparentemente contradictorias. En primer lugar, si se produce un fuerte descenso de la economía, especialmente si éste ocurre des-

pués de un período de considerable mejoramiento del nivel de vida, éste podría contribuir a un grado de frustración societal, capaz de socavar la autoridad política.² A la inversa, la segunda perspectiva sostiene que un notorio mejoramiento del desarrollo económico también podría perturbar el orden público. Al debilitar las relaciones sociales tradicionales, estimulando nuevas formas de movilización, un cambio económico rápido genera demandas que exceden la capacidad de respuesta de las instituciones políticas.³

El examen de la evidencia empírica del caso chileno no permitirá llegar a conclusiones categóricas respecto del efecto del cambio económico en el proceso político. La reflexión teórica sobre el tema se basa principalmente en un análisis retrospectivo y no indica con validez científica cuáles variables -de las muchas posibles- son las más importantes. Tampoco posee criterios definidos para establecer cuánto deben cambiar los valores de los distintos indicadores para que se alcance el umbral del quiebre político. Por esta razón, gran parte de la literatura es tautológica, porque la demostración de que los factores socioeconómicos han sido lo suficientemente intensos como para causar una crisis sólo es posible cuando de

2. Véase el influyente ensayo de James C. Davies, *Toward a Theory of Revolution*, *American Sociological Review*, Nº 27, febrero de 1962, pp. 5-16. Para una exhaustiva revisión de las teorías de la privación relativa que intentan explicar el desorden político y la violencia, véase Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*. (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1970).

3. Para una reciente e importante versión de esta tesis, véase Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1968) cap. 1. Ver también Karl Deutsch, *Social Mobilization and Political Development*, *American Political Science Review*, Nº 55, septiembre de 1961, pp. 492-502.

hecho ha ocurrido una crisis. Dicha formulación deja abierta la posibilidad real de que otras variables, no consideradas en el análisis, también contribuyeran al desenlace final.⁴

La solución de estas dificultades metodológicas y teóricas pasa necesariamente por el fomento de la investigación comparativa entre sistemas políticos, basada en el análisis sincrónico y, particularmente, en el diacrónico. No obstante, esto no significa que en el caso de un estudio como éste, no podamos llegar a una conclusión válida sobre la importancia relativa de las variables económicas versus las políticas. Mediante el uso de series de tiempo podemos evaluar si acaso los cambios en los valores de ciertos indicadores son mayores en el período que precede el colapso del régimen, que en períodos anteriores que no culminaron en un colapso político.

La evidencia económica

Al examinar diversos indicadores económicos correspondientes al sexenio anterior a la elección de Salvador Allende, encontramos pocos indicios de un deterioro serio de la economía o de un explosivo crecimiento económico, con su potencial efecto perturbador. Es cierto que en 1967 hubo una suave recesión, seguida, durante dos años, por tasas de creci-

4. Para un interesante análisis que desafía la tesis de Huntington en la cual sostiene que la institucionalización débil lleva a la decadencia, y que también critica algunas de las ambigüedades del argumento, véase Mark Kesselman, *Overinstitutionalization and Political Constraint: The Case of France*, *Comparative Politics*, Nº 111, octubre de 1970, pp. 21-44.

miento más lentas que las de los primeros años del gobierno demócrata cristiano. Sin embargo, lo que sorprende en los datos chilenos es cuán positivo fue el período demócrata cristiano en comparación con los años anteriores. Como puede apreciarse en el cuadro 6, efectivamente hubo una disminución progresiva del PGB per cápita entre 1953 y 1959, y recién en 1963 el índice per cápita superó aquel de 1953. En 1960, este descenso se revirtió; más aún, el aumento del PGB per cápita durante el gobierno de Frei (1965-1970) fue superior al aumento experimentado durante el gobierno de Alessandri (1959-1964). Finalmente, en el año 1970 el PGB alcanzó su más alto nivel histórico.

Pese a que el ingreso mínimo sufrió un descenso durante los últimos años del gobierno de Frei, las remuneraciones reales aumentaron considerablemente en el mismo período. Si volvemos al cuadro 5, que resume la tasa de inflación desde 1952 hasta 1970, veremos que ésta presenta un cuadro similar. Si bien es cierto que durante el gobierno demócrata cristiano la inflación se mantuvo alta, ésta nunca alcanzó el máximo experimentado en el gobierno de Alessandri (45,4%) o el 83,8% registrado durante el gobierno de Ibáñez. Por último, el mejoramiento relativo de la situación económica experimentado hacia fines de la década de 1960, estuvo acompañado por una balanza comercial positiva, situación que tampoco se dio en las dos décadas anteriores.

Más allá de una mera presentación de datos económicos, el cuadro 6 también nos informa sobre la capacidad y desempeño del gobierno. En el gobierno de Frei, la economía

Cuadro 6
Indicadores Económicos del Período 1952 - 1970 (1969 = 100)

Año	Gastos fiscales				Ingresos tributarios		Reaj. de remuner.: Valores reales (% respecto del año ant.)		Sueldo mínimo	Sueldos y salarios	Balanza de pagos (en US\$ de 1969)
	PGB per cápita	Corriente	Inversión	Total excluida gran minería	Gran minería						
1952	79,7	43,0	32,9	30,2	42,8	-	-	-	11,8	-21,5	
1953	82,7	48,4	24,8	32,5	25,6	-0,1	-	-	3,6	-27,4	
1954	80,8	45,4	25,8	30,7	35,9	-2,1	-	-	8,7	-19,3	
1955	80,9	48,3	28,9	32,0	44,2	-10,9	-	-	15,1	0,4	
1956	79,8	44,6	29,6	31,4	59,0	-11,1	-	-	-5,3	-54,4	
1957	78,5	47,9	25,4	35,1	41,6	-40	-	-	-8,7	-34,2	
1958	78,4	45,6	28,5	36,9	27,9	-4,9	-	-	-5,3	32,4	
1959	77,7	46,4	38,0	38,4	43,6	1,0	-	-	13,9	35,8	
1960	78,5	55,9	46,6	45,4	42,0	-6,6	-	-	10,8	-52,2	
1961	81,1	60,8	49,2	52,5	33,7	20,9	-	-	13,5	-138,7	
1962	83,5	69,7	60,2	55,0	45,4	5,5	-	-	13,5	-54,7	
1963	84,5	61,5	62,4	52,3	45,3	-16,5	-	-	15,1	15,1	
1964	86,4	61,6	59,9	52,2	46,7	-2,6	-	-	63,1	63,1	
1965	89,6	73,3	84,5	66,4	57,2	7,2	-	-	81,3	81,3	
1966	96,4	82,8	100,4	77,3	91,4	1,3	-	-	94,3	94,3	
1967	95,5	88,1	89,3	86,2	87,5	-2,8	-	-	109,7	-31,6	
1968	96,7	94,6	97,6	93,6	84,2	-4,9	-	-	80,7	109,7	
1969	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-5,2	-	-	8,5	80,7	
1970	101,4	121,2	102,6	111,4	123,5	-4,5	-	-	-	-	

Fuente: Ricardo Ffrench-Davis, *Políticas económicas en Chile, 1952 - 1970* (Santiago: Ediciones Nueva Universidad, 1973), cuadros 35, 51, 68 y 75.

no sólo estuvo relativamente mejor sino que tanto la recaudación tributaria como el gasto fiscal aumentaron notablemente. Esto le proporcionó al Estado la posibilidad de ampliar los servicios públicos y mejorar los niveles de capital e inversión superando con creces lo realizado por los gobiernos anteriores. Los gastos en salud, vivienda y educación aumentaron, en términos reales, en un 136%, 130% y 167% respectivamente.⁵ Además esto no se realizó a expensas de la inversión, puesto que tanto la inversión pública como la privada crecieron significativamente.

Todo indica, entonces, que durante el período inmediato, que precedió al triunfo de la Unidad Popular (UP), la economía chilena no experimentaba una crisis crónica, ascendente y sin precedentes. Desde una perspectiva puramente económica, el período vivido a mediados de los años cincuenta fue bastante peor en todos los aspectos. Durante ese período la capacidad del gobierno, medida en términos del ingreso tributario y el gasto fiscal, también experimentó un descenso o un estancamiento. Tampoco hay indicio alguno que las transformaciones económicas realizadas a fines de los años sesenta fueran demasiado drásticas o fuertes. El nivel de vida mejoró, aunque modestamente. Y la capacidad del gobierno, medida estrictamente en términos de recursos disponibles, le permitió responder a los desafíos económicos y sociales.

Bajo tales circunstancias, deberíamos sostener que la

5. Ver la excelente publicación de la Dirección de Presupuesto, Ministerio de Hacienda, *Balance consolidado del sector público de Chile años 1969-1970 y período 1964-1970* (Santiago: Talleres Gráficos del Servicio de Prisiones, 1973, p. 36).

movilización social, producto de la privación económica, la privación relativa o trastornos sociales inducidos por la economía, debió haber sido menor en la década de los sesenta que en años anteriores. Paradojalmente, varios investigadores señalan que la movilización social y política aumentó de manera sustancial hacia fines de los años sesenta. ¿Cuáles fueron las dimensiones de esa movilización? Si efectivamente la movilización fue de carácter masivo, no está claro por qué surgió, sobre todo si tenemos en cuenta el anterior análisis de la situación económica. ¿Podría decirse que la movilización social y política, desarrollada en forma independiente de los factores económicos reales, haya tenido un efecto desestabilizador del sistema político?

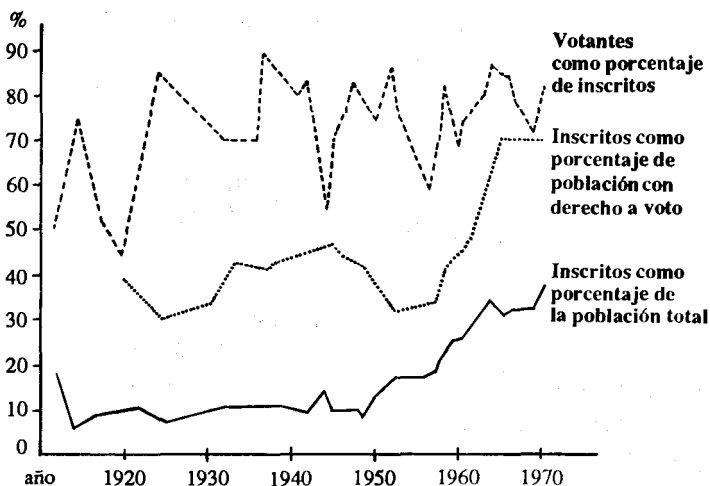
La movilización social y política a fines de la década de los sesenta

Los investigadores de la política latinoamericana destacan el hecho que Chile, a comienzos de los años sesenta, habría ocupado el primer lugar de América Latina en términos de estabilidad política; sin embargo, en términos de participación electoral, se ubicaba en el decimocuarto lugar.⁶ Como se observa en el gráfico 1, la participación electoral estuvo restringida durante la República Parlamentaria de las primeras décadas del siglo XX. El índice de participación electoral superó el de 1912 recién en la década de los cincuen-

6. Ver Martin Needler, *Political Development in Latin America* (New York: Random House, 1968), p. 90.

ta, tras la incorporación del sufragio femenino. El reducido cuerpo electoral se explica básicamente por las leyes electorales que limitaban la participación a quienes sabían leer y escribir, y exigía, además, una inscripción periódica para permanecer en los registros electorales. Otro hecho que contri-

Gráfico 1
Participación política, 1912-70



Fuentes: Datos electorales de la Dirección General del Registro Electoral, Santiago, Chile. La información demográfica proviene de la Dirección de Estadística y Censos, "Población total por provincias de Chile, 1885-60" (Santiago, 1964); ídem, "Población del país" (Santiago, 1964); y *El Mercurio*, 4 de septiembre de 1970, pp. 11, 12.

buyó a la poca movilización social fue la carencia de interés, por parte de los partidos marxistas, en obtener el apoyo electoral del sector rural. De hecho, los sindicatos campesinos fueron ilegales hasta 1967. Los partidos marxistas concentraron sus esfuerzos en obtener el apoyo del creciente proletariado industrial. La restringida participación también se vio reforzada por el sistema de clientelismo electoral, propiciado tanto por la derecha como por el centro. A su vez, el clientelismo electoral debilitó las demandas populares hasta la llegada de Carlos Ibáñez en la década de los cincuenta. Subyacente a esta situación había un acuerdo tácito entre las elites rurales y urbanas. Las elites rurales estaban dispuestas a soportar los apuros derivados del control de precios de los productos agrícolas, impuesto por una clase media industrialmente orientada; la misma clase media que, durante el período radical, se valía del apoyo de los partidos de izquierda con intereses afines a esta orientación industrial. A cambio, los partidos de centro y de izquierda no habían alterado las bases de la estructura social y política de la elite terrateniente.⁷

Las reformas electorales de 1958 y 1962 produjeron un importante vuelco en la movilización electoral. Estas reformas no sólo substituyeron la inscripción periódica, también establecieron reglas que hicieron obligatoria la inscripción electoral, incluso penando con una condena carcelaria al ciu-

7. Sobre esta tesis véase Almino Alfonso et al., *Movimiento campesino chileno*, 2 vols. (Santiago: ICIRA, 1970). Ver también Brian Loveman, *The Transformation of the Chilean Countryside*, en Arturo Valenzuela y J. Samuel Valenzuela, eds., *Chile: Politics and Society* (New Brunswick, N.J.: Transaction, Inc., 1976), pp. 238-96.

dadano que no se inscribía. Aún más importante, puesto que rara vez se ordenaba una pena a prisión, fue la exigencia de la cédula de registro electoral para realizar trámites ante los organismos fiscales y los bancos.⁸ Estas medidas, sumadas a la mayor actividad de los partidos, redundaron en un aumento del electorado de 1,25 millón (16% de la población total) en 1960 a 2,84 millones (28,3% de la población) en 1971.⁹

Aunque el aumento de la concurrencia a las urnas es impresionante, es necesario advertir que la participación electoral quizás no es el mejor indicador de una movilización desestabilizadora. Por el contrario, votar no es un acto muy exigente; el aumento de los sufragios puede tomarse más bien como un indicador del aumento de la participación al interior del marco del sistema vigente. Por esta razón, para evaluar mejor la fuerza de las demandas sociales planteadas al sistema chileno a fines de los años sesenta, es necesario considerar la revisión de otros indicadores de movilización.

Henry Landsberger y Tim McDaniel sostienen que la movilización "descontrolada" o la "hipermovilización" comenzó en Chile "no en 1970, sino que en 1965, con la llegada al poder del PDC. Un torrente se desbordó, y además fue alentado, como lo demuestra el crecimiento de la afiliación sindical y el aumento de las huelgas. Este torrente no condujo a 'buenos resultados', porque jamás pudo ser canalizado,

8. Véase Mario Bemascina, *Cartilla electoral* (Santiago: Editorial Jurídica, 1958).

9. Las cifras de población proceden de publicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas; todas las cifras electorales provienen de la Dirección del Registro electoral, Santiago, Chile.

mucho menos contenido (...)"¹⁰. La sindicalización y la actividad huelguística son definitivamente mejores indicadores de la movilización "descontrolada" que lo que puede ser la concurrencia a las urnas. Nuestra tarea será analizar la evidencia sobre el grado de movilización e intentar evaluar el carácter de dicha movilización.

En el cuadro 7 se proveen antecedentes sobre el crecimiento de los sindicatos industriales o fabriles y los sindicatos profesionales o artesanales, en el período comprendido entre 1932 y 1970. Allí se aprecia un aumento considerable de la tasa de crecimiento del número de sindicatos durante el período de Frei. Los sindicatos industriales aumentaron en un 38% y los profesionales en un 90%. A simple vista, parecería que esto representó un desarrollo sin precedentes en la historia chilena, indicando un cambio notable en la movilización de la clase obrera urbana. Un examen más minucioso, sin embargo, revela que la tendencia ascendente de los sesenta correspondió principalmente a un período de recuperación después de un descenso de la afiliación sindical, tanto en términos reales como relativos, durante los años cincuenta. Lo que más llama la atención en la información presentada en el cuadro es que a pesar del incremento en el nivel de sindicalización durante el gobierno demócrata cristiano, el porcentaje de la población industrial organizada era, en 1970, todavía más

10. El excelente artículo de Landsberger y McDaniel básicamente aborda el período de la Unidad popular. El autor está de acuerdo con la mayor parte de ese análisis, aunque interpreta de un modo un tanto diferente la movilización en el período anterior a Allende. Ver *Hypermobilization in Chile, 1970-73*, *World Politics* 28(4): 538, julio de 1976.

Crecimiento de sindicatos industriales y profesionales en años seleccionados, 1932 a 1970.

Año	Nº de sindicatos industr.	Nº de miembros de sindicat. industr.	Población activa industrial	% de la población industrial sindicaliz.	Nº de sindicatos profesion.	Nº de miembros de sindicat. profesion.	Total fuerza de trabajo no agrícola	Total fuerza de trabajo no agrícola sindicaliz.	% de fuerza de trab. sindicaliz.
1932	168	29.442	205.000	14,4	253	25.359	801.000	54.801	0,07
1934	266	42.617			414	38.468		81.085	
1936	275	51.185			315	35.514			
1938	333	78.989			599	46.983			
1940	629	91.940	298.100	33,9	1.259	70.357	965.100	180.497	18,7
1942	602	122.688			991	71.641			
1944	596	143.860			1.056	103.221			
1946	591	148.276			1.115	103.498			
1948	607	151.633			1.250	112.043			
1950	626	147.306			1.270	111.994			
1952	635	155.054	405.100	38,3	1.393	128.329	1.489.700	288.131	19,3
1954	667	165.888			1.372	132.161			
1956	788	170.689			1.563	144.303			
1958	641	154.650			1.225	119.666			
1960	608	122.306	406.000	30,1	1.144	107.687	1.605.900	229.981	14,3
1962	598	134.478			1.207	125.926			
1964	632	142.951			1.679	161.363			
1966	990	179.506			2.163	222.212			
1968	1.261	189.815			2.569	239.323	2.256.200	436.974	19,4
1970	1.440	197.651	562.900	35,1					

Fuentes: Datos sindicales para 1932-58, James O. Morris y Roberto Oyaneder, *Afiliación y finanzas sindicales en Chile* (Santiago: INSORA, 1962), pp. 18-20; para 1960-68, Instituto Nacional de Estadística, *Finanzas, bancos, cajas sociales año 1969* (Santiago, INE, 1969), p. 153; para 1970, *Mensaje del Presidente Allende ante el Congreso Pleno*, 21 de mayo de 1972, pp. 859-61. Datos censales para 1930, Universidad de Chile, Instituto de Economía, *Desarrollo económico de Chile, 1940-1956* (Santiago: 1940 y 1952, Dirección de Estadísticas y Censos), *Cifras comparativas de los censos de 1940 y 1952 muestra del censo de 1960*, p. 9. Cifras de población para 1970, ODEPLAN, *Plan de economía nacional*, (1971), p. 62. Los datos sobre población solo se entregan para los años censales.

bajo (35,1%) que en 1953 (38,3%). Y pese al gran aumento de la afiliación a sindicatos profesionales a fines de los años sesenta, el porcentaje de trabajadores organizados en los sectores no agrícolas solamente subió de 19,3% en 1953 a 19,4% en 1970. La población sindicalizada avanzó al mismo ritmo que los cambios societales en general, no excediéndolos en forma espectacular. Esto puede apreciarse a través del estudio del aumento de las empresas legalmente habilitadas para constituir sindicatos. Entre los censos industriales de 1957 y 1967 el número de empresas que empleaban a más de veinte trabajadores (una empresa debía tener veinticinco para constituir un sindicato) aumentó de 1.875 a 3.468, lo que representa un incremento de un 85%.¹¹ Durante el mismo período, el número de sindicatos se elevó en un 83%. Puesto que el número de trabajadores sindicalizados aumentó en un 23% en el mismo período, se deduce que el tamaño promedio de los sindicatos se redujo, en la medida que se formó un mayor número de pequeñas empresas. En 1958, el tamaño promedio de un sindicato era de 248 trabajadores, mientras que en 1967 era de 162.

Es necesario señalar que el número total de afiliados está sobreestimado en el cuadro 7. Esto ocurre porque muchos

11. Los datos de 1967 provienen de la Dirección de Estadísticas y Censos, *Chile industria manufacturera: Número de establecimientos y ocupación en el año 1967*, mimeo, 1968, p. 8. Las cifras de 1958 se tomaron de la excelente publicación del Instituto de Economía, Universidad de Chile, *La economía en Chile en el período 1950-63*, vol. 2 (Santiago: Instituto de Economía, 1963), p. 105. De acuerdo con la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), el empleo en las grandes empresas se triplicó en el mismo período. Véase ODEPLAN, Plan de la economía nacional. Antecedentes sobre el desarrollo chileno, 1960-70 (Santiago: ODEPLAN, 1971), p. 181.

miembros de los sindicatos profesionales pertenecían simultáneamente al sindicato industrial de la fábrica. Por ejemplo, en 1967 cerca de un 20% de los miembros de sindicatos profesionales pertenecían a los sindicatos industriales. Más aún, es posible que durante la década de los sesenta, la proporción de los miembros de sindicatos industriales con doble afiliación haya aumentado en vez de disminuir. En el gobierno de Frei, se promulgó una ley que subía de grado la clasificación de varias especialidades de "obrero" a "empleado"; esto implicaba un aumento de status y beneficios sociales para los favorecidos. Generalmente, los obreros solicitaban la formación de un sindicato profesional con el fin de garantizar el nuevo status y beneficios. El hecho que la sindicalización pareciera haber seguido los pasos de las tendencias generales de la sociedad chilena, y que gran parte de la sindicalización efectuada en este período se debiera a los cambios legales, reduce considerablemente el valor de la variable sindicalización como indicador de la "movilización descontrolada". De hecho se puede argumentar, como lo ha hecho Clotario Blest, el fundador de la Central Unica de Trabajadores, que el crecimiento de los sindicatos profesionales es un indicador más bien del debilitamiento potencial del movimiento obrero como fuerza militante que de su fortalecimiento.¹² El status de empleado de muchos sindicatos profesionales establece una fuerte división en la solidaridad de la clase obrera porque acentúa la diferenciación social. Más aún, los sindicatos pro-

12. Entrevistas con el autor en Santiago de Chile en octubre, noviembre y diciembre de 1974.

fesionales son débiles en términos de sus derechos de negociación colectiva, lo que significa que el status de empleado se buscaba a menudo pese a que podía disminuir la capacidad del grupo en cuestión para desempeñar las funciones del sindicato.¹³

En los años sesenta, entonces, se reanudó el patrón de crecimiento progresivo iniciado con el gobierno del Frente Popular, elegido en 1938. El deterioro del movimiento obrero en los años cincuenta se debió a la crisis económica y a la represión de los trabajadores durante el gobierno de Ibáñez. (Ibáñez conservó la proscripción del Partido Comunista hasta 1958). También se debió a la desorganización y profundas escisiones de las cúpulas del movimiento. La década de los sesenta, y especialmente el gobierno de Frei, se caracterizó por ser no sólo un período de renovada sindicalización sino también un período de reformas sustanciales y de fomento del movimiento sindical por parte del gobierno. Quizás el indicador más revelador de la actitud favorable del gobierno a un proceso de reforma fue la organización activa de los trabajadores agrícolas, hasta entonces no-sindicalizados. Antes de la promulgación de la ley de 1967, que permitió la constitución legal de los sindicatos rurales, ya se habían creado más de doscientos. Como se observa en el cuadro 8, en noviembre de 1970 había 136.984 campesinos sindicalizados, mientras que sólo cinco años antes en el agro había 2.180 trabajadores organizados. Esto significó que en 1970, el 18% de la población

13. Este punto se plantea en Alan Angell, *Politics and the Labour Movement in Chile* (Londres: Oxford University Press, 1972), p. 67. Estoy en deuda con Samuel Valenzuela por sus provechosos comentarios en esta sección.

Cuadro 8
Crecimiento de los sindicatos agrícolas.

Año	Número de sindicatos	Número total de miembros
1925	10	5.000
1953	15	1.042
1958	28	2.030
1960	18	1.424
1961	22	1.831
1962	22	1.860
1963	22	1.500
1964	24	1.658
1965	32	2.118
1966	201	10.417
1967	211	42.474
1968	371	78.419
1969	421	104.666
1970 (hasta noviembre)	476	136.984

Fuentes: Para 1925, Alan Angell, *Politics and the Labour Movement in Chile* (Londres: Oxford University Press, 1972) p. 37; para 1953, Servicio Nacional de Estadísticas, *Estadística Chilena, Sinopsis 1958*; para 1960-68, Instituto Nacional de Estadísticas, *Finanzas, bancos y cajas sociales año 1969* (Santiago: Instituto Nacional de Estadísticas, 1969), p. 153; para 1969-70, Dirección de Presupuestos, *Balance consolidado del sector público de Chile años 1969-1970 y período 1964-1970*, p. 41.

activa de la agricultura estuviera sindicalizada -un esfuerzo de organización sin precedentes para un tiempo tan corto. Es aquí donde encontramos el mejor indicador de una significativa movilización a fines de los años sesenta, previo al advenimiento del gobierno de Salvador Allende.¹⁴

14. Las tres confederaciones campesinas más importantes eran: Triunfo Campesino, formada inicialmente por INDAP del Ministerio de Agricultura; Libertad, que agrupaba a organizaciones vinculadas a la Iglesia y a la Democracia Cristiana; y Ranquil, asociada a los partidos marxistas. En 1969 Triunfo Campesino tenía casi el 50% de los afiliados, pero a fines de 1972 Ranquil comenzó a predominar con cerca de la mitad de los campesinos sindicalizados. Información proveniente de la Dirección del Trabajo, Santiago.

Aun así, esta movilización rural debe juzgarse en su contexto global. En 1970 los campesinos organizados representaban menos del 5% de la población activa; por lo que, mirado desde el punto de vista de la totalidad social, el esfuerzo organizacional no fue tan grande. E incluso, más del 80% de la población rural aún no estaba sindicalizada. Más importante aún, la sindicalización rural en muy pocas ocasiones fue producto de una movilización espontánea y descontrolada. Obedeció más bien a una política deliberada, sancionada legalmente y conducida principalmente por organismos gubernamentales. El hecho que hacia el final del período los partidos políticos intensificaran sus esfuerzos sindicalizadores, y que algunos organismos fiscales estuvieran más reticentes que otros a producir cambios, no contradice el énfasis puesto en el proceso de sindicalización rural como un proceso bastante organizado y controlado.¹⁵

Si examinamos otro de los posibles indicadores de movilización, es decir, la incidencia de huelgas del movimiento obrero, podemos ver que en la década del sesenta, y particularmente durante el gobierno demócrata cristiano, tuvo lugar un fuerte aumento de la actividad huelguística (ver cuadro 9). Mientras que en 1960 el país experimentó 245 huelgas, en 1966 esta cifra aumentó a 1.073. Si comparamos los penúltimos años de los gobiernos de Alessandri y Frei, vemos que la incidencia de huelgas y el número de trabajadores involucrados subió en un 135%. El aumento de la actividad huelguística

15. ver las fuentes citadas en la nota 7.

Cuadro 9
Evolución de las huelgas, 1947-69

Año	Nº de sindicatos	Nº de huelgas	Prom. de huelgas por sindicatos	Nº de huelguistas	% de huelguistas sobre la pobl. activa	Nº de trabajad. por huelga	Total ds.-hombres perdidos en huelga	Ds.-hombre perdidos por huelga	Ds. por huelga por trab.
1947-50	1.858	121	0,07	44.603		369	1.194.885	9.875	26,8
1952	1.982	215	0,11	151.715	0,10	706	1.766.827	8.218	11,6
1954	2.049	305	0,15	74.696		246	905.849	2.970	12,1
1956	2.351	147	0,06	105.438		717	1.657.194	11.273	15,7
1959	1.732	204	0,12	82.188		403	869.728	4.263	10,6
1960	1.752	245	0,14	88.518	0,06	361	-	-	-
1963	1.830	416	0,23	117.084		281	-	-	-
1965	2.010	723	0,39	182.359		259	-	-	-
1966	2.669	1.073	0,40	195.435		182	2.015.253	1.878	10,3
1969	3.749	977	0,26	275.406	0,12	281	972.382	995	3,5

Fuentes: Para 1947-50, Universidad de Chile, Instituto de Economía, *Desarrollo económico de Chile, 1952-56* (Santiago: Editorial Universitaria, 1956), p. 7; 1952-56, Servicio Nacional de Estadística, *Estadística de Chile Sinopsis 1958* (Santiago: Dirección Nacional de Estadística y Censos, 1958); 1959-69, *Mensaje Presidencial*, 1970, p. 366.

ca es paralelo con el aumento del número de sindicatos (105%) en los mismos años. Esto sugiere que el incremento del número de huelgas obedeció más bien a la proliferación de nuevos sindicatos que a la incorporación de nuevos miembros a los sindicatos antiguos. Esta observación se funda en la evidencia empírica que el número promedio de trabajadores por huelga disminuyó considerablemente entre la década de 1950 y la de 1960. En el período anterior, menos sindicatos se declaraban en huelga, pero en cada una había un número proporcionalmente mayor de trabajadores involucrados en la huelga. Asimismo, se observa que mientras la cifra promedio de huelgas por sindicato se disparó en 1965 y 1966, en 1969 se mantuvo en un nivel similar al de 1963. Por último, la columna 5 nos permite apreciar debidamente el real significado de la actividad huelguística. Esta muestra que para los años 1952, 1960 y 1970 el número de trabajadores en huelga sólo varía en relación con el total de la población activa de 10% a 6% y a 12%, respectivamente.¹⁶

Pero si la actividad huelguística es simplemente un reflejo del aumento del número de sindicatos y, como se señaló anteriormente, si el creciente número de sindicatos no implicó

16. De hecho, en 1920 ya había 270.000 trabajadores sindicalizados, sin contar a los empleados. Con una población activa de 1.228.000, esto significa que ya en esa fecha el 22% de los trabajadores activos estaban sindicalizados. Para las cifras de sindicatos véase *U.S. Bureau of Labor Statistics, Bulletin, N° 461*, octubre de 1968. Las cifras de población activa provienen de República de Chile, *Censo de la población de Chile, 1930*, p. vii. Para una obra que reconsidera la historia del movimiento laboral chileno y que analiza estos resultados, véase la tesis doctoral de J. Samuel Valenzuela, *The French and Chilean Labor Movements* (Columbia University, 1978).

(excepto en las áreas rurales) una movilización nueva y sustancial en relación al crecimiento de la población, cabe preguntarse, entonces, ¿qué significado tiene el incremento de la actividad huelguística como indicador de una movilización "descontrolada"? Ni el número de huelgas, ni el número de huelguistas parecen ser indicadores de un cambio masivo. Sin embargo, podría plantearse la hipótesis que el tamaño y el número de huelgas son menos importantes para juzgar el fenómeno de la movilización que la intensidad de la actividad huelguística. ¿Fueron más intensas las huelgas de fines de los sesenta? En el cuadro 9 se presenta el total de días-hombre perdidos por huelgas, que es un indicador de la intensidad de la huelga, porque sugiere el número de días que los huelguistas están dispuestos a ausentarse del trabajo. Esto constituye un índice particularmente válido, considerando la dura experiencia que significa una huelga para los trabajadores involucrados, puesto que en Chile los huelguistas carecen de fondos para mantenerse en huelga. La evidencia presentada es notable, pero contradice lo que podría esperarse. El número total de días perdidos por huelgas por año fue considerablemente más alto, en términos absolutos, a comienzos de los años cincuenta que a fines de los sesenta. Esto ocurrió pese a que a comienzos de los cincuenta la población activa representaba sólo el 50% de la que existía a fines de la década siguiente. Asimismo, el promedio de duración de una huelga era considerablemente mayor en 1947-1950 (26,88 días) que en 1969 (3,5 días).

Lo importante de estas cifras es que las huelgas tenían

una mayor duración y eran más costosas para el país y los trabajadores, justamente en un período en que la probabilidad de que el gobierno reprimiera a los trabajadores era mucho mayor. La corta duración de las huelgas en el gobierno de Frei es un claro indicador de una política gubernamental deliberadamente destinada a resolver los conflictos laborales en favor de los trabajadores. El Código del Trabajo, un cuerpo legal restrictivo y contrario en muchos sentidos a los intereses de los trabajadores, contenía una definición absurda de lo que constituía una huelga legal y estipulaba penalidades para las llamadas huelgas ilegales. No obstante, bajo el gobierno de Frei la aplicación del Código tendió a favorecer a los trabajadores más que a los empresarios. Irónicamente, esta predisposición favorable a los trabajadores, más que la alienación de masas, fue lo que estimuló el aumento de la sindicalización y de las huelgas. El relajamiento de la represión gubernamental significó para los trabajadores una mayor libertad para tomar iniciativas, puesto que confiaban que sus acciones encontrarían una disposición favorable por parte del gobierno. Como Alan Angell señala, "el brusco aumento en el número de huelgas desde 1965 no tiene que interpretarse necesariamente como el resultado de un intento marxista por intensificar la lucha de clases. Es más probable que se debiera a la mayor simpatía del gobierno hacia los sindicatos; al aumento considerable del número de sindicatos y afiliados; a un mayor número de inspectores laborales, lo que se traducía en mayores intentos de conciliación y menor uso de represión policial; y, por supuesto, a las huelgas nacionales; especialmente en

1967-1968, en protesta contra la política de salarios."¹⁷

Esta interpretación de los orígenes del aumento de la actividad huelguística es similar al presentado más arriba para explicar la sindicalización obrera, especialmente la sindicalización rural. Fue una respuesta a la política deliberada del gobierno que se propuso incorporar a sectores marginados a la vida nacional. Era parte de la misma estrategia que condujo a la creación de programas de "promoción popular" con otros sectores marginales, particularmente los habitantes de las poblaciones urbanas marginales y de las tomas. Si bien las cifras gubernamentales sobre el éxito de las juntas de vecinos y los centros de madres son exageradas, muchas nuevas organizaciones vecinales nacieron inicialmente con el patrocinio estatal ("promoción popular") y más tarde bajo el patrocinio de partidos políticos rivales, principalmente de izquierda.¹⁸

Fin de la década del sesenta: La crisis política

El análisis anterior ayuda a explicar cómo la participación aumentó pese a la falta de cambios sustanciales en la eco-

17. Angell, *Politics and the Labour Movement*, p. 76. Ver también J. Samuel Valenzuela, *The Chilean Labor Movement: the Institutionalization of Conflict*, en Valenzuela y Valenzuela, *Chile: Politics and Society*, pp. 135-71.

18. Para una discusión sobre la fundamentación de la participación popular, véase el capítulo titulado *Participación nacional y popular* en Eduardo Frei, Cuarto mensaje presidencial, 21 de mayo de 1968. Ver también las publicaciones de DESAL (Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina). Para una evaluación de lo realizado en el área urbana, véase Luis Alvarado, Rosemond Cheetham y Gastón Rojas, *Mobilización social en torno al problema de la vivienda*, EURE, 3(7): 27-70, abril de 1973.

nomfa. Los factores políticos, más que los simples factores económicos, son las variables cruciales para explicar el cambio en los patrones de movilización. Después de un período de desmovilización, producto de una política deliberada por parte del gobierno, que a su vez socavó muchos de los logros alcanzados por la clase obrera en el período del Frente Popular, el gobierno de Frei adoptó, una vez más, una actitud favorable a la participación popular en la economía política del país. En el período demócrata cristiano se logró alcanzar y superar las tasas anteriores de movilización popular mediante una moderación de la represión gubernamental y a través de una política deliberada de movilización popular, extendida por primera vez al sector rural.

Precisamente porque la movilización chilena no gravó al sistema económico y porque se desarrolló en respuesta a una política gubernamental deliberada, podríamos decir que aquí tenemos una buena ilustración de lo que Gabriel Almond ha denominado "respuesta efectiva". Almond señala que "la participación propiamente tal tiende a ser una actividad valorada y puede ser vista como una demanda. Y cuando un sistema político legitima la participación de diferentes grupos de la población, se puede decir que está respondiendo a esas demandas."¹⁹

La movilización en sí no constituía una amenaza. Este aumento en la participación podría haber sido fácilmente asimilado por el sistema político chileno si el sistema no hubie-

19. Gabriel Almond, *Popular Development: Analytical and Normative Perspectives*, *Comparative Political Studies*, 1(4), enero de 1969, p. 463.

ra experimentado una transformación básica. Esta última condición es muy importante y es la clave para comprender el rol de la movilización social en la crisis chilena. Es un error el considerar la movilización de fines de los sesenta como un ejemplo de una "respuesta efectiva", no tanto por la naturaleza de la movilización per se, sino por los cambios básicos en la política chilena, que transformaban cualquier movilización en una fuerza potencialmente desestabilizadora. Por otra parte, la brecha entre la movilización y la capacidad del sistema para manejar la movilización, tampoco fue producto de la crisis de instituciones políticas claves como los fuertes partidos políticos chilenos. En realidad, a fines de los sesenta, los partidos lograron una fuerza y una institucionalización nunca antes vista. Lo que sí cambió fueron las reglas tradicionales del juego y la política acomodaticia, que tenían lugar en torno al Congreso, y que habían permitido que los actores e instituciones políticas importantes pudieran transar y estructurar un consenso operativo. Según esta interpretación, la crisis política se inició antes que la movilización social de grupos nuevos y la más peligrosa contramovilización de los intereses establecidos. No cabe duda que durante el gobierno de Allende ambos tipos de movilización se descontrolaron, lo que produjo fuertes efectos desestabilizadores. Inicialmente, sin embargo, la movilización en Chile, más que la causa de una crisis inminente, fue un síntoma de una crisis al interior de la política chilena. Aunque esa crisis culmina en el gobierno de Allende, sus raíces deben buscarse en el pasado, particularmente en el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei.

Cuadro 10
Porcentaje de la votación obtenido por los principales partidos políticos chilenos, 1937-73.

Preferencia política	1937	1941	1945	1949	1953	1957	1961	1965	1969	1973
Derecha										
Conservadores	21,3	17,2	23,6	22,7	14,4	17,6	14,3	5,2	-	-
Liberales	20,7	14,0	20,1	19,3	10,9	15,4	16,1	7,3	-	-
Nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	21,3
Centro										
Radicales	18,7	23,0	19,9	27,7	15,6	22,1	21,4	13,3	13,0	3,7
Demócrata Cristianos o Falangistas	-	3,4	2,6	3,9	2,9	9,4	15,4	42,3	29,8	29,1
Demócratas	9,4	5,7	5,4	6,8	5,6	5,0	6,9	-	-	-
Agrario laboristas (ibañistas)	-	-	-	8,3	18,9	7,8	-	-	-	-
Izquierda										
Socialistas	11,2	22,1	12,8	9,4	14,2	10,7	10,7	10,3	12,2	18,7
Comunistas	4,2	11,8	10,3	-	-	-	11,4	12,4	15,9	16,2
Otro	14,5	2,8	5,3	1,9	17,5	12,0	3,8	9,2	9,1	11,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaborado sobre la base de información disponible en la Dirección del Registro Electoral, Santiago, Chile.

Uno de los factores más importantes que contribuyó a un cambio cualitativo en la naturaleza del sistema político chileno fue el debut de un movimiento centrista relativamente cohesionado, con una perspectiva más ideológica que pragmática. Anteriormente, los pragmáticos radicales habían sido desafiados por el movimiento que irrumpe con Carlos Ibañez y por el conservadurismo "apolítico" de Jorge Alessandri. Pero no fue hasta que surgieron los demócrata cristianos como el nuevo centro en la política chilena, que los radi-

cales decididamente perdieron terreno como una fuerza política de peso.

En contraste con el ibañismo fragmentado y desorganizado, los demócrata cristianos contaban con un liderazgo talentoso y cohesionado, que poseía los recursos y la energía para intentar cautivar el centro del espectro político, en un esfuerzo organizacional sin precedentes. La Democracia Cristiana se presentó como una alternativa entre el capitalismo liberal y el socialismo marxista. Desde esta perspectiva, se propuso poner fin a la polarización de la política chilena mediante la conquista del centro y su transformación en una nueva fuerza mayoritaria. De una participación del 9,4% de los votos en la elección parlamentaria de 1957 (como Falange Nacional), la Democracia Cristiana logró un 15,4% en 1961 y finalmente sobrepasó a los radicales con un 22% (contra el 20,8% de los radicales) en la elección municipal de 1963. El cuadro 10 muestra que el crecimiento de la Democracia Cristiana se desarrolló en forma paralela al crecimiento de la izquierda. Este último, sin embargo, si bien mantuvo un ritmo estable, fue más lento. Finalmente, es importante señalar que la Democracia Cristiana no triunfó a expensas del radicalismo, sino, más bien, a expensas de los partidos Conservador y Liberal, y de los fragmentos del movimiento ibañista. Entre 1957 y 1963 la participación electoral de la derecha descendió de un 29,2% a un 23,6%, respectivamente.

La nueva fuerza conquistada puso a la Democracia Cristiana en muy buenas condiciones para enfrentar la elección presidencial de 1964. En la elección anterior de 1958, dispu-

tada por todos los partidos principales, Allende, representando a la alianza de los comunistas y los socialistas, perdió por 33.416 votos (de un total de 1.235.552). Cuando en una muy importante elección complementaria, celebrada pocos meses antes de la presidencial de 1964, la alianza de los radicales, liberales y conservadores perdió ante la izquierda, los partidos de derecha decidieron apoyar a Eduardo Frei, el candidato demócrata cristiano. De allí que Frei ganara la elección por un holgado margen del 56,1% de los votos contra un 38,9% para Salvador Allende, el candidato de la izquierda unida.²⁰

Los demócratas cristianos no eran los únicos interesados en una tercera vía para Chile. La Alianza para el Progreso, impulsada por el gobierno de Kennedy, propugnaba transformaciones en beneficio de nuevos grupos industriales, en detrimento de las elites terratenientes más tradicionales. Se suponía que la realización exitosa de importantes reformas en Chile desprestigiaría a la revolución cubana como ejemplo positivo de transformación social y política en América Latina. Se miraba a la Democracia Cristiana chilena como el movimiento más capaz de realizar reformas preventivas destinadas a socavar la "amenaza" de la izquierda mediante la demostración de otro modelo de desarrollo. En la elección de 1964 tuvo lugar una interferencia extranjera sin precedentes en la historia política chilena. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos canalizó tres millones de

20. Para una buena discusión sobre la elección de 1964, véase Federico Gil, *The Political System of Chile* (Boston: Houghton Mifflin Co., 1966), cap. 7.

dólares a la campaña de Frei, la que también recibió considerables sumas de dinero de parte de fuentes europeas y de la empresa privada chilena. La CIA, por su parte, también realizó una campaña publicitaria masiva destinada a desprestigiar al candidato de izquierda. La campaña, conocida en Chile como la "campaña del terror", pretendía mostrar la candidatura de Allende como una que habría de instituir un régimen represivo y sangriento, en el cual, entre otras cosas, los niños les serían arrebatados a sus madres. No cabe duda que esta injuriosa campaña propagandística contribuyó a un fuerte aumento del ambiente conflictivo y la desconfianza en la política chilena.²¹

Una vez en el poder, los demócrata cristianos se abocaron con gran energía a la realización de su programa de gobierno. Desde un comienzo dejaron en claro que uno de sus objetivos principales sería incorporar los sectores previamente

21. La intervención de Estados Unidos en la elección de 1964 ha sido materia de discusión por largo tiempo. Para un primer estudio ver el trabajo, basado en parte en la inteligencia de Europa Oriental, de Eduardo Labarca, *Chile invadido* (Santiago: Editorial Austral, 1969), cap. 3. Detalles más precisos del rol de los Estados Unidos fueron revelados en el informe del Select Committee to Study Governmental Operations with respect to United States Intelligence, *Covert Action in Chile* (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 18 de diciembre de 1975), pp. 14-19. Un estudio de la CIA concluyó que la intervención de Estados Unidos le permitió a Frei obtener la mayoría absoluta en la elección de 1964, en vez de una mayoría simple" (Ibíd, p. 17). Tres millones de dólares era una gran cantidad de dinero para el contexto chileno, representando US\$ 1,20 por voto emitido. Labarca sostiene que la campaña de Frei recibió cerca de veinte millones de dólares, incluyendo dinero proveniente de fuentes europeas y privadas. Como una comparación, en sus campañas presidenciales en los Estados Unidos en 1964, Goldwater y Johnson juntos gastaron 54 centavos por voto. Véase *Congressional Quarterly, Politics in América*, 4a ed. (Washington, D.C.: Congressional Quarterly, 1971), p. 80

te excluidos a la vida política nacional. Con el respaldo, público y secreto, de los Estados Unidos, se embarcaron en un esfuerzo masivo para organizar a los llamados segmentos "marginales" de la sociedad.²² Todas las demás fuerzas políticas del país, desde los conservadores hasta los comunistas, fueron puestas a la defensiva cuando los demócrata cristianos dejaron en claro que intentarían terminar con la paridad de las fuerzas electorales divididas en tres tercios mediante la conquista de la adhesión de la mayoría de la población. De hecho, el triunfo de Frei había indicado que el partido ya contaba con un grado de respaldo mayoritario sin precedentes. Desde el comienzo los radicales fueron duramente criticados.²³ Muy pronto los triunfadores procedieron a eliminar el dominio radical sobre el aparato burocrático. El Partido Radical fue acusado de ser el partido del oportunismo y la componen-

22. Entre 1964 y 1969 la CIA gastó dos millones de dólares en Chile, no sólo en apoyo electoral sino también para reforzar el apoyo a la Democracia Cristiana entre campesinos y pobladores marginales. Véase *Covert Action in Chile*, pp. 17-19. Es un secreto público que DESAL, el centro de estudios dirigido por el sacerdote jesuita Roger Vekemans que desarrolló la estrategia detrás del programa de promoción popular, recibió apoyo de la CIA: El cuadro 20 en el capítulo III ofrece información sobre la copiosa ayuda de Estados Unidos al gobierno de Frei.

23. Estas observaciones se basan en la investigación realizada por el autor en Chile en 1969. La tesis de esta sección está elaborada en forma más acabada en Arturo Valenzuela y Alexander Wilde, *Presidentialist Politics and the Decline of the Chilean Congress*, en Joel Smith y Lloyd Mussolf, eds., *Legislatures and Political Development* (Durham, N.C.: Duke University Press, en prensa). Para un buen ejemplo del debate del momento, véase un número especial sobre las elecciones municipales de 1967, publicado por Ercilla, 29 de marzo de 1967. Los demócrata cristianos llamaban al término del viejo estilo del tira y afloja de camarilla (p. 3). El vicepresidente del Partido Radical criticaba amargamente el intento del gobierno por convertir las elecciones municipales en un plebiscito nacional, señalando: se ha roto una tradición al arrojarle al propio Jefe de Estado el papel de líder electoral (p. 25).

da, y de ser el responsable por la decadencia de numerosas instituciones y de la falta de progreso en la solución de la crisis social. Con la Democracia Cristiana el centro político había sido capturado por un partido con franco desprecio por la política del clientelismo y la transacción, que por tanto tiempo había caracterizado al sistema político chileno.

Lo más importante, sin embargo, es que este partido de centro pudo ganar no sólo la presidencia, sino también el apoyo mayoritario en una de las cámaras del Congreso. En la elección parlamentaria de 1965, por primera vez en la historia contemporánea de Chile, un partido logró por sí solo la mayoría en la Cámara de Diputados, con una participación impresionante del 42,3% de la votación. Desde esa posición de fuerza, ejerciendo una fuerte disciplina sobre sus parlamentarios, la Democracia Cristiana procedió a gobernar como "partido único". En materias de suma importancia, como la reforma agraria o la nacionalización del cobre, se estructuraban alianzas de conveniencia con las distintas fuerzas opositoras.²⁴ Pero en la conducción diaria del gobierno, su mayoría en la Cámara de Diputados permitió que su gestión minara en forma significativa la política del clientelismo y de componendas.²⁵ Los vetos del Ejecutivo a puntos específicos en los pro-

24. Un buen estudio de caso de la decisión sobre la reforma agraria es Robert R. Kaufman, *The Politics of Land Reform in Chile, 1950-1970* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1972). Para la decisión sobre el cobre, véase Theodore Moran, *Multinational Corporations and the Politics of Dependence: Copper in Chile* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1974).

25. Las cifras estadísticas citadas anteriormente en este capítulo muestran que el gobierno alcanzó un progreso considerable en lograr sus objetivos. Sin embargo,

yectos de ley, sostenidos por la Cámara de Diputados, redujeron la capacidad de los demás parlamentarios para utilizar los proyectos de ley en materias de obras públicas como un medio para distribuir favores políticos y para influir en los reajustes salariales. Como una forma de combatir el incrementalismo que dificultaba el proceso de reformas, los tecnócratas del gobierno intentaron implantar esquemas de planificación "más racionales" que pretendían terminar con las "distorsiones" del proceso político. Los partidos de oposición y los parlamentarios fueron progresivamente excluidos de muchos de los acuerdos particularistas del pasado. El Congreso perdió parte de su importancia anterior como lugar de transacción. El Senado, "refugio" de la oposición, se convirtió en una fuerza más bien negativa, llegando al punto de impedir, como se señaló en el capítulo I, que el Presidente Frei visitara los Estados Unidos, una medida sin precedentes.

Las políticas plebiscitarias del Presidente Frei culminarían, al final de su mandato, en la adopción de reformas constitucionales destinadas a limitar el rol del Congreso. En particular, redujo notoriamente la jurisdicción del Poder Legislativo sobre los reajustes presupuestarios y salariales. Paradójicamente, visto a la luz de los acontecimientos posteriores, la izquierda, que siempre basó su fuerza en su posición

no era necesario que adoptara una actitud arrogante para obtener ese fin. En un momento el gobierno intentó prohibirles a los parlamentarios otorgar subsidios a los organizadores locales, un privilegio clientelístico tradicional que representaba una parte infinitesimal del presupuesto. La justificación era puramente una de eficiencia. Las ramificaciones políticas se hicieron obvias sólo después que la tormenta de la oposición se había desatado. Véase Valenzuela y Wilde, *Presidentialist Politics and the Decline of the Chilean Congress*.

en el Congreso, votó en contra de muchas de las reformas. La derecha, por su parte, convencida de que el ex Presidente Alessandri sería un ganador seguro en las elecciones de 1970, aprobó las reformas.²⁶ En consecuencia, tanto la derecha como la Democracia Cristiana heredarían un Congreso cercenado de muchas de sus funciones tradicionales y convertido más bien en una fuerza negativa. Incluso antes de la elección de Allende, los mecanismos institucionalizados para la política de transacción ya se habían debilitado y rigidizado.

La movilización de fines de los años sesenta debe ser comprendida a partir de esta estrategia de "partido único" de la Democracia Cristiana. Sus esfuerzos por fomentar la movilización y su desprecio por los mecanismos tradicionales del clientelismo incentivó una competencia frenética entre todos los sectores para impedir que el partido de centro obtuviera el apoyo mayoritario. Aunque en forma tardía, la izquierda empezó a trabajar con mayor eficacia en el campo y en poblaciones marginales para ampliar su base en la clase obrera. Los conservadores y los liberales, a raíz de su desastrosa participación con el 12,5% en la elección de 1965, decidieron fusionarse para formar el Partido Nacional y vieron en el nombre mágico de Alessandri un modo de frenar al partido que estaba expropiando sus tierras y quitándoles su fuerza electoral. Si bien la movilización social per se no excedió las capacida-

26. *Ibíd.* Para una detallada historia legal de las reformas ver Guillermo Piedrabuena Richards, *La reforma constitucional* (Santiago: Ediciones Encina, 1970). Importantes ensayos que presentan la perspectiva del gobierno sobre las reformas se pueden encontrar en Eduardo Frei et al., *Reforma constitucional 1970* (Santiago: Editorial Jurídica, 1970).

des del sistema, el objetivo de la movilización no consistía solamente en la incorporación de nuevos sectores al proceso político, apuntaba más bien a asegurar que esta incorporación redundara en una ventaja para el partido.

El problema para la Democracia Cristiana (y para el país) fue que no lograría su objetivo de despolarizar la política chilena mediante la consolidación de una nueva mayoría centrista. El apoyo a Frei en 1964 y el impresionante resultado en la elección parlamentaria de 1965, no hizo más que poner en evidencia el funcionamiento del sistema polarizado. El centro había triunfado al contar con apoyo de ambos lados del espectro político (si bien la mayor parte del respaldo provino de la derecha), pero no a raíz de un giro fundamental en las lealtades políticas del sistema. La elección parlamentaria de 1969 ilustra claramente este problema. El voto demócrata cristiano descendió al 29,8% del total. El Partido Nacional experimentó un fuerte repunte, obteniendo el 20%, mientras que la izquierda continuó avanzando. El radicalismo pragmático resultó ser el más perjudicado, cayendo a un 13%, su participación más baja en todo el siglo.

La Democracia Cristiana intentó gobernar como si se hubiera convertido en una nueva fuerza política que contaba con apoyo generalizado para su "tercera" opción en la política chilena. Pero esta percepción demostró ser una ilusión. En realidad, la Democracia Cristiana nunca tuvo éxito en su intento por convertirse en una nueva orientación genuina de la política chilena -es decir, una tendencia centrista viable, capaz de erosionar permanentemente la fuerza de la derecha y

de la izquierda. En los términos de Sartori, continuó representando un centro inestable en el espectro político. Como una opción de conveniencia, el respaldo con que contaban fue más bien el resultado de una "suma de exclusiones", principalmente de parte de la derecha. Tras el rápido abandono del respaldo de la derecha y el fracaso en atraer los votos de la izquierda, la fuerza del partido se deterioró rápidamente. En el proceso, la postura de partido único alienó a los otros grupos políticos e intensificó la tensión política. La Democracia Cristiana interrumpió temporalmente el impase de la política chilena, pero no logró reestructurar el sistema polarizado que había provocado originalmente el empate a tres tercios que dividía al electorado y resultaba en punto muerto. Al debilitar, aunque fuese sin intención, el frágil entendimiento de la política chilena, sin haber alterado la tradicional correlación de fuerzas, ella simplemente agravó la polarización y el impase de las fuerzas políticas chilenas. No es sorprendente que resultara imposible estructurar una coalición de centro-izquierda o de centro-derecha para la próxima contienda presidencial de 1970. De este modo, se abrió el camino para una competencia a tres bandos, en la cual la derecha o la izquierda podía ganar sin el apoyo del centro.

Este ensayo ha enfatizado el rol de la Democracia Cristiana en razón del importante papel que un centro político, fuertemente ideologizado, juega en minar el frágil consenso de un sistema democrático polarizado. Sin embargo, esto no significa que otros factores no hayan sido importantes, aun cuando no fueran decisivos. En particular, es importante des-

tacar que los tecnócratas demócrata cristianos no fue el único grupo que cuestionó el antiguo sistema de negociación política. La izquierda en Chile, durante el mismo período, comenzó a sentir un desafío directo proveniente de grupos, pequeños en términos numéricos pero cada vez más estridentes, que rechazaban el sistema de la política partidista y proclamaban la transformación revolucionaria de la sociedad por la vía violenta. Su inspiración provenía de la revolución cubana y de los tupamaros uruguayos, y de los revolucionarios vietnamitas quienes con su lucha de guerrillas en contra de la nación más poderosa del mundo, habían cautivado la imaginación de estudiantes y de otros. El más importante de estos grupos fue el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), fundado por estudiantes de la Universidad de Concepción.²⁷ Hacia fines de los años sesenta, sus esfuerzos organizacionales, en los sectores rurales y obreros, comenzaron a producir resultados modestos.

Los retos desde el centro y la extrema izquierda, sumado a la adopción de posturas más revolucionarias al interior de los partidos Socialista, Comunista e incluso Radical, particularmente en sus sectores juveniles, inevitablemente intensificaron la ideologización de las organizaciones de la izquierda. El tradicional sistema "burgués" de negociación no sólo había perdido gran parte de su legitimidad, pasó, además, a ser menos aceptado como un mecanismo para procurar ventajas, aunque sí sirviera para logros parciales. La reducción de la eficacia de aquellos mecanismos contribuyó aún más a

27. La historia del MIR todavía está por escribirse.

su desprestigio. Si bien la erosión del apoyo al sistema tradicional desde la derecha se tomaría más visible después de la elección de 1970, el alzamiento militar del general Viaux en octubre de 1969 demostró que algunos sectores poderosos estaban cansados del ir y venir de la democracia, aunque todavía se considerara que Jorge Alessandri sería un seguro ganador en la elección de 1970. Fue en este ambiente de creciente competitividad y crisis política, que los chilenos se prepararon para la elección presidencial de 1970.

La elección de 1970: El problema de un presidente minoritario

La elección de Salvador Allende como primer mandatario en 1970 no fue el resultado de un vuelco radical del electorado chileno hacia la izquierda. Por el contrario, lo cierto es que el notorio aumento de la participación popular e inscripción electoral a fines de los sesenta, no se canalizó en la misma proporción hacia los partidos de izquierda. De hecho, como se aprecia en el cuadro 11, en 1970 Allende obtuvo una participación menor del voto total que en la elección presidencial previa. Si asumimos que los patrones de votación de la izquierda se mantuvieron constantes entre 1964 y 1970, entonces Allende obtuvo sólo 55.467 votos, o sea, el 13,3% de los 416.731 nuevos electores inscritos en esos años. Si tomamos en cuenta el drástico descenso de la Democracia Cristia-

Cuadro 11
Resultado de las elecciones presidenciales de 1958, 1964 y 1970.

Candidato	1958		1964		1970			
	Votos	%	Votos	%	Votos	%		
Allende	356.493	28,5	977.902	38,6	1.070.334	36,2		
Bossay	192.077	15,4	1.409.012	55,7	821.801	27,8		
Frei	255.769	20,5	125.233	5,0	1.031.159	34,9		
Alessandri	389.909	31,2						
Zamorano	41.304	3,3						
Blancos y nulos	14.798	1,1	Blancos y nulos	18.550	0,7	Blancos y nulos	31.505	1,1
Total de votos	1.250.350	100,0	Total de votos	2.530.697	100,0	Total de votos	2.954.799	100,0
Total inscritos	1.497.902		Total inscritos	2.915.121		Total inscritos	3.539.747	
Porcentaje de abstención	16,5		Porcentaje de abstención	13,2		Porcentaje de abstención	16,5	

Fuente: Compilado con información de la Dirección del Registro Electoral, Santiago, Chile.

na entre ambas elecciones, es muy probable que el candidato conservador, Alessandri, haya sido el principal beneficiario de los nuevos electores. Más que cualquier otra cifra estadística, ésta parece ser la que mejor demuestra que un aumento de la radicalización no fue la principal característica del electorado chileno de 1970. Al contrario, la elección de Salvador Allende fue el resultado de la incapacidad del sistema político polarizado de Chile para estructurar, antes de la elección, una coalición que triunfara en forma mayoritaria, y constituyó una evidencia más de la erosión de los mecanismos tradicionales de acomodación política.

Según los expertos, una situación de coalición se establece cuando tres o más actores que sustentan opciones disímiles, reales o aparentes, coordinan sus acciones para lograr un resultado mejor que el que podrían lograr actuando solos.²⁸ Ejemplo de una coalición, en los términos que la hemos definido, es aquella estructurada en 1964 cuando la derecha -conservadores y liberales- respaldó a Eduardo Frei tras la desastrosa derrota del candidato conservador en una elección complementaria. En ese momento, la derecha temía que la izquierda unida ahora lograra la victoria que no alcanzó en 1958 por el estrecho margen de sólo 33.416 votos. Para 1970, sin embargo, este modo de pensar había cambiado, y la derecha estimó que sus intereses serían mejor servidos pre-

28. Ver los artículos de Michael Leirserson *Game Theory and the Study of Coalition Behavior*, y E.W. Kelley, *Bargaining in Coalition Situations*, en Sven Groennings, E.W. Kelley y Michael Leirserson, eds., *The Study of Coalition Behaviour: Theoretical Perspectives from Four Continents* (New York: Holt, Rinehart y Winston, 1970).

sentándose sola con el conservador independiente Jorge Alessandri como candidato. Aunque los demócrata cristianos como conjunto se hallaban ideológicamente más cerca del Partido Nacional, y pese a que la elección de un marxista aún era una posibilidad real, los sectores conservadores sentían un fuerte resentimiento con el gobierno de Frei por sus reformas en el agro y por su postura de partido único. Además, en los meses antes de la elección, el candidato presidencial demócrata cristiano, Radomiro Tomic, intentó abiertamente concertar una alianza no con la derecha, sino con la izquierda, expresando el sentir predominante que en una competencia tripartita habría de ganar el candidato conservador.²⁹ Sin embargo, la izquierda no estaba dispuesta a aceptar una alianza con la Democracia Cristiana, especialmente cuando semejante alianza significaba aceptar a un abanderado demócrata cristiano. La izquierda también resentía la postura de partido único y la reticencia de la Democracia Cristiana a avanzar con ciertas reformas; a la vez, mantenía esperanzas de lograr un triunfo inesperado en una competencia que dividía a la oposición en dos candidaturas separadas.³⁰ Contrariando las hipótesis de la teoría de las coaliciones, cada uno de los actores principales de la política chilena buscaba maximizar su

29. Para entender el potencial para estructurar una coalición antes de una elección, es necesario destacar que la derecha, en una situación distinta a la de 1964, tenía en el ex Presidente Jorge Alessandri un candidato muy viable. La derecha pensaba que si fuera a formarse una coalición de centro-derecha nuevamente, esta vez tendría que ser con un candidato de la derecha.

30. En la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano quedó en claro que, a pesar de la postura de Tomic, el partido no estaba dispuesto a virar bruscamente hacia la izquierda.

posición, después de una serie de complejas luchas internas, siguiendo sus inclinaciones ideológicas y sus percepciones de los acontecimientos políticos pasados y futuros. Su actitud no respondía a un conjunto mezquino de ventajas de tipo material. Tampoco tenían una concepción clara de las preferencias cambiantes y contradictorias de los otros actores, o una visión clara de lo que el desenlace final podría ser.³¹

En esta competencia tripartita, el error de cálculo de la derecha se hizo evidente de inmediato. El resultado de la candidatura de Alessandri fue desolador. Contradiciendo a la mayoría de las encuestas de opinión, sólo obtuvo un 34,9% de los votos en contraste con el 36,2% de Allende, es decir, una diferencia de sólo 39.175 votos.³² Lo que casi había ocurrido en 1958, cuando los partidos de las tres coaliciones presentaron sus propios candidatos, ocurrió finalmente en 1970. Por primera vez en la historia de Chile, ahora un candidato de la izquierda, no sólo uno apoyado por ésta, obtuvo la primera magistratura de la nación.

Los escrutinios demostraron que la Democracia Cristiana constituía básicamente un centro artificial, creado por la

31. Para algunas de las limitaciones que la teoría de juegos tiene para el estudio de la política, véase Leiserson, *Game Theory and the Study of Coalition Behavior*, pp. 270-72. Ver también la discusión de Scott C. Flanigan, en Gabriel A. Almond, Scott C. Flanigan, and Robert C. Mundt, eds., *Crisis, Choice, and Change: Historical Studies of Political Development* (Boston: Little, Brown and Co., 1972), pp. 67-72.

32. Por primera vez en la historia de la política chilena la televisión jugó un papel importante en una elección presidencial. La televisión claramente perjudicó a Alessandri porque él no fue capaz de mantener su imagen de líder austero, independiente y sabio. Se veía cansado y débil, y enfatizó demasiado que para que el país prosperara los obreros deberían trabajar más por menos dinero.

Cuadro 12
Coefficientes de correlación simple entre el voto para Tomic y
Alessandri en 1970, y el voto para Frei en 1964 y para la
Democracia Cristiana en las elecciones parlamentarias
de 1965 y 1969.

Candidato	Frei, 1964	Democracia Cristiana, 1965	Democracia Cristiana, 1969
Tomic, 1970	.53	.50	.64
Alessandri, 1970	.67	.31	.18

Fuente: Elaborado sobre la base de información electoral de la Dirección del Registro Electoral, Santiago, Chile.

polarización del sistema. En 1964, Frei, con el apoyo de la derecha, ganó con un 55,7% de la votación. En 1970, en cambio, Tomic obtuvo un simple 27,8%. En el cuadro 12 se puede observar la importancia de la erosión del apoyo de la derecha a la Democracia Cristiana durante el sexenio anterior. El coeficiente de correlación simple (r de Pearson) entre la votación para Frei en 1964 y para Alessandri en 1970 es efectivamente más alto que la correlación entre las votaciones para Frei y Tomic. Al mismo tiempo, la correlación entre los votos para Alessandri en 1970 y los de la Democracia Cristiana en las elecciones parlamentarias de 1965 y 1969 desciende notoriamente, mientras que la correlación entre la votación para Tomic en 1970 y el apoyo a la Democracia Cristiana en esas elecciones parlamentarias aumenta.

El hecho fundamental de la presidencia de Allende desde su inicio es que estaba constituida por una minoría. Si bien

la plataforma política de Tomic era similar en varios sentidos, sería un grave error sostener que el programa de Allende, que contemplaba profundos cambios sociales, contaba con un respaldo ciudadano mayoritario.³³ El total de los votos recibidos por Tomic y Allende en 1970 superaba el 50% del total de los escrutinios. Sin embargo, un análisis estadístico de los datos agregados sugiere que Tomic tenía mayores probabilidades de obtener apoyo de sectores en los cuales Alessandri tenía fuerza que de aquellos donde Allende tenía fuerte apoyo electoral. La correlación simple entre el voto de Tomic y el de Alessandri en todas las comunas del país fue de .31, o sea una correlación positiva. En contraste, la misma correlación del voto de Tomic con el de Allende fue un coeficiente negativo de -.64 similar a la correlación de -.77 entre Allende y Alessandri. Más aún, las encuestas sugieren que muchos de los que votaron por Tomic hubieran preferido a Alessandri por sobre Allende, reflejando así las ambigüedades de la posición centrista.

El cuadro 13, que resume los resultados de una encuesta realizada poco antes de la elección, ilustra gráficamente el punto anterior. A los encuestados se les preguntó por cuál de los candidatos ellos no votarían bajo ninguna circunstancia. Como se aprecia en el cuadro, un 55,6% de los entrevistados

33. Un excelente resumen y análisis de las tres plataformas presidenciales, que utiliza categorías derivadas de la sociología del conocimiento, es el artículo de Frédéric Debuyst y Joan Garcés, *La opción chilena de 1970: Análisis de los tres programas electorales*, *Revista Latinoamericana de Ciencia Política*, 2(2):279-369, agosto de 1971. Los autores presentan un detallado cuadro comparativo de las tres plataformas en un extenso apéndice.

Cuadro 13
Porcentaje de los electores, según grupo socioeconómico, que rehusarían votar por Allende, Tomic o Alessandri en 1970 bajo ninguna circunstancia.

Grupo socioec.	Allende		Tomic		Alessandri		Total	
	Nº de resp.	%	Nº de resp.	%	Nº de resp.	%	Nº de resp.	%
Alto	89	73,6	61	50,4	27	22,3	121	12,0
Medio	239	66,4	140	38,9	124	34,4	360	35,8
Bajo	241	45,9	239	43,8	253	48,2	525	52,2
Total	569	56,6	440	43,7	404	40,1	1.006	100,0

Nota : El número de respuestas no coincide con el número de total de la muestra porque algunos encuestados rechazaron a más de un candidato.

Fuente : Encuesta Sales - Reyces, julio-agosto de 1970.

El autor agradece a James Prothro y Patricio Chaparro por facilitarle los resultados de esta encuesta.

rechazaba la candidatura de Allende, en contraste con un 43,7% en contra de Tomic y un 40,1% en contra de Alessandri. A partir del cuadro podemos inferir que un 46% del grupo de nivel socioeconómico bajo rehusaría votar por el candidato "popular" y sólo el 48% rehusaría votar por el candidato identificado con la elite económica. El grupo de más altos ingresos mostraba preferencias más definidas: un 74% rechazaba la candidatura de Allende y sólo el 22% rechazaba la de Alessandri. Sobre la base de esta información podemos concluir que Allende simplemente no habría logrado la mayoría en una segunda vuelta electoral, si la Constitución lo hubiera

Cuadro 14
Porcentaje de encuestados que rechazaban las candidaturas
de Allende, Tomic o Alessandri en 1970, según las razones
de su rechazo.

Candidato	Ideológicas	%	RAZONES		Nº total de resp.
			No ideológicas	%	
Allende	346	61,0	222	39,0	569
Tomic	38	8,6	402	91,4	440
Alessandri	194	48,0	210	52,0	404

Fuente: Encuesta Sales - Reyes, julio - agosto de 1970.

El autor agradece a James Protho y Patricio Chaparro por facilitarle los resultados de esta encuesta.

contemplado. Los datos de la encuesta presentada en el cuadro 14 subrayan aún más la aguda polarización del sistema político chileno, tan evidente en la votación de 1970. A los entrevistados se les consultó las razones por las cuales rehusaban votar por cualquiera de los tres candidatos. Una gran proporción de los encuestados rechazaba a los candidatos de los extremos por razones ideológicas. Así, el 61% de aquellos que rechazaban a Allende y el 48% de los que rechazaban a Alessandri, se refirieron al aspecto negativo de la postura ideológica del candidato. En contraste, sólo el 9% de los que rechazaban al candidato centrista dieron razones ideológicas.

Un breve análisis de las correlaciones entre el voto presidencial de 1970 y varios indicadores de la clase obrera rural y urbana permite una mayor comprensión de los distintos atractivos de cada candidato. Las correlaciones simples más fuertes son la negativa entre el voto para Allende y el campe-

Cuadro 15
Correlación simple y parcial entre el voto para los candidatos
presidenciales en 1970 e indicadores de distintas categorías de la
clase obrera

Trabajadores no agrícolas	Allende		Tomic		Alessandri	
	r	Beta	r	Beta	r	Beta
Mineros	.50	.45	-.47	-.45	-.31	-.27
Artesanos industriales y obreros	.25	.14	-.17	-.11	-.19	-.10
Asalariados urbanos	.30	.12	-.19	-.05	-.28	-.16
Trabajadores en servicios personales y domésticos	.10	.04	-.03	-.01	-.10	-.04
Oficinistas	.31	.23	-.17	-.10	-.31	-.27
Comerciantes y vendedores	.13	-.06	-.09	-.04	-.09	.09
	R.60	R ² .36	R.51	R ² .26	R.44	R ² .19
Trabajadores agrícolas			-.48		.31	
					.39	

Fuente: Elaborado sobre la base del censo de 1970 e información electoral de la Dirección del Registro Electoral, Santiago, Chile.

sinado (-.48) y la positiva entre el candidato de la Unidad Popular y los mineros (.50). Aunque el cuadro 15 muestra que el Presidente, en sectores de la clase obrera urbana, también obtuvo una ventaja frente a sus adversarios, tanto las correlaciones simples como los coeficientes de regresión parcial son considerablemente más débiles. Sin embargo, el cuadro revela un claro contraste entre la base de apoyo de Allende y la de sus contendores, y una similitud considerable en la base de

votación de los dos candidatos perdedores. Tanto Tomic como Alessandri eran fuertes en las áreas rurales. El análisis de los gráficos de dispersión revela que es un tanto erróneo afirmar que la correlación entre el voto rural y Tomic es más fuerte que la correlación entre el voto rural y Alessandri. En 1970, Alessandri todavía tenía una clara ventaja sobre Tomic en áreas donde existía un mayor porcentaje de campesinos. Sin embargo, dado que su apoyo también era superior en comunidades con pocos trabajadores agrícolas, el coeficiente de correlación es ligeramente menor. Paralelamente, la izquierda aumentó su presencia en comunidades con una alta concentración de obreros industriales. Aun así, el análisis estadístico de la elección de 1970 muestra que la base social de los partidos políticos se mantuvo bastante heterogénea. Los indicadores de la clase obrera urbana explican sólo el 36%, 26% y 19% de la varianza en el voto para Allende, Alessandri y Tomic, respectivamente.

El triunfo de Allende captó la atención internacional, no sólo porque representaba la primera elección libre de un jefe marxista de gobierno, comprometido firmemente con una transformación fundamental del orden socioeconómico vigente, sino también porque el nuevo gobierno prometía realizar sus transformaciones revolucionarias dentro del marco constitucional y legal chileno. De hecho, Allende se refería a su experimento como uno de igual importancia a la revolución rusa. En un contexto histórico diferente, Chile sería el pionero en establecer un segundo modelo para la construcción de una sociedad socialista, un modelo basado no en la des-

trucción violenta del orden antiguo, sino en su reemplazo pacífico de acuerdo con su tradición democrática, pluralista y libertaria.³⁴

La postura de Salvador Allende planteó inmediatamente una interrogante respecto a si era posible que un candidato minoritario, comprometido con un cambio fundamental, lograra gobernar realmente o si tendría que conformarse simplemente con un simbólico "reinar". El Congreso estaba controlado por la Democracia Cristiana y la derecha, y después de las reformas de 1970 dejó de ser un lugar de acomodación y se convirtió en uno de confrontación. Además, órganos tales como la Contraloría y los Tribunales de Justicia estaban fuera del control directo del Poder Ejecutivo. De hecho, la "victoria" de Allende condujo a una pregunta aun más inmediata: ¿si en realidad se le permitiría asumir el mando? La

34. Allende repetía constantemente esta afirmación en sus declaraciones públicas. Para un ejemplo concreto, véase su primer discurso ante el Pleno del Congreso en *Salvador Allende: Su pensamiento político* (Santiago: Quimantú, 1972), p. 112. La cuestión de la posibilidad de una revolución dentro del sistema legal vigente provocó un importante debate intelectual en los círculos chilenos. El principal exponente de un punto de vista positivo al respecto es Eduardo Novoa. Ver su artículo Vías legales para avanzar hacia el socialismo, *Mensaje*, N° 208, abril de 1971, pp. 84-90, en el que sugiere cómo la legislación existente, que en algunos casos se remontaba al breve experimento socialista de 1932, podía ser usada para transitar legalmente a una economía socialista. El gobierno de Allende haría uso de estos cuerpitos legales durante su permanencia en el poder. Para un enfoque más pesimista de la transición al socialismo dentro del marco jurídico, que pone énfasis en los obstáculos del sistema legal, ver también Eduardo Novoa, *Aspectos Constitucionales y legales de la política del gobierno de la Unidad Popular* en Gabriel Palma, ed., *La vía chilena al socialismo* (México: Siglo XXI, 1973). Para una excelente serie de artículos sobre el mismo tema, véase la edición especial *Revolución y legalidad: Problemas del Estado y el derecho en Chile*, de *Cuadernos de la Realidad Nacional*, N° 15 de diciembre de 1972.

Constitución chilena estipulaba que si ningún candidato recibía la mayoría absoluta, la elección efectiva del Presidente debía efectuarse en el Congreso. Así, la coalición que no se había podido lograr antes de la elección, tendría que estructurarse ahora en el Congreso para que se conformara la elección.

Para juzgar el clima político del país, así como el potencial existente para la formación de la coalición que permitiría a Allende asumir el mando y, de hecho, gobernar, es importante especificar con mayor claridad las dimensiones concretas y las manifestaciones de la política polarizada. Para ello, necesitaremos explicitar las posturas de los grupos políticos más importantes de la sociedad chilena. Al hacerlo obviaremos los innumerables pormenores que cualquier gobierno debe enfrentar y nos concentraremos en dos materias esenciales y decisivas que Chile debió confrontar en 1970: el grado de compromiso con el orden socioeconómico vigente y el grado de compromiso con las instituciones y procedimientos de la antigua democracia política chilena. Estas eran cuestiones generales, con frecuencia más simbólicas que sustantivas, y muy difíciles de separar. Sin embargo, ellas involucraron asuntos fundamentales que tienen que ver con la supervivencia misma de las propias reglas del juego.

Como se señaló anteriormente, Allende tuvo una posición respecto de ambas materias. El sostenía que se podía instituir un cambio radical sin perturbar los procedimientos de la democracia chilena. Sin embargo, sólo una fracción pequeña de las elites políticas apoyaba decididamente ambos valores.

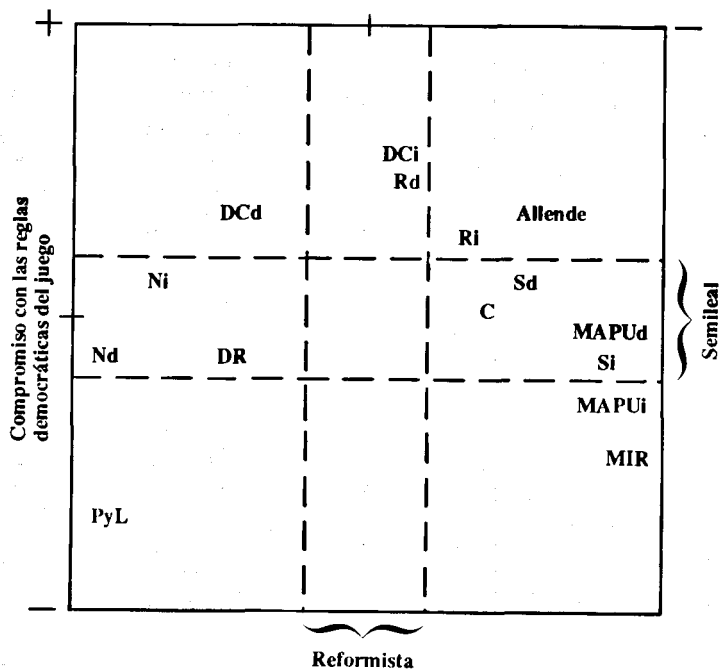
Esto era lógico porque es extremadamente difícil valorar las reglas y procedimientos de la política democrática aislando-las de las instituciones y estructuras socioeconómicas que por largo tiempo se identificaron con dichas reglas. Para algunos, el desmantelamiento del orden antiguo significaba que las propias reglas y procedimientos que permitieran dicho desmantelamiento perderían su legitimidad. Su interés por la mantención del sistema socioeconómico que los beneficiaba era mayor que su compromiso con las reglas y procedimientos del sistema democrático. En contraste, otras facciones se pronunciaban por la destrucción del orden antiguo, y estaban dispuestas a rechazar las reglas del juego de la democracia formal, que veían como meros instrumentos para perpetuar el statu quo. Un segundo conjunto de actores podría haber resal-tado las reglas y procedimientos, pero estaba igualmente di-vidido en torno a la conveniencia de cambios del orden insti-tucional y económico. La lealtad a las reglas y procedimien-tos de la institucionalidad democrática es puesta duramente a prueba cuando la naturaleza del orden socioeconómico es cuestionado.

El gráfico 2 resume el lugar de los grupos y los partidos políticos claves en estas dos dimensiones: apoyo a las reglas y procedimientos del juego democrático, y apoyo al orden so-cioeconómico imperante. Como el gráfico lo sugiere, en 1970 los grupos podían dividirse entre aquellos que podemos de-nominar grupo antirreglas y grupo prorreglas del juego.

Queda en claro que a esta fecha existían dos tipos de gru-pos desleales a las reglas del juego democrático, uno de ex-trema izquierda y uno de extrema derecha. Juan Linz califica

Gráfico 2
Ubicación de los grupos políticos claves en 1970 en dos
dimensiones: compromiso con el orden socioeconómico y
compromiso con las reglas democráticas del juego.

Compromiso con el orden socioeconómico



Abreviaturas: d= derechista; i= izquierda; DC= Democracia Cristiana; DR= Democracia Radical; N= Nacional; P y L= Patria y Libertad; S= Socialista; C= Comunista; MAPU= Movimiento de Acción Popular Unitario; MIR= Movimiento de Izquierda Revolucionario.

como desleales a "aquellos que están dispuestos a descartar la política competitiva entre los partidos y las libertades civiles que se requieren para mantener la competencia".³⁵ El Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) era el principal representante del grupo que rechazaba el orden socio-económico vigente. El MIR creía que el único camino para lograr una sociedad socialista era a través del levantamiento violento de los campesinos y los trabajadores. Este grupo era escéptico respecto de la candidatura de Allende, y sólo le dio un tibio apoyo, precisando, al mismo tiempo, que ellos continuarían en su esfuerzo por organizar y provocar una confrontación real tan pronto como fuera posible. El MIR representaba un rechazo, desde la izquierda, al supuesto básico que era posible realizar cambios reales por medios legales. La postura del MIR era compartida por un sector numeroso del propio partido de Salvador Allende, el Partido Socialista. Esta facción logró el control mayoritario del partido poco antes de la elección. Al hacerlo, dejó en claro que en última instancia la transformación del sistema no se lograría en comparsa con los elementos "burgueses", sino procediendo a una confrontación fundamental.³⁶ Tanto el MIR como la directiva del Par-

35. Véase Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes*.

36. Aunque Allende se identificaba con la facción más moderada del partido, él apoyó a la elección de Carlos Altamirano como secretario general del partido, en gran parte a raíz de rivalidades y conflictos personales. Varios miembros en la facción moderada del partido habían presionado para que se nominara a Aniceto Rodríguez como el candidato de la izquierda a la presidencia de la república, creyendo que Allende había tenido su oportunidad en el pasado y había fracasado. El apoyo a Altamirano también se puede interpretar como un esfuerzo de parte del Presidente por recuperar algo de influencia sobre el ala izquierda del partido. La tirantez de las relaciones con la cúpula de su propio partido constituiría un rasgo importante de su gobierno.

tido Socialista propugnaban la necesidad de establecer una sociedad socialista y crear un hombre nuevo. La premisa fundamental de Allende -que Chile podría implantar un orden socialista dentro del marco de la legalidad democrática- fue severamente desafiada por elementos claves de su propio partido.

El segundo grupo de elementos desleales provenía del pequeño sector de la sociedad que obtenía enormes dividendos sociales y económicos del sistema capitalista imperante en Chile. Militantes de la derecha económica, muchos de ellos estaban abiertamente en contra de las instituciones democráticas chilenas, y desde un principio intentaron impedir la elección de Allende o destituirlo a la fuerza de su cargo. A fines del año 1970 la derecha desleal sólo contaba con el apoyo de un puñado de activistas. Estos, sin embargo, eran muy poderosos, y contaban entre sus miembros a elementos de la Fuerzas Armadas, con estrechos vínculos a fuentes de inteligencia de los Estados Unidos, también empeñados en destruir el gobierno de la Unidad Popular. Con el paso del tiempo, las filas de la derecha desleal se engrosaron notablemente; reclutaron personas provenientes no sólo del sector socioeconómico alto sino también de la clase media y de los militares. Gran parte de los dirigentes de las federaciones nacionales de la industria y el comercio definitivamente tenían mayor simpatía por esta derecha antidemocrática que con la derecha política tradicional, que prefería la política partidista. Desde el comienzo, entonces, quedó en claro que en ambos bandos había elementos cuyo compromiso con el orden

socioeconómico de su opción era mayor que su compromiso con el proceso democrático.

El sector prorreglas se componía de elementos leales a los principios que fundamentan las reglas del juego democrático. No obstante, este sector también estaba agudamente dividido en torno a la conveniencia de una transformación radical de las estructuras socioeconómicas de la sociedad. El Presidente Allende, quien por décadas fue miembro del Congreso, presidente del Senado y autor de numerosas leyes de beneficios sociales, fue respaldado por varios grupos de la coalición Unidad Popular, que también compartían su creencia que un cambio fundamental podía lograrse por la vía legal. El primero entre éstos fue el Partido Comunista, que sostenía con vehemencia que la única estrategia posible en Chile en ese momento era la consolidación gradual del poder dentro del marco de las instituciones tradicionales. El Partido Radical, que incluía a personalidades políticas sobresalientes, como los senadores Luis Bossay y Alberto Baltra, estaba convencido de que el socialismo chileno podía ser una realidad sin la violencia revolucionaria. El sector moderado del Partido Socialista, liderado por Aniceto Rodríguez, estaba de acuerdo con esa tesis, al igual que algunos importantes elementos del ala progresista del Partido Demócrata Cristiano, incluyendo a Radomiro Tomic. Es necesario señalar, sin embargo, que incluso al interior de estos partidos existían diferencias sustanciales. Los comunistas y, hasta cierto punto, Allende mismo, argumentaban que el proceso conduciría eventualmente a la creación de nuevas instituciones y proce-

dimientos. La transformación fundamental habría de ser política y también socioeconómica. De hecho, incluso en la cuestión sobre la viabilidad de futuras elecciones, los comunistas estaban indecisos.³⁷ Otros grupos, en cambio, incluyendo muchos radicales y algunos socialistas, estaban a favor de la implantación de cambios socioeconómicos esenciales, pero sin transformaciones fundamentales en el sistema político democrático de Chile. Los demócrata cristianos progresistas visualizaban un socialismo de otro tipo, uno con mucho menos control estatal, que el socialismo que contemplaban los comunistas.³⁸ Si bien deseaban mayor participación popular, tampoco querían alterar sustancialmente los lineamientos generales del orden institucional tradicional.

Pese a que existían divisiones importantes entre los líderes y los grupos que, en términos generales, compartían los objetivos del Presidente, había, de todos modos, una aguda división entre ellos y los sectores que creían en las instituciones y las reglas del juego, pero que objetaban la aceleración de las transformaciones sociales y económicas. Este sector estaba representado principalmente por aquellos elementos del Partido Nacional que tenían una larga tradición de participación política y que se enorgullecían de las normas que sus antepasados habían creado. La mayoría de ellos tenían buenas posiciones en los círculos de negocios, industriales y agríco-

37. Ver la fascinante entrevista a Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista Chileno, en Eduardo Labarca, *Corvalán 27 horas* (Santiago: Quimantú, 1972), especialmente pp. 109-12.

38. Para una comparación de las plataformas de los partidos, véase el estudio de Debuyst y Garcés, *La opción chilena de 1970*.

las, y temían que los continuos ataques al sistema capitalista podrían provocar una mayor erosión de su status. Este punto de vista también era compartido por varios demócrata cristianos, especialmente los que estuvieron relacionados con las medidas más conservadoras adoptadas en el último año del gobierno de Frei. Este grupo estaba más dispuesto que los nacionales a consolidar algunas reformas, como las iniciadas en el sector rural. Sin embargo, en comparación con los sectores moderados de la Unidad Popular o los sectores progresistas de su propio partido, ellos estaban menos dispuestos a aceptar un cuestionamiento de fondo de la esencia del capitalismo progresista.³⁹

Los sectores prorreglas democráticas estaban bajo una enorme presión, motivada por las contradicciones existentes al interior de sus propias filas amorfas. Quienes estaban a favor de cambios radicales enfrentaban la posibilidad real de ver frustradas sus expectativas. Los que propiciaban la mantención del statu quo económico y político enfrentaban la posibilidad de perder sus privilegios y la erosión de las instituciones tradicionales. Simultáneamente, amplios sectores de ambos grupos podrían ser categorizados como "oposición desleal", al debilitarse su adhesión a las reglas tradicionales.

Ambos grupos serían puestos a prueba por los obstáculos estructurales del sistema chileno y por las presiones ejer-

39. Es necesario subrayar que el autor no cree que la facción más conservadora del Partido Demócrata Cristiano deba ser agrupada automáticamente con todos los otros reaccionarios. La mayoría de los dirigentes de este grupo tenían y tienen un fuerte compromiso con la democracia. Dado el contexto chileno, ellos claramente constituían un grupo moderado.

cidas por los sectores crecientemente movilizados. Eventualmente, estas contradicciones, junto con la fuerte presión de los grupos antirreglas, condujeron a una caracterización de cualquier transacción política como un trueque de sumacero, donde lo ganan todo los unos o los otros. Aun así, al principio Allende y muchos otros estaban confiados en que la historia estaba de su lado, y que no sería necesario escoger entre las reglas establecidas y el compromiso ferviente con una mayor justicia social.

El análisis anterior sugiere que el número de grupos y de líderes políticamente relevantes que compartía la postura de Allende en ambas materias era relativamente pequeño. La polarización ideológica llegó a niveles cada vez más altos. En tales circunstancias queda en claro el enorme obstáculo que Allende debió enfrentar en el Congreso. Para ser confirmado como presidente él necesitaba una mayoría absoluta. Con los ochenta y tres asientos que su coalición poseía en ambas cámaras, aún necesitaba otros dieciocho votos para lograr la mayoría.

Por otra parte, el Partido Nacional y la Democracia Radical, que deseaban impedir la elección de Allende, detentaban sólo cuarenta y tres asientos en el Congreso, una cifra demasiado pequeña como para maniobrar la elección de Alessandri. El dividido Partido Demócrata Cristiano, con sus setenta y cuatro asientos, tenía el equilibrio del poder.⁴⁰ La presión sobre la Democracia Cristiana era enorme, provenía

40. El desglose de los escaños en el Congreso se obtuvo en la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados y la Oficina de Informaciones del Senado.

no sólo de fuerzas internas del país sino también de los Estados Unidos.⁴¹

En cuanto Allende ganó la elección, las corporaciones norteamericanas, apoyadas tácitamente por el gobierno de los Estados Unidos, contribuyeron fuertemente al pánico financiero instigado en primera instancia por los empresarios chilenos de mayor importancia. En la intervención más desembosada de la historia de la política chilena, el Presidente Nixon ordenó a la CIA impedir la elección de Allende. No obstante, pronto se hizo evidente para los agentes norteamericanos que no sería posible sobornar a los parlamentarios demócrata cristianos. Más aún, el Presidente Frei rechazaba categóricamente el esquema propuesto, que contemplaba la elección de Alessandri en el Congreso, en el entendido que él renunciaría posteriormente, dejando abierto el camino para una nueva elección en la cual Frei podría ser candidato nuevamente. Con el consentimiento de las máximas autoridades del gobierno de los Estados Unidos, la CIA entonces intentó convencer a las figuras claves de los militares chilenos para que prepararan un golpe. Cuando el general pronorteamericano, René Schneider, comandante en jefe del Ejército, rehusó

41. Aunque tradicionalmente en el Congreso se había elegido al candidato que hubiera obtenido la primera mayoría, esto no significa que los partidos que habían apoyado al que hubiera salido segundo en la elección popular también votaran por el ganador; generalmente votaban por su propio candidato. Así, en 1946 los conservadores votaron por Eduardo Cruz-Coke, en 1952 los radicales votaron por Pedro Alfonso y en 1958 el FRAP votó por Allende. En 1970 los demócrata cristianos se encontraron en una posición peculiar en la cual controlaban el grupo de votos clave en el Congreso pero no tenían un candidato presidencial en la contienda.

considerar dicha alternativa, conspiradores nacionales y extranjeros intentaron secuestrarlo, en la equivocada esperanza de que el acto produciría un golpe de Estado.⁴² Schneider resultó muerto cuando puso resistencia a sus secuestradores, ocasionando el primer asesinato de un prominente líder político en Chile desde 1837. El complot tuvo el resultado opuesto al que se esperaba, y los conspiradores fueron identificados y posteriormente sentenciados. El Presidente Frei y el Pre-

42. Para un análisis de las operaciones de Estados Unidos respecto de las actividades de inteligencia ver el reporte interino del Select Committee to Study Governmental Operations, *United States Senate, Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders* (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 20 November 1975), pp. 225-54. Los extremos a que llegó la CIA están ilustrados en el cable 882, de Oficina Central a Estación, 19/10/70, en el cual se instaba a Estación a que inventara una justificación para un golpe. Las sugerencias incluían el uso de "sólida información" que los cubanos reorganizarían los servicios de inteligencia de acuerdo a los lineamientos soviético-cubanos, y que Allende tenía el plan de vaciar los arsenales en beneficio de las milicias populares comunistas. Estación señalaba: "Estamos ahora solicitándole que prepare un informe de inteligencia basado en algunos hechos bien conocidos y algunos de ficción para justificar un golpe militar, dividir la oposición y ganar adherentes para el golpe. Con los contactos militares adecuados pueden determinar cómo 'descubrir' un reporte de inteligencia que incluso puede ser colocado en los lugares allanados por Carabineros" (las comillas corresponden al original). Ver p. 234. El propio Nixon inició la operación en una reunión que tuvo lugar el 15 de septiembre de 1970 con Henry Kissinger, asesor del Consejo Nacional de Seguridad; John Mitchell, Fiscal General, y Richard Helms, director de la Agencia Central de Inteligencia. El Presidente señaló que se podían gastar diez millones de dólares en la operación, que a la economía chilena había que hacerla zumbiar y que se debía hacer cualquier esfuerzo para "salvar a Chile" (p. 227). Aunque la embajada no estuvo involucrada en el complot para el secuestro, el embajador Korry ejerció fuertes presiones sobre Frei para detener la postulación de Allende a la presidencia. En un informe de situación el embajador señaló que había enviado un mensaje al presidente Frei a fin de que "Frei sepa que no se permitirá que llegue a Chile ni un perno ni una tuerca durante el gobierno de Allende. Una vez que Allende asuma el poder, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para condenar a Chile y a los chilenos a la máxima privación y pobreza, una política diseñada para durar un largo tiempo a fin de acelerar las dificultades de una sociedad comunista en Chile" (p. 231).

sidente electo Allende caminaron juntos en el cortejo fúnebre, ceremonia a la que asistió un amplio espectro de autoridades civiles y militares.

La lucha al interior de la Democracia Cristiana respecto de la elección de Allende fue intensa. Tomic, el candidato perdedor, ya había manifestado su respeto a la victoria de Allende. Poco después del recuento de los votos, él abrazó a su "antiguo amigo", prometiéndole su total apoyo. Pero, aun cuando el ala representada por Tomic controlaba los cargos más importantes del partido, la desconfianza hacia Allende estaba presente en toda la colectividad. La decisión de votar a favor de Allende amenazaba la débil unidad del partido.

El impase se resolvió una vez que Allende aceptó una reforma constitucional por la cual el Ejecutivo garantizaría el respeto a las libertades civiles, las elecciones y la libertad de expresión, que, por generaciones, habían sido consideradas las piedras angulares de la democracia chilena. El llamado Estatuto de Garantías Constitucionales constituye un ejemplo gráfico de la grave polarización política chilena y de la severa erosión de las tradicionales reglas del juego. En última instancia, esas reglas se basaban en un alto grado de confianza mutua. La necesidad de exigir una declaración formal de parte de Allende, por la cual él se comprometía a respetar la Constitución, demuestra el deterioro de la confianza entre los líderes políticos, quienes por décadas habían mantenido relaciones de respeto mutuo, si no de amistad, a pesar de sus diferencias ideológicas. La reforma también subraya el temor de muchos dirigentes políticos que el juego de ganar apoyo

electoral y político a expensas del adversario -que se había acelerado durante el período demócrata cristiano- continuaría con renovada fuerza.

A diferencia del Pacto de Punto Fijo en Venezuela que marcó el comienzo de un período de *detente* entre los grupos opositores y que consistía en un acuerdo mutuo de respeto al resultado de las elecciones, el Estatuto de Garantías Constitucionales, exigido como condición para el apoyo político, marcó el quiebre del entendimiento mutuo, mostrando el grado de fragilidad a la cual habían llegado las instituciones chilenas.⁴³ Allende inició su gestión en un clima de profunda crisis. El pánico financiero, la confrontación política y los decididos intentos de los conspiradores militares y los agentes de inteligencia extranjeros para impedir que él asumiera el mando no auguraba nada positivo para su gobierno. Muchas personas cuestionaban abiertamente la legitimidad del sistema que había hecho posible su elección, y otros, a la vez que ofrecían su apoyo, mostraban una profunda desconfianza en la buena fe del nuevo Presidente y un verdadero temor respecto al futuro de las instituciones del país.

43. Ver Daniel Levine, *The Role of Political Learning in the Restoration and Consolidation of Democracy: Venezuela since 1958*, en Linz y Stepan, *The Breakdown of Democratic Regimes*, vol. 3, *The problem in the Latin American Context*.



CAPITULO III

EL PASO A UNA SOCIEDAD SOCIALISTA Y LA EROSION DEL CENTRO POLITICO

Desde el momento en que tomó posesión del mando, Allende actuó rápidamente y con gran habilidad política para convertir en realidad un programa que, él esperaba, habría de conducir gradualmente al país a una sociedad socialista donde existiría un genuino control popular de la vida económica y política.¹ Su pronta medida de distribución de leche a los niños, y el estilo relajado del "compañero presidente" que se relacionaba con las personas en mangas de camisa, ganaron un importante apoyo personal.² Los demócrata cristianos mantuvieron su apoyo tácito al votar por el candidato de la Unidad Popular a la mesa de la Cámara de Diputados. Allen-

1. El programa de gobierno de la Unidad Popular ha sido publicado en Gabriel Palma, *La vía chilena al socialismo* (México: siglo XXI, 1973), pp. 269-92. El mismo libro incluye la plataforma de la Unidad Popular presentada en las elecciones parlamentarias de 1973 (ver pp. 293-322).

2. Estos sucesos fueron ampliamente reporteados por la prensa chilena. Para la cronología general el autor se basó principalmente en *El Mercurio, Edición Inter-*

de, un auténtico idealista, estaba seguro que, a medida que el país se convenciera de que el suyo era un gobierno realmente popular, pronto podría superar el porcentaje minoritario con que había asumido el poder. Cuando Regis Debray le preguntó qué haría si el Congreso le bloqueaba algunos de sus proyectos, él no vaciló en responder que convocaría un plebiscito para sobreponerse a la oposición parlamentaria.³

La política económica del gobierno de Allende se basaba en una estrategia que giraba en torno a cuatro ejes fundamentales: la redistribución del ingreso, la ampliación de los programas y servicios gubernamentales, el control estatal sobre las industrias claves y la expansión de la reforma agraria. Su objetivo final era transformar las relaciones de clase y de propiedad, e instituir un nuevo esquema de desarrollo económico, de acuerdo con los lineamientos socialistas.

El objetivo de su política redistributiva consistía no tanto en la reducción de la diferencia de ingreso entre obreros y empleados, sino en aumentar la participación relativa de los

nacional, Ercilla, Chile Hoy y la publicación británica *Latin America*. Para un estudio más a fondo de los acontecimientos importantes, como las conversaciones a mediados de 1972 entre el gobierno y la Democracia Cristiana, se utilizaron los diarios *El Mercurio, La Nación, La Prensa, El Siglo, Las Noticias de Última Hora, Mayoría* y otros. Aunque *El Mercurio* es un diario extremadamente conservador y desde un comienzo trató de destruir el gobierno de Allende, fue y es el principal diario como fuente de información; en él se publicaron los textos completos de las declaraciones hechas por los partidos y dirigentes, así como las estadísticas oficiales, documentos y debate del Senado. El material obtenido en entrevistas con actores políticos claves ayudó a completar las fuentes impresas.

3. Véase Regis Debray, *The Chilean Revolution: Conversations with Allende* (New York: Random House, Vintage Books, 1971).

trabajadores sobre el ingreso nacional en relación a otros sectores económicos como los empresarios privados y los rentistas. Los técnicos socialistas estaban convencidos de que estas medidas eran perfectamente viables en los términos económicos convencionales. Al aumentar el ingreso de empleados y obreros se generaría más demanda, la que a su vez redundaría en un aumento productivo en una economía estancada que funcionaba muy por debajo de su capacidad. Puesto que gran parte de la nueva demanda provendría de los sectores de bajos ingresos, esto habría de estimular a sectores de la economía intensivos en mano de obra, que producían la mayoría de los productos consumidos por los estratos de bajos ingresos. El fomento de la producción, a su vez, reduciría aún más el desempleo.⁴

El hecho que la política económica se basara en cálculos económicos convencionales, no significa que los estrategas y dirigentes en el sector económico no tuvieran conciencia de las consecuencias políticas de dicha estrategia. Muy por el contrario, tenían la esperanza de que el riesgo potencial de una acelerada redistribución del ingreso, sería compensado por claros beneficios políticos para la Unidad Popular. Los

4. Para una declaración general sobre la política económica del gobierno, ver la presentación hecha por el ministro de Economía, Pedro Vuskovic, en octubre de 1971 y publicada en Lelio Basso et al., *Transición al socialismo y experiencia chilena*. (Santiago: CESO-CEREN, 1972), pp. 99-114. Un claro informe sobre la política de la Unidad Popular, que pone el énfasis en los factores económicos, como la importancia del aumento de la demanda para contrarrestar la capacidad ociosa de la industria, se puede encontrar en Julio López, *La estrategia económica del gobierno de la Unidad Popular*, *Cuadernos de la Realidad Nacional*, N° 9, septiembre de 1971, pp. 69-86.

objetivos económicos se perseguían no sólo como un fin en sí, sino como herramientas para ampliar el claramente débil apoyo que Allende recibió en su estrecha victoria electoral. Pedro Vuskovic, el ministro de Economía y arquitecto principal del programa económico, enfatizaba enérgicamente que el programa básico del gobierno no era simplemente reformista sino revolucionario. Y agregaba: "si ese es nuestro punto de partida, esto plantea a la política económica, no un conjunto de problemas de carácter técnico, sino un problema esencialmente político, (...) sirviendo principalmente, y allí encuentra su objetivo central, como instrumento para ampliar y consolidar las posiciones de poder de los trabajadores. (...) La política económica queda determinada por la voluntad de realizar íntegra y cabalmente el programa económico, y al mismo tiempo por la necesidad de afianzar en el plano económico las condiciones políticas propicias para el desarrollo de este programa en su conjunto. De ahí la presencia simultánea en las definiciones de la política económica de un objetivo programático y de un planteamiento estratégico".⁵

En suma, es necesario destacar que las medidas tomadas por el gobierno de Allende durante el crucial primer año, no eran una simple respuesta a una presión popular descontrolada que exigía una mayor participación en los limitados

5. Basso et al., *Transición al socialismo*, pp. 101-2. En un seminario realizado en marzo de 1972, cuando la situación económica se había deteriorado considerablemente, Vuskovic destacaba con mayor fuerza estas metas políticas como los criterios principales de la política económica. Ver su artículo *La política económica del gobierno de la Unidad Popular*, en Gabriel Palma, *La vía chilena al socialismo*, p. 44. Ver también el debate en pp. 79-99.

bienes de la sociedad chilena, sino que eran el resultado de una política deliberada, cuyos objetivos económicos y políticos estaban claramente definidos. Desde luego, el gobierno de la Unidad Popular creó grandes expectativas y sus medidas estimularían posteriormente el surgimiento de presiones cada vez mayores. La realidad, no obstante, indica que la redistribución del ingreso y el control de precios fueron puestos en marcha como una política coordinada e intencionada, generada desde arriba.

La evidencia empírica muestra que el proceso de redistribución del ingreso excedió las metas gubernamentales. El gobierno aumentó el salario mínimo en un 66% y el sueldo mínimo mensual en un 35%. En julio de 1971, el ingreso promedio por empleado había aumentado en un 54,9%, en vez del 40 a 45% programado.⁶

La redistribución del ingreso estuvo acompañada por un aumento impresionante del gasto fiscal, orientado especialmente a servicios sociales como vivienda, educación, salud y obras sanitarias. A fines de 1971, el gasto fiscal había aumentado en un 70%, de 19 a 33 mil millones de escudos. De esta cantidad, 10 mil millones fueron financiados a través de créditos del Banco Central, en contraste con la cifra del año anterior de sólo 1,8 mil millones. Al mismo tiempo, como se puede apreciar en el cuadro 16, hubo una expansión considerable del crédito; la participación relativa del sector público sobre el total del crédito bancario aumentó desde poco menos

6. Stefan de Vylder, *Allende's Chile: the Political Economy of the Rise and Fall of the Unidad Popular* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), p. 54.

Cuadro 16
Monto total del crédito otorgado por el sistema bancario,
diciembre 1970 - diciembre 1971 (en millones de escudos).

	Sector Público			Sector Privado	Total
	Tesorería	Otros	Total		
Al 31 de diciembre de 1970	916	1.152	2.068	6.777	8.845
Al 30 de julio de 1971	6.487	2.634	9.121	8.512	17.633
Al 31 de diciembre de 1971	9.301	6.814	16.115	10.785	26.900

Fuente: Banco Central, *Boletín Mensual* N° 537, noviembre de 1972, p. 1362; citado en Stefan de Vylder, *Allende's Chile: The Political Economy of the Rise and Fall of the Unidad Popular* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), p. 57.

de un tercio a casi el 60%.⁷ Para el período de doce meses entre diciembre de 1970 y diciembre de 1971, el dinero en circulación aumentó en un 110,5%, producto de la necesidad del gobierno de cubrir las demandas financieras generadas por sus nuevos programas y obligaciones.⁸

Inicialmente, las medidas económicas del gobierno de la Unidad Popular tuvieron efectos muy positivos. En 1971, el producto nacional bruto aumentó en un 8,6%, el mejor año en décadas; todos los sectores más importantes registraron un crecimiento que variaba de moderado a alto.⁹ El desempleo disminuyó a medida que aumentó el empleo en áreas como la

7. *Ibíd.*

8. Sobre la emisión de dinero ver cuadro 24.

9. De Vylder, *Allende's Chile*, p. 63. Allende resumió los logros económicos del primer año de su gobierno en su mensaje del 4 de noviembre de 1971. Ver *Allende: Su pensamiento político* (Santiago Quimantú, 1972), pp. 260-61, 266-67.

construcción, obras públicas, manufactura y servicios (11,7%, 7,6%, 7,1% y 5,1%, respectivamente).¹⁰ Una mayor producción produjo una mayor demanda, principalmente de productos básicos como los agrícolas. La producción agrícola registró un aumento del 8,6% en los cultivos anuales y del 1,8% en la producción ganadera. Este aumento, sin embargo, no fue suficiente para satisfacer la floreciente demanda. Por esta razón, el gobierno se vio forzado a aumentar bruscamente la importación de productos extranjeros. Esta medida era factible en el corto plazo porque se contaba con amplias reservas externas, acumuladas a raíz del aumento del precio del cobre durante los últimos años del gobierno de Frei. Por último, la capacidad de la economía para responder a la estimulación estatal, se tradujo en una caída de la inflación del 34,9% en 1970 al 22,1% en 1971.¹¹

El gobierno también aceleró su esfuerzo por crear una economía socialista. Al estatizar las industrias más importantes, los técnicos del gobierno esperaban poder canalizar las utilidades no sólo hacia una mayor inversión sino también hacia subsidios para los programas del gobierno. Del mismo modo, la estatización de los bancos le permitiría al gobierno controlar el crédito, que sería utilizado con los mismos propósitos. Tanto los bancos como las industrias fueron estatizados

10. *Ibíd.*, pp. 70-71.

11. Durante los seis primeros meses de 1971 la inflación alcanzó un 11,1%, una cifra muy favorable si se la compara con el último año del gobierno de Frei, cuando la inflación alcanzó un 34,9%. Estas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas aparecen en Oficina de Informaciones del Senado, Boletín Informativo Económico, 16 de junio de 1972, p. 1.

mediante la compra de sus acciones o utilizando la legislación vigente que facultaba a las autoridades para intervenir una empresa que por alguna razón no estaba funcionando bien y por lo tanto no estaba entregando servicios esenciales.¹² Los trabajadores partidarios de la Unidad Popular solían forzar el paro de las actividades de una fábrica o una empresa, abriendo así el camino para la intervención estatal. Para diciembre de 1971, el número de industrias controladas por el Estado ya se había elevado de treinta y una a sesenta y dos, sin contar a otras treinta y nueve empresas requisadas por el Estado.¹³ Uno de los principales logros del gobierno fue la nacionalización de la gran minería del cobre, propiedad de empresas norteamericanas, después que el Congreso chileno, controlado por la oposición, aprobara por unanimidad la legislación necesaria. Si bien la nacionalización del cobre agravaría el conflicto entre el gobierno y las empresas extranjeras, es necesario destacar que muchas firmas extranjeras fueron expropiadas bajo términos mutuamente acordados.¹⁴

12. Ver los trabajos de Eduardo Novoa, citados en el capítulo II nota 34. Para otros artículos de Novoa, y las declaraciones del Ministro de Economía, Orlando Millas, y el Contralor General, Héctor Humeres, sobre los resquicios legales, ver la parte 4 de Andrés Echeverría y Luis Frei, *La lucha por la jurisdicción en Chile* (Santiago: Editorial del Pacífico, 1974) vol. 1.

13. De Vylder, *Allende's Chile*, p. 145.

14. La mayoría de las empresas norteamericanas fueron nacionalizadas sin conflicto. Este fue el caso, por ejemplo, con RCA Victor, Bethlehem Steel y todas las sucursales en Chile de los bancos norteamericanos. Hubo dificultades con otras compañías como la ITT y la Ford Motor Company. La Ford fue acusada de cancelar operaciones ilegalmente y de suspender la importación de repuestos vitales. La fábrica fue tomada por sus trabajadores y eventualmente el gobierno intervino. Véase *El*

La estatización de bancos y entidades financieras generalmente se realizó sin mayor violencia. En el campo, en cambio, ocurrió lo contrario. Allí muchos propietarios opusieron resistencia a la expropiación del gobierno o los trabajadores se tomaron la tierra. Miembros del MIR penetraron en forma considerable en el sector rural, ofreciendo apoyo organizacional y, en algunos casos, armas para las confrontaciones rurales. Como se observa en el cuadro 17, en el sector rural las huelgas siguieron aumentando durante 1971 y hubo una verdadera explosión de tomas, las cuales aumentaron en un 180% durante 1970. El gobierno se resistía a reprimir dichas actividades, y así las alentaba tácitamente. Parecía no darle importancia a estos hechos, afirmando que los conflictos ocurrían en sólo el 0,02% de las propiedades agrícolas.¹⁵ Incitado en parte por los propios campesinos, el gobierno de Allende ex-

Mercurio Edición Internacional, 31 de mayo-6 de junio de 1971, p. 8. La ITT también se hizo famosa por sus esfuerzos por impedir la elección de Allende al instigar el sabotaje económico e intentar utilizar miembros de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos para sus propósitos. Las actividades de la ITT fueron reveladas por primera vez por el columnista Jack Anderson en el *Washington Post*, de 22 de marzo de 1972, p. C23. Los documentos de la ITT, que incriminan a la compañía por su descarada conspiración para intervenir en los asuntos chilenos, fueron publicados en *Documentos secretos de la ITT* (Santiago, Editorial Quimantú, 1972). Para mayor información véase el *Report to the Committee on Foreign Relations, United States Senate, del Subcommittee on Multinational Corporations, The International Telephone and Telegraph Company and Chile*, 1970-71, 21 de junio de 1973 (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1973).

15. Véase el discurso de Jacques Chonchol, *El Mercurio Edición Internacional*, 15-21 de febrero de 1971, p. 6. La página 1 de la misma edición informa sobre los ásperos intercambios en el Senado chileno en relación al tema de la violencia y de las expropiaciones en el agro. También incluye la declaración hecha por los seis líderes de los partidos de la Unidad Popular, en la que afirman el compromiso del gobierno de realizar el proceso de reforma agraria dentro del marco legal.

Cuadro 17
Número de conflictos rurales producto de huelgas o tomas,
1967-71.

	1967	1968	1969	1970	1971
Huelgas	693	648	1.127	1.580	1.758
Tomas	9	26	148	456	1.278
Total	702	674	1.275	2.036	3.036

Fuente: Stefan de Vylder, *Allende's Chile: The Political Economy of the Rise and Fall of the Unidad Popular* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976) p. 204.

propió más de 1.300 propiedades en el primer año; esta cifra supera en 300 el número de expropiaciones realizadas durante los seis años del gobierno anterior.¹⁶

Los estrategas del gobierno, esperando la aprobación popular de sus medidas, no estuvieron descontentos con el resultado de la primera prueba de fuerza política a nivel nacional después de la elección de 1970, la de los comicios municipales en abril de 1971. Como se puede apreciar en el cuadro 18, los partidos de la Unidad Popular recibieron un porcentaje de la votación ligeramente mayor que los partidos opositores. Con un cuerpo electoral ligeramente menor al que participó en la elección presidencial del año anterior (pese al aumento en las inscripciones, que incluía, por primera vez, a los analfabetos y la población entre 18 y 21 años), los partidos de la oposición recibieron 486.980 votos menos, mientras

16. Allende: *Su pensamiento político*, p. 256.

Cuadro 18
Resultados de las elecciones municipales de 1967 y 1971.

Partido	1967		1971	
	Nº de votos	%	Nº de votos	%
Unidad Popular				
Socialista	324.965	13,9	663.367	22,3
Comunista	346.105	14,8	477.862	16,9
Radical ^a	252.640	10,8	228.426	8,1
Democracia Radical ^b	17.457	0,1	38.054	1,3
Total	941.167	40,0	1.377.709	48,6
Oposición				
Demócrata Cristiano	834.810	35,6	729.398	25,7
Nacional	334.656	14,3	513.074	18,1
Democracia Radical ^a	124.434	5,3	110.021	3,9
Padena ^b	38.859		13.487	0,5
Total	1.332.759	57,0	1.365.980	48,2
Otros, blancos y nulos	69.361	3,0	128.967	3,0
Total general	2.343.287	100,0	2.835.402	100,0
Total inscritos	3.073.992		3.792.682	
Porcentaje de abstenciones	23,7		23,7	

a: La Democracia Radical no existía en 1967. El voto radical se dividió arbitrariamente entre el Partido Radical y la Democracia Radical, bajo el supuesto que la fuerza relativa de ambas facciones era la misma en 1967 que en la elección de 1971, la primera después de la división.

b: La Democracia Radical y el PADENA, que estaban juntos en 1967, han sido divididos en forma arbitraria, suponiendo que la fuerza relativa de los partidos era la misma que en la elección parlamentaria de 1969, la primera después de la división.

Fuente : Elaborado sobre la base de información proveniente de la Dirección del Registro Electoral, Santiago, Chile.

que el gobierno aumentó su votación en 307.375 votos. Uno de los partidos más beneficiados fue el Partido Socialista de Allende, que elevó su participación en un 95% respecto de la elección municipal de 1967. Este incremento es comparable al 83% que el partido del Presidente Frei logró en la elección de 1967 en relación a la de 1963. Mientras que en la elección municipal de 1967 la oposición obtuvo una clara ventaja, en 1971 la izquierda igualó fuerzas con un incremento neto de un 9% sobre la anterior elección municipal.¹⁷ Un análisis preliminar de la elección municipal de 1967, sugiere que el aumento del apoyo provino de diversos sectores de la población activa. Como se mostrará más adelante, la base social del apoyo recibido por los partidos de la Unidad Popular en 1971 no experimentó un cambio drástico con respecto a la votación obtenida por Allende en 1970.

Una de las características más importantes del voto de 1971 es que reflejó un aumento de la polarización política. Al percibir que la contienda sería entre la coalición de la Unidad Popular y una oposición más orientada hacia el statu quo, el electorado se inclinó hacia los partidos de los extremos, el Socialista y el Nacional. Todos los partidos centristas, incluyendo la Democracia Cristiana y dos facciones del Partido Radi-

17. Al estudiar las elecciones chilenas se debe tener cuidado de no comparar elecciones para distintos tipos de cargos. Las elecciones municipales versaban con tanta frecuencia sobre los problemas locales y los candidatos, que es engañoso compararlas con las elecciones de los senadores o presidenciales. Las elecciones para la Cámara de diputados a menudo combinaban temas locales y nacionales. Para una discusión sobre las campañas locales, véase Arturo Valenzuela, *Political Brokers in Chile: Local Government in a Centralized Polity* (Durham, N.C.: Duke University Press, 1977), cap. 4.

cal, perdieron apoyo en términos absolutos con respecto a la elección anterior. Su porcentaje combinado del voto descendió de un 52 a un 40%.

Si bien las medidas de corto plazo tomadas por la Unidad Popular contribuyeron al éxito económico y político de 1971, sería un error afirmar que no surgieron serias dificultades en ese mismo año, dificultades que presagiaban nuevos problemas. Los economistas del gobierno estaban conscientes de las consecuencias potencialmente explosivas de una economía sobreestimulada. Tal como el ministro Vuskovic señaló en un seminario en octubre de 1971, dos consecuencias muy serias de la política gubernamental fueron la drástica reducción de la inversión y el casi total agotamiento de las reservas externas.¹⁸ A pesar del aumento de la inversión pública, la inversión interna -salvo en la construcción- cayó en un 71,3%.¹⁹ En la medida que el precio del cobre bajaba y la producción de la gran minería disminuía, la política de satisfacer la demanda con importaciones provocó una severa escasez de reservas externas. En 1970 las reservas del país eran de US\$ 343,4 millones, para diciembre de 1971 éstas habían caído a US\$ 32,3 millones.²⁰ La prioridad otorgada a la importación de alimentos significó un aumento de un 14 a un 24% del total de importaciones, y un descenso consecuente en otros artículos, por ejemplo, la importación de maquinaria

18. Basso et al., *Transición al socialismo*, p.107

19. De Vylder, *Allende's Chile*, p. 66.

20. Ver *El Mercurio Edición Internacional*, 28 de mayo-3 de junio de 1972, p. 2.

tuvo un descenso de un 22%.²¹ Estas cifras revelan que hacia fines de 1971, la creciente demanda, producto de las medidas adoptadas por el gobierno, ya había alcanzado un nivel que excedía la capacidad a corto plazo de la producción nacional y la capacidad de importación. El mismo Vuskovic lo subrayaba, señalando que sólo podía evitar los "cuellos de botella" mediante una mayor inversión y producción. También advertía que debido a estas dificultades potenciales, era "difícil visualizar para el año próximo una política de remuneraciones, de aumento de salarios, con las mismas posibilidades de impedir que esos incrementos de salarios se trasladan, automáticamente, a los precios."²² Además él preveía un período de consolidación más bien que uno de expansión de los niveles salariales alcanzados en 1971.

Desafortunadamente para el gobierno y para el país, el año 1972 no sería un año de consolidación, y el panorama económico contrastaría negativamente con el de 1971. En julio de 1972, como se observa en el cuadro 19, la inflación se

21. Estos datos provienen de la Superintendencia de Aduanas y el Banco Central, *El Mercurio Edición Internacional*, 23-29 agosto de 1971, p. 2. Según las cifras proyectadas por la sociedad de Fomento Fabril, para 1973 las importaciones de alimentos equivaldrían a un 75% de las utilidades del cobre. Véase *El Mercurio Edición Internacional*, 30 de julio-5 de agosto de 1973, p. 2. Gran parte del problema se debía al hecho que la mayor demanda no era canalizada hacia sectores económicos con capacidad ociosa, por ejemplo, la industria de bienes durables, sino hacia áreas como la agricultura, que ya eran incapaces de responder a la demanda. La política de aumentar los salarios de la clase obrera simplemente no salvó a la industria orientada a la manufactura de productos de consumo que estaba quedando atrás. Para un análisis económico desde esta perspectiva, véase *El Mercurio Edición Internacional*, 7-13 de junio de 1971, p. 2. Estas dificultades fueron reconocidas por economistas del gobierno como López. Ver su artículo *La estrategia económica*.

22. Basso et al., *Transición al socialismo*, p. 107.

Cuadro 19
Tasas anuales de inflación, diciembre 1970 - septiembre 1973.

Período	Porcentaje de aumento de precios
Diciembre 1970 - diciembre 1971	22,1
Junio 1971 - junio 1972	40,1
Julio 1971 - julio 1972	45,9
Agosto 1971 - agosto 1972	77,2
Septiembre 1971 - septiembre 1972	114,3
Octubre 1971 - Octubre 1972	142,9
Noviembre 1971 - noviembre 1972	149,8
Diciembre 1971 - diciembre 1972	163,4
Enero 1972 - enero 1973	180,3
Febrero 1972 - febrero 1973	174,1
Marzo 1972 - marzo 1973	183,3
Abril 1972 - abril 1973	195,5
Mayo 1972 - mayo 1973	238,4
Junio 1972 - junio 1973	283,4
Julio 1972 - julio 1973	323,2
Agosto 1972 - agosto 1973	303,6
Septiembre 1972 - septiembre 1973	286,0
Octubre 1972 - Octubre 1973	528,4
Abril 1973 - abril 1974	746,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

había elevado bruscamente a un 45,9% y al final del año se había cuadruplicado alcanzando un récord de 163,4%. En diciembre de 1972, la situación de las reservas chilenas mostraba un déficit neto de US\$ 288,7 millones y el déficit de la balanza de pagos aumentó cuatro veces con respecto al año anterior, llegando a US\$ 538 millones.²³ Los cuellos de botella se producían a un ritmo cada vez mayor a medida que el mer-

23. Ver la nota 21 para la fuente de estos datos.

cado negro y el acaparamiento se convertían en prácticas comunes, y que la producción de artículos esenciales no crecía en forma proporcional a la expansión de la demanda. Para prevenir una drástica reducción de los programas del gobierno, se emitió dinero con una velocidad cada vez mayor; por consiguiente, en 1972 el porcentaje del presupuesto respaldado por las emisiones se elevó de un 30 a un 40% en relación al año anterior.²⁴

Los problemas del gobierno de la Unidad Popular se agravaron con la fuerte reducción del crédito extranjero y de los programas internacionales de cooperación. La hostilidad con que se recibió la victoria de Allende en los círculos gubernamentales y financieros de Estados Unidos pronto se tradujo en la cesación del apoyo al gobierno de la Unidad Popular. La nacionalización del cobre contribuyó a una agudización de esta política. Funcionarios norteamericanos usaron su influencia con las agencias crediticias internacionales, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, para que se cortara la ayuda a Chile. El Banco Mundial eliminó toda nueva ayuda y el BID sólo aprobó pequeños préstamos para organizaciones privadas. Simultáneamente, el Export-Import Bank de los Estados Unidos negó un crédito para comprar aviones comerciales norteamericanos y suspendió los programas de préstamos y ayuda al gobierno. Los bancos privados, cuyos créditos de corto plazo suelen ser vitales para las transacciones internacionales, también redujeron sus

24. *Mercurio Edición Internacional*, 24-30 de julio de 1972, p. 2.

programas de préstamos al gobierno chileno.²⁵ Durante la presidencia de Frei, Chile tuvo a su disposición un promedio de US\$ 300 millones en créditos de corto plazo. En 1972 esta cifra se había reducido a US\$ 30 millones.²⁶ El cuadro 20 resume las operaciones de las principales agencias crediticias y de cooperación norteamericanas e internacionales, antes y después del gobierno de la Unidad Popular.

Es importante recalcar que en términos absolutos el descenso de la ayuda a Chile no representaba una grave reducción de recursos. Sin embargo, considerando la brusca caída del precio del cobre, el notable aumento de la importación de alimentos y el fuerte endeudamiento que el gobierno de Allende heredó de su predecesor, la disminución de la ayuda y el

25. Para la documentación sobre el bloque norteamericano, véase Elizabeth Farnsworth, Richard Feinberg y Eric Leeson, *The Invisible Blockade: The United States Reacts*, en Arturo Valenzuela y J. Samuel Valenzuela, eds., *Chile: Politics and Society*. (New Brunswick, N.J.: Transaction, Inc., 1976), pp. 338-73. Para una declaración de un funcionario chileno sobre la lógica tras la política exterior norteamericana, véase Armando Uribe, *Le livre noir de l'intervention americaine au Chile* (Paris: Editions du Seuil, 1974). Uribe señala que los forjadores de la política chilena pensaban que el gobierno de Estados Unidos estaba menos preocupado por la nacionalización del cobre que por el impacto que pudiera tener el éxito del experimento de Allende en la política interna de Francia e Italia. La elección de gobiernos de izquierda en esos países afectaría el equilibrio de fuerzas entre Este y Oeste. Este punto de vista fue manifestado por Henry Kissinger en una sesión respecto al trasfondo profundo de la situación chilena (véase, Uribe, *Le livre noir*, pp. 92-93, 202). Es muy probable que el Departamento de Estado norteamericano estuviera más preocupado por las políticas comunistas de Allende y su manera de tratar al capital extranjero que lo que estaba la oficina a cargo de Kissinger. No obstante, la Oficina de Seguridad Nacional de Kissinger había asumido en gran medida la dirección de la política exterior del gobierno de Estados Unidos. Para la documentación sobre el papel de Estados Unidos en socavar el gobierno chileno, a través de operaciones abiertas y secretas, véase el informe de Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities, U.S., Senate, *Covert Action in Chile*, 1963-73.

26. U.S. Senate, *Covert Action in Chile*, 1963-73, p. 32.

Cuadro 20

Ayuda externa recibida por Chile de organismos gubernamentales de Estados Unidos e instituciones internacionales. Total de créditos y grants (en millones de dólares).

	AÑO FISCAL													
	1953-61	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974
Total ayuda económica EE.UU.	339,7	169,8	85,3	127,1	130,4	111,9	260,4	97,1	80,8	29,6	8,6	7,4	3,8	9,8
AID	76,4	142,7	41,3	78,9	99,5	93,2	15,5	57,9	35,4	18,0	1,5	1,0	,8	5,3
Food for Peace	94,2	6,6	22,2	26,9	14,2	14,4	7,9	23,0	15,0	7,2	6,3	5,9	2,5	3,2
Export-Import Bank	169,0	,8	16,2	15,3	8,2	,1	234,6	14,2	28,7	3,3	-	1,6	3,1	98,1 ^a
Total ayuda militar EE.UU.	41,8	17,8	30,6	9,0	9,9	10,1	4,1	7,8	11,8	,8	5,7	12,3	15,0	15,9
Total ayuda económica y militar EE.UU.	381,5	187,6	115,9	136,1	140,3	122,0	264,5	104,9	91,8	30,4	14,3 ^b	21,3 ^b	21,9	123,8 ^a
Total organizaciones internacionales ^c	135,4	18,7	31,2	41,4	12,4	72,0	93,8	19,4	49,0	76,4	15,4	28,2	9,4	111,2
Banco Mundial	95,2	-	-	22,6	4,4	2,7	60,0	-	11,6	19,3	-	-	-	13,5
Banco Interamericano de Desarrollo	5,7	15,1	24,4	16,6	4,9	62,2	31,0	16,5	31,9	45,6	12,0	2,1	5,2	97,3

a: Incluye US\$ 57 millones del Export-Import Bank y US\$ 41,1 millones de otras fuentes.

b: Total ayuda económica y militar EE.UU. más Export-Import Bank.

c: La contribución de Estados Unidos a las organizaciones internacionales está incluida arriba; por lo tanto, no se deben sumar la ayuda norteamericana y la internacional.

Fuentes: "U.S. Overseas Loans and Grants, Obligations and Loan Authorizations, 1 July 1945 to 30 June 1971", pp. 40, 179; y "1 July 1945 to June 1974", pp. 39, 175. Elaborado por Statistics and Reports Division, Office of Financial Management, Agency for International Development y publicado por U.S., Senate, "Hearings, before the Select Committee to Study Governmental Operations with respect to Intelligence Activities", vol. 7 (4 y 5 de diciembre de 1975), p. 181.

crédito agravaron la difícil situación del gobierno. Esto fue particularmente cierto en el caso de las facilidades financieras provenientes de fuentes norteamericanas. Dado que las herramientas y las maquinarias de origen norteamericano eran tan importantes para la economía chilena, las dificultades que Chile enfrentó para conseguir repuestos contribuyeron a trastornos en el sector productivo. Por ejemplo, en el sector transportista, el valor de la maquinaria y equipamiento de origen norteamericano cayó de US\$ 152,6 millones en 1970 a US\$ 110 millones en 1971, y a fines de 1972, según algunas fuentes, el 30% de los buses particulares, el 33% de los buses estatales y el 21% de los taxis estaban fuera de servicio por falta de repuestos. Un estimado es que el valor de la participación de Estados Unidos sobre el total de los productos importados en Chile cayó del 37,2% en 1970 a cerca del 10% en 1972.²⁷ Pese a que el gobierno chileno fue capaz de establecer vínculos comerciales con otros países y obtener créditos alternativos, a menudo éstos estaban ligados a ítemes y proyectos específicos, y no podían sustituir en su totalidad a los productos norteamericanos. Una dramática muestra de esto fue la decisión tomada por el gobierno chileno en 1972, de comprar un avión Boeing con pago al contado en vez de aceptar un crédito para comprar dos aviones soviéticos, lo que habría exigido una renovación completa de la infraestructura de apoyo y de mantención.²⁸

27. De Vylder, *Allende's Chile*, p. 129.

28. El debate sobre el bloqueo norteamericano ha sido amplio. Paul Sigmund, al tomar las declaraciones de los funcionarios norteamericanos en forma demasiado

Dada la naturaleza dependiente de la economía chilena, la disminución de las reservas externas del gobierno chileno llevó al país a una posición extremadamente vulnerable a la represalia internacional. Si bien las dificultades económicas de Chile no pueden atribuirse únicamente al bloqueo económico internacional, ese bloqueo sí contribuyó a la espiral de crecientes dificultades económicas.

Estas crecientes dificultades pronto representaron una seria amenaza política para el gobierno. En diciembre de 1971, mujeres de clase media protagonizaron la tan publicitada marcha de las cacerolas. En agosto de 1972 se veía claramente que las políticas económicas del gobierno estaban afectando seriamente a las clases alta y media. El cuadro 21 presenta los resultados de una encuesta realizada en agosto de 1972. La encuesta revela que el 99% de la clase alta sentía que era difícil adquirir los productos básicos -un sentimiento compartido por el 77% de la clase media. Aunque el programa de gobierno era claramente percibido como amenazante por un 60% de la población, el 75% de la clase baja sentía que ahora era más fácil obtener artículos de consumo. Estas cifras reflejan un serio descontento en el grupo de la pequeña bur-

lital, minimizó los efectos negativos del bloqueo, véase su artículo *The Invisible Blockade and the Overthrow of Allende*, *Foreign Affairs*, 52(2): 322-40 enero de 1974. Para una respuesta a Sigmund véase Elizabeth Farnsworth, *More Than Admitted*, *Foreign Policy*, Nº 16, otoño de 1974, pp. 127-41. Para la refutación de Sigmund véase su artículo *Less Than Charged*, en ídem, pp. 142-56. La visión de Sigmund también fue analizada por Richard Fagen en su excelente artículo *The United States and Chile: Roots and Branches*, *Foreign Affairs*, 53(2): 297-313, enero de 1975. Las revelaciones del U.S. Senate Select Committee on Intelligence han clarificado sustancialmente los esfuerzos concertados del gobierno de los Estados Unidos por socavar el gobierno de la Unidad Popular.

Cuadro 21

Respuestas a la pregunta: "En su opinión, comprar ahora los productos esenciales para el hogar, ¿es fácil o difícil?"

	GRUPO SOCIOECONOMICO			
	Alto %	Medio %	Bajo %	Total %
Fácil	1	17	75	47
Difícil	99	77	19	48
Ni fácil ni difícil	0	6	6	5

Fuente: *Ercilla*, 13 - 19 de septiembre de 1972, p. 10.

guesfa, precisamente el grupo que el gobierno de la Unidad Popular había considerado de suma importancia para el éxito de su programa.

En la esfera política, el gobierno experimentó ciertos cambios después de la elección municipal de 1971. Los candidatos de la Unidad Popular fueron derrotados por una oposición unida en tres de cuatro elecciones parlamentarias complementarias. En abril de 1972 fue derrotado el candidato del gobierno en la crucial elección de rector de la Universidad de Chile. Los resultados mostraban que la Unidad Popular perdía terreno no sólo en las facultades tradicionalmente conservadoras, sino también entre los segmentos universitarios que por años habían apoyado en forma mayoritaria a los candidatos de izquierda. Finalmente, en la primera elección popular plenamente democrática de la Central Unica de Trabajadores, la

votación arrojó resultados sorpresivamente favorables para la **Democracia Cristiana**, al ganar éstos la elección en una de las compañías mineras más grandes, la cual tradicionalmente había elegido dirigentes sindicales de izquierda. Paralelamente, los planes del gobierno de establecer un congreso unicameral y tribunales populares se vieron frustrados. Asimismo, el esfuerzo por constituir un sistema de genuina participación de los trabajadores en la toma de decisiones en las industrias, salvo algunas excepciones interesantes, tampoco prosperó.

El gobierno de Allende también encontró problemas políticos al confrontarse con otras instituciones y fuerzas de la compleja arena institucional chilena. En variadas ocasiones las iniciativas del gobierno fueron obstaculizadas por objeciones de la Contraloría o los tribunales. Sin embargo, la oposición más amenazante vino del Congreso. En el primer año, Allende reorganizó su gabinete una sola vez, y fue para resolver disputas internas en su coalición. Hacia fines de 1972, había realizado dos cambios totales de gabinete y seis parciales que involucraban diecisiete cargos ministeriales -varios de ellos en respuesta a intentos del Congreso por acusar constitucionalmente a sus ministros. En enero y nuevamente en julio de 1972 su ministro del Interior fue acusado políticamente por el Congreso. El Congreso Nacional usó su facultad de veto para negar un aumento tributario que podría haber contribuido a aliviar la crisis fiscal. En febrero de 1972 ambas cámaras del Congreso aprobaron un cuerpo legal que exigía una reforma constitucional para reglamentar las áreas de la economía. Su promulgación habría significado que Allende

habría tenido que modificar sustancialmente su proyecto de crear un gran sector socialista de la economía.²⁹ La reforma permitiría la estatización de las industrias sólo con la aprobación del Congreso y, a raíz de una disposición retroactiva, el Ejecutivo debería someter al Congreso la totalidad de las medidas adoptadas durante los primeros meses de su gestión. La aprobación por el Congreso de esta disposición engendraría la mayor contienda legislativa experimentada por el gobierno de Allende. La importancia de esta contienda radica en el hecho que ella marca el quiebre definitivo del débil consenso centrista que había permitido a Allende alcanzar la presidencia. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se tornó tan amargo un comienzo tan prometedor? ¿Por qué el gobierno fue incapaz de consolidar los logros de 1971? ¿Por qué se derrumbó el frágil centro político?

Los obstáculos internos y externos: Las dificultades que enfrentó una coalición minoritaria al intentar cambios en una sociedad altamente polarizada

No es posible explicar los tempranos fracasos del gobierno de la Unidad Popular ni el eventual quiebre de la democracia chilena inculcando a uno u otro lado por la destrucción del sistema. No fue simplemente el resultado de una política económica errónea o una estrategia deliberada de al-

29. Para el texto de la medida de la oposición y otros documentos de este debate, véase Echeverría y Frei, *La lucha por la juridicidad en Chile*, vol. 3, parte 2

gunos sectores del gobierno para acelerar el colapso de las instituciones burguesas. Tampoco fue un mero producto de las fuerzas reaccionarias, quienes, en complicidad con elementos extranjeros, intentaban preservar sus privilegios a cualquier precio. Es cierto que todos estos elementos estaban presentes en mayor o menor grado. Pero el quiebre de la democracia en Chile debe comprenderse en términos más amplios. Debe entenderse como el fracaso en estructurar un centro político viable en una sociedad altamente polarizada con fuertes tendencias centrífugas. Como se señaló anteriormente, existían sectores claves tanto en el gobierno como en la oposición que eran partidarios del cambio dentro del marco institucional vigente. Pero no era sólo cuestión de opciones. Las acciones y decisiones estaban sujetas a enormes obstáculos y limitaciones impuestos por el sistema electoral vigente y por factores institucionales. Tanto los sectores de gobierno como los de oposición que eran partidarios de una resolución pacífica del conflicto se encontraban permanentemente acosados desde ambos extremos. Las presiones políticas eran tan grandes que se privilegiaban las medidas de corto plazo destinadas a lograr ventajas partidistas en desmedro de acuerdos necesarios para el bien del país. El gobierno se vio incapaz de abandonar su política redistributiva y de exigirle orden a la clase obrera por miedo no sólo a la oposición sino también a elementos rivales dentro de su propia coalición. Las iniciativas del gobierno eran bloqueadas por la enmarañada burocracia y cuestionada por los Tribunales, la Contraloría y el Congreso. Las deseadas transformaciones estructurales funda-

mentales fueron bloqueadas por una constitución que el gobierno no podía modificar por falta de los votos necesarios en el Congreso. Del mismo modo, para la fragmentada Democracia Cristiana, las presiones ideológicas y las obligaciones electorales -producto del permanente conflicto con el Partido Nacional en la lucha por el liderazgo de la oposición- hacían cada vez más difícil continuar con una política de apoyo tácito al gobierno. La política de la mejor oferta, al interior de cada coalición como entre las coaliciones, siguió imponiéndose.

Es importante destacar que éste era un proceso dialéctico. Las acciones adoptadas por el gobierno para superar las presiones políticas y la abierta oposición a menudo provocaban una oposición mayor y más intensa, lo que a su vez forzaba al gobierno a tomar decisiones adicionales que sólo empeoraban el clima político. La fragmentación de las dirigencias políticas, la autonomía de los medios de comunicación altamente politizados y combativos, y la continua movilización de masas apoyada por ambos bandos y por elementos al interior de cada bando contribuía a una mayor confusión e hizo más difícil llegar al consenso mínimo necesario para preservar el régimen. Con el tiempo, sectores centristas de ambos bandos se desplazarían cada vez más hacia posiciones "semileales" o "desleales".

¿Significa esto que el desenlace era inevitable? Aunque las presiones políticas aportaban los parámetros básicos que definían los límites y las potencialidades de las opciones y acciones políticas, el desenlace no era inevitable. En Chile había

espacio para opciones alternativas. La conciencia de clase no llegaba a tal punto que la clase obrera no habría aceptado otra cosa, y por cierto un acuerdo político era incompatible con la solución maximalista. Tampoco existían grandes sectores de la clase media tan reaccionarios que sólo habrían aceptado un gobierno autoritario de derecha. En ciertas coyunturas claves del desarrollo del drama chileno, distintas opciones habrían conducido a distintos resultados, aunque a medida que el proceso avanzaba y la polarización se extremaba, el espectro de lo posible se reducía dramáticamente. El propósito de lo que sigue a continuación es analizar tanto el gobierno como la oposición, y los obstáculos y oportunidades que definían el accionar político. Debido al desarrollo paulatino de un proceso complejo, el argumento analítico será necesariamente complementado con una descripción en el tiempo de los parámetros cambiantes del sistema.

El gobierno de la Unidad Popular

Juan Linz sostiene que gran parte de los problemas que un gobierno enfrenta durante una crisis obedece a la incapacidad para resolver los problemas de mayor importancia, lo que denomina problemas insolubles. Parte de la responsabilidad por los problemas insolubles recae sobre los gobernantes, quienes son incapaces de responder adecuadamente debido a una falta de medios o de conocimientos, o bien porque las acciones políticas necesarias son incompatibles con las que tie-

nen una mayor prioridad.³⁰ El principal problema insoluble para el gobierno de Allende claramente lo constituía la crisis económica. Si bien los grupos de oposición comparten gran parte de la culpa del sabotaje económico, las políticas del gobierno crearon una fuerte reacción y las contramedidas adoptadas para solucionar la crisis simplemente no lograron evitar la catástrofe económica.

La cruda realidad del período de Allende es que se demostró que era políticamente imposible moderar las medidas adoptadas para aumentar el ingreso de los sectores más pobres de la sociedad y de aquellos que simpatizaban con la izquierda. La huelga en la mina El Salvador, al comienzo del mandato de Allende, si bien se resolvió en favor del gobierno, constituyó un presagio de que vendrían más, incluyendo la huelga paralizante en El Teniente en el invierno de 1973. Lo que hizo intolerable la situación, sin embargo, fue que el aumento salarial otorgado a aquellos sectores tradicionalmente postergados, no tuvo su correlato en una disminución de la porción de la torta económica nacional que les tocó a los grupos más privilegiados. En febrero de 1972 se otorgó un aumento general de las remuneraciones para compensar las alzas inflacionarias. Algunos grupos de importancia, como las Fuerzas Armadas, los operadores de radio y los mineros de Chuquicamata, lograron reajustes considerablemente mayores que las cifras oficiales de inflación. En octubre de 1972 la totalidad de los sueldos y salarios, salvo los ingresos más al-

30. Ver Juan Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown, and Reequilibration* (Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1978).

tos, habían aumentado en un 99,8% respecto del año anterior.³¹ Al igual que los gobiernos anteriores, el de la Unidad Popular no logró abandonar las tradicionales políticas de clientelismo y reajuste. "La política de ingresos de 1971 se basaba más en un principio de expansión general que en uno de distribución. La Unidad Popular intencionalmente optó por favorecer no sólo a la mayoría de menores ingresos (que en términos porcentuales percibieron un poco más que el promedio) sino también a la clase media comparativamente más acomodada".³² Cuando los sectores recientemente movilizados

31. Las cifras pertenecen a de Vylder, *Allende's Chile*, p. 91. Durante este período la prensa informó sobre una serie de reajustes para varios sectores.

32. De Vylder, *Allende's Chile*, p. 91. Ver el artículo de Andy Zimbalist y Barbara Stallings, *Showdown in Chile*, *Monthly Review*, 25(5): 1-24, octubre 1973, que pone énfasis en el fracaso en inculcar un espíritu de sacrificio en los trabajadores. Ellos señalan el esfuerzo del gobierno por demobilizar a los trabajadores y acentuar los logros económicos como la estrategia principal. El Partido Socialista continuamente resaltaba la necesidad de mantener y expandir la movilización, y criticaba el hecho que los partidos de la Unidad Popular hubieran permitido que los comités de la coalición que habían trabajado durante la campaña pasaran a desuso. Por ejemplo, véase el documento interno del partido publicado en *El Mercurio Edición Internacional*, 13-19 de marzo de 1972, p. 5. No queda tan claro, sin embargo, como lo sostienen Zimbalist y Stallings, que los comunistas fueran la principal fuerza tras la política redistributiva (p.11). Los socialistas siguieron apoyando a Vuskovic, el arquitecto principal de esa medida. Los comunistas desaprobaban la movilización, y se manifestaron en contra de abandonar las reglas capitalistas con demasiada rapidez mientras la economía aún permanecía esencialmente capitalista. Ver, por ejemplo, los comentarios de Luis Corvalán en Eduardo Labarca, *Corvalán 27 horas* (Santiago: Quimantú, 1972, pp. 26-27). Pero para el autor no es tan obvio que, en el caso que se hubiera instituido una política de movilización de masas más rápida, la Unidad popular realmente habría podido abandonar el patrón redistributivo. Inculcar nociones de sacrificio económico e incentivos morales en vez de económicos, tomaría largo tiempo más que los seis años del período presidencial. Una mayor movilización probablemente habría intensificado la presión por la redistribución, agravando aún más la situación económica. Las políticas económicas tenían un efecto inmediato. Las medidas políticas, que según algunos planificadores debían acompañar a las medidas económicas, habrían aun en las mejores circunstancias, tomado mucho más tiempo.

demandaron su cuota en los mismos términos que los otros sectores, la economía chilena se vio severamente afectada.

La predisposición favorable del gobierno hacia el mejoramiento económico de prácticamente todo el país contribuyó a un notable aumento en la actividad huelguística. Mientras que en 1969 hubo 977 huelgas, en 1972 esta cifra había saltado a un récord de 3.287. Durante los dos primeros años de Allende la actividad huelguística se elevó en un 170%, sobrepasando con creces el incremento de un 45% experimentado en el período 1964-66. Como se observa en el cuadro 22, la actividad huelguística superó notoriamente la formación de nuevos sindicatos. De hecho, en 1972 la afiliación a sindicatos industriales aún era ligeramente menor que la de 1952 (ver cuadros 7 y 9 para comparar con años anteriores). Un desglose de esta actividad huelguística muestra que en 1971 el 38,6% de las huelgas ocurrió en el sector agrícola, pese a que sus sindicatos sólo representaban el 12,3% del total nacional. Para 1972, sin embargo, la mayor parte de la actividad huelguística se había desplazado hacia las áreas urbanas. Las huelgas de los empleados públicos explican parte de este cambio, aumentando de 132 en 1971 a 815 en 1972, un salto de un 145%. En un modo dialéctico, diversos grupos de los distintos estratos sociales respondían a los intentos del gobierno por mejorar su situación haciendo mayores exigencias.

No cabe duda de que en 1972 la movilización social estaba fuera de control, con frecuencia para la consternación del Presidente que trataba de obtener mayor disciplina interpelando al pueblo. No obstante, el gobierno continuó estimulando

Cuadro 22
Crecimiento de los sindicatos industriales, profesionales y agrícolas durante el gobierno de la Unidad Popular.

Año	Nº de sind. industr.	Nº de miembros de sind. de industr.	Tamaño prom. de sind. por industr.	Nº de sind. profes.	Nº de miembros de sind. de profes.	Tamaño prom. de sind. de profes.	Nº de sind. agric.
1964	632	142.951	226,2	1.207	125.926	104,5	24
1970	1.440	197.651	137,3	2.569	239.323	93,2	510
1971	1.605	205.894	128,3	2.881	252.924	87,8	632
1972	1.781	213.777	120,0	3.511	282.181	80,4	709

Fuentes: Para 1964, ver cuadros 7 y 9. Para 1970, ver *Mensaje del Presidente ante el Congreso Pleno*, 21 de Mayo de 1972, p. 859, 860 y 861. Para 1971 y 1972, ver *Mensaje del Presidente ante el Congreso Pleno*, 21 de Mayo de 1973, pp. 793 y 794. El autor agradece a Henry Landsberger por facilitarle este material.

la indisciplina con sus políticas. Esto no fue sólo un resultado del objetivo redistributivo, también obedeció al hecho que muchas de las huelgas eran fomentadas por los propios funcionarios de gobierno y grupos de la Unidad Popular, en un esfuerzo por acelerar el proceso de estatización de las industrias.

Muchos funcionarios de gobierno creían que las estatizaciones de las industrias, incitadas por acciones de los obreros, contribuirían a su vez a solucionar el problema generado por la creciente demanda. Al controlar los sectores claves de la economía, serían capaces de tomar las decisiones necesarias para controlar la inflación y fomentar la producción. En el cuadro 23 se informa sobre las intervenciones y requisiciones, incluyendo las temporales, hasta el mes de noviembre de

Nº de miembros de sind. agríc.	Tamaño prom. de sind. agríc.	Nº de huelgas	Nº de huelgas por sind.	Nº de trab. en huelga	Nº de trab. por huelga	Ds/hom. perdidos	Días por huelga por trab.
1.658	69,1	564	0,31	138.474	245	869.728	10,6
114.112	223,7	-	-	-	-	-	-
127.782	202,2	2.709	0,52	304.530	112	1.414.313	4,6
136.527	192,6	3.289	0,55	397.142	121	1.654.151	4,2

1972. Estas se aceleraron en períodos de crisis política, como la de fines de 1971 y las de septiembre y octubre de 1972. Al final de 1972 aproximadamente un cuarto de la producción industrial estaba en manos del Estado.³³

El problema fue que la intervención estatal en la industria conllevó problemas no previstos, los que agravaron las dificultades económicas en vez de disminuirlas. Algunos de estos problemas eran políticos y otros económicos. Así que la

33. *El Mercurio Edición Internacional*, 31 de enero-6 de febrero de 1972, p. 5. Un extenso documento del PIR, exponiendo su posición, se produce en esta edición. Debe señalarse que la visita de Fidel Castro a Chile a fines de 1971 sin duda tuvo un efecto negativo sobre la percepción del gobierno por parte de la clase media. Castro estuvo en Chile desde el 10 de noviembre al 4 de diciembre de 1971, y cada uno de sus movimientos contó con amplia cobertura periodística. Para una recopilación de los discursos y conferencias de prensa de Castro, véase *Fidel en Chile* (Santiago, Quimantú, 1972).

Cuadro 23
Número de empresas requisadas e intervenidas por períodos
bimensuales, noviembre 1970 - noviembre 1972.

Período	Intervenciones	Requisiciones	Total
Noviembre-diciembre 1970	37	1	38
Enero-febrero 1971	23	-	23
Marzo-abril 1971	1	5	6
Mayo-junio 1971	12	12	24
Julio-agosto 1971	9	6	15
Septiembre-octubre 1971	24	7	31
Noviembre-diciembre 1971	21	9	30
Enero-febrero 1972	13	6	19
Marzo-abril 1972	14	7	21
Mayo-junio 1972	16	3	19
Julio-agosto 1972	7	18	25
Septiembre-octubre 1972 ^a	23	48	71
Noviembre-diciembre 1972	2	4	6
Total	202	126	328

^a Durante los "sucesos de octubre" un gran número de empresas fueron intervenidas o requisadas por haber participado en los paros patronales. La mayoría de estas empresas fueron devueltas más tarde a sus propietarios.

Fuente: Basado en Instituto de Economía, *La economía chilena en 1972*, pp. 116 ss.; citado en Stefan de Vylder, *Allende's Chile: The Political Economy at the Rise and Fall of the Unidad Popular* (Cambridge: Cambridge University Press, 1976), p. 146.

estatización se encontró con una reacción fuerte y hostil de parte de los grandes y de los pequeños empresarios, y sus aliados. La gran mayoría de las empresas no estaba en peligro alguno de ser estatizada. No obstante, ellos también temían que sus empresas fueran expropiadas. El sabotaje y el acaparamiento se convirtieron en la orden del día. En enero de 1972, el Partido de Izquierda Radical (PIR), todavía miembro de la Unidad Popular, instó al gobierno para que emitiera una de-

claración pública aclarando los criterios de su política de regulación económica con el propósito de que las pequeñas y medianas industrias retornaran a sus operaciones normales. Ellos señalaban que la incertidumbre originada por la estatización de empresas había producido un descenso de un 8% de la inversión total y un descenso de un 20% de la inversión privada.³⁴ El sabotaje de la derecha, la incertidumbre económica y la perturbación de las operaciones de las fábricas contribuyeron a las dificultades productivas del segundo año del mandato de Allende, agravando la dificultad para satisfacer la demanda.

Pero el sabotaje y la indisciplina laboral eran sólo parte del problema. Muchas empresas habían estado mal administradas o abandonadas, y al pasar a formar parte del área estatal demostraron ser una carga más que algo al haber.³⁵ Además, e irónicamente, la propia política de aumento salarial y de congelamiento de precios, que debía ser respaldada por un considerable control estatal de la economía, de hecho perjudicó tanto a las industrias y corporaciones estatales como a las empresas privadas. Varias industrias controladas por el gobierno se encontraron cercanas a la bancarrota y se vieron forzadas a recurrir al Banco Central para solicitar créditos que les permitieran mantener su solvencia económica. El Banco Central, sin respetar los procedimientos presupuesta-

34. De Vylder, *Allende's Chile*, p. 99.

35. Esta sección se basa principalmente en extensas entrevistas realizadas en Santiago en agosto de 1974 con altos funcionarios de la Oficina de Presupuesto que habían trabajado durante el gobierno de Allende.

Cuadro 24
Aumento de la emisión de dinero y de precios, diciembre de 1970 a julio de 1973 (en porcentaje).

Período	Aumento de la emisión de dinero	Aumento de los precios
Diciembre 1970-diciembre 1971	110,5	22,1
Diciembre 1971-diciembre 1972	169,9	163,4
Enero 1972-enero 1973	190,5	180,3
Febrero 1972-febrero 1973	198,2	174,1
Marzo 1972-marzo 1973	198,2	183,3
Abril 1972-abril 1973	210,9	195,5
Mayo 1972-mayo 1973	230,2	238,5
Junio 1972-junio 1973	257,4	283,4
Julio 1972-julio 1973	286,7	323,6

Fuente: *El Mercurio*, 26 de agosto de 1973.

rios normales, prestó enormes sumas de dinero a las industrias estatizadas así como a otras entidades gubernamentales. Esto resultó ser un factor importante, responsable de nuevas emisiones de moneda (véase el cuadro 24), lo que a su vez aumentó las presiones inflacionarias. Durante el año fiscal 1971-72 el déficit del gobierno subió de 10 a 26 mil millones de escudos.

Es importante destacar que el ritmo con que aumentó el número de entidades que recurrían al Banco Central para evitar la quiebra tuvo serios efectos políticos y económicos. Contribuyó a que el gobierno perdiera el control y la autoridad centralizada sobre la estructura financiera general, dificultando aún más la posibilidad de revocar ciertas medidas. Para la Oficina de Presupuesto y el Ministerio de Hacienda cada vez

era más difícil coordinar el presupuesto del sector público y simultáneamente mantenerse al día con el vasto aparato estatal. Durante el gobierno de Allende, el Ministerio de Hacienda no sólo perdió la responsabilidad de planificar la política económica general, que recayó en el Ministerio de Economía dirigido por Vuskovic, sino también perdió una parte considerable del control del proceso presupuestario. En este clima de crisis, el sobrecargado y descentralizado sector público chileno, fue poniéndose cada vez menos manejable. El audaz esfuerzo por lograr el dominio de los sectores esenciales de la economía no ayudó a contrarrestar los efectos adversos de las políticas expansionistas iniciales; por el contrario, sólo creó más dificultades, imposibilitando aún más su solución.

Las dificultades de la política económica y de la gestión del gobierno tenían raíces políticas más básicas que pueden atribuirse a la naturaleza de la coalición de un gobierno que trataba de operar dentro de las reglas de la política chilena tradicional. Los partidos de la Unidad Popular deseaban producir un cambio en la sociedad chilena, a menudo en diferentes direcciones, pero también deseaban maximizar el poder de sus propios partidos, de acuerdo con las prácticas de la tradicional política partidista chilena. Aunque los partidos podían recurrir a las concentraciones y la violencia ocasional, en última instancia, su "poder efectivo" se medía a través del triunfo electoral. Esto continuaba siendo lo más importante en la política chilena, e indirectamente todas las colectividades políticas, incluyendo al MIR, se volcaban a las urnas y se preocupaban por el clientelismo y las recompensas electorales. Es-

to hacía muy difícil imponer cualquier tipo de control centralizado, o darle una dirección definida al programa de gobierno. El Presidente no sólo tenía que dedicar gran parte de su tiempo a solucionar huelgas y disputas de los empleados públicos y de sindicatos y asociaciones del área privada, sino que además tenía que lidiar con la orquestación de una enorme y compleja coalición de gobierno.

Desde el principio los partidos de la Unidad Popular desarrollaron un complejo sistema de cuoteo para dar acceso a cada colectividad política a los beneficios disponibles por medio del gobierno. Desde los puestos ministeriales, pasando por los subsecretarios hasta los funcionarios más bajos en el escalafón de la burocracia estatal, se instituyeron elaborados esquemas para repartirse los cargos y la responsabilidad del sector público. Por lo general el sistema de cuoteo político se fijó de acuerdo a la fuerza electoral de cada partido. Los conflictos y las disputas eran comunes. Por ejemplo, cuando el intendente de Valparaíso renunció, los radicales, que consideraban que el cargo les pertenecía, temían que éste les fuera negado. Estaban particularmente preocupados porque su fuerza electoral había bajado considerablemente en la elección municipal de 1971. Después de un infructuoso debate, Allende optó por designar a un militar "neutral" para el cargo -un presagio de lo que habría de venir.

También surgieron escisiones al interior de los organismos estatales. La pesada carga de las prácticas burocráticas junto con las divisiones de los partidos disminuyó la eficacia de las acciones de los organismos encargados de ejecutar el

cambio programado por el gobierno. Por ejemplo, el vicepresidente socialista del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), uno de los organismos claves en el fomento de la reforma agraria, fue criticado públicamente por los líderes del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) como parte de una lucha por el poder que estremeció a la institución.³⁶ Las dificultades de la coalición se acentuaron, producto del creciente fraccionamiento de los partidos del centro político, que estaban claramente atrapados por las tendencias centrifugas de la política chilena. Después de las elecciones municipales el Partido Radical sufrió una nueva división luego que una facción numerosa alegara que la directiva radical se había aproximado demasiado a las posiciones marxistas. Aunque el resultante Partido de Izquierda Radical (PIR) permaneció temporalmente en la coalición de gobierno, ya se trataba de una nueva entidad política con la cual había que tratar. El MAPU también se dividió cuando un sector decidió unirse a un fragmento del Partido Demócrata Cristiano que se había separado de aquél para formar la Izquierda Cristiana. El fraccionamiento dificultó aún más la compleja tarea de distribuir los beneficios o las prebendas a los distintos sectores de la coalición. Allende declaraba: "Ahora hay más fuerzas que apoyan al Gobierno, pero su base se está debilitando por problemas internos de los propios partidos".³⁷ A pesar de sus llamados a la creación de un solo partido formado por los parti-

36. Véase *Posición*, 4 de julio de 1972, p. 12. Allende criticó duramente estas prácticas. Véase *Allende: Su pensamiento político*, p. 274.

37. Conferencia de prensa publicada en *El Mercurio Edición Internacional*, 2-8 de agosto de 1971, p. 1.

dos pertenecientes a la coalición de la Unidad Popular, la tradición de "ir solo" demostró estar demasiado arraigada.

Los problemas del reparto clientelístico y el cuoteco político se acrecentaron con la estatización de las industrias. Los interventores eran designados, especialmente en las últimas etapas, en gran medida como un premio a la actividad del partido y para asegurar que algunas facciones y partidos tuvieran sus "propias" industrias. Muchos interventores eran muy competentes y sacrificados. Otros, en cambio, se hicieron famosos por su falta de conocimiento de la industria que supuestamente regulaban y por el elemento de corrupción política que introdujeron. En marzo de 1972 el Partido Comunista emitió una fuerte crítica de los interventores, señalando que con frecuencia no eran más que simples sustitutos de los dueños anteriores, viviendo en las mismas casas y disponiendo de los mismos autos. Pedía un plan claro y conciso para el desarrollo del país.³⁸

Finalmente, la política del cuoteco y los nombramientos políticos provocó una significativa pérdida de autoridad en los organismos gubernamentales a la vez que en las industrias conducidas por el Estado. Los obreros rehusaban acatar las órdenes de gerentes que pertenecían a otros partidos.³⁹ Con

38. *El Mercurio Edición Internacional*, 13-19 marzo de 1972, p. 5. En la misma página véase la crítica del Partido Socialista a la competitividad partidista entre las colectividades políticas de la Unidad Popular. La crítica interna fue planteada en varias reuniones de la Unidad Popular. Algunas de las reuniones importantes fueron la de El Arrayán en marzo de 1972 y la de Lo Curro en junio de 1972.

39. Para una discusión sobre las constantes exhortaciones de Allende a poner fin a la indisciplina laboral, y un recuento de esos problemas, véase Henry Landsberger y Tim McDaniel, *Hypermobilization in Chile, 1970-73*, *World Politics*, 28(4): 502-43, julio de 1976.

frecuencia las decisiones más sencillas en las fábricas tenían que tomarse en reuniones de los partidos, o mediante órdenes de autoridades de partido fuera de la fábrica. Quizás el ejemplo más ilustrativo de este problema tuvo lugar en las minas de cobre cuando, temprano en la administración de Allende, se designó gerentes comunistas. Los sindicatos controlados por el Partido Unión Socialista Popular (USOPO), un partido de izquierda que no pertenecía a la coalición de gobierno, tuvieron fuertes discrepancias con los gerentes comunistas. En enero de 1972, este partido emitió la siguiente declaración:

"La Unión Socialista Popular estima y lo hace público, que el Partido Comunista, en lo que se refiere al mineral de Chuquicamata, tiene que cambiar de conducta en su trato con los trabajadores.(...) Hemos podido comprobar su afán decidido a ejercer su predominio partidario a cualquier costo, sin reparar en los medios ni en las consecuencias que ellos provocan a los intereses de los trabajadores y a la economía del país".⁴⁰

En consecuencia, la rivalidad política y el sistema de cuotas no sólo disminuyó la eficiencia del gobierno y condujo a serias divisiones y conflictos políticos, sino que también reforzaron las tendencias descentralizadas y autónomas de buena parte del aparato estatal chileno, haciendo aún más difícil que quienes elaboraban las políticas pudieran imponer su autoridad y establecer la dirección general del gobierno.

40. *El Mercurio Edición Internacional*, 31 enero-6 febrero de 1972, p. 6.

Si bien este estudio ha recalcado la importancia del clientelismo y las consideraciones electorales como factores que contribuyeron en buena parte a las dificultades de coordinación y gobernabilidad, sería un grave error no reconocer las profundas discrepancias y diferencias ideológicas al interior de la coalición. Ambos elementos interactuaban entre sí, contribuyendo no sólo a la falta de dirección de los esfuerzos del gobierno, sino también a la imposibilidad de responder de manera unificada y eficaz cuando una acción decisiva era requerida. De hecho las discrepancias ideológicas dieron como resultado que diversos sectores al interior del gobierno de la Unidad Popular con frecuencia trabajaran con propósitos cruzados entre sí. Los socialistas ponían el énfasis en la movilización social y la participación de los trabajadores, mientras que los comunistas abogaban por un proceso más lento con el objeto de consolidar lo logrado en el control de los sectores productivos de la economía. Algunos militantes del Partido Socialista y de partidos más pequeños, como el MAPU, querían forzar una movilización social radical y expropiaciones forzadas, y destacaban la necesidad de prepararse para un conflicto armado. La izquierda sabía que sólo actuando en conjunto podía lograr los objetivos propuestos; sin embargo, las discrepancias sobre las políticas a seguir socavaron la posibilidad de una acción concertada.⁴¹

41. Para la posición del MIR, ver su periódico *El Rebelde*. Una prestigiosa revista de opinión, *Punto Final*, solía tener posturas cercanas a las del MIR. El diario oficial del Partido Comunista era *El Siglo*, aunque el partido tenía varias publicaciones, incluyendo, por ejemplo, *Ramona*, para un público más popular. El principal diario socialista era *Las Noticias de Última Hora*. Además semanarios como *Ma-*

En especial, después que las consecuencias negativas de las primeras medidas se hicieron evidentes, tanto el Presidente como el Partido Comunista adoptaron una actitud más crítica respecto a la estrategia de llevar a cabo la estatización con la mayor celeridad posible. Las tensiones al interior de la Unidad Popular salieron a la luz pública en diciembre de 1971, cuando algunos partidos de la coalición, que juntos presentaban un candidato en una elección complementaria, llamaron a no compensar a los terratenientes por la expropiación de sus tierras. El Partido Comunista condenó duramente esta declaración.

Una de las muestras más graves de la división entre los partidos tuvo lugar en la ciudad de Concepción en el otoño de 1972, cuando ciertos miembros regionales de la Unidad Popular, en alianza con el MIR, intentaron impedir por la fuerza una concentración autorizada de la oposición. Ellos afirmaban que estas marchas alentaban a los grupos fascistas y debilitaban al gobierno de la Unidad Popular. La policía se vio forzada a intervenir en la refriega, y en ella un estudiante, miembro de un grupo de extrema izquierda, resultó muerto.

Hubo una reacción inmediata y generalizada ante la

yoría y el excelente *Chile Hoy* generalmente tenían puntos de vista acordes con los del Partido Socialista. *Clarín* y *Puro Chile*, dos tabloides sensacionalistas, también apoyaban al gobierno. El diario oficial del gobierno era *La Nación*. Debe destacarse que el liderazgo de la izquierda no tenía necesariamente relaciones muy estrechas. Un hecho muy revelador es que el secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalán, y Salvador Allende, colegas en numerosas luchas, no usaban el familiar tú en el trato personal entre ellos. Además los líderes comunistas, en particular, no se relacionaban socialmente con frecuencia con líderes de otros partidos de izquierda. Véase Labarca, *Corvalán 27 horas*, p. 199. Corvalán también señala que las rivalidades entre los partidarios eran especialmente intensas (p. 198).

muerte del estudiante y el enfrentamiento. Con la excepción del Partido Comunista, las organizaciones regionales de la coalición exigieron la destitución inmediata del intendente de la provincia, un militante comunista, y la disolución de la policía antimotines. En la capital, los manifestantes expresaron su furia gritando consignas tales como: "El reformismo abre la puerta al fascismo" y "Abajo con la política de conciliación". La organización regional de la coalición emitió una declaración en la cual sostuvo que lo acontecido en Concepción mostraba la existencia de dos corrientes políticas en la ciudadanía:

"Una [corriente] cree que se puede condescender con los enemigos del pueblo, lo que en el hecho significa olvidar la existencia de la lucha de clases, que busca apoyarse básicamente en el aparato del Estado y no en el poder del pueblo y de las masas y que, incluso, apunta a la represión de aquellos sectores de la izquierda que no comparten su política de conciliación. (...)

La otra política se afirma en la convicción de que no es posible la conciliación con los enemigos de la clase trabajadora. Sostiene que las contradicciones entre explotadores y explotados se mantienen y agudizan. Sostiene que es necesario apoyarse en la fuerza y movilización organizada de las masas, rechazando toda expresión de dogmatismo y sectarismo en el seno del pueblo. (...) Esta política rechaza la tendencia de asignar en los hechos al Gobierno popular un carácter neutral y exige que la fuerza de Gobierno se sume a la fuerza del pue-

blo para impulsar y encauzar la revolución chilena."⁴²

El Partido Comunista, en una conferencia de prensa realizada por su secretario general, condenó duramente los acontecimientos de Concepción y afirmó que los otros partidos de la Unidad Popular y el MIR habían tomado "un camino equivocado". Y agregaba:

"Que quede bien claro que nosotros estamos por el reconocimiento de los derechos de la oposición que se manifiesten dentro de los marcos legales. (...) Pensamos que no hay ninguna posibilidad hoy, en el minuto presente, para modificar esta legalidad, esta institucionalidad, por ningún camino, ni a través del camino legal ni a través del camino extralegal. Creemos que hay urgencia en cerrar filas en tomo al Programa de la UP, al Gobierno de la UP, al Presidente de la República y que es posible también la correlación de fuerzas pues no son fascistas todos los que no están en el Gobierno (...). Ser revolucionario no es hacer tomas, porque eso es muy fácil cuando se sabe que hay un gobierno que no reprime. Ser revolucionario es trabajar en la batalla de la producción (...). En esto desafortunadamente no hay una sola posición".⁴³

42. Tomado del Manifiesto de Concepción publicado el 22 de mayo de 1972 y reproducido en varios diarios. Para un resumen, ver *El Mercurio Edición Internacional*, 22-28 de mayo de 1972, p.1.

43. Ver la transcripción de su conferencia de prensa en *El Mercurio*, 27 de mayo de 1972, p. 25. Para las críticas de Allende a la ultra izquierda véase *Allende: Su pensamiento político*, pp. 211-12.

Este debate ilustra claramente el dilema enfrentado por Allende y por los sectores más centristas de su coalición. Debido a las obligaciones electorales y clientelistas, y a raíz de las serias discrepancias sobre la política que debía seguirse, Allende tenía poco control sobre las acciones de muchos funcionarios y partidos de gobierno. Un gran político, un experto en resolver los conflictos de rutina, sin embargo, no fue capaz de imponer un curso definido, ya fuera uno que provocara una rápida y decidida confrontación, a la cual él se oponía, o un curso moderado, al cual él adscribía pero que no lograba seguir de manera consistente. Como un maestro del arte de lo posible, Allende estaba siendo conducido más y más hacia una situación imposible. Radomiro Tomic interpretó muy bien el dilema de Allende cuando dijo en agosto de 1971: "El gobierno de la UP está obligado a vivir de expedientes cotidianos al servicio de objetivos limitados que son los únicos a su alcance (...)".⁴⁴ Paradojalmente, si el asunto hubiera sido simplemente uno de diferencias en las perspectivas ideológicas, habría sido posible lograr cierta acomodación y establecer nuevas líneas de acción (tal como la coalición intentó hacerlo, con mayor o menor éxito, en sus connotadas reuniones de "autocrítica"). Pero el problema político era más amplio que el diseño de una estrategia global. También incluía las tensiones políticas dentro de una coalición heterogénea y, como señalaremos más adelante, involucraba una confrontación cíclica y en escalada con la oposición que redujo aún más las opciones posibles.

44. *El mercurio Edición Internacional*, 9-15 de agosto de 1971, p. 5.

Con el tiempo el problema de la violencia adquirió una creciente importancia. Este, junto con las enormes dificultades de la economía, se convirtió para Allende en un problema insoluble. El podía rogar e intentar persuadir, como lo hizo en una reunión pública en Concepción y en un debate frente a frente con el MIR, pero no podía reprimir a la izquierda revolucionaria ni a aquellos sectores de la coalición partidarios de los actos espontáneos. Allende tenía demasiado respeto por los símbolos de la revolución cubana y de la lucha guerrillera en otras partes de América Latina, como para dejar que se le considerara un traidor a la causa "revolucionaria".⁴⁵ En 1969 algunos pobladores resultaron muertos en una confrontación con la policía, y el hecho se convirtió de inmediato en un desastre nacional, por lo que se acusó al ministro del Interior y al propio Presidente Frei como responsables de la masacre. Un presidente del pueblo simplemente no podía arriesgar un enfrentamiento de ese tipo, especialmente en vista del anterior significado político de tales tragedias. De hecho, cuando la policía mató a un poblador, Allende fue en persona y prácticamente solo a pedir disculpas por el incidente. La posición del gobierno en esta materia era permanentemente destacada por el secretario general del Partido Comunista cuando criticaba a la izquierda: "Ni el Presidente de la República, Salvador Allende, ni los partidos de la UP y en primer lugar el Partido Comunista, pensamos ni de lejos que debemos tomar medidas represivas contra aquellos grupos de obreros, campesinos y estudiantes que sobrepasan la legali-

45. Ver Debray, *Chilean Revolution*, especialmente pp. 72-77.

Cuadro 25
Respuestas a la pregunta: "¿Cree Ud. que actualmente en Chile se vive un clima de violencia?".

	GRUPO SOCIOECONOMICO			Total %
	Alto %	Medio %	Bajo %	
Sí	98	92	75	83
No	2	8	25	17

Fuente: *Ercilla*, 13-19 de septiembre de 1972, p. 11.

dad. Esto lo sabe el MIR y de ello abusa".⁴⁶ No obstante, la violencia izquierdista muchas veces era sólo la respuesta a la violencia derechista, la que, hacia el término del gobierno de Allende, eventualmente opacaría la violencia izquierdista, en un círculo vicioso -cada vez más amenazante- de acción y reacción.

Un sondeo de opinión realizado en agosto de 1972 demuestra en forma dramática que la violencia como tal se había convertido en un tema de suma importancia. Como lo indica el cuadro 25, el 83% de las personas encuestadas opinó que en el país se vivía un clima de violencia. Si bien el 98% de los encuestados pertenecientes al grupo socioeconómico alto estaba de acuerdo con esa afirmación, ésta también era compartida por el 75% del grupo socioeconómico bajo. Lo que es más importante, sin embargo, es la distribución de la responsabilidad por la violencia. El cuadro 26 muestra que los chi-

46. *El Mercurio*, 27 de mayo de 1972, p. 25.

Cuadro 26

Respuestas a la pregunta: "Si Ud. cree que actualmente en Chile se vive un clima de violencia, ¿cree Ud. que ella es propiciada por el Gobierno o por la Oposición?"

	GRUPO SOCIOECONOMICO			Total %
	Alto %	Medio %	Bajo %	
Gobierno	36	27	18	23
Oposición	7	20	35	27
Los dos sectores	54	44	22	33
Otros (ultras)	1	1	-	-
No se vive un clima de violencia	2	8	25	17

Fuente: *Ercilla*, 13-19 de septiembre de 1972, p. 11.

lenos culpaban a ambos bandos, tanto al gobierno como a la oposición, de fomentar la violencia. Como era predecible, el grupo socioeconómico más alto culpaba principalmente al gobierno, mientras que el grupo socioeconómico más bajo culpaba a la oposición. Lo que es aun más revelador, sin embargo, es que la mayoría de los encuestados pensaban que el gobierno era el principal responsable de la violencia o compartía cierta responsabilidad por ella. Incluso un 18% de los encuestados de nivel socioeconómico bajo, opinaba que el gobierno era por lo menos culpable en parte del clima de desorden. Esto claramente presentaba un grave problema para la legitimidad de la autoridad en Chile. No sólo se veía al gobierno como incapaz de controlar la violencia, sino que un porcentaje considerable de la población creía que era responsable por la violencia. Como Juan Linz señala, el problema del orden es

uno de los que más perturba a un régimen democrático. Es aún más perturbador para un régimen democrático que intenta llevar a cabo transformaciones sustanciales de la sociedad con una coalición heterogénea y desorganizada, y un sinnúmero de limitaciones políticas institucionales en un clima de crecientes dificultades económicas.⁴⁷

La oposición

Los problemas políticos y económicos del gobierno se vieron agravados por las serias dificultades con la oposición. El proceso era dialéctico: las objeciones de la oposición en parte se debían a las políticas del gobierno y las políticas del gobierno en parte se debían a las reacciones de la oposición. El acaparamiento y el sabotaje en ciertas industrias, tanto nacionales como extranjeras, empeoraron la situación y forzaron al gobierno a adoptar una posición más fuerte y agresiva. Fondos provenientes del extranjero fueron para financiar una campaña de propaganda masiva a través de la prensa de derecha destinada a desacreditar al gobierno. Se exageraba cada incidente de violencia, cada enfrentamiento, cada ítem económico negativo, aumentando así la polarización del cli-

47. Es necesario destacar que gran parte de la violencia fue exagerada por los relatos de la prensa. Los grandes titulares y los alarmantes noticieros de radio y televisión daban la impresión que lo que había sido un incidente aislado había asolado a toda la nación. Queda en claro que con el relajo de la represión gubernamental y la creciente movilización, Chile estaba enfrentando un nivel de confrontación que no se había visto desde los turbulentos años treinta. Pero no cabe duda que la percepción del grado de violencia excedía sus dimensiones reales, y en consecuencia tenía un efecto político exagerado.

ma político y debilitando la economía.

El Partido Nacional se había opuesto a las iniciativas del gobierno desde un principio, cuando sus parlamentarios rehusaron votar por Allende en el Congreso. La única excepción de importancia fue la votación unánime a favor de la reforma constitucional propuesta por el gobierno para efectuar la nacionalización del cobre. Además, el grupo ultraderechista *Patria y Libertad* adoptó la táctica de realizar violentos hostigamientos a personas.⁴⁸ Determinante, sin embargo, fue el papel que jugó el Partido Demócrata Cristiano. Como el partido clave de centro, la Democracia Cristiana hizo posible la elección de Allende y se necesitaba su apoyo permanente para que el gobierno no cayera en conflicto con el Congreso. Como se señaló anteriormente, este entendimiento se rompió a raíz del apoyo de la Democracia Cristiana a ciertas resoluciones relacionadas con materias económicas, aprobadas por el Congreso como un desafío directo al Presidente.

El frágil acuerdo entre la Democracia Cristiana y el go-

48. La postura de la derecha era ampliamente presentada por los medios de comunicación. Para la postura de la extrema derecha, incluyendo *Patria y Libertad*, ver *Tribuna*, *Sepa* y *PEC*. *El Mercurio*, que se desplazaba más y más hacia la oposición desleal, y que se convirtió en principal portavoz de las tendencias archiconservadoras de la junta militar después del golpe de Estado, con frecuencia publicaba inserciones pagadas de los grupos de extrema derecha. Ver, por ejemplo, una declaración a toda página colocada por *Patria y Libertad* para presentar su programa y plan de acción en la edición del 17 de junio de 1972, p. 29. La compañía *El Mercurio* también publicaba otros diarios, como *La Segunda* y *Ultimas Noticias*. *Qué Pasa*, un semanario conservador muy informativo, comenzó a desafiar la posición preeminente detentada por *Ercilla* en el mercado de revistas. Los frecuentes titulares y reportajes provocadores de la derecha están documentados en Michele Mattelart y Mabel Piccine, ¿La prensa burguesa, no sería más que un tigre de papel? *Cuadernos de la Realidad Nacional*, N° 16, abril de 1973, pp. 250-63. Como se verá más adelante, los titulares infamatorios de ambos lados ayudaron a confundir y polarizar el ambiente político.

bierno, alcanzado en torno al Estatuto de Garantías, había comenzado a desmoronarse pocos meses antes. En julio de 1971 se rompió un acuerdo entre el gobierno y los demócrata cristianos que estipulaba que estos últimos detentarían la presidencia del Senado y, a cambio, un representante de la Unidad Popular presidiría la Cámara de Diputados. En ese mismo período, la Democracia Cristiana se unió con el Partido Nacional para presentar un candidato a una elección complementaria, para votar contra el proyecto del gobierno para constituir un Congreso unicameral y, finalmente, después de tres negativas anteriores, se sumó a los nacionales para acusar constitucionalmente a José Tohá, el ministro del Interior. El retiro del apoyo de la Democracia Cristiana en el Congreso hizo posible una serie de intentos de acusación constitucional y confrontaciones entre el Ejecutivo y el Congreso que amenazarían severamente la estabilidad institucional del país. Las dificultades económicas y fiscales se agravarían con la negativa del Congreso a autorizar nuevos tributos para compensar el déficit fiscal.

La dificultad radicaba en que, al igual que Allende, la facción del ala izquierda de la Democracia Cristiana estaba sujeta a presiones no sólo desde el ala derechista del partido sino también de otros partidos.⁴⁹ Las presiones no eran sólo de tipo ideológico, también las había de origen netamente

49. El principal órgano de la Democracia Cristiana era *La Prensa*. Como se señaló anteriormente, el popular semanario *Ercilla* también tenía una orientación demócrata cristiana. Para una perspectiva moderada e izquierdista pro-Democracia Cristiana consultar *Mensaje*. Para una revista más conservadora, ver la revista oficial del partido *Política y Espíritu*.

político, generadas por las exigencias de la supervivencia electoral en un sistema partidista competitivo. Si bien muchos demócrata cristianos compartían varios de los objetivos del gobierno de Allende, como miembros y líderes de un partido de oposición, tenían distintas lealtades e intereses. Sobre todo, necesitaban proteger la autonomía e integridad de su partido y velar por la conservación de su fuerza, definida básicamente en términos del éxito electoral. Como partido de centro, la Democracia Cristiana estaba especialmente preocupada por la posible erosión de la lealtad de cualquiera de sus dos polos. A medida que los intereses del partido adquirieron mayor relevancia, el ala progresista comenzó a perder su influencia hegemónica sobre los asuntos del partido. Desde el punto de vista del liderazgo y los sectores más conservadores había dos factores que contribuían a realzar la importancia de los intereses propios del partido. En primer lugar, el desorden y la violencia que acompañaron los primeros cambios habían tenido un impacto significativo en el partido. La violencia en las zonas rurales y la estatización de las industrias crearon un clima de incertidumbre, que fue hábilmente exagerado por la prensa de derecha. De especial importancia fue el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, un amigo cercano del Presidente Frei y ex ministro del Interior, quien había sido acusado por diversos sectores a causa del "asesinato" de los pobladores de Puerto Montt. Aunque Allende condenó inmediatamente el asesinato, muchos demócrata cristianos pensaron que los medios de comunicación, muchos de los cuales pertenecían a partidos del gobierno, tenían una

gran responsabilidad en la intensificación de los ataques públicos contra Pérez Zujovic y otros miembros del partido. Además, ciertos sectores del partido, relacionados con el sector económico privado de Chile, reaccionaron con horror ante el intento del gobierno por estatizar instituciones comerciales, financieras e industriales. Ya en septiembre de 1971 el senador Renán Fuentealba, demócrata cristiano moderado, sugirió que el gobierno podría estar violando el Estatuto de Garantías. El mencionó especialmente los ataques a ciertas personalidades claves de su partido en la prensa adicta al gobierno, los intentos por censurar los medios de comunicación de la Democracia Cristiana y los incidentes de violencia urbana descontrolada.⁵⁰

La preocupación por la violencia descontrolada, los ataques de la prensa y la velocidad con que el gobierno estaba ejecutando su programa no fueron, sin embargo, las únicas materias que afectaron la posición de la Democracia Cristiana ni las que socavaron la influencia de los progresistas y los moderados. De igual importancia fue el dilema respecto a la supervivencia de un partido de centro con fuerza electoral en un contexto altamente polarizado. En consecuencia, las elecciones municipales de abril de 1971 marcan un punto de cam-

50. Véase su declaración en *El Mercurio Edición Internacional*, 27 de septiembre-3 de octubre de 1971, p. 1. Para una colección muy valiosa de documentos que resumen las posturas de los demócrata cristianos y la oposición a comienzos de 1972, ver Joan Garcés, *Revolución, congreso y constitución: El caso Tohá* (Santiago: Quimantú, 1972). El libro traza el alejamiento de la Democracia Cristiana desde su tentativo apoyo inicial al gobierno y sus pasos a su alianza con la derecha, culminando con la primera acusación constitucional, la del ministro del Interior de Allende, José Tohá.

bio decisivo. En esas elecciones el gobierno obtuvo buenos resultados, mientras que la Democracia Cristiana continuó perdiendo parte de su electorado. Bajo tales circunstancias, cualquier acomodo con el gobierno presentaba un serio riesgo político.

La gravedad de estos problemas políticos hizo crisis en la elección complementaria del 18 de julio de 1971. Como se trataba de un solo escaño, la competencia era necesariamente un juego a suma cero en el cual sólo un candidato podía ganar. Si tanto el Partido Nacional como la Democracia Cristiana presentaban candidatos contra la coalición de la Unidad Popular, esta última tenía una mayor probabilidad de ganar, tal como ocurrió en la elección presidencial. La Democracia Cristiana se vio fuertemente presionada, tanto dentro como fuera del partido, para entrar a una coalición que impidiera el triunfo del gobierno.

Bajo estas difíciles circunstancias, y bajo la iniciativa de los sectores juveniles del partido, los demócrata cristianos le propusieron a Allende que se llegara a un acuerdo para evitar una competencia que polarizaría aun más la política chilena. La propuesta consistía en que el gobierno reconociera que ese escaño le correspondía a la Democracia Cristiana porque anteriormente le había pertenecido a ella y, por ende, la Unidad Popular debería abstenerse de presentar un candidato en esa elección. A cambio, los demócrata cristianos escogerían un candidato que fuera aceptable para el Presidente y se comprometían a respetar el mismo principio en elecciones complementarias futuras.

La propuesta, sin embargo, jamás llegó a concretarse, principalmente porque el Partido Socialista se opuso. El no evitar una competencia polarizada resultó en una candidatura conjunta entre los demócrata cristianos y los nacionales, y en la formación de una alianza política que se mantuvo durante el resto del tiempo que Allende estuvo en el poder.⁵¹ En esta amarga lucha electoral triunfó el candidato de la oposición. Esta contienda aumentó seriamente la polarización de la política chilena, no sólo por la gran publicidad que recibió y la ferocidad de los ataques y contraataques que suscitó, sino también porque la alianza opositora provocó una división en las filas de la Democracia Cristiana. La formación de la Izquierda Cristiana, que brindó su apoyo al gobierno, debilitó aun más la viabilidad de la Democracia Cristiana como una

51. En realidad, los demócrata cristianos se habían acercado incluso antes a Allende, proponiéndole que la competencia entre ambos grupos se mantuviera al mínimo en la elección municipal de 1971. Los demócrata cristianos querían conservar su fuerza sin atacar al gobierno. El gobierno rechazó esta propuesta. El éxito de los socialistas en las elecciones de 1971 les otorgaría justificaciones electorales (sumado a las objeciones ideológicas) para rechazar una alianza con la Democracia Cristiana. Como se señaló anteriormente, los socialistas aumentaron considerablemente su fuerza electoral para convertirse en el principal partido chileno. Bajo tales circunstancias, es comprensible que los socialistas percibieran las propuestas demócrata cristianas como de beneficio propio por lo menos en términos electorales. No obstante, para el autor es evidente que había sectores en el ala progresista de la Democracia Cristiana que estaban genuinamente preocupados por los costos involucrados en una confrontación electoral con el gobierno y preveían los crecientes peligros de una mayor polarización del país. Gran parte de este análisis se basa en entrevistas con altos dirigentes políticos, principalmente demócrata cristianos, realizadas en Santiago, Chile, en los meses de enero y febrero de 1974. En entrevistas posteriores realizadas en ese mismo año, se corroboró la información vertida en las primeras.

opción de centro porque fortaleció el ala derechista del partido. Sectores de ambos lados del espectro político más cercanos al centro, cuya actuación había sido determinante para la estructuración del acuerdo que permitió la elección de Allende, estaban abandonando sus respectivas coaliciones. Como fragmentos de los partidos establecidos, éstos estaban a punto de pasar al olvido en la política, restándoles un papel muy pequeño en un sistema político rigidizado y con mayores confrontaciones.

El fracaso en llegar a un acuerdo centrista

La creciente polarización y la pérdida del apoyo de los demócrata cristianos llevó eventualmente a la aprobación por el Congreso Pleno, el 20 de febrero de 1972, mediante el voto de la mayoría opositora, de un proyecto de reforma constitucional cuyo objetivo era definir el rol del gobierno en la economía del país. La reforma proponía la demarcación de tres áreas económicas: un área estatal, un área mixta (estatal y privada), y un área privada, con límites precisos del poder del Ejecutivo para incorporar nuevas empresas o propiedades de las otras áreas al área estatal. La medida aprobada por la mayoría parlamentaria suscitó el indignado rechazo de los partidos de la Unidad Popular y del Presidente Allende, que querían avanzar en la socialización del país. Por primera vez en décadas, Chile se vio enfrentado a una seria crisis constitucional que amenazaba la supervivencia misma del régimen.

En términos estrictamente jurídicos, la confrontación entre el gobierno y la oposición se produjo porque esta última afirmaba que el Presidente no tenía derecho a vetar las reformas propuestas y que el único modo de resolver este impase, fuera de la renuncia del Presidente a ejercer el veto, era someter esta reforma a un plebiscito nacional. Allende, en cambio, sostenía que él sí tenía derecho a vetar una modificación constitucional y que su veto se mantenía a menos que dos tercios del Congreso lo rechazara. Allende insistía en que una reforma constitucional requería los mismos rígidos procedimientos que la promulgación de cualquier ley. La oposición sostenía que la reforma constitucional de 1970 había creado el mecanismo del plebiscito precisamente para dirimir un eventual impase entre el Presidente y la mayoría del Congreso. En este régimen de estrictas exigencias formales, donde las precisas cláusulas legales eran de suma importancia, las reformas se prestaban para interpretaciones discrepantes de la Carta Fundamental.

La sección de la Constitución, aprobada en 1970, que versaba sobre los procedimientos para efectuar una reforma efectivamente era ambigua. De acuerdo con el artículo 108º, inciso 1º, las reformas constitucionales deben seguir para su aprobación el mismo procedimiento que una ley ordinaria, con algunas excepciones. El artículo luego procede a señalar que para la aprobación de una reforma, una mayoría absoluta de los miembros en ejercicio en cada Cámara debe aprobar la medida en dos oportunidades distintas. El Presidente no puede rechazar el proyecto que le presente el Pleno del Con-

greso. Sólo puede proponer modificaciones y correcciones, o reiterar ítemes que él hubiera propuesto. El último inciso establece que si las observaciones del Presidente son aceptadas por la mayoría de los miembros del Congreso, como lo especifica el inciso 2º (es decir, por mayoría absoluta), entonces el proyecto debe ser devuelto al Presidente para su promulgación. El problema radica en que el último inciso no dice qué sucede cuando el Congreso no aprueba las observaciones del Presidente. Según Allende, dado que el inciso 1º dice que salvo que se disponga otra cosa, una reforma constitucional sigue los mismos procedimientos que una ley ordinaria, y una ley ordinaria requiere el voto de las dos terceras partes del Congreso para sobreponerse a las observaciones presidenciales, entonces, se requería el voto conforme de los dos tercios. El Presidente sostenía que el último inciso, que exige la mayoría absoluta en el Congreso, fue incorporado para asegurar que una reforma constitucional no pudiera ser aprobada sólo por la mayoría de los miembros presentes, como la Constitución lo establece para el caso de una ley ordinaria. Pero este requisito no significaba que la tramitación regular de un proyecto de ley, exigiendo el voto de los dos tercios para sobreponerse al veto presidencial, estuviera desechada. La oposición, por su parte, sostenía que el último inciso implicaba no sólo que se necesitaba una mayoría absoluta para aprobar un veto presidencial, sino que también significaba que el Congreso podía rechazar un veto presidencial con una mayoría simple. Por lo que a la oposición se refiere, el último inciso se incluyó en el artículo 108º no sólo para especificar que se

necesitaba la mayoría absoluta del Congreso para la aprobación, sino también para derogar el requisito del voto conforme de los dos tercios para sobreponerse a las observaciones presidenciales.⁵²

Detrás de este conflicto existían ciertas realidades políticas. El papel que el Congreso jugaba en la política chilena se había reducido drásticamente. Los demócrata cristianos habían apoyado dicha reducción, suponiendo que continuarían en el poder. Irónicamente, ahora sólo constituían el mayor partido en un Congreso que sólo tenía poderes negati-

52. Este autor, si bien reconoce la ambigüedad, se inclina a pensar que la interpretación del Presidente era más sostenible. El articulado establece claramente que se debe seguir todos los procedimientos estipulados para una ley ordinaria, salvo las excepciones indicadas. Dado que las excepciones no hacen referencia alguna a los procedimientos para sobreponerse a los vetos presidenciales, simplemente una modificación del tipo que requiere una mayoría para ratificar dichos vetos, debe seguir la misma tramitación estipulada para la aprobación de una ley ordinaria. Esta interpretación es compartida por Alejandro Silva Bascañán en un libro publicado con anterioridad a la controversia. Silva era un miembro destacado de la oposición. Ver su *Tribunal Constitucional*, en Gustavo Lagos et al., *Reforma constitucional de 1970* (Santiago: Editorial Jurídica, 1970), p. 262. Para la reforma constitucional y su historia legislativa, véase Guillermo Piedrabuena Richards, *La reforma constitucional* (Santiago: Ediciones Encina, 1970). Piedrabuena sostiene que el espíritu de las reformas de 1970, que establecía el plebiscito para resolver conflictos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, sugiere que el impase debe ser entre el Presidente y la mayoría, no una mayoría de los dos tercios del Congreso (p. 129). Este es un argumento convincente, bastante lógico, aunque no soluciona la ambigüedad del texto. El Tribunal Constitucional, creado para resolver este tipo de problemas, rehusaría aclarar este asunto en junio de 1973. Finalmente, es necesario agregar que Allende probablemente sobrepasó lo estipulado en el artículo 108 con sus vetos de la medida, lo que equivalió a una rotunda negativa a muchas disposiciones del proyecto de reforma. Para un artículo que apoya la posición de la oposición, véase Jaime Navarrete, *Observaciones del Presidente de la República y reforma constitucional*, en *El Mercurio*, 28 de marzo de 1971. Para un artículo que apoya la posición del Presidente ver Julio Silva Solar, Diputado Julio Silva demuestra legalidad de tesis presidencial, en *La Nación*, 17 de abril de 1972.

vos. Podía rechazar o aprobar, pero ya no podía negociar o pactar. Había desaparecido la arena de acomodación y para contrarrestar los intentos del Presidente por llevar a cabo su programa era necesario contar con los suficientes votos como para superar un veto. En el Congreso, la oposición controlaba menos de los dos tercios, y Allende claramente continuaba en una posición de fuerza. El poder con que ahora contaba el Ejecutivo significaba que era posible llevar a cabo iniciativas gubernamentales de gran envergadura sin el consentimiento del Congreso. No obstante, Allende y sus asesores estaban conscientes de que probablemente no podrían ganar un plebiscito basado simplemente en un sí y un no, en caso de que se vieran forzados a someter alguna materia fundamental al veredicto de la ciudadanía. Había desaparecido la confianza que el Presidente tenía inicialmente de poder lograr que la mayoría del país apoyara su programa.

En 1972 hubo dos ocasiones en que se iniciaron conversaciones entre la Democracia Cristiana y el gobierno para tratar de resolver el impase surgido en torno a las reformas constitucionales. Políticos de centro de ambos lados del espectro se daban cuenta de que las reformas aprobadas por el Congreso sobre las áreas de la economía incorporaban ciertas ideas que eran congruentes con la plataforma de la Unidad Popular. Pero no sólo había problemas ideológicos que resolver, también estaban en juego cuestiones políticas de tipo práctico. El gobierno no quería que la oposición estipulara los términos de cada nacionalización; la Democracia Cristiana, por su parte, temía que si demasiadas industrias caían en manos de los partidos del gobierno, su posición política se vería seve-

ramente debilitada.

La primera ronda de conversaciones, en marzo de 1972, confiadas por Allende al centrista Partido Izquierda Radical, tropezó inmediatamente con dificultades porque el ministro de Economía -quien miraba en forma escéptica este intento por lograr un acuerdo- se dispuso a expropiar a la fuerza algunas industrias importantes contempladas en el plan del área social diseñado por el gobierno. El PIR y el Partido Radical se opusieron, argumentando que esa acción no había sido aprobada por los partidos de la coalición de gobierno. El ministro, Pedro Vuskovic, con el respaldo de otros sectores del gobierno, especialmente los socialistas, intentaba presentar a los negociadores una situación de hechos consumados. Las acciones de Vuskovic y la oposición de los socialistas a la negociación provocaron la cancelación de las conversaciones a comienzos de abril. La presión ejercida por la izquierda también contribuyó a la erosión de la posición centrista al interior del gobierno cuando el PIR decidió renunciar al gabinete y se unió a la oposición, argumentando que el gobierno no tenía una intención seria de evitar un conflicto entre los poderes constitucionales. La acción del PIR debilitó aun más las probabilidades de éxito de futuros intentos de negociación. El alejamiento del PIR puso seriamente en duda la constante afirmación del gobierno sobre la amplitud ideológica de la coalición de la Unidad Popular, basándose en el hecho que ésta incluía sectores intermedios no marxistas. También significó la pérdida de un grupo que incluía a prestigiosos líderes políticos como los senadores Luis Bossay y Alberto Baltra. Allen-

de, reticente a romper con su propio Partido Socialista, interpretó la ida del PIR como una traición personal y aceptó con agrado la renuncia de sus ministros.⁵³ Mientras que los socialistas afirmaban que el PIR siempre había sido un representante de la clase dominante, el Partido Comunista lamentó la erosión del apoyo al gobierno. Tal como la decisión de aliarse con los nacionales había privado a los demócrata cristianos de algunos elementos de su ala más izquierdista, los intentos por alcanzar un acuerdo con el gobierno contribuyeron a una mayor erosión de una postura de centro, esta vez del ala derecha del gobierno. La posibilidad de un consenso de centro se hizo aún más difícil por la tendencia de las fuerzas centrífugas chilenas a fragmentar el centro político. La fragmentación del centro ahora se había convertido en causa a la vez que en el síntoma de la profunda crisis.

La ruptura de las conversaciones fue seguida, en las semanas sucesivas, por enormes concentraciones en las calles de Santiago, organizadas tanto por el gobierno como por la oposición, huelgas de los médicos, una acusación del MIR de que los militares estaban planeando un golpe de Estado, huelgas en la gran minería del cobre y una tensa elección de rector en la Universidad de Chile, en la que el candidato de gobierno perdió por un margen considerable.

A principios de junio, en este clima de conflicto político y en medio de una situación económica que empeoraba, los partidos de la Unidad Popular se reunieron para una nue-

53. Para una recopilación de documentos sobre estas conversaciones, véase Oficina de Informaciones del Senado, Reforma Constitucional que crea áreas de la economía nacional, *Boletín de Informaciones General*, N° 99, 17 de abril de 1972.

va ronda de "autocrítica". Allende, apoyado principalmente por el Partido Comunista, intentó hacer frente a la ola de anarquía mediante un cambio de dirección. Relevó a Vuskovic del rol dominante que ejercía en la elaboración de políticas económicas y nombró a Orlando Millas, un destacado intelectual comunista, en el importante cargo de ministro de Hacienda. El gobierno también hizo un llamado a renovar los esfuerzos por alcanzar un acuerdo con la Democracia Cristiana respecto al latente impase constitucional. En junio de 1972 se iniciaron las conversaciones secretas -que más tarde se hicieron públicas- con el ministro de Justicia, un radical, como representante del gobierno. Millas, por su parte, señalaba que "sería funesto seguir ampliando el número de los enemigos y, por el contrario, deberán hacerse concesiones y, al menos, neutralizar a algunas capas y determinados grupos sociales, enmendando desaciertos tácticos".⁵⁴ Sin embargo, una vez más, la posición del Partido Comunista no fue apoyada adecuadamente por el Partido Socialista, cuya cúpula dio su consentimiento a las conversaciones en forma reticente. Vuskovic expresaba el sentir de los socialistas cuando dijo: "No puede consolidarse lo avanzado hasta hoy en tanto los enemigos de los trabajadores conserven bases muy importantes de sustentación. Completar el área social es requisito no sólo para avanzar hacia el socialismo, sino incluso para defender lo ya adelantado".⁵⁵

54. Citado en *Las Noticias de Última Hora*, 30 de junio de 1972, p. 4.

55. *Ibíd.* Para la posición del Partido Comunista y el Partido Socialista en ese momento, ver los artículos en *Mayoría*, 1(37): 10-13, 28 de junio de 1972.

En la oposición, los sectores centristas nuevamente señalaron la necesidad de alcanzar un acuerdo. El senador Fuentealba del PDC declaró:

"Aparte de este conflicto jurídico, existe el peligro de enfrentamiento que puede producirse como consecuencia del conflicto jurídico. Va a venir la lucha si esto sigue adelante y no se producen acuerdos; la lucha en la calle; la lucha de poder en concentraciones, de manifestaciones, de foros (...). Se va a producir en el país un período de agitación cuyas consecuencias nosotros tememos que puedan ser graves para la tranquilidad del país y para el desenvolvimiento normal del proceso democrático".⁵⁶

Pero, la derecha atacó severamente a Fuentealba y a sus colegas por no estar conscientes de la "amenaza comunista",⁵⁷ y la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, que representaba a la más amplia coalición de intereses económicos, emitió una declaración en la que expresaba: "La experiencia sufrida hasta ahora obliga lamentablemente a mirar con escepticismo este nuevo diálogo a nivel parlamentario, sin la participación de los gremios".⁵⁸

56. *La Prensa*, 25 de junio de 1972

57. Ver *PEC*, 30 de junio de 1972, p. 3. La fuerza de estos sentimientos se refleja en algunos comentarios que Sergio Onofre Jarpa, el presidente del Partido Nacional, hizo a Tomás Pablo, un senador demócrata cristiano, en un corredor del Senado. Los comentarios fueron reproducidos en *El Mercurio*, 15 de junio de 1972, p. 15.

58. *Ercilla*, 16-22 de junio de 1972, p. 17. Los gremios inundaron los diarios con avisos oponiéndose a las conversaciones. Para un ejemplo, ver *El Mercurio*, 16

En las conversaciones se logró un progreso considerable y en principio se elaboró un acuerdo básico. Este consistía de siete puntos principales:

1. El traspaso al área estatal o al área mixta de aproximadamente ochenta de las industrias más estratégicas, extranjeras y nacionales. El acuerdo incluía las normas para la compensación.

2. Un requisito que estipulaba que en el futuro se necesitaría una ley específica del Congreso para traspasar una industria al área estatal o al área mixta.

3. Restricciones a la facultad del Ejecutivo para intervenir temporalmente una empresa privada.

4. La especificación de la normativa que regularía la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas mixtas, especialmente en los bancos, varios de los cuales permanecerían en manos de una mayoría de sus trabajadores.

5. La creación de empresas autogestionadas.

6. La creación de un cuerpo judicial para dirimir los reclamos por trato discriminatorio a empresas no pertenecientes al sector estatal.

7. La asignación de un porcentaje considerable de fon-

de junio de 1972, p. 17. Para una buena exposición de las opiniones de un gremio poderoso, ver el extenso informe de Jorge Fontaine, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, ante el congreso nacional de la organización realizado el 6 de julio de 1972. La declaración, aprobada por unanimidad, destaca la importancia para los gremios de defender su propia posición y, en consecuencia, confiar menos en la maquinaria partidista tradicional. Ver *La Prensa*, 8 de julio de 1972, pp. 6, 18.

dos públicos para publicidad en prensa, radio y televisión no estatal.⁵⁹

El acuerdo era extenso y complejo, e implicaba concesiones significativas de cada lado, pero especialmente por parte del Presidente. Permitía la posibilidad de que existiera una empresa autogestionada fuera de la red estatal, y restringía la facultad a futuro del Presidente de traspasar empresas privadas a la esfera pública. Comprometía al Presidente a subsidiar la prensa de oposición con fondos públicos. Algunas materias no se resolvieron, incluyendo el difícil tema sobre la estatización de la empresa que detentaba el monopolio del papel, que habría otorgado al gobierno el control sobre la disponibilidad de papel de diario. Con todo, se logró llegar a un acuerdo sobre ciertas materias fundamentales. Estas materias constituían la esencia del conflicto entre el gobierno y el mayor partido de oposición, y su resolución habría ayudado a aminorar la confrontación entre ambas fuerzas políticas. Aunque los sectores extremos, de derecha e izquierda, lo hubieran rechazado, un acuerdo aceptado por el centro político podría haber contribuido a la consolidación de un proceso de cambio, aunque en forma más gradual.

59. Para una valiosa discusión sobre estos tópicos, señalando lo cercanas a un acuerdo que estaban las negociaciones después de la primera ronda de conversaciones, ver la entrevista a José Antonio Vieragallo, subsecretario de Justicia, publicada en *La Prensa*, 26 de marzo de 1972. Las cartas e intercambios entre el gobierno y los demócrata cristianos durante el mes de julio, fueron entregados a la luz pública por Jorge Tapia, el ministro de Justicia. El autor agradece a Jorge Tapia por facilitarle un resumen de los temas principales y comunicarle sus comentarios personales sobre el progreso de las conversaciones. Además de otras entrevistas con personas entendidas en las negociaciones, el autor se benefició con su asistencia a debates sobre este tema en el Congreso chileno, y especialmente en el Senado, durante ese período.

Y sin embargo, a pesar de que la directiva del Partido Demócrata Cristiano apoyó el acuerdo, éste fue bloqueado por la negativa del sector más conservador del partido a aceptarlo. Ignorando las súplicas de Rafael Agustín Gumucio, un ex demócrata cristiano que ahora actuaba como representante del gobierno en la negociación, quien sostenía: "Hemos trabajado en un clima de respeto mutuo (...), concordamos en que podemos alcanzar un acuerdo sobre las cuestiones pendientes, si dispusiéramos de un tiempo adicional (...)", la facción conservadora del partido forzó un voto inmediato en el Senado que terminó con los esfuerzos por lograr un acuerdo.⁶⁰ El ala derecha del partido estaba preocupada por la postura ambivalente que proyectaba la Democracia Cristiana. Al mismo tiempo que se desarrollaban las conversaciones, los demócratas cristianos estaban involucrados, junto con los otros partidos de oposición, en otra amarga elección complementaria en contra del candidato del gobierno. También habían aprobado una acusación constitucional en contra del ministro del Interior. Un tercer acontecimiento subrayó el riesgo electoral de una posición política contradictoria. La Democracia Cristiana había rehusado aliarse con el Partido Nacional en las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y presentó un candidato propio; el resultado fue la elección del candidato del Partido Comunista. El grupo derechista del partido estaba decidido a no hacer concesión alguna.

60. *Las Noticias de Última Hora*, 30 de junio de 1972, p. 20. Para la declaración de la Democracia Cristiana sobre el término de las conversaciones, ver *La Prensa*, 30 de junio de 1973, p. 20

Respetaba la gran habilidad política del Presidente, pero no confiaba en él, y creía que en las conversaciones la directiva del partido había sido superada por un político más hábil. Afirmaba que sólo se podía tratar con Allende desde una indiscutible posición de fuerza.⁶¹ Y aunque los sectores progresistas tenían mayoría en el partido, éstos fueron incapaces y renuentes a imponer su propia solución. Como grupo, la Democracia Cristiana demostró su reticencia a arriesgarse y a adoptar resueltamente un curso intermedio.

La ironía es que los sectores a la izquierda de Allende también pensaban que el gobierno no debía negociar con la oposición, salvo desde una indiscutible posición de fuerza. La presencia, tanto en el gobierno como en la oposición, de sectores que exigían mayores concesiones confundía y enturbiaba la percepción de los moderados de un lado sobre las preferencias de los actores moderados del otro lado, contribuyendo a una posición indecisa y ambivalente de los sectores del centro político.

A mediados de julio de 1972 aún no se lograba concretar un acuerdo centrista. Si bien Allende había intentado un cambio de política, el cambio había demorado en producirse, y los demócrata cristianos ya no estaban dispuestos a negociar. Sobre todo, su meta era maximizar su viabilidad electoral con la esperanza de recuperar la presidencia en 1976. Los miembros del ala derecha del partido creían tener el dominio de la situación. Se sentían seguros que el gobierno no podía

61. De hecho, en una entrevista con el autor en 1974, un destacado líder demócrata cristiano señaló que Allende obtuvo una ventaja considerable como consecuencia de la debilidad del liderazgo del partido.

ganar un plebiscito y que no estaba dispuesto a arriesgarse en uno. Las dificultades económicas, la anarquía y la inestabilidad los favorecerían al aproximarse las elecciones parlamentarias de 1973. ¿Por qué negociar, considerando todas las dificultades e incertidumbres de un compromiso bajo tales circunstancias?

En un momento coyuntural crítico no se quiso escuchar las voces solitarias en el gobierno y la oposición que llamaban a la conciliación. Hubo poca preocupación que una crisis de régimen pudiera provocar no sólo la destrucción de cualquier esperanza de una revolución socialista, sino que también podría destruir las propias reglas del juego democrático. Los chilenos en general estaban convencidos de que eran distintos al resto de los latinoamericanos, que pese a todas las dificultades era imposible que se produjera un quiebre del régimen. Prevalcieron los estrechos intereses de grupos, los intereses parciales. Como resultado se exacerbó las políticas de movilización y confrontación a la vez que todos miraban hacia las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 como la única solución del impase total al cual se había llegado.

La política de movilización y confrontación

Las manifestaciones y concentraciones, características de una campaña presidencial, no disminuyeron después que la Unidad Popular asumió el poder. Ellas se convirtieron en un aspecto esencial del panorama político chileno. Tanto el gobierno como la oposición utilizaron la movilización de

grandes masas, en estadios o en las calles, como un recurso para demostrar la fuerza de cada uno. Siguiendo esta lógica, a la marcha de las cacerolas de diciembre de 1971 la Unidad Popular respondió con su propia marcha. A lo largo del país las marchas de un lado tenían su réplica en las contramarchas del otro lado, a medida que cada lado trataba de probar que contaba con el verdadero apoyo popular. Cuando se le preguntó a Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista, si él creía que las concentraciones, que a veces provocaban la desobediencia civil, permitieran la construcción del socialismo, él respondió:

"Creo que sí, siempre que nuestras fuerzas sean superiores, que la presencia de las masas de nuestro lado en las calles sea mayor que la de los adversarios, como ha sido el caso hasta ahora. Porque cada vez que ellos han tomado la iniciativa y han salido a la calle, nosotros hemos respondido con concentraciones mucho mayores; y esto los ha forzado a retroceder".⁶²

Sin embargo, el fracaso de las negociaciones de julio de 1972 provocó un cambio fundamental y cualitativo en este juego de movilización política. La correlación de fuerzas ya no se medía por el número de esquinas ocupadas en la Plaza Bulnes o el número de asientos en el Estadio Nacional. Las abortadas negociaciones habían dejado un claro mensaje: que la única solución posible para la crisis chilena era la victoria o la derrota decisiva en las elecciones parlamentarias que se

62. Labarca, *Corvalán 27 horas*, p. 44.

celebrarían ocho meses después. Esto provocó que una multitud de actores políticos se volcara a realizar un esfuerzo sin precedentes en un intento por probar su poder efectivo real en contraposición a su poder potencial.⁶³ La movilización política pasó a convertirse en confrontación política. Ya en agosto de 1972, se produjo una proliferación de choques entre el gobierno y sus adherentes por un lado, y entre grupos de izquierda y derecha por otro. Estas confrontaciones aumentaron en forma vertiginosa hasta llegar a paralizar el país en octubre de ese año. Un clima de crisis y temor se apoderó de la ciudadanía. Por primera vez, los chilenos comenzaron a abordar seriamente la posibilidad de una guerra civil.

Una de las características más importantes de este nuevo estilo de movilización fue la participación directa, y por primera vez en forma masiva, de los gremios representando a miles de pequeños y grandes empresarios y comerciantes. El 22 de agosto los comerciantes detallistas declararon un paro nacional de un día, y a comienzos de septiembre comenzó el paro de los transportistas.⁶⁴ Temiendo la amenaza económica producida por una economía que se derrumbaba y frente a los intentos del gobierno por racionar la distribución de alimentos y regular el transporte, los camioneros se movieron para proteger sus intereses económicos. Debido a la importancia del sector transportista para la economía chilena, el

63. Para una discusión influyente sobre la política latinoamericana que desarrolla el concepto de "poder efectivo" (power capability), ver Charles Anderson, *Politics and Economic Development in Latin America* (Englewood Cliffs, N.J.: Van Nostrand, 1967), cap. 4

64. Para una excelente discusión que pone énfasis en la dimensión confrontacional, ver David Cusak, *Confrontation Politics and the Desintegration of Chilean Democracy*, Vierteljahresberichte, N° 58, diciembre de 1974, pp. 313-53.

paro de los camioneros significó un serio golpe para el gobierno y sirvió para convocar a otros sectores y asociaciones que se unieron al movimiento con el objetivo de paralizar la economía. La importancia de este movimiento radica en que marcó un hito: el reemplazo de la movilización dirigida y manipulada por los partidos, por una movilización directa generada por los empresarios -grandes y pequeños- cuyo objetivo era defender sus intereses en el sistema. Sectores de la Democracia Cristiana, al igual que sectores del Partido Nacional que jugaron un papel en la organización de estos grupos a fines de los sesenta, se encontraron con que ellos actuaban en forma cada vez más independiente, a menudo contrariando las políticas de la directiva de sus respectivos partidos. A su vez, esta autonomía intensificó la competencia entre los demócrata cristianos y los nacionales, forzando aún más a los primeros a endurecer su posición para no perder el apoyo que creían tener en grandes sectores de la clase media.⁶⁵ Voceros de ambos partidos se apresuraban a solidarizar con los innumerables sectores en huelga.

El gobierno y los partidos de izquierda se movieron con rapidez para contrarrestar los efectos de la movilización de la pequeña burguesía. Las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), concebidas inicialmente para distribuir alimentos a los

65. No cabe duda que el fortalecimiento de estos grupos como entidades independientes capaces de una acción independiente fue facilitada por los aportes de círculos financieros extranjeros y nacionales, y de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. De hecho, poco antes de los paros de octubre, la CIA entregó US\$ 24.000 a una organización financiera anti-Allende. En total, en Chile se gastaron secretamente ocho millones de dólares entre 1970-1973, con más de tres millones de dólares sólo en el año fiscal 1972. Ver U.S. Senate, *Covert Action in Chile*, pp. 1, 60.

sectores populares, se extendieron para crear una vasta red de racionamiento de productos alimenticios a cargo del gobierno. El gobierno, en colaboración con la Central Unica de Trabajadores (CUT), intentaba mantener las industrias abiertas y funcionando, y consiguieron la ayuda de estudiantes, trabajadores y profesionales partidarios del gobierno para protestar contra las huelgas por medio de contramanifestaciones. Pero las acciones de la oposición también les dieron un nuevo ímpetu a los sectores más revolucionarios, dentro y fuera de la Unidad Popular, quienes formaron los comandos comunales, cordones industriales y comandos campesinos con características paramilitares para defender barrios, fábricas y predios agrícolas. Al igual que los gremios, estas organizaciones actuaban más y más al margen de las directivas de los partidos políticos, constituyendo la base de un sector obrero minoritario, pero cada vez más radicalizado. Sus acciones tendrían consecuencias políticas similares a las de los gremios, produjeron una gran presión sobre los partidos establecidos para que radicalizaran aún más el proceso de transformación.⁶⁶ Irónicamente, fue la contramovilización de la pequeña burguesía -en respuesta a amenazas reales, artificiales

66. Varios organismos realizaron interesantes investigaciones sobre el movimiento popular en Chile durante el gobierno de Allende. Los mejores trabajos fueron realizados sobre el tema de las poblaciones. Por ejemplo, ver los artículos de los investigadores del CIDU Manuel Castells, Luis Alvarado, Rosemond Cheerham, Adriana Garat, Gaston Rojas, Santiago Quevedo, Eder Sader, Jorge Fiori e Ignacio Santa María en la revista EURE, 3(7), abril de 1973. Ver también el artículo del Equipo de Estudios Poblacionales del CIDU, *Reivindicaciones urbana y lucha política: Los campamentos de pobladores en Santiago de Chile*, en la revista EURE, 2(6): 55-81 noviembre de 1972. Otro proyecto que merece mencionarse es el trabajo del CIDU sobre justicia popular. Ver Rosemond Cheetham et al., *Pobladores: del legalismo a la justicia popular*, 2 vols. (Santiago, CIDU, 1972).

o imaginarias- la que finalmente engendró, en forma dialéctica, una movilización significativa y autónoma de la clase obrera. Fuera de unas pocas iniciativas dispersas de grupos como el MIR, con anterioridad a octubre de 1972 los partidos de gobierno habían mantenido un control político sobre sus adherentes y el grueso de los obreros chilenos. Fue la masiva embestida de las huelgas patronales la que comenzó a consolidar un grado de conciencia de clase y de acción autónoma. Aún así, durante el gobierno de Allende los sectores radicalizados de la clase obrera siguieron constituyendo una minoría, y la movilización descontrolada y desestabilizadora más relevante continuaría siendo la contramovilización de la clase media. El quiebre de la democracia chilena fue más el resultado de la contramovilización frente a amenazas percibidas, que una excesiva movilización de sectores que demandaban sus reivindicaciones.⁶⁷

67. Gran parte de la literatura citada en la nota 66 subraya la orientación económica de la clase obrera. En especial ver Manuel Castells, *Movimiento de pobladores y lucha de clases*, y Jorge Fiori *Campamento Nueva Habana: Estudio de una experiencia de autoadministración de justicia*, ambos en *EURE*, 3(7), abril de 1973. El campamento Nueva Habana era la población más importante de las que estaban bajo la influencia del MIR, incluso ahí, el interés por los asuntos clientelísticos era importante, y, como Fiori señala, la militancia disminuyó en la medida que los pobladores comenzaron a ver al gobierno de la Unidad Popular como la revolución que ya había llegado. La orientación reivindicacionista de la clase obrera durante el período de la Unidad Popular también es destacada por J. Samuel Valenzuela, *The Chilean Labor Movement: The Institutionalization of Conflict*, y James Petras *Nationalization, Socioeconomic Change and popular Participation*, ambos en Valenzuela y Valenzuela, *Chile: Politics and Society*. Para el mejor trabajo realizado hasta ahora sobre el rol de los mineros en el gobierno de Allende, que también pone mucho énfasis en el comportamiento clientelístico en contraposición al revolucionario, ver Francisco Zapata, *Los mineros de Chuquicamata: ¿Productores o proletarios?* (México: Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, Cuaderno N° 13, 1975). Dado que los mineros siempre habían constituido la piedra angular de la base

Al igual que al inicio del gobierno de la Unidad Popular, los medios de comunicación de masas jugaron un papel fundamental durante este período de escalada confrontacional. Los medios, que saturaban cada rincón del pequeño país, se convirtieron en los interlocutores principales de las posiciones más extremas. Era difícil distinguir la batalla real de la batalla simbólica librada por la prensa, la radio y la televisión. Los acontecimientos se exageraban y distorsionaban. Las mentiras y la difamación de los opositores estaban a la orden del día. Todo se revestía de significado político, e incluso el acontecimiento más insignificante se convertía en una coyuntura crucial y amenazante. La prensa de oposición, y en especial el influyente diario *El Mercurio*, que había recibido grandes sumas de dinero de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, jugó un papel clave en la movilización de una amplia gama de grupos y organizaciones en contra del gobierno. En general, los medios de comunicación actuaban con independencia de las cúpulas políticas, y sus estridentes acusaciones y contraacusaciones contribuyeron a aumentar la polarización en un clima ya explosivo. Con la erosión de los canales regulares de negociación los líderes de cada lado se vie-

de la izquierda, su posición era crítica. Zapata muestra que ellos continuaron presionando por asuntos de reivindicaciones económicas tal como lo hacían cuando la izquierda estaba en la oposición (Ver nota 28, cap. IV). Los cordones creados durante el paro de octubre de 1972 realmente nunca llegaron a ser suficientemente fuertes como para encauzar un movimiento de masas. (Sobre este punto, véase nota 58, cap. IV). Un trabajo anterior de Henry Landsberger y sus coinvestigadores desarrolla argumentos similares. Ver especialmente Henry Landsberger, Manuel Barrera y Abel Toro, *The Chilean Labor Union Leader: A Preliminary Report on his Background and Attitudes*, *Industrial and Labor Relations Review*, 17(3): 399-420, abril de 1964.

ron forzados a depender cada vez más para la información básica de un medio que sistemáticamente distorsionaba las posiciones de los líderes del lado contrario. La política "simbólica" reemplazaba cada vez más a la política "real", socavando aún más la posibilidad de crear canales formales de acomodación. Tanto los líderes del gobierno como los de la Democracia Cristiana manifestaban su desesperación frente a los excesos de sus respectivos medios de comunicación, al punto que algunos decían que los medios eran ahora la cola que meneaba el perro.⁶⁸

Con el tiempo se hizo evidente que la política de confrontación había desplazado el centro funcional del sistema político chileno fuera del ámbito de las instituciones tradicionales de toma de decisiones. El liderazgo político había perdido, en gran medida, el control sobre sus propios militantes. Las elites políticas de ambos lados habían recurrido a la política de la movilización y manipulación de los medios de comunicación en un esfuerzo por fortalecer sus propias posiciones con respecto a las de la oposición. Mientras que el liderazgo político de ambos lados continuaba desenvolviéndose dentro de los mecanismos institucionales tradicionales para la reso-

68. Radomiro Tomic, por su parte manifestó esta opinión en un memorando interno del partido, fechado el 7 de noviembre de 1973, en el que analiza la situación después del golpe. La prensa de oposición, especialmente el prestigioso diario *El Mercurio* recibió en secreto una considerable suma de dinero proveniente de los Estados Unidos para financiar su implacable campaña contra el gobierno. Cada incidente era exagerado por un diario que llegaba a todos los rincones del país. Ver U.S. Senate *Covert Action* pp. 59-60. Al evaluar el rol de los medios de comunicación el autor se benefició con las opiniones de muchas personas. Especialmente útiles fueron las opiniones de una persona que ocupó altos cargos periodísticos, incluyendo el de jefe de redacción, de uno de los principales diarios socialistas.

lución del conflicto político, la política de movilización continuaba siendo una herramienta que favorecía a las cúpulas partidarias gubernamentales. Pero, tan pronto como los mecanismos acomodaticios empezaron a derrumbarse -cuando la crisis más grave y seria de la política chilena ya no podía ser resuelta a través de la estructuración de un consenso de centro- la política de movilización asumió una vida propia. Las elites de los partidos que luchaban por mantener su influencia política se encontraron perdiendo su posición hegemónica en la política chilena. Para el gobierno este problema era el más serio; no sólo tenía cada vez menos influencia sobre las acciones de sus numerosos militantes de izquierda, sino que además había perdido en gran medida su autoridad sobre la sociedad chilena. La economía, ya al borde del colapso, recibió nuevos embates. En diciembre de 1972 la inflación había alcanzado un récord de 150%.⁶⁹ Y nuevamente, estos acontecimientos restringieron aún más las opciones para el futuro. El fracasado intento de acuerdo, a mediados de 1972, había constituido un nuevo golpe para aquellos sectores de la Unidad Popular que habían insistido en un comportamiento moderado y conciliador en una reunión secreta en Lo Curro pocas semanas antes. También representó un grave retroceso para el sector de izquierda de la Democracia Cristiana que había arriesgado su prestigio y energía en el intento por llegar a un acuerdo. Los políticos habían agotado su oportunidad. Había sólo una institución que podía llenar el vacío político y posibilitar la celebración de las elecciones de 1973. Esa institución era las Fuerzas Armadas de Chile.

69. Ver cuadro 19.

CAPITULO IV

LOS MILITARES CHILENOS, LA ELECCION DE 1973 Y EL QUIEBRE INSTITUCIONAL

El fracaso de las negociaciones, el consecuente deterioro del rol de las instituciones y procedimientos mediadores tradicionales, la política de movilización social y el deterioro de la autoridad del liderazgo político sobre sus militantes, llevaron a la incorporación de lo que Juan Linz denomina poderes "neutrales" al juego político, en la expectativa que ellos pudieran resolver los conflictos de fondo.¹ La Contraloría, los tribunales, el Tribunal Constitucional y, finalmente, las Fuerzas Armadas se vieron involucrados poco a poco en agudas controversias, que claramente pertenecían a la arena política y legislativa, y que requerían de negociación y acuerdos para alcanzar una solución.

La Contraloría recibía una solicitud tras otra para determinar la legalidad de un sinnúmero de acciones del gobierno y de la oposición, incluyendo la expropiación de industrias y fundos. Aunque los dictámenes de la Contraloría a veces favorecían al gobierno, también falló en contra del gobierno en muchas materias controvertidas. Por ejemplo, en agosto de

1. Véase Juan Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown, and Reequilibration* (Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1978).

1971, la Contraloría se pronunció en contra del director de un organismo fiscal que deseaba estatizar una industria textil. A raíz de este caso y otros similares, la prensa gobiernista atacó duramente al organismo contralor. El Contralor General, en una inusual conferencia de prensa, respondió a los ataques condenando la polarización del país, a la que culpaba de haber provocado que un organismo como la Contraloría llegara a ser catalogado de "revolucionario o reaccionario".² Los tribunales también se vieron obligados a fallar sobre la legalidad de las acciones controvertidas, recibiendo críticas similares. Por lo general, el Poder Judicial chileno, interpretando fielmente la ley vigente, no vaciló en defender el derecho de propiedad, condenando los intentos del gobierno por subordinar ese derecho a los derechos humanos y a los requisitos de un orden socialista. En particular, la negativa de los funcionarios de gobierno a utilizar la fuerza pública para desalojar a quienes se apoderaran de la propiedad privada provocó graves choques entre el gobierno y el Poder Judicial.³ Por su par-

2. Véase el reportaje Revolucionario o Momio en *El Mercurio Edición Internacional*, 13-19 de marzo de 1971. Ver también el dictamen de la Contraloría en el cual objeta los procedimientos de la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO) en Andrés Echeverría y Luis Frei, eds., *La lucha por la juridicidad en Chile* (Santiago: Editorial del Pacífico 1974), vol. 1, pp. 311-12.

3. En términos generales, el poder Judicial argüía que lo único que podía hacer era velar por el cumplimiento de la ley, por lo tanto si se deseaba un cambio de política, le correspondía al Congreso modificar la ley. La réplica del gobierno afirmaba que los tribunales aplicaban selectivamente la ley, la cual permitía considerable variedad de interpretación. El gobierno criticaba especialmente el ardor con que los tribunales defendían la propiedad privada y su negativa a frenar las difamaciones y ataques sediciosos de los medios de oposición. Para un fascinante intercambio epistolar, que revela cómo la misma legalidad era abordada desde perspectivas distintas, véase el intercambio de cartas entre el Presidente y la Corte Suprema, reproducidas en Echeverría y Frei, *La lucha por la juridicidad*, vol. 3, pp. 168-98.

te, el Tribunal Constitucional debió dirimir el conflicto suscitado entre la mayoría parlamentaria y el Presidente en torno al procedimiento estipulado por la Constitución para efectuar reformas constitucionales.

La participación de estos organismos en estas candentes controversias políticas, síntoma del fracaso de las cúpulas para lograr un acuerdo, contribuyó a la clara politización de fuerzas anteriormente "neutrales" y a un mayor deterioro de la legitimidad del sistema. Por un lado, la izquierda los atacaba duramente por considerarlos representantes del orden social burgués y, por otro, eran defendidas con vehemencia por la derecha como el baluarte de la tradición y la legalidad. Para ambos lados, el simbolismo que revestían estas instituciones asumió una importancia vital, imposibilitando la distinción entre las reglas y procedimientos democráticos, y las instituciones que en Chile encarnaban dichas reglas.

Es así que las Fuerzas Armadas surgieron como el único poder "neutral" con una legitimidad suficiente y una capacidad real para mediar entre las fuerzas en pugna. No obstante, no fue hasta la caótica y peligrosa confrontación de octubre de 1972, que amenazaba con estallar en guerra civil, que las Fuerzas Armadas intervinieron directamente como moderador político. El 5 de noviembre, Allende incorporó a su gabinete al comandante en jefe del ejército, el general Carlos Prats, como ministro del Interior, encomendándole, junto a los militares titulares de las carteras de Minería y Obras Públicas, la responsabilidad de restaurar el orden y garantizar la imparcialidad en las próximas elecciones parlamentarias de marzo de 1973.

Al asumir el poder, Allende tuvo plena conciencia de que la neutralidad de las Fuerzas Armadas era de vital importancia para el desarrollo de su programa. El gobierno se desvivió por satisfacer las demandas salariales y de equipamiento de los militares.⁴ No obstante, la incorporación de un militar al gabinete como ministro del Interior fue una medida desesperada, de último recurso, que implicaba un riesgo extremadamente alto. En una ocasión anterior, en abril de 1972, Allende había incorporado un general al gabinete, en un momento en que las discrepancias internas de la Unidad Popular dificultaban el nombramiento del ministro de Minería. Esa experiencia no estableció un buen precedente. El ministro se

4. Durante el gobierno de Frei el porcentaje del presupuesto nacional destinado al gasto militar cayó al 5,3% (ver capítulo I); sin embargo, durante el período de Allende éste aumentó al 9,2%. Paralelamente, el gobierno dio su beneplácito para continuar recibiendo la ayuda militar de los Estados Unidos. Mientras disminuía la ayuda económica, la ayuda militar se mantuvo, tal como lo indica el siguiente cuadro sobre la asistencia militar de Estados Unidos a Chile.

Año	Asistencia militar	Ventas militares	Personal militar entrenado en Panamá
1966	8.366.000	1.490.000	68
1967	4.766.000	1.690.000	57
1968	7.507.000	2.100.000	169
1969	2.662.000	2.147.000	107
1970	1.966.000	9.450.000	181
1971	1.033.000	2.958.000	146
1972	2.227.000	4.583.000	197
1973	918.000	2.242.000	257

FUENTE: United States, Senate: Hearings Before the Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities, 94º Congreso, 1ª sesión, 4-5 diciembre 1975, pp. 184-85.

había quejado por su falta de autoridad real y porque las políticas del sector minero se elaboraban a niveles inferiores de la burocracia estatal de acuerdo a exigencias netamente políticas. Por eso, el general rehusó firmar decretos de insistencia que habrían permitido al gobierno sobreponerse a los dictámenes de la Contraloría, frustrando así varias iniciativas del Ejecutivo. Cuando Allende reorganizó el gabinete en junio de 1972, no sorprendió que el general cesara en sus funciones.

La incorporación del comandante en jefe del ejército al gabinete no podía sino ayudar a que salieran a la luz las divisiones latentes de índole generacional, institucional y política que existían al interior de las instituciones militares. Este hecho aumentaría la tensión entre los sectores que aborrecían al gobierno de la Unidad Popular y que estaban dispuestos a combatirlo por la fuerza, y aquellos sectores "constitucionalistas" que preferían no correr los enormes riesgos que implicaba un acto de tal naturaleza.

Subrayando su dependencia creciente de los militares como moderador político, líderes -tanto del gobierno como de la oposición- se empeñaban en adularlos, recalcando que estaban del lado de los uniformados. Al mismo tiempo, sin embargo, los militares también fueron criticados duramente por otros dirigentes, especialmente aquellos que pertenecían a los extremos del espectro político. Sectores del Partido Socialista no disimularon su descontento cuando los ministros militares se negaron a firmar un decreto de insistencia que habría ordenado el traspaso de más industrias al área social. Del mismo modo, los militares también eran severamente criticados

por sectores de derecha, quienes reprobaban sus iniciativas tendientes a parar la ola de huelgas y restaurar el orden.⁵ Así, los ministros militares eran presionados por ambos lados. Por una parte, no se les daba suficiente autoridad; por ejemplo el ministro de Obras Públicas, almirante Ismael Huerta, reveló con frustración que los cuadros políticos en los ministerios se gusan imponiendo sus órdenes. Sin embargo, la izquierda los acusaba de bloquear el programa de la Unidad Popular. Por otra parte, la oposición, que contaba con que el gobierno fracasara en su intento por obtener la mayoría en las próximas elecciones parlamentarias, los criticaba por considerar que su presencia legitimaba al gobierno. Estas presiones claramente repercutieron en forma negativa en los cuarteles. Afectaron especialmente al general Carlos Prats, quien procuró en lo posible preservar el orden constitucional, por lo que se le acusó de ser un partidario abierto del gobierno. (El resentimiento en contra de él afloraría después de las elecciones de marzo de 1973.) Los políticos habían recurrido a los militares para que resolvieran sus problemas, pero, en el proceso, contribuyeron a que las instituciones militares también se politizaran. Al ser llamados a resolver los problemas políticos, los militares simplemente no podían actuar como una fuerza "neutral" -lo que es una contradicción de términos. Al general Prats sólo le cabía esperar que la elección de 1973 proveyera una solución, y que así los militares pudieran devolver la política a los políticos.

5. Para un ejemplo revelador del esfuerzo constante de los líderes de ambos lados por conquistar la adhesión de los militares a sus respectivas posturas, véase el debate del Senado del 26 de octubre de 1972, publicado en *El Mercurio*, 30 de octubre de 1972, p. 9.

La elección de marzo: Impase, renovada confrontación y pérdida de poder político

Teniendo al comandante en jefe del ejército como ministro del Interior, las fuerzas políticas en pugna canalizaron todas sus energías y recursos hacia la campaña electoral parlamentaria de marzo de 1973. Los partidarios del gobierno, por su parte, y los sectores de oposición por su lado, crearon listas únicas, lo que marcaría la culminación del proceso de polarización del sistema político chileno. La Confederación Democrática y la Federación de la Unidad Popular, formadas en julio de 1972, se convirtieron en indicadores reales y tangibles de que, en este turbulento drama de la política chilena, se había perdido toda posibilidad de encontrar una opción intermedia. La organización de partidos federados no sólo indicaba que cada lado deseaba probar que detentaba el apoyo de la mayoría del país, sino que también demostraba que cada partido, en ambos lados del espectro, temía la pérdida de apoyo electoral que podría experimentar en manos de sus propios aliados de coalición. Si bien los electores todavía podían votar por candidatos identificados con partidos propiamente tales, las listas estaban estructuradas en conjunto, dando al votante una opción clara entre alternativas mutuamente excluyentes.⁶

6. La Unión Socialista Popular, un partido formado a partir de una facción disidente del Partido Socialista, presentó candidatos en una lista separada, pero obtuvo sólo el 1,6% de los votos. Debe recalcar que las confederaciones se formaron solamente con un propósito electoral. Cada partido desarrolló su propia campaña electoral y, como se verá más adelante, con ciertos conflictos.

Por muchos meses el electorado fue bombardeado por una ráfaga de discursos, declaraciones, concentraciones, cargos y descargos de una intensidad rara vez vista en la política chilena. Los vilipendios personales estaban a la orden del día, puesto que la ubicua radiodifusión y la prensa buscaban empañar la imagen de líderes y contrincantes.⁷ Financiamiento del exterior y de sectores adinerados de la sociedad chilena fluía libremente hacia la prensa opositora y las campañas políticas de nacionales y demócrata cristianos.⁸

La oposición sostenía que la elección constituya el plebiscito decisivo y final sobre la conducta del gobierno de la

7. La presión a que estaba sujeta la Democracia Cristiana para que continuara oponiéndose al gobierno quedó en evidencia durante la campaña a través del duro ataque a ciertos miembros del partido, quienes fueron acusados por los nacionales de estar involucrados en conversaciones secretas con el gobierno, con el fin de acordar una estrategia común para el período posterior a las elecciones. El objetivo de esta presión era mantener a raya el ala progresista del partido. Véase la declaración del presidente electo del Partido Nacional, Carlos Raymond, publicada en *La Prensa*, 15 de febrero de 1973. Esta y las siguientes citas de la prensa en esta sección sobre la campaña electoral, han sido tomadas de la detallada recopilación del debate público de la época que se encuentra en Carmen Barros y Patricio Chaparro, *La campaña de las elecciones de 1973: Chile un estudio de caso*, mimeo (Santiago: Instituto de Ciencias Políticas, Universidad Católica, Documento de Trabajo N° 4, junio 1974).

8. El Comité de los Cuarenta (The Forty Committee), encargado de supervisar las actuaciones secretas de Estados Unidos, aprobó la suma de US\$ 1.626.666 para apoyar a los candidatos opositores. Véase Select Committee, U.S., Senate, *Covert Action in Chile*, p. 60. Debe reiterarse que los fondos rindieron mucho debido a la gran diferencia entre el dólar oficial y el transado en el mercado negro. En un momento el dólar oficial se cotizaba en E\$ 40, mientras que el dólar negro estaba a E\$ 300. El autor entrevistó a un parlamentario no muy destacado de la Democracia Radical, que había recibido más dinero para la campaña de 1973 que lo que había recibido en total para todas sus campañas anteriores. Aunque no se dijo de dónde provenían los fondos, él sabía que éstos venían del exterior.

Unidad Popular.⁹ Tanto los demócrata cristianos como los nacionales criticaban duramente el desempeño del gobierno en el campo económico y condenaban lo que percibían como anarquía y caos, sosteniendo que cada día que pasaba contribuía a aumentar el daño a las instituciones chilenas.¹⁰ Los nacionales, más que los demócrata cristianos, enfatizaban que ésta era una lucha básica entre el marxismo y la democracia, y que la elección era simplemente un paso en una confrontación más amplia y fundamental.¹¹ Sectores de ambos partidos abogaban por una concertación para obtener los dos tercios necesarios para que la oposición tuviera la autoridad constitucional para acusar políticamente al Presidente.¹² En la extrema derecha, la organización paramilitar Patria y Libertad vociferaba en tonos cada vez más fuertes reclamando no sólo una clara victoria electoral sino una solución defini-

9. Ver, por ejemplo, la entrevista al candidato a senador del Partido Nacional, Fernando Ochagavía, en *La Tercera de la Hora*, 9 de diciembre de 1973. Para la posición de la Democracia Cristiana véase el documento del consejo plenario del partido, publicado en *La Prensa*, 5 de diciembre de 1972, y la declaración del ex Presidente Eduardo Frei, candidato a senador de la Democracia Cristiana, en su discurso para anunciar su candidatura, *La Prensa*, 5 de diciembre 1972. Ver también la declaración de Osvaldo Olguín, presidente electo de la Democracia Cristiana, publicada en *La Prensa*, 14 de febrero de 1973. Para citas similares véase Barros y Chaparro, *La campaña de las elecciones*, pp. 59, 88.

10. Véase Barros y Chaparro, pp. 60-88 y 89-108.

11. Por ejemplo, véase el discurso del presidente del Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa, publicado en *La Tercera de la Hora*, 14 de diciembre de 1972.

12. Esta representaba una posición minoritaria en la Democracia Cristiana. Uno de los que respaldaba esta línea era el candidato a senador Alejandro Noemí. Véase *La Tercera de la Hora*, 6 de enero de 1973.

tiva por vía de una intervención armada y la derrota militar de la izquierda.¹³

Los partidos de gobierno tenían confianza que la Federación de la Unidad Popular tendría éxito en la elección, pero rechazaban terminantemente cualquier insinuación que la elección parlamentaria era un plebiscito para juzgar el desempeño del gobierno.¹⁴ Con la ayuda de los militares, el gobierno procuraba mantener el orden y mejorar en lo posible la seria situación económica. Se aumentaron los esfuerzos por distribuir productos esenciales y alimentos a las poblaciones. No obstante, en temáticas de fondo la izquierda demostró tener menos cohesión y unidad que la oposición. Para la oposición la cuestión era clara: el gobierno debía ser rotundamente derrotado. Para la Unidad Popular no era sólo cuestión de ganar una elección sino de continuar gobernando el país y mantener el compromiso con el proyecto inicial de transformaciones revolucionarias. El Partido Comunista y el propio Allende llamaron reiteradamente a la reconciliación y su mensaje estaba dirigido no solamente a sectores de la clase obrera, también

13. Sobre la necesidad de la victoria, véase la declaración de la comisión política de Patria y Libertad en *Patria y Libertad*, N° 30, 16 de noviembre de 1972, p. 4. En ese mismo número, sin embargo, el movimiento derechista argumentaba que las elecciones no eran la solución porque lo único que la izquierda respataba era la fuerza de las armas (ver p. 16). El desprecio total de Patria y Libertad por la democracia liberal puede verse en un artículo sobre el tema en *Patria y Libertad*, N° 37, 4 de enero de 1973, p. 2. Estas citas se tomaron de Barros y Chaparro, op. cit., pp. 190-92.

14. Véase el discurso del presidente de la Unidad Popular, senador Rafael Agustín Gumucio, publicado en *El Siglo*, 6 de febrero de 1973. La plataforma de la coalición para las elecciones puede encontrarse en *La Nación*, 6 de febrero de 1973.

intentaba llegar a los amplios sectores medios de la sociedad. Los comunistas con frecuencia hacían llamados específicos a los trabajadores partidarios de la Democracia Cristiana para que apoyaran al gobierno. Ellos condenaban el clima de confrontación que se vivía en el país. El Partido Comunista repetía constantemente el peligro de una guerra civil, adoptando el slogan "No a la guerra civil".¹⁵

Pero un gran sector del Partido Socialista, incluyendo a Carlos Altamirano, su secretario general, no perseguía una consolidación de los logros del gobierno, sino una aceleración de la lucha de clases. Los socialistas interpretaron el paro de octubre como un indicador de la fuerza del sector empresarial y como una confirmación de la validez de sus propios y reiterados llamados a una movilización más rápida y radicalizada de la clase obrera. Ellos condenaban con especial vehemencia el "reformismo" del Partido Comunista, y daban como ejemplo los esfuerzos del ministro Orlando Millas para resolver la cuestión pendiente sobre la legalización del área estatal de la economía.¹⁶ Algunos socialistas fueron tan lejos como para pedir una victoria rotunda del gobierno de la Unidad Popular a fin de derrotar las tendencias de la coalición que

15. Sobre la necesidad de constituir una alianza con la clase media y obreros de otros partidos, véase los discursos del ideólogo principal de Partido Comunista, Senador Volodia Teitelboim, en *El Siglo*, 30 de enero 1973 y 2 de febrero de 1973. Sobre el rechazo a la guerra civil, ver el discurso del secretario general del partido, Luis Corvalán, en *El Siglo*, 23 de febrero de 1973. Véase Barros y Chaparro, op. cit., p. 121-40.

16. Véase la muy publicitada declaración pública de Carlos Altamirano donde condena la propuesta de Millas, publicada en *La Nación*, 3 de febrero de 1973.

estaban a favor de la "reconciliación".¹⁷ Otros sectores de la izquierda, dentro y fuera de la coalición, también exigían una reanudación de la confrontación política para acelerar las "contradicciones" de la sociedad chilena, y preparar a la clase obrera para una lucha prolongada que condujera a un cambio revolucionario de fondo.¹⁸ Tanto el gobierno como la oposición tenían en su interior fuerzas políticas que no sólo buscaban una victoria electoral sino que deseaban una mayor confrontación directa. Su propia presencia contribuyó a la "justificación" de los argumentos de los elementos más extremos de cada lado del espectro político y minó más la cada vez más frágil posición de los sectores centristas. De ambos polos de la política chilena, las profecías políticas respecto a una confrontación final se convertían rápidamente en profecías autocumplidas.

Como era predecible, las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 no resolvieron la crisis política. Sólo mostraron una vez más cuán polarizado estaba el país y cuán pare-

17. Por ejemplo, ver el argumento de la senadora Carrera en *La Nación*, 3 de febrero de 1973. La postura de los socialistas se puede encontrar en Carlos Altamirano, *Tres documentos* (Santiago: Ediciones SCI, 1973), y en Barros y Chaparro, op. cit., pp. 141-60.

18. Sobre el MAPU, véase la plataforma electoral publicada en *La Nación*, 4 de febrero de 1973, y la declaración de Oscar Guillermo Garretón en *Revista de Frente*, Nº 14, 1-15 de noviembre de 1972. Sobre la posición del MIR, que sostenía que las elecciones no eran más que un artificio de la burguesía y la clase dominante y, por consiguiente, eran inadecuadas como arena de confrontación, ver el intercambio de cartas con el Partido Socialista, publicado en *Punto Final*, Nº 176, 30 de enero de 1973, p. 2. Sobre la necesidad de acelerar la confrontación, ver dos artículos de Manuel Cabieses, ¿Cambia el Gobierno si pierde en marzo?, *Punto Final*, Nº 174, 2 de enero de 1973, p. 3, y El dilema de marzo: avanzar o transar, *Punto Final*, Nº 178, 27 de febrero de 1973, p. 2.

jas estaban las fuerzas en pugna. La oposición, lejos de obtener los dos tercios en el Congreso, de hecho perdió seis diputados y dos senadores. La Unidad Popular, por su parte, continuó siendo una coalición minoritaria, obteniendo el 43,9% de los votos en comparación al 54,2% obtenido por la oposición. Como se aprecia en el cuadro 27, si se compara con la elección presidencial de 1970, este resultado representó un drástico descenso del apoyo otorgado al conjunto de la oposición y un aumento de la adhesión al gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, el cuadro también muestra que, en comparación a la anterior elección parlamentaria, el cambio general fue pequeño. En realidad, con la excepción de los socialistas, hubo un cambio de tan sólo un 1% en la fuerza relativa de los partidos principales. Sólo los socialistas, quienes indudablemente heredaron parte del apoyo al Partido Radical, registraron un progreso significativo, aumentando su participación relativa en un 6,2%. Un análisis preliminar de las correlaciones estadísticas de la votación de 1973 también sugiere un cuadro de continuidad. No se percibe ningún vuelco importante en la base social de apoyo a los partidos. El gobierno mantuvo el apoyo de regiones y sectores tradicionalmente obreros y la oposición conservó su fuerza en el campo y en las áreas de mayor prosperidad económica. Al parecer se produjo cierta erosión del apoyo de los sectores medios a la izquierda, con un concomitante fortalecimiento del respaldo en los sectores rurales y obreros. El cuadro 28 presenta algunas de estas correlaciones, comparando el apoyo recibido por el gobierno y la oposición en las tres elecciones que tuvieron lu-

Cuadro 27
Comparación de los votos recibidos por la oposición y los
partidos de la Unidad Popular en las elecciones parlamentarias
de 1969 y 1973.

Partido	1969		1973	
	Nº de votos	%	Nº de votos	%
Unidad Popular				
Socialista	294.448	12,2	678.674	18,4
Comunista	383.049	15,9	595.829	16,2
IC			41.432	1,1
API			29.977	0,8
MAPU			90.620	2,5
Radical	313.559	13,0	133.751	3,6
Lista UP			46.100	1,3
Otros	65.378	2,8		
Total	1.056.434	43,9	1.616.383	43,9
Oposición				
Demócrata Cristiano	716.547	29,8	1.049.676	28,5
Nacional	480.523	20,0	777.084	21,1
PIR			65.120	1,8
DR			70.582	1,9
Lista CODE			33.918	0,9
Total	1.197.070	49,8	1.996.380	54,2
Otros				
USOPO	51.904	2,2	10.371	0,3
Blancos y nulos	98.617	4,0	57.770	1,6
Inscritos	3.244.892		4.510.060	
Votantes	2.406.129		3.680.307	
Abstenciones	838.763	16,5	829.753	18,4

Nota: Las abreviaciones corresponden a los siguientes partidos:

IC: Izquierda Cristiana
API: Acción Popular Independiente
MAPU: Movimiento de Acción Popular Unitario
PIR: Partido Izquierda Radical
DR: Democracia Radical
CODE: Confederación Democrática
USOPO: Unión Socialista Popular

Fuente: Estadísticas electorales de la Dirección del Registro Electoral.

gar durante el período de la Unidad Popular en todas las comunas del país y en las de Santiago. El análisis de los gráficos de dispersión revela que la reducción de la fuerza de la coalición entre los obreros, sugerida por la baja en las correlaciones, en realidad no ocurrió. Más bien, parece que la coalición aumentó su fuerza en áreas con una menor concentración obrera.

Las tan esperadas elecciones parlamentarias no aclararon el cuadro político. Por el contrario, otorgaron un impulso renovado a las fuerzas que estaban ansiosas por acelerar el proceso de confrontación. El buen resultado del Partido Socialista en relación al resto de la coalición fue interpretado por muchos como una clara evidencia de que la clase obrera chilena estaba lista para una aceleración del programa revolucionario. De igual modo, varios sectores de la oposición, preocupados por la mantención del statu quo y las instituciones vigentes, tomaron el resultado de la elección como una señal de que las reglas del juego ya no eran adecuadas para proteger sus objetivos e intereses, y que para frenar al gobierno tendrían que recurrir a medios inconstitucionales. Aumentó la escalada de actos violentos y sediciosos; ciertos oficiales conspiraban. Importantes sectores del grupo semileal, descrito en el capítulo II, se desplazaron a la categoría desleal, incluyendo a miembros del Partido Nacional e incluso a algunos demócrata cristianos. En este impase Allende se encontraba frente a tres opciones.

En primer lugar, podía haber intentado la continuación de un gabinete militar. La ventaja obvia de esta opción habría

Cuadro 28
Correlación entre el voto y la categoría ocupacional,
en Santiago y el país.

	Obreros ^a			
	Unidad Pop.		Opos.	
	País	Stgo.	País	Stgo.
Elección presidencial de 1970	.52	.49	-.47	-.50
Elección municipal de 1971	.46	.46	-.32	-.34
Elección parlamentaria de 1973	.34	.47	-.36	-.30

Nota: N=287 comunas.

a: Incluye artesanos, mineros y obreros industriales.

b: Incluye trabajadores independientes de ventas y servicios.

c: Incluye profesionales, técnicos y empleados de oficinas.

d: Incluye gerentes y ejecutivos de alto rango.

vido continuar la legitimación de su gobierno minoritario con apoyo militar. El problema era que la izquierda de la coalición estaba cada vez más molesta por la presencia militar y sus efectos negativos para el avance del programa revolucionario. Al mismo tiempo, los militares del gabinete estaban conscientes de la difícil situación en que ellos se encontraban. A las críticas de la izquierda se sumaban las fuertes críticas de la derecha; la que les imputaba estar legitimando políticas gubernamentales sobre las cuales los ministros militares generalmente tenían poco control.

La segunda estrategia habría involucrado una tregua definitiva con la Democracia Cristiana. El problema de las "áreas económicas" era el punto neurálgico de la agenda

Trabajadores independientes ^b				Empleados ^c				Gerentes ^d			
Unidad Pop.		Opos.		Unidad Pop.		Opos.		Unidad Pop.		Opos.	
País	Stgo.	País	Stgo.	País	Stgo.	País	Stgo.	País	Stgo.	País	Stgo.
.13	.33	-.11	-.33	.30	.12	-.28	-.13	-.21	-.22	-.20	.21
.15	.39	-.09	-.26	.25	.13	-.25	-.20	.16	-.25	-.17	-.02
.08	.36	-.08	-.27	.15	-.05	-.13	.18	.09	-.40	-.08	.47

Fuente : Información electoral de la Dirección del Registro Electoral; el material del censo de 1970 proviene del Instituto Nacional de Estadísticas.

política y habría tenido que alcanzarse algún tipo de transacción para evitar la tan postergada crisis constitucional definitiva. Un paso en esta dirección habría sido la formación de un gabinete de unidad nacional, incluyendo a demócrata cristianos o personalidades de prestigio que contaran con la confianza de ambos lados. Esta estrategia también fue criticada por ambos extremos del espectro político. Habría tenido que superar gran parte de la amargura engendrada por la campaña parlamentaria. Si el nivel de confianza era bajo en julio de 1972, durante los meses siguientes el nivel de consenso empeoró en vez de mejorar.

La tercera estrategia, propuesta por varios sectores dentro de la Unidad Popular, especialmente los sectores maxima-

listas de izquierda, consistía en que el gobierno siguiera adelante con su programa con renovada determinación. Pensaban que el veredicto de las urnas había sido alentador y que era un buen momento para seguir adelante con la estrategia de los hechos consumados. El gobierno había logrado mantener el apoyo popular a pesar de la crisis económica; si podía mostrar nueva determinación y dirección tal vez podría aumentar aún más su apoyo y ganar más victorias.

Para Salvador Allende fue muy difícil optar por una de las tres opciones. Al comienzo consideró seriamente la primera. Él se inclinaba por continuar en un terreno intermedio que le permitiera proseguir con el desarrollo de su programa respaldado por el apoyo y legitimidad otorgada por los ministros militares. Pero no fue sólo el sector más izquierdizante de la Unidad Popular el que se opuso a este camino: los propios militares simplemente no estaban dispuestos a continuar en el gabinete.¹⁹ La experiencia de servir como muro de contención en aquel ambiente altamente polarizado había tenido un alto costo. Ahora que la derrota total de la política del gobierno ya no era una posibilidad, muchos sectores al interior de las Fuerzas Armadas comenzaron a presionar con renovado vigor por una solución militar. Los constitucionalistas, especialmente el general Prats, estaban a la defensiva. Para evitar ser acusados de complicidad con el gobierno y para desalentar la sedición de la oficialidad, creyeron que era mejor dejar que los militares retornaran a sus responsabilidades profesionales.

19. *Ercilla*, 14-20 de marzo de 1973.

Enfrentado a la necesidad de formar un nuevo gabinete, Allende nombró un gabinete civil, formado por sectores moderados de la Unidad Popular. No estaba claro si el gobierno planeaba nuevas medidas drásticas o si intentaría dar inicio a un período de reconciliación. En la ceremonia de juramento del nuevo gabinete, el Primer Mandatario recalcó la importancia de la legalidad institucional y el pluralismo. Y sin embargo, esa misma tarde en una concentración de la CUT, varios ministros atacaron a la oposición y a los demócrata cristianos con duros epítetos y llamaron a cerrar el Congreso.²⁰ Una vez más, el Presidente y su coalición proyectaron una imagen ambigua.

La Democracia Cristiana continuó refiriéndose a sí misma como la primera fuerza electoral del país y enfatizaba la importancia de "oposición a toda costa". En un plenario preparatorio para la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano, el ex Presidente Eduardo Frei señaló que la oposición al gobierno debía ser categórica y global "porque esta oposición nace como una actitud frente al intento marxista de implantar el totalitarismo en Chile. (...) Estoy amenazado de muerte espiritual por el marxismo y su dictadura. No quiero ni siquiera vivir en un país marxista".²¹

En este tenso ambiente, la oposición fue capaz de apropiarse de un tema crítico que una vez más colocó al gobierno a la defensiva y por primera vez alineó a la jerarquía católica abiertamente con las críticas al gobierno. La controversia sur-

20. *Ercilla*, 4-10 de abril de 1973.

21. *Ercilla*, 11-17 de abril de 1973, p. 10.

gió en torno a un proyecto del gobierno, en estudio por largo tiempo, que consistía en crear la Escuela Nacional Unificada.²² Uno de los objetivos principales contemplados en el proyecto de reforma era el fortalecimiento de la capacitación vocacional en la enseñanza secundaria, la cual estaba básicamente diseñada como una formación preuniversitaria.

Si bien la sustancia de la reforma fue aceptada en forma general por los distintos sectores de la coalición de gobierno, el texto preparado por el equipo técnico-político del Ministerio de Educación provocó una gran controversia dentro del gobierno.²³ Jorge Tapia Valdés, ministro de Educación, con el respaldo de su Partido Radical, estaba preocupado por el calendario propuesto para las reformas y la terminología del texto, convencido de que ambos factores crearían serios problemas al gobierno. El plan propuesto era que las reformas se iniciarían en junio de 1973 y el lenguaje contenido en el texto era altamente partidista. Con el respaldo del Presidente de la República, el ministro intentó retrasar la ejecución del plan y redactar un nuevo texto que pudiera circular entre los distintos sectores, a fin de que se discutiera ampliamente con anterioridad a su aprobación final. Sectores de los partidos Socialista y Comunista en el Ministerio, sin la debida consulta a sus respectivos partidos, presionaron para que se mantuviera la propuesta original. Fue ese texto el que salió a la luz pública después de las elecciones parlamentarias y constituyó

22. *La Prensa* informó ampliamente acerca de la polémica sobre la ENU.

23. Esta sección se basa en entrevistas.

la base del fuerte ataque al gobierno, imputándosele la intención de transformar el sistema educacional en un programa masivo de indoctrinación. La mayoría de los objetivos originales del proyecto se perdieron en medio del caluroso y reñido debate que se suscitó. Al igual que en ocasiones anteriores, la incapacidad del gobierno para presentar un programa unificado, y la insistencia de militantes de rango medio en utilizar una retórica que claramente enardecía a la oposición, provocó al gobierno una grave situación política. No sólo la Iglesia objetó el proyecto -lo que legitimó considerablemente a la oposición- sino que el tema sirvió como un punto de encuentro para los oponentes del gobierno dentro de las Fuerzas Armadas.²⁴ Los altos mandos de cada una de las ramas armadas se reunieron con el asediado ministro de Educación en abril de 1973 para manifestar su rechazo a las reformas de la ENU. En la reunión quedó en claro que no estaban interesados en conocer la sustancia de las reformas; su interés principal era el de comunicarle al gobierno que estaban de acuerdo con el tono de las críticas de la oposición a la totalidad del proyecto gubernamental. Con ello, los altos mandos estaban declarando públicamente que no se mantendrían neutrales respecto a las políticas del gobierno, aunque éstas no hubieran pertenecido tradicionalmente a su esfera de competencia y responsabilidad.

Claramente consternado por la protesta masiva en contra del proyecto de la ENU, el Presidente Allende se vio for-

24. La declaración de la Iglesia respecto al debate sobre la ENU y la respuesta del ministro de Educación se encuentran en Carlos Oviado, ed., *Documentos del Episcopado: Chile 1970-73* (Santiago: Ediciones Mundo, 1974), pp. 151-58.

zado a retirar su propuesta y asegurar que no se promulgaría sin una consulta amplia. Los móviles políticos de la oposición quedaron en evidencia cuando a pesar del retiro del proyecto, éstos continuaron incitando a las manifestaciones masivas en las calles.

Este incidente, que tuvo lugar inmediatamente después de las elecciones parlamentarias en las que el gobierno había obtenido un resultado loable, fue extremadamente perjudicial para el gobierno. No sólo le dio a la oposición un tema capaz de movilizar a más sectores en contra del gobierno, sino que también le quitó al gobierno el ímpetu que necesitaba para continuar gobernando el país hasta las elecciones presidenciales de 1976. Y, para empeorar las cosas, la capitulación de Allende en esta materia agravó sus ya deterioradas relaciones con el ala izquierda de su coalición.

En un intento por recuperar la ofensiva y en un renovado esfuerzo por mostrarle a la crecientemente suspicaz ala izquierda de su coalición que no se había dado por vencido, el gabinete de Allende inició oficialmente las gestiones necesarias para estatizar cuarenta empresas que habían sido tomadas por los trabajadores durante el paro de octubre. Esto se llevó a cabo mediante un decreto de insistencia, que llevaba la firma de todos los ministros para sobreponerse a las objeciones del Contralor General. Como era predecible, esa acción provocó un clamor generalizado exigiendo la acusación constitucional de la totalidad del gabinete e imputando la ilegitimidad del gobierno.

El período posteleccionario había marcado una vez más un fuerte repunte de la política confrontacional. Sobre el críti-

co asunto de la reforma constitucional sobre las áreas de la economía, Allende argumentaba que el Tribunal Constitucional debía y podía decidir si la posición del Presidente era o no la correcta. La incapacidad para lograr un consenso en materia de procedimientos había comprometido a otra fuerza "neutral" en la esperanza que arbitrara lo imposible. La oposición pronto señaló que el Tribunal no tenía jurisdicción en la materia y que no acataría una decisión desfavorable. Al mismo tiempo, la confrontación jurídica se intensificó cuando el Congreso aprobó otra modificación a la Constitución para "regularizar" el proceso de "reforma agraria", prohibiendo la expropiación de predios agrícolas inferiores a cuarenta hectáreas y el otorgamiento de títulos de dominio a los campesinos que vivían en la tierra.

Fuera de los salones del Congreso, los medios de comunicación intensificaban su retórica. El Partido Comunista y la Democracia Cristiana se intercambiaron ásperas acusaciones después de que el diario comunista *El Siglo* acusó al gobierno de Frei de haber recibido dinero de la CIA en 1964, lo que deterioró aún más las relaciones entre ambos grupos. Renán Fuentealba, el presidente de la Democracia Cristiana, señaló que Chile estaba experimentando la peor amenaza totalitaria de su historia: "El Gobierno ha declarado la guerra a la democracia chilena. La guerra es la guerra. Nosotros sabremos responderle". Fuentealba criticó personalmente a Allende por no haber desmentido los cargos, y manifestó: "Fue una actitud impropia de un hombre que se dice hombre".²⁵

25. *Ercilla*, 18-24 de abril de 1973, p. 13.

La reacción demócrata cristiana a la estatización de más empresas fue igualmente dura. El senador Patricio Aylwin, que pronto sería elegido presidente de su partido en una junta nacional estrecha y calurosamente disputada, comentó que "con esta decisión, el Gobierno del señor Allende extrema su conducta casi permanente de hacer lo que se le da la gana con absoluto menosprecio por las normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder en un Estado de Derecho".²⁶ La prensa gobiernista contraatacó criticando a los líderes opositores y al Senado de "vendidos".

En medio de estos cargos y descargos ocurrió un incidente pequeño pero significativo. El general Carlos Prats, comandante en jefe del ejército y ex ministro del Interior, se dirigió en una reunión privada a ochocientos oficiales de la guarnición de Santiago, abogando por el respeto al gobierno constitucional. Los oficiales respondieron a sus palabras tosiendo en coro. Los "constitucionalistas" en las Fuerzas Armadas se encontraban ahora definitivamente a la defensiva.²⁷

En mayo el gobierno declaró estado de emergencia en Santiago, debido a los enfrentamientos callejeros sostenidos por grupos organizados de ambos bandos. Estas manifestaciones ocurrieron justo después de una erupción de huelgas del transporte público, de la planta estatal de acero y de organismos gubernamentales, todos ellos demandando aumentos salariales y garantías del gobierno frente a las dificultades económicas. Además de estas huelgas, los mineros de la cru-

26. *Ercilla*, 25 de abril-1 mayo de 1973, p. 8.

27. *Ercilla*, 25-31 de mayo de 1973, p. 13.

cial mina de cobre El Teniente declararon una huelga que habría de durar varias semanas y que obligó al gobierno a suspender los envíos de cobre a importantes clientes internacionales.²⁸

Con los militares fuera del gabinete, y en un ambiente de renovada confrontación, el gobierno había perdido su autoridad sobre el país. Mostrando aun mayor determinación que en octubre de 1972, los gremios se lanzaron a correr por cuenta propia. Más que nunca, los partidos de oposición no podían responder a las demandas de sus bases y fueron los gremios los que tomaron la iniciativa en la lucha contra el gobierno. Al mismo tiempo, los maximalistas en la izquierda intentaban armar a los obreros en las fábricas y usinas para lo que ellos veían acercarse como la confrontación final.

La Corte Suprema ahora criticaba públicamente a Allende, argumentando que el país enfrentaba "una crisis de legalidad". La policía ya no era capaz de controlar la violencia y los tribunales ya no eran obedecidos. Allende intercambió

28. La huelga en El Teniente fue un golpe severo al gobierno en el momento que más necesitaba proyectar una imagen de apoyo unificado de la clase obrera. La huelga, que comenzó en abril y duró hasta la primera quincena de julio, tuvo su origen en un desacuerdo entre el gobierno y los mineros sobre un reajuste salarial aprobado en octubre de 1972. La oposición apoyó fuertemente a los trabajadores, aunque sus demandas significaban aumentos salariales que excedían con creces los del resto de los trabajadores. Si bien se debe destacar que gran parte del apoyo a la huelga provino de los sindicatos profesionales, la huelga tuvo un efecto desmoralizador para el gobierno y dividió a los trabajadores. Otros trabajadores por ejemplo los mineros de Chuquicamata, declararon huelgas solidarias con los de El Teniente. En Chuquicamata, ganó la moción propuesta por los empleados. Los obreros continuaron trabajando en circunstancias extraordinariamente difíciles. La huelga constituyó otra demostración de que las reivindicaciones de la elite de la clase obrera eran esencialmente económicas y que carecían de una sólida conciencia revolucionaria.

personalmente una serie de cartas con los miembros de la Corte Suprema, defendiendo a su gobierno y acusando a los jueces de optar por el orden a expensas de la justicia social.²⁹ La reducción de la arena política también se aprecia a través de un intercambio de cartas sin precedentes entre el Presidente y un grupo de militares en retiro, que habían hecho una declaración pública deplorando los efectos que la crisis económica y la agitación social podrían tener sobre la seguridad nacional del país. Además, Allende fue personalmente a sostener un áspero "diálogo" con empleados de extrema izquierda del Ministerio de Obras Públicas que se habían tomado el Ministerio. Cuando sostuvo conversaciones personales con los mineros en huelga, en un intento por solucionar la huelga de El Teniente, tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista lo criticaron por haber reconocido la legitimidad de trabajadores que ellos consideraban como trabajadores "opositores". Una figura cada vez más solitaria, Allende encontraba que sus brillantes esfuerzos persuasivos ahora caían en oídos sordos.

Cualquier intento por reanudar el diálogo con la Democracia Cristiana, una acción que Allende y algunos de sus ministros pedían privada y públicamente, sufrió otro retroceso en la tercera semana de mayo cuando el Partido Demócrata Cristiano eligió un candidato de "línea dura" para presidir los

29. Véase *Ercilla*, 13-19 de junio de 1973, pp. 7-10. Para un artículo muy crítico de los tribunales, ver Victor Vaccaro Escándalo en la Corte, *Chile Hoy*, 22-28 de junio, pp. 16-17. El intercambio de cartas entre el Presidente y la Corte Suprema ya fue citado en la nota 3.

destinos del partido. En una hábil orquestación de un conjunto de maniobras políticas, el ex Presidente Frei logró convencer a la Junta Nacional que adoptara la tesis que Chile enfrentaba la perspectiva de una dictadura marxista, y que la respuesta del partido sólo podía ser una de una continua y enérgica oposición. Esta postura triunfó por el estrecho margen de 55% contra el 45% obtenido por la tesis que sostenía que el problema de Chile no era demasiada autoridad sino demasiada anarquía. Según el ala progresista del partido, el caos de la nación sólo se podía solucionar a través de una política de acercamiento y acomodación. La elección de Patricio Aylwin a la presidencia de la colectividad señalaba la determinación de una estrecha mayoría de rechazar cualquier iniciativa tendiente a encontrar una solución política a menos que el Presidente estuviera genuinamente dispuesto a ceder a sus demandas.³⁰ Fragmentaciones anteriores, que habían visto escindirse gradualmente el ala izquierda, primero para formar el MAPU y luego para formar la Izquierda Cristiana, habían

30. Que Allende estaba resuelto a proseguir el diálogo, y que los demócrata cristianos, especialmente Frei, no estaban interesados también se manifiesta a través de algunos acontecimientos acaecidos "tras bambalinas". En mayo Allende intentó, mediante los buenos oficios del Cardenal, tener una conversación personal con Frei para discutir la grave crisis. Frei rehusó participar en una reunión privada con el Presidente, arguyendo que sólo asistiría a una reunión pública a la cual debía ser invitado públicamente. Frei no confiaba en la buena fe del Presidente. El descartó la posibilidad de que Allende estuviera haciendo un esfuerzo genuino por resolver las dificultades del país y rehusó reconocer que Allende, al igual que él, estaba bajo presiones políticas enormes desde su propio bando. Que Allende estuviera incluso dispuesto a exponerse a un encuentro privado originado por su propia iniciativa es prueba de su buena fe. Estas observaciones y la sección sobre la Junta Nacional Demócrata Cristiana se basan en extensas entrevistas realizadas principalmente con destacados personajes de la Democracia Cristiana.

contribuido a inclinar la balanza en favor del ala derecha del partido.

La elección de dirigentes de la facción más conservadora creó graves impedimentos estructurales para un acuerdo centrista. Anteriormente, quienes actuaban como agentes conciliadores, tanto en la Unidad Popular como en la Democracia Cristiana, detentaban posiciones de autoridad en sus respectivos bloques. Allende estaba a la cabeza del gobierno y era el líder titular de su partido; Fuentealba había representado a los sectores más progresistas del partido opositor. Ahora, los intentos oficiales por lograr un entendimiento entre ambos grupos tendrían que ser canalizados a través del líderazgo más conservador de Aylwin. Cualquier contacto extraoficial con el ala progresista de la Democracia Cristiana sólo serviría para empeorar las posibilidades de un acuerdo porque aumentaría el temor que la Democracia Cristiana tenía frente a cualquier escisión del partido, considerando que ella representaría una desventaja para la facción que no se identificaba con la directiva oficial y, por ende, no contribuiría a una solución política.³¹ Si se lograba un acuerdo factible entre las fuerzas contendoras, los demócrata cristianos, a través de su directiva oficial, tendrían que ser una de las partes fir-

31. El fragmento que era visto como el que mejor conservaba las tradiciones de un partido tenía mucho más posibilidades de sobrevivir. Tanto el MAPU como la Izquierda Cristiana, aunque se llevaron a importantes dirigentes del partido, no fueron capaces de retener un apoyo sustancial en las urnas. Lo mismo ocurrió con fragmentos del Partido Radical -la Democracia Radical y el Partido de Izquierda Radical- o el fragmento del Partido Socialista, la Unión Socialista Popular. En las elecciones parlamentarias de 1973 a los partidos pequeños y a todas las facciones del dividido Partido Radical les fue muy mal.

mantes. El desplazamiento del poder hacia la derecha habría de alzar las exigencias de la oposición en cualquier posible negociación, elevando el costo para el Presidente.³²

Poco después de la Junta Nacional demócrata cristiana, la cuestión de un acuerdo con el gobierno nuevamente asumió características de urgencia. En la primera semana de junio el Tribunal Constitucional se declaró incompetente para dirimir el prolongado conflicto constitucional entre el Presidente y el Congreso. Finalmente, el conflicto había quedado sin árbitro alguno. Ambos lados adoptaron la interpretación de la reforma constitucional que cada uno defendía, aunque la Contraloría dictaminó en contra del Presidente. El Congreso entonces procedió a acusar constitucionalmente a cuatro ministros de Allende y a ocho, de los veinticinco, intendentes provinciales. El 18 de junio el partido opositor Democracia Radical emitió una declaración que clamaba: "Basta ya de declaraciones -la lucha efectiva en todos los frentes debe empezar".³³ Un destacado senador nacional declaró en un programa de televisión transmitido a lo largo del país: "El Presidente de la República es actualmente un Jefe de Estado

32. Según destacados miembros del ala progresista del Partido Demócrata Cristiano, uno de los principales errores de Allende fue no haber intentado tener una actitud más flexible hacia el Partido Demócrata Cristiano durante los primeros años de su gobierno. El ala progresista del partido todavía controlaba la directiva del partido, y era posible una deserción del ala derecha. Esto habría significado una ventaja tanto para el gobierno como para los sectores de izquierda y centro de la Democracia Cristiana. Una división, después, de la facción más conservadora habría ganado la directiva del partido, sólo habría sido en detrimento de los sectores más moderados, quienes se habrían arriesgado a llegar a ser políticamente insignificantes.

33. *Chile Hoy*, 6-12 de julio de 1973, p. 11.

ilegítimo".³⁴ Y El Mercurio publicó un artículo en que se declaraba:

"El deber categórico de la gente sensata es poner fin al saqueo y al desorden, estimulados y amparados por el gobierno inepto o enloquecido que nos aplasta. (...) Para llevar a cabo esta empresa política salvadora hay que renunciar a los partidos, a la mascarada electoral, a la propaganda mentirosa envenenada, y entregar a un corto número de militares escogidos la tarea de imponer fin a la anarquía política".³⁵

El gobierno respondió a este resurgimiento del lenguaje sedicioso realizando una gran concentración de masas para demostrar que el pueblo seguía apoyando al gobierno. Este acontecimiento marcó el principio del fin de la "vía chilena al socialismo", puesto que una semana más tarde, el 29 de junio, una guarnición militar intentó un golpe de Estado. El intento de golpe fue sofocado rápidamente por la actuación decisiva del general Prats. A las guarniciones que habían considerado la posibilidad de unirse a la insurrección, se les impidió hacerlo. Pero, a pesar del entusiasmo de la izquierda, la "victoria" del gobierno resultó ser sólo una ilusión. El destino del país ya no estaba sólo en manos de los políticos; ahora también había caído en manos de unos militares divididos y altamente politizados.

34. *Ibíd.*

35. *Ibíd.*

Esfuerzos para lograr un acuerdo: La abdicación de los demócratas

El intento de golpe del 29 de junio de 1973 marcó el último hito en el desarrollo de la tragedia de la política chilena. Este hecho dio al Presidente Allende una prueba más de que los militares ya no podían ser considerados como un árbitro neutral. Cuando convocó a catorce generales del ejército a la Moneda para obtener su apoyo, sólo cuatro de ellos ofrecieron un respaldo categórico. El comprendió que sus días como presidente estaban contados a menos que pudiera recuperar la autoridad política. Rechazó el consejo de las tendencias maximalistas de su coalición que continuaban presionando para que se armara masivamente a los trabajadores. El Presidente creía que la confrontación armada era ingenua y suicida. Se dice que le preguntaba al senador Altamirano: "¿Cuántas masas se necesitan para detener un tanque?"³⁶ Si Allende había vacilado anteriormente, las medidas que adoptó después del intento de golpe de Estado indicaban claramente que estaba dispuesto a llegar a algún tipo de acuerdo con los demócrata cristianos, en un último esfuerzo por estructurar un entendimiento que apaciguaría a la oposición política. La Democracia Cristiana seguía siendo el mayor partido del país, y sus líderes gozaban de gran prestigio en amplios sectores de la oposición. A pesar de que mucha gente ya no estaba interesada en conservar el sistema tradicional, un acuerdo entre

36. Citado por Régis Debray en *Il est mort dans sa loi*, *Le Nouvel Observateur*, N° 462, 17-23 de septiembre de 1973, p. 37.

el Presidente y el mayor partido opositor habría convertido cualquier intento de golpe de Estado -por ende cualquier intento por incitar a las masas a una confrontación armada- en un acontecimiento demasiado costoso.³⁷

Destacados miembros del Partido Demócrata Cristiano compartían este sentimiento e hicieron un llamado a su partido para que alcanzara un entendimiento con el gobierno. Fernando Castillo, uno de los miembros más distinguidos del ala progresista del partido y rector de la Universidad Católica, habló en nombre de todos los rectores de las universidades chilenas diciendo que para defender las instituciones democráticas era imprescindible encontrar un consenso. El advirtió: "Mientras mayor es el peligro, más urgente el mínimo leal consenso".³⁸

La situación era extraordinariamente crítica. Los comandantes de las Fuerzas Armadas no estaban dispuestos a participar en el gabinete, reflejando un descontento inusual en sus filas.³⁹ Puesto que la lealtad de los militares al principio de la neutralidad se había deteriorado severamente, Allende

37. Al ser entrevistados por el autor, dirigentes de la Democracia Cristiana y altos funcionarios del gobierno de Allende que participaron en las negociaciones concordaron en esta afirmación. Ellos señalaron que si bien la Fuerza Aérea y la Armada podrían haber estado listas para intervenir, el Ejército estaba lo suficientemente dividido como para que un acuerdo hubiera hecho difícil contar con el vital apoyo del Ejército para una intervención militar. Esto es muy importante. Dirigentes de ambos lados no estaban convencidos de que un golpe de Estado fuera inevitable. E incluso, en mirada retrospectiva, ellos especulaban que se podría haber prevenido en julio de 1973. Ellos (especialmente la directiva de la Democracia Cristiana) no se dieron cuenta en ese momento que la carencia de un acuerdo era en sí un importante catalizador para el golpe de Estado.

38. *Ercilla* 18-24 de julio de 1973, p. 7.

39. *Ibíd.*

tenía la esperanza de que un acuerdo entre los políticos pudiera ayudar a fortalecer aquellos sectores de las Fuerzas Armadas que todavía se resistían a violar los cánones básicos de las relaciones cívico-militares tradicionales.

Pero el acuerdo entre las fuerzas centristas todavía tenía que enfrentar los permanentes obstáculos de los últimos dos años y medio; tanto el gobierno como la oposición estaban sujetos a los virulentos ataques de la extrema derecha y la extrema izquierda. Además, la directiva de la Democracia Cristiana había girado hacia el lado conservador. El grado de confianza mutua había descendido a su más bajo nivel. Los intereses parciales de grupos e individuos primaron sobre los intereses comunes que la mayoría de los chilenos tenía en el sistema vigente. Cada uno intentaba imponer sus propias soluciones; los temas sobre los cuales se podía debatir racionalmente prácticamente habían desaparecido.

Los esfuerzos por lograr un acuerdo fueron inmediatamente criticados por Altamirano, quien señaló:

"Hay quienes pretenden insinuar 'diálogos democráticos' con la Democracia Cristiana. Los socialistas planteamos que es posible el diálogo con todas las fuerzas políticas que se definen claramente en contra de los explotadores, en contra del imperialismo. Impulsamos y desarrollamos el diálogo a nivel de la masa, con los trabajadores, militen o no militen, pero rechazamos categóricamente todo diálogo con partidos y directivas reaccionarias y contrarrevolucionarias."⁴⁰

40. *Chile Hoy*, 13-19 de julio de 1973, p. 8.

Haciendo eco de esta postura, el secretario general del MIR afirmó: "Las clases patronales sí que necesitan de la tregua para el desarrollo de su táctica del emplazamiento. Nada sería hoy más peligroso y más suicida que abandonar las posiciones tomadas y abrir la tregua".⁴¹

Las presiones ejercidas sobre la Democracia Cristiana desde la derecha también eran evidentes. En un cable enviado desde Roma, el senador Fuentealba advertía respecto de estas presiones:

"Hay sectores empecinados en producir un desenlace fatal, que signifique la caída del Gobierno al más breve plazo. Esos son criminales. Tengo fe en que mi partido sabrá mantener consecuencia con sus principios y las ideas que los inspiran, desoyendo a quienes hoy día se acercan como amigos, cuando siempre se empeñaron en destruir al partido (...)." ⁴²

Desde un comienzo hubo serias dificultades para llegar a un modus vivendi.⁴³ Cuando Allende, a raíz del fallido golpe de Estado, le solicitó a la Democracia Cristiana apoyo para la declaración de un estado de sitio, la directiva nacional del partido se reunió para deliberar sobre la solicitud. Algunos miembros sostenían que el partido debía darle a Allende una respuesta positiva y luego condicionaría exigiendo ciertas garantías contra el abuso de poder. Esta postura conciliadora obtuvo sólo cuatro votos contra catorce votos a favor de

41. *Ibíd.*, p. 6.

42. *Chile Hoy*, 6-12 de julio de 1973, p. 3.

43. Esta y las siguientes secciones también están basadas en parte en las entrevistas con ex altos dirigentes políticos, principalmente demócrata cristianos.

la postura más dura que proponía rechazar la solicitud del gobierno hasta que éste ofreciera ciertas garantías. Al igual que un Estado soberano que recibe una delegación de otro Estado soberano, el Consejo informó su decisión a tres de los ministros de Allende. Ellos no volvieron, como estaba acordado, para entregar la respuesta del gobierno. La declaración pública emitida por la Democracia Cristiana concluía señalando que "una vez más, la Democracia Cristiana considera necesario manifestar ante el pueblo de Chile que la responsabilidad por el término del clima de desorden, inseguridad y caos al que ha llegado el país y la crisis extremadamente grave en la que se encuentra es principalmente la responsabilidad del Presidente de la República".⁴⁴

El Presidente, sin embargo, actuó rápidamente para formar un nuevo gabinete, reemplazando a los ministros que habían sido acusados por el Congreso -un cambio perjudicial para el Partido Comunista. Allende se dedicó cuidadosamente a estructurar un gabinete basado en personas de prestigio, como Felipe Herrera, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. También recurrió a personalidades de oposición como Fernando Castillo.

Los demócrata cristianos, sin embargo, manifestando el temor de que Allende estuviera intentando dividir al partido, rehusaron otorgar el permiso para que sus miembros integra-

44. Esta declaración se puede encontrar en Echeverría y Frei, *La lucha por la juridicidad*, vol. 3, pp. 123-24. Es ilustrativo que el día del intento de golpe la directiva de la Democracia Cristiana se reunió por horas y fue incapaz de decidir cuál sería su reacción oficial hasta después que la insurrección había fracasado.

ran el gabinete. Habiendo fracasado en su intento por estructurar un gabinete bipartidista de "primera categoría", Allende procedió a formar uno con un carácter decididamente moderado. Como ministro del Interior nombró a Carlos Briones, un socialista independiente considerado como un "hombre de derecho" en muchos círculos. Como ministro de Relaciones Exteriores mantuvo a Clodomiro Almeyda, uno de los pocos ministros de Allende que se había salvado constantemente de las acusaciones constitucionales. El senador Volodia Teitelboim, el principal ideólogo del Partido Comunista, se refirió al gabinete como un "gabinete de unidad" diseñado para unir a todos los chilenos que desearan evitar la hecatombe de una guerra civil, agregando que el gabinete pretendía ser una apertura al diálogo.⁴⁵ Con gran riesgo para la unidad de su propia coalición, que ya había experimentado una erosión significativa de la extrema izquierda, Allende perseveró en la estrategia de establecer un "consenso mínimo" con el mayor partido opositor.

La directiva de la Democracia Cristiana no respondió con buena disposición a las propuestas del Presidente. Pensaba que Allende los estaba engañando -que en realidad no estaba dispuesto a romper con su extrema izquierda- y que simplemente estaba procurando ganar tiempo para poder llevar adelante la totalidad de su programa. Al mismo tiempo, la directiva estaba bajo una presión enorme por parte de una facción derechista que deseaba debilitar a Allende lo más posi-

45. *Ercilla*, 11-17 de julio de 1973, p. 9

ble. Estos sectores estaban dispuestos a promover y unirse a la escalada que exigía la renuncia del Presidente. Los gremios afiliados al partido, los sindicatos y las organizaciones locales sumaron sus simpatizantes y voces a la escalada de huelgas que estaban paralizando al país. Varios dirigentes estaban en contacto con oficiales de las Fuerzas Armadas, aprobando tácitamente los planes para una acción militar directa.

A fines de julio, sin embargo, el cardenal Raúl Silva Henríquez, haciendo uso de todo el prestigio de su cargo, pidió encarecidamente que se reanudaran las conversaciones entre las facciones antagónicas. Allende, en un emotivo discurso en la CUT, respondió con un nuevo llamado a conversar. El senador Patricio Aylwin, presidente de la Democracia Cristiana, desafiando a muchos miembros de su partido, que lo habían abucheado en una reunión masiva en el local del partido, accedió a sostener las conversaciones. La fuerte presión que recaía sobre él se manifestó en las críticas al "diálogo", publicadas en La Prensa, el diario del partido.

Paralelamente, entre bastidores también se realizaban acciones tendientes a asegurar el éxito de las conversaciones. En julio, Gabriel Valdés, el ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Frei, regresó temporalmente de Naciones Unidas.⁴⁶ Después de reunirse con el Presidente Allende y altos dirigentes del partido Demócrata Cristiano, fue invita-

46. Esta sección se basa en entrevistas con Gabriel Valdés realizadas en febrero y marzo de 1974. La información fue corroborada por otros personeros que asistieron a esa comida. Las conversaciones privadas entre el Presidente y dirigentes demócrata cristianos estaban prohibidas por la directiva de la Democracia Cristiana, que temía la reacción de los nacionales y los adherentes al Partido Demócrata Cristiano.

do a cenar a la casa de Aniceto Rodríguez, un destacado dirigente del sector moderado del Partido Socialista. Allí se encontró con varios ministros e importantes líderes de la Unidad Popular, que tenían mucho interés por conocer la opinión de Valdés sobre una posible solución para la crisis. Ellos manifestaron un gran deseo de establecer vínculos a un nivel distinto al diálogo formal y público del Presidente con el líder de la Democracia Cristiana. También parecían dispuestos a considerar la idea de un acuerdo que podría significar la incorporación de algunos demócrata cristianos al gabinete, a pesar del riesgo de perder el apoyo de un segmento del Partido Socialista. Por su parte, los demócrata cristianos tendrían que respetar gran parte de los lineamientos básicos del programa de gobierno, aunque fuera en una versión modificada. Parecía que existía consenso que la crisis había alcanzado un punto tal que lo único que quedaba era tomar drásticas medidas a toda costa. Sin embargo, la conversación fue interrumpida por un llamado telefónico al ministro del Interior, comunicándole la horrible noticia que el edecán naval de Allende había sido asesinado. La furia de los cargos y descargos que siguieron en la prensa y el ritmo veloz de los acontecimientos interrumpieron la posibilidad de un mayor progreso de estas conversaciones preparatorias. Las conversaciones formales se iniciaron el lunes siguiente, con escaso trabajo previo y con enormes obstáculos para un resultado exitoso. La nación entera miraba y aguardaba.

Los dirigentes demócrata cristianos iniciaron las conversaciones convencidos de que Allende tendría que abando-

nar gran parte de su programa y cortar su vínculo con la extrema izquierda si se iba a lograr un acuerdo.⁴⁷ Allende, por su parte, se resistía a tomar ese último paso. Después del discurso en la CUT le dijo a Gabriel Valdés que había tenido el día más triste de su vida, y que en verdad había roto con su propio partido. Pero, poco después, postergó el inicio de las conversaciones, para gran pesar de su ministro del Interior, en un último esfuerzo por contar con la conformidad del Partido Socialista. Los demócrata cristianos inmediatamente interpretaron este cambio de actitud como una muestra de la incapacidad del Presidente para abandonar a los sectores más extremos de su coalición. No entendieron que Allende, en ausencia de una clara seguridad de que los demócrata cristianos le otorgarían un respaldo genuino, simplemente estaba re-nuente a dar un paso que representaría el fin de la Unidad Popular. El Presidente creía que Frei había estado sosteniendo reuniones con los militares y estaba tácitamente de acuerdo con aquellos que eran partidarios de un golpe de Estado. ¿Por qué habría de aislarse aún más rompiendo sus vínculos con su propia gente, si personeros importantes de la Democracia Cristiana querían que saliera de su cargo de todos modos? En este confuso ambiente, ninguno de los dos lados sabía lo que el otro realmente quería; y ninguno de los dos estaba del todo dispuesto a creer que, aunque el otro lado fuera sincero, sería capaz de cumplir su palabra. La arena política se había

47. La prensa realizó amplios reportajes de las conversaciones. Esta sección, sin embargo, se basa principalmente en entrevistas. Para un reportaje al respecto, ver *Ercilla*, 8-14 de agosto de 1973, pp. 7-10.

reducido drásticamente a unos pocos hombres que intentaban encontrar una solución mágica, pero estos hombres ya no tenían pleno control sobre las fuerzas sociales a su alrededor. Sólo el anuncio de un acuerdo podría haber prevenido el desenlace final; pero éste no surgió.

El senador Aylwin y sus correligionarios iniciaron las conversaciones temiendo que Allende, con su gran fama de hábil negociador, pudiera mostrarse más astuto que ellos. Estaban bajo una enorme presión, no sólo de parte de sus electores sino también del adversario, no ceder demasiado -no hacer concesiones en los puntos esenciales. Cuando Allende, en la primera reunión, puso unas gruesas carpetas sobre la mesa y señaló que se podía llegar a un acuerdo sobre muchas materias de fondo, Aylwin creyó que Allende todavía estaba dilató. Insistió en exigir del Presidente la concreción de varias de sus demandas, incluyendo la incorporación de los militares en todos los niveles del gobierno. La oposición, declaró, necesitaba garantías de la buena fe del gobierno. El Presidente no podía aceptar aquello; habría significado una virtual abdicación como gobernante. Allende destacó las distintas bases para un posible acuerdo, incluyendo su disposición a resolver el impase constitucional con el Congreso aceptando prácticamente en su totalidad la versión opositora de la reforma, a condición de que el procedimiento de aprobación no volviera a utilizarse más en Chile, porque de lo contrario el sistema político chileno se convertiría en un régimen parlamentario. Agregó que era responsabilidad de los políticos estructurar un entendimiento, para salir del impase político.

Entonces, los militares podrían ser llamados como árbitros.

La demanda no negociable de los demócrata cristianos sobre la incorporación de los militares en el gobierno, fue criticada como demasiado extrema por varios miembros destacados del partido, quienes todavía pensaban que el problema de Chile no era la dictadura sino la anarquía. Parecía que ni Allende ni los dirigentes demócrata cristianos apreciaban del todo las presiones políticas a que estaba sometido el otro lado. En su obstinada oposición los demócrata cristianos temían más lo que Allende pudiera hacer que las consecuencias que pudiera sufrir la totalidad del sistema del cual su partido, más que otros, dependía. Muchos parecían estar convencidos de que las Fuerzas Armadas chilenas, con su tradición "constitucionalista", simplemente obligarían al Presidente a dejar el poder para entregárselo a ellos nuevamente. Parecían haber olvidado la suerte corrida por otros demócratas y otros grupos centristas, en otros lugares y épocas, que habían abdicado su responsabilidad en momentos críticos.

El 9 de agosto de 1973, tras el quiebre de las conversaciones formales y en vísperas de un nuevo paro nacional de los transportistas, Allende, a gran pesar de la izquierda, decidió incorporar militares al gabinete. Sabía que ya no tenía otra alternativa. Aunque trató de salvar su imagen política, tomando esta iniciativa después que las conversaciones habían fracasado, de hecho él cedió a la mayoría de las demandas de la oposición. La directiva de la Democracia Cristiana, sin embargo, no quedó satisfecha. Después de haber aprobado inicialmente la medida, increparon al Presidente por no ir aún

más lejos, incorporando a los militares en todos los niveles de la gestión gubernamental. Sectores disidentes dentro del partido sostenían que los demócrata cristianos no estaban siendo razonables al exigir mayores demandas antes de que al nuevo gabinete se le diera una verdadera oportunidad para actuar y que al hacerlo estaban socavando la posición de los militares que habían aceptado incorporarse al gabinete a pesar de enormes presiones. Los políticos habían sobrepasado el punto de irreversibilidad del proceso. Habían sido incapaces de encontrar una solución política para los problemas políticos de Chile, y ahora era demasiado tarde. A medida que los políticos persistían en intercambiar acusaciones y contraacusaciones, las Fuerzas Armadas habían asumido de hecho la autoridad del país. Ahora era sólo cuestión de tiempo antes que las facciones golpistas fueran capaces de consolidar sus planes para reemplazar por la fuerza al gobierno.

Los militares: El miedo a un ejército paralelo y la insurrección en las filas

El intento de golpe del 29 de junio de 1973 no marcó el comienzo de la actuación directa de militares en la política. Desde los primeros intentos de golpe antes de que Allende asumiera el poder hasta la caída del gobierno de la Unidad Popular, en las Fuerzas Armadas hubo sectores que conspiraron para derrocar al régimen. Pero no fue hasta el incidente del 29 de junio, cuando un pequeño regimiento de tanques avanzó

hacia el palacio presidencial, que ocurrió un intento concreto. "El tancazo" no fue parte de un plan más amplio para tomar el poder. Más bien, fue llevado a cabo por un general disconforme, a punto de ser destituido de su cargo, que creyó erróneamente que el descontento del resto de las Fuerzas Armadas provocaría una rápida escalada militar para tomar el gobierno.⁴⁸ El general Prats supo actuar en forma rápida y sencilla, con pocas pérdidas de vida, para deponer la insurrección, demostrando así que el sector "constitucionalista" de los militares, especialmente en el Ejército, todavía era el que mandaba. No obstante, el simple hecho de que un regimiento del Ejército chileno altamente profesionalizado hubiera actuado sin órdenes directas de sus superiores, era una muestra tangible del creciente descontento entre los oficiales de rango medio. Las declaraciones en la prensa de gobierno señalando que la insurrección de junio había sido un claro triunfo para Allende, ignoraban la magnitud del descontento en las filas militares. Fue significativo que tanto los rebeldes caídos como los cuerpos de los soldados leales fueron enterrados con todos los honores militares por una institución empeñada en

48. Ver el suplemento especial de *El Mercurio* publicado el 11 de septiembre de 1974 intitulado *Cómo llegaron las fuerzas armadas a la acción del 11 de septiembre de 1973*. El autor de este suplemento de veinticuatro páginas, Arturo Fontaine Aldunate, el director del diario, entrevistó en profundidad a más de quince altos oficiales que fueron protagonistas de primera línea. A pesar de que el reportaje no es desinteresado, y que Fontaine no esconde su propio sesgo, este reportaje es extraordinariamente valioso porque presenta un cuadro completo del movimiento gradual hacia el golpe de Estado en las tres ramas, especialmente en la Armada. Otro reportaje útil -aunque presenta menos información- basado en muy buenas fuentes es el artículo de William Montalbano, *How the Chilean Military Toppled Allende* en el *Miami Herald*, 16 de septiembre de 1973, pp. 1, 22 A.

ignorar los cánticos de los simpatizantes de la Unidad Popular que gritaban: "Paredón, paredón".⁴⁹

El fallido intento tuvo un profundo efecto en las Fuerzas Armadas. En el vacío político producido por un gobierno debilitado que luchaba por alcanzar un acuerdo con la oposición, los militares irían avanzando por su propia cuenta en un esfuerzo por controlar lo que percibían como la creciente amenaza militar de la izquierda. En este proceso, una serie de acontecimientos conducirían a una eventual pérdida de autoridad de los principales comandantes "constitucionalistas" y a su reemplazo por oficiales dispuestos a actuar en contra del gobierno.

Es necesario subrayar que si bien había diversos planes conspiratorios en varios niveles de la jerarquía, el golpe de Estado no fue un asunto altamente coordinado, preparado con semanas de anticipación. Más bien, fue el resultado de un proceso gradual y azaroso.⁵⁰ Esto fue así porque los militares chilenos constituían una organización altamente profesionalizada con un tremendo respeto por la disciplina y la jerarquía. No era posible para los oficiales de rango medio de las distintas ramas protagonizar "un golpe de coroncles" movilizándolo

49. Para las consignas, ver *Chile Hoy*, 6-12 de julio de 1973, p. 15.

50. Sabemos que algunos oficiales estuvieron conspirando desde un comienzo. Varios conspiradores fueron destituidos a raíz del asesinato de Schneider e incidentes internos dentro de las Fuerzas Armadas en períodos posteriores, como el de septiembre de 1972. La CIA se infiltró exitosamente en uno de los grupos conspiradores en enero de 1972. La CIA recibió informes sobre el grupo que planificaba el golpe durante julio, agosto y septiembre de 1973. Ver Select Committee on Intelligence, U.S. Senate, *Covert Action in Chile*, p. 39. El punto no es que existieran complots, sino más bien que el proceso que los conspiradores tuvieron que seguir a fin de encaminar la institución hacia un golpe fue un proceso largo y tedioso.

unos pocos regimientos. El golpe abortado del 29 de junio lo había demostrado claramente. Para que un golpe de Estado tuviera éxito sería necesario no sólo estructurar un consenso considerable entre los oficiales de más alto rango, sino también asegurar que los comandantes en jefe de cada rama estuvieran de acuerdo con la acción final. Y, hasta el último momento, en cada rama, el alto mando estuvo constituido por oficiales constitucionalistas declarados. En especial, el general Prats y el almirante Raúl Montero, comandantes en jefe del Ejército y de la Armada respectivamente, se resistieron con gran fuerza, y exitosamente por un tiempo, a las presiones de sus colegas. El general (A) César Ruiz Danyau, aunque era más partidario de la neutralidad de los militares que la mayoría de sus colegas de la Fuerza Aérea, sucumbiría con mayor facilidad a las presiones. La destitución de un comandante en jefe era un proceso tedioso y frustrante, porque en última instancia sólo podía lograrse mediante la acción del Presidente de la República o por la renuncia voluntaria aprobada por el Jefe de Estado. De hecho, no fue hasta que los tres generales salieron de sus cargos con el consentimiento renuente del Presidente, que los golpistas pudieron presionar por una solución militar definitiva.

La importancia de la jerarquía y el respeto al rango se puede ver en la formación, después del incidente del 29 de junio, de un comité constituido por quince oficiales de la más alta jerarquía de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, que se reunieron para discutir problemas comunes y prepararse para la eventualidad que Allende invitara a los militares a in-

corporarse al gabinete. La reunión estaba presidida por los tres comandantes en jefe, y el resto de los oficiales se sentaron alrededor de la mesa en orden de antigüedad. En la reunión del 30 de junio, el general Augusto Pinochet Ugarte, segundo en antigüedad después de Prats, señaló que no sería apropiado referirse a materias políticas, que los oficiales se debían mantener neutrales y solamente discutir problemas económicos. Aunque los oficiales redactaron un documento crítico sobre la situación nacional que constaba de veintinueve puntos que sería presentado al Presidente de la República para ser discutido, quedaba en claro que cualquier alusión a una insurrección militar estaba fuera de lugar.⁵¹

También es necesario subrayar que el éxito de los golpistas en debilitar a los constitucionalistas no fue simplemente el resultado de un debate interno aislado del desarrollo de los acontecimientos en el país. De hecho, hubo dos sucesos que tuvieron un profundo efecto en la correlación interna de fuerzas entre los militares. El primero fue el fracaso, ya señalado, de los políticos en lograr un consenso, lo que obligaría a Allende a organizar un nuevo gabinete militar en un clima en el cual los llamados directos a la intervención militar estaban a la orden del día. Pero, aún más significativa fue la escalada de confrontación directa entre los militares y sectores de la izquierda. Para las Fuerzas Armadas esto se tradujo en un creciente temor de que por primera vez la propia institución estaría amenazada. A la oficialidad le preocupaba que la izquierda planeara establecer una fuerza militar paralela en-

51. Ver Fontaine, *Cómo llegaron las Fuerzas Armadas*, p. 10.

tre los trabajadores, y, aún más amenazante, que intentara una instigación generalizada a la insubordinación de las tropas.⁵²

Aunque había sectores al interior de las Fuerzas Armadas que indudablemente temían las declaraciones de la izquierda revolucionaria sobre los trabajadores armados, no fue hasta después del golpe fallido que los militares comenzaron a manifestar una verdadera preocupación por el desarrollo de un ejército paralelo. El gobierno había dado gran publicidad al hecho que los cordones industriales alrededor de Santiago habían decidido movilizarse en cuanto supieron que los tanques estaban avanzando.⁵³ Después del 29 de junio, los sectores izquierdistas de la Unidad Popular, mientras criticaban

52. En una versión anterior de este trabajo, yo sostenía que la intervención de Allende en la jerarquía fue uno de los factores que contribuyó al descontento de las Fuerzas Armadas. Desde que ese trabajo fue escrito, he podido realizar más entrevistas con altos funcionarios del gobierno de Allende. Basado en esas entrevistas y en la reevaluación de la información pública, parece que la cuestión de la alteración de la jerarquía de rango llevada a cabo por el Presidente no fue una alteración importante. Allende escrupulosamente resistió los esfuerzos de muchas personas de su propia coalición por obtener oficiales más leales. Ver, por ejemplo, la carta del senador Altamirano a Allende en la que el líder socialista amenazó con destituir al ministro del Interior del gabinete a menos que el Presidente finalmente aceptara reemplazar algunos líderes de los Carabineros. La carta, irónicamente, está publicada en Junta de Gobierno, *Libro blanco del cambio de gobierno en Chile* (Santiago: Editorial Lord Cochrane, 1973), p. 113, como una supuesta evidencia de la intromisión de la Unidad Popular en las Fuerzas Armadas. Como quedará en claro más adelante, no eran sólo los socialistas los que deseaban el reemplazo de los oficiales; los conspiradores también querían que el Presidente rebajara la jerarquía de rango para asegurar el éxito de sus planes. El estudio anterior es *Il crollo della democrazia in Chile, Revista italiana di Scienza Política*, 5(1): 83-129, abril de 1975.

53. Ver el artículo de Faride Zerán, *El poder popular en acción*, *Chile Hoy*, 6-12 de julio de 1973, pp. 6-7. Este es uno de los numerosos artículos publicados después del intento de golpe celebrando el potencial de movilización de la clase obrera para detener un golpe mediante la ocupación de las industrias e incluso la resistencia armada. Sobre los comandos comunales, véase *Comandos comunales: Organos de poder del pueblo*, *Punto Final*, N° 189, 31 de julio de 1973.

los esfuerzos del gobierno por lograr un acuerdo con la oposición, hacían llamados a una movilización masiva y para que se armara a los trabajadores. El secretario general del Partido Socialista señalaba en un discurso:

"Los trabajadores de todo el país se han organizado en los cordones industriales, comandos comunales, consejos campesinos, comités de defensa y vigilancia, y otros organismos, que constituyen los gérmenes de un incipiente pero ya poderoso poder popular, y configuran una barricada inexpugnable ante cualquier tentativa insurreccional de la burguesía. Obreros, campesinos, pobladores, jóvenes, están amasando su propio poder para repeler el poder burgués amotinado. Y tienen la obligación de hacerlo como clase y como revolucionarios."⁵⁴

Casi al mismo tiempo, Miguel Enríquez, cabeza del MIR, manifestaba:

"La clase obrera es hoy día un ejército constituido, decidido a luchar por sus intereses y a resistir la embestida reaccionaria. La clase obrera y el pueblo (...) ya han notificado a sus direcciones políticas que la lucha salió de los pasillos y del Parlamento y que no permitirán retrocesos ni concesiones".⁵⁵

54. *Chile Hoy*, 13-19 de julio de 1973, p. 8.

55. *Ibid.*, p. 6.

El líder del Partido Comunista también sostenía que "si la sedición pasa a mayores, concretamente al campo de la lucha armada, que a nadie le quepa dudas que el pueblo se levantará como un solo hombre para aplastarla con prontitud".⁵⁶ Al mismo tiempo, un panfleto ampliamente difundido instaba a los trabajadores a:

"Desarrollar en forma acelerada el cumplimiento de las tareas militares hacia el partido y hacia las masas. (...) Formar todas las organizaciones necesarias para asegurar la autodefensa de las masas, en industrias, servicios, poblaciones, comunas y cordones, desarrollando el Poder Popular Armado y echándose las bases para la construcción del futuro Ejército del Pueblo".⁵⁷

Irónicamente, la retórica militante de los líderes de la izquierda en parte se debía al hecho que el movimiento del 29 de junio había demostrado que la respuesta de la clase obrera no era categórica. Sólo en unos pocos cordones los obreros se habían tomado las fábricas. La mayor parte de la izquierda había permanecido inmóvil, observando cómo el general Prats aplastaba la revuelta.⁵⁸ En vista de la pobre actuación

56. *Ibíd.*, p. 7.

57. MAPU Garretón, *Boletín Informativo*, Nº 5. Un resumen de la declaración se puede encontrar en *Ercilla*, 18-24 de julio de 1973, p. 11.

58. A pesar de la gran publicidad que se dio a los cordones, nunca constituyeron una fuerza masiva. Cuando el gobierno trató de devolver industrias tomadas por los trabajadores durante el intento de golpe, muchos trabajadores se resistieron. En un momento los trabajadores del Cordón Los Cerrillos realizaron barricadas en-

de la izquierda, los sectores revolucionarios deseaban acelerar el proceso de armar al pueblo de manera que estuviera mejor preparado para otro intento de golpe. Sin embargo, su intento por asegurar una mejor "defensa" de la clase obrera provocó una determinación concertada por parte de las Fuerzas Armadas para impedir dicho proceso.⁵⁹ La debilidad de los cordones industriales también había sido apreciada por muchos oficiales, quienes, sin embargo, se habían alarmado con el potencial de la resistencia de la clase obrera. Rápidamente recurrieron a una ley, promulgada desde hace algún tiempo, que otorgaba a las Fuerzas Armadas la facultad para ejercer el control de armas, de manera que ellos mismos se aseguraran de que no se creara un ejército paralelo.

El primer allanamiento militar de importancia ocurrió tan pronto como el 8 de julio en el Cementerio Metropolitana-

cerrándose ellos mismos al interior de las fábricas para evitar la devolución de las industrias. Aunque quizás se hayan movilizado unos cinco mil trabajadores, el número representa una pequeña fracción de la clase obrera de Santiago. En entrevistas con el autor, un sociólogo de la Universidad de Chile que trabajaba cerca del Cordón Los Cerrillos opinó que sólo había unos pocos cientos de miembros activos. La descripción realizada por Patricia Santa Lucía, *The Industrial Working Class and the Struggle for Power in Chile*, en *Allende's Chile*, ed. Philip O'Brien, ed., (New York: Praeger Special Studies in International Politics and Government, 1976), pp. 128-66, dibuja un cuadro de gran movilización, y sin embargo, revela la debilidad de los cordones en un apéndice que enumera los cordones y sus afiliados.

59. Allende y el Partido Comunista comprendían esto y a través de su control de la Central Unica de Trabajadores trataron de minimizar el rol de los cordones después de un período inicial de elogios. A su vez ellos quedaron vulnerables a ser acusados de no estar dispuestos a dejar que la clase obrera se defendiera a sí misma. Queda en claro para el autor, sin embargo, que no había forma que, en un período tan corto de tiempo, la clase obrera hubiera podido ser movilizada para luchar y morir, considerando la perspectiva esencialmente económica de la gran mayoría de la población, y la escalada conspiratoria en las Fuerzas Armadas. La izquierda maximalista se embarcó en una profecía autocumplida.

no, cuando la Fuerza Aérea realizó una gran redada en busca de armas. La prensa de gobierno atacó inmediatamente el operativo y ridiculizó a la Fuerza Aérea por no haber encontrado arma alguna. En una entrevista televisiva el comandante de la Fuerza Aérea mostró su molestia, especialmente con un diario izquierdista que pertenecía en parte al ministro de Defensa. Al mismo tiempo, en una clara demostración del abismo que se abría entre los militares y el gobierno, él atacó con vehemencia la afirmación del subsecretario del Interior que no se habían encontrado armas en el allanamiento.

En el puerto de Valparaíso la Armada procedió a realizar acciones similares. En dos semanas los efectivos navales llevaron a cabo más de veinte allanamientos en busca de armas. A pesar de que los grupos derechistas también estaban armados, los allanamientos estaban dirigidos a las fábricas del área social, especialmente aquellas en manos de militantes socialistas. Nuevamente se produjo un choque entre el comandante en jefe de la Armada y el subsecretario del Interior. Cuando los militares efectuaron un allanamiento en la sede de un sindicato obrero en Osorno, el secretario general de la CUT criticó duramente la ley de control de armas, llamándola la "nueva ley maldita", utilizando un término ya usado por el MIR.

En agosto el gobierno ya había perdido el control de las Fuerzas Armadas. Allende sólo podía observar con impotencia como los militares irrumpían en las industrias estatales y en las sedes de los partidos. En Concepción la Armada realizó numerosos allanamientos en busca de supuestos arsenales. Si

bien a veces se encontraban materiales peligrosos, con mayor frecuencia pertenecían a organismos como la Dirección de Vialidad y la Corporación de Fomento, que almacenaban explosivos para su trabajo diario. Probablemente el peor incidente de operativos militares de búsqueda y destrucción, ocurrió en la ciudad austral de Punta Arenas. El Ejército irrumpió en una fábrica y aparentemente destruyó la maquinaria y mató a un trabajador en su búsqueda de armamento. La crítica de la izquierda al Ejército se puso tan violenta que Allende mismo tuvo que ordenarles personalmente a ciertos sectores de su coalición que silenciaran sus críticas.

El miedo a un ejército paralelo contribuyó también a un refinamiento de los muchos planes contingentes desarrollados previamente por las Fuerzas Armadas a fin de permitirles actuar de manera concertada para controlar una insurgencia nacional. La Fuerza Aérea, temiendo que el cordón Los Cerrillos -situado cerca del aeropuerto militar- pudiera dañar algunos de sus aviones, obtuvo el apoyo de los marinos para proteger los aviones y, sin la aprobación del Presidente, trasladaron varios aviones a otras ciudades. No sería difícil utilizar la maquinaria montada para eliminar el armamento ilegal a fin de cumplir la meta más amplia de derrocar al gobierno.⁶⁰

Tras el intento de golpe del 29 de junio, los partidos de extrema izquierda incitaban no sólo a la formación de grupos armados que estarían preparados para pelear en un próximo golpe sino también a la abierta resistencia de los conscriptos

60. Sobre estos planes, véase Fontaine, *Cómo llegaron las fuerzas armadas*, p. 11. Prats firmó los documentos.

frente a los oficiales que no apoyaban plenamente al gobierno. Por todo Santiago aparecieron afiches que incitaban a los soldados a no obedecer las órdenes de sus superiores en caso de que hubiera una acción militar. El secretario general del Partido Socialista declaró públicamente:

"Los soldados, marinos, aviadores y carabineros no pueden prestarse, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, para asesinar trabajadores. Y llegado el caso, en que nuevamente algunos oficiales se alzarán, los oficiales, suboficiales, clases y soldados no tienen la obligación de la obediencia. Aún más claro: no sólo tienen el deber de negarse a acatar órdenes que signifiquen disparar contra el pueblo (...), sino de oponerse activamente. Estamos seguros que este criterio patriótico, nacional y revolucionario, prevalecerá por encima de las maniobras desesperadas de la burguesía.⁶¹

Casi inmediatamente después del intento de golpe, los oficiales comenzaron a limpiar las filas de elementos que fueron partidarios del gobierno. Esto ocurrió especialmente en la Armada. El 7 de agosto la Armada denunció un complot, coordinado por el MIR y facciones del Partido Socialista, para tomarse varios barcos. La Armada sostuvo que la izquierda estaba estimulando deliberadamente la insurrección en las filas.

61. *Chile Hoy*, 6-12 de julio de 1973, p. 8. Estas declaraciones provocaron la indignación de los líderes militares, ver William Montaldo, *How the Chilean Military Toppled Allende*.

La izquierda, por su parte, argumentaba que esto era necesario a fin de contrarrestar la abierta conspiración entre los oficiales navales. La Armada acompañó el anuncio de sus dificultades internas con nuevos allanamientos en toda el área de Concepción en busca de armas, también pidió que se suspendiera el fuero parlamentario de importantes líderes de la Unidad Popular y que se emitiera una orden de arresto contra el secretario general del MIR. Estos acontecimientos colocaron al gobierno en una posición insostenible. Simplemente no podía arrestar a quienes sostenían que estaban haciendo todo lo que podían para proteger al gobierno de un golpe. Por otra parte, las actividades proselitistas de los dirigentes izquierdistas entre las filas de las Fuerzas Armadas acentuó aún más la resolución de aquellos que intentaban montar un golpe y deterioró severamente la posición de los oficiales, especialmente la del almirante Raúl Montero, que seguían sosteniendo que las Fuerzas Armadas debían permanecer neutrales.⁶² Para la mayoría de los oficiales, ya no era cuestión de objetar las políticas erróneas del gobierno sino que era cuestión de defenderse a sí mismos y a sus instituciones contra la posibilidad de su destrucción.

El gabinete militar y el triunfo de la línea dura

Tras el fracaso de las conversaciones con la Democracia Cristiana y el fracaso de su tesis que los políticos debían

62. *Ercilla* 5-11 de agosto de 1973, pp. 7-8.

resolver las dificultades fundamentales antes de recurrir a otra fuerza, Allende recurrió a las Fuerzas Armadas para conformar un gabinete de "seguridad nacional". Al hacerlo aceptó en su totalidad los puntos preparados por el comité militar de los quince como condición para que se incorporaran al gabinete. En una reunión del 6 de agosto, el general Prats y el almirante Montero manifestaron su disposición a integrarse al gabinete. Estaban convencidos de que era necesario solucionar la crisis política dentro del marco de la Constitución chilena. Para el general Ruiz Danyau la situación era más difícil; la presión de sus generales para que no se incorporara al gobierno era enorme. El general Prats asumió como ministro de Defensa, el almirante Montero se hizo cargo del Ministerio de Hacienda y el general Ruiz del Ministerio de Obras Públicas. Las carteras restantes recayeron en dirigentes moderados de la Unidad Popular con Orlando Letelier a cargo del Ministerio del Interior.

Al inaugurar el nuevo gabinete, el Presidente criticó públicamente el intento de elementos de la izquierda revolucionaria por infiltrarse en las Fuerzas Armadas. También tuvo que intervenir personalmente para poner fin a una huelga en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que el general Ruiz pudiera asumir como ministro, encargado, entre otras cosas, de la difícil tarea de resolver el largo paro de los transportistas que estaba paralizando el país. Aunque no formalmente, pero sí en el hecho, Allende había tenido que romper con sus colegas socialistas.⁶³

⁶³. Esto se deriva de conversaciones con ministros del gabinete de Allende. Ver también Regis Debray, *Il est mort dans sa loi*, p. 37.

Pero desde un comienzo el gabinete militar se encontró con enormes dificultades. El coro de voces exigiendo la renuncia del Presidente se tornó ensordecedor. Los demócrata cristianos, en vez de interpretar la actuación del Presidente como el cumplimiento de sus demandas anteriores, lo criticaron vehementemente por no haber ido más lejos. Los transportistas y otras organizaciones gremiales en huelga definitivamente ya no estaban interesadas en negociar. Con abundante apoyo financiero del exterior, estaban muy dispuestos a esperar para forzar la renuncia del Presidente o un golpe de Estado.⁶⁴ Pese a que Allende estaba dispuesto a destituir al subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a quien los grupos opositores culpaban por la prolongación del paro transportista, esto casi no importaba. Los demócrata cristianos apoyaban fuertemente a los huelguistas. Los militares una vez más estaban atrapados entremedio. El coro vociferante de la oposición exigía a los militares que se mantuvieran firmes y no cedieran frente al gobierno. El Partido Nacional abiertamente pedía un golpe. La izquierda revolucionaria, que poseía amplia evidencia de las conspiraciones militares en los niveles intermedios, trató desesperadamente de consolidar una postura militar, con lo cual sólo agravó la inseguridad de

64. Es muy claro que los huelguistas no estaban interesados en que sus demandas económicas fueran satisfechas, ellos estaban tratando de forzar al Presidente a renunciar a su cargo o provocar un golpe de Estado. Esta opinión sobre las intenciones de los huelguistas era compartida por prominentes demócrata cristianos quienes las denunciaron públicamente. Ver la entrevista a Renán Fuentealba en *Chile Hoy*, 17-23 de agosto de 1973, p. 28. En ese mismo momento el *Forty Committee* en Washington aprobó otro millón de dólares para apoyar a los grupos de oposición. El dinero no se gastó puesto que el golpe era inminente. Véase *Select Committee on Intelligence, U.S. Senate Covert Action in Chile*, p. 61.

los militares. El sabotaje de los grupos de derecha iba en escalada. El 13 de agosto tres torres de alta tensión fuera de Santiago fueron dinamitadas, interrumpiendo un discurso del Primer Mandatario y cortando la luz en la zona central del país por espacio de una hora. Poco después, el general Ruiz renunció y fue sucedido por el general Gustavo Leigh como comandante en jefe de la Fuerza Aérea y por el general Humberto Magliochetti como ministro de Obras Públicas y Transportes. Los generales de la Fuerza Aérea una vez más manifestaron que el gobierno contaba con escaso respaldo de parte de ellos. Médicos, abogados, profesores e ingenieros se unieron a los paros contra el gobierno.

El golpe más duro para el gobierno hasta esa fecha sucedió el 22 de agosto, cuando el general Prats finalmente renunció. Su renuncia se produjo después de un curioso incidente en el que las esposas de un gran número de altos oficiales hicieron una manifestación frente a su casa. Poco después, la mayoría de los generales le solicitaron que renunciara para asegurar la "unidad" de las Fuerzas Armadas. Entre los generales anti-Prats se destacaban Oscar Bonilla y Sergio Arellano, a quienes se les conocía un estrecho vínculo con sectores de la Democracia Cristiana. Esto reforzó la creencia entre los líderes de la Unidad Popular de que algunos demócrata cristianos, incluyendo al ex Presidente Frei, estaban tácitamente de acuerdo con una solución militar.⁶⁵

65. En entrevistas y correspondencia con el autor, el ex Presidente Frei negó categóricamente que él hubiera estado involucrado en el intento de golpe. Queda en claro, no obstante, que el ex Presidente Frei pensaba que el golpe era inminente, y más importante, inevitable. También está claro que él tuvo contacto directo con al-

Ese mismo día la Cámara de Diputados, con el apoyo de los demócrata cristianos, aprobó una resolución expresando "el sentir de la Cámara" en la que se declaraba que el gobierno del Presidente Allende era inconstitucional, con lo cual

unos oficiales, incluyendo sus anteriores edecanes, los generales Bonilla y Arellano. Algunos de sus correligionarios más cercanos, Sergio Ossa y Juan de Dios Carmona, tenían estrechos vínculos con oficiales y probablemente él sabía que el golpe era inminente. Este autor no cree que el ex Presidente Frei estuviera directamente involucrado en conspiración alguna. No obstante, mediante su inacción él le dio un apoyo tácito al golpe. Frei era la figura política más importante de la oposición y el político más destacado del país junto a Allende. Si él hubiera usado su influencia para oponerse al golpe, tanto privada como públicamente, habría sido extremadamente difícil que los militares actuaran. Algunos de los colegas de Frei lo percibían. Sólo diez días antes del golpe, Bernardo Leighton, su anterior ministro del Interior y antiguo amigo que mantenía contacto con Allende, instó a Frei a conversar con Allende en un esfuerzo por evitar el golpe. Frei una vez más respondió que sólo conversaría con Allende públicamente, sin darse cuenta que la situación en septiembre de 1973 era muy distinta a la de mayo del mismo año cuando él estableció condiciones similares. La declaración emitida por los demócrata cristianos después del golpe reflejaba el pensamiento de Frei y la directiva. Culpaba exclusivamente al gobierno por la situación de Chile y señalaba que las Fuerzas Armadas "no buscaban el poder" y que "sus tradiciones institucionales en la historia republicana del país inspiraban confianza que en cuanto se completara la tarea que ellos habían asumido para evitar los graves peligros de destrucción y totalitarismo que amenazaban a la nación chilena, ellos devolverían el poder a la soberanía del pueblo". Cuando varios demócrata cristianos, incluyendo a Bernardo Leighton, emitieron una declaración pública condenando el golpe, Frei, en una entrevista con la cadena televisiva norteamericana ABC, fue más allá de lo necesario para argumentar que ese grupo representaba una minoría en el partido y que los militares habían "salvado a Chile". La declaración demócrata cristiana, de aquellos que se oponían al golpe, y un resumen de la entrevista de ABC a Frei se encuentran en *Chile-América*, N° 4, 1975, pp. 43-49. Que un osado esfuerzo de los políticos para evitar el golpe habría recibido un respaldo popular significativo es evidente en una encuesta de opinión realizada en Santiago sólo unos pocos días antes del golpe. El 51,5% de los encuestados opinó que los militares no debían involucrarse en la esfera política, en contraste con sólo el 27,5% que opinaba que ellos sí deberían hacerlo. Los autores de la encuesta concluyen que a pesar de que el 72% de la muestra, contra un simple 3%, opinó que el país estaba viviendo tiempos anormales, los chilenos todavía preferían una solución democrática. Para la encuesta ver *Ercilla*, 22-28 de agosto de 1973, pp. 18-19.

prácticamente se invitaba una intervención militar.⁶⁶ Ahora, más que nunca, la oposición parecía estar incitando públicamente a dicha acción. Para tranquilidad del Presidente, el general Augusto Pinochet, identificado estrechamente con Prats, le aseguró en forma explícita que el Ejército continuaría desempeñando un papel neutral y prometió apoyarlo para asegurar la lealtad en todos los niveles. El 28 de agosto Allende nombró un nuevo y último gabinete con Carlos Briones como ministro del Interior.

Sin embargo, lo que finalmente selló la suerte del gobierno de la Unidad Popular fue el éxito de la Armada en lograr la renuncia del almirante Montero.⁶⁷ Ya hacía tiempo que muchos de sus colegas almirantes habían estado urgiéndolo a renunciar. El 29 de agosto el almirante José Toribio Merino, segundo en la comandancia, y el almirante Sergio Huidobro,

66. La resolución de la Cámara sostenía, entre otras cosas que desde un comienzo el gobierno de Allende había buscado obtener el poder total, que al intentarlo había violado la Constitución y las leyes, y había ignorado los otros poderes, especialmente el Congreso. Llamaba a los ministros militares, en virtud de su juramento de fidelidad a la Constitución, a poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas que infringen la Constitución y las leyes, a fin de encauzar la acción gubernamental por las vías de derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos. Al responder la acción parlamentaria, Allende señaló: "Con ello se facilitará la intención sediciosa de determinados sectores (...). Los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberada frente al Poder Ejecutivo, a que quebranten su deber de obediencia al Supremo Gobierno (...)". Ver Echeverría y Frei, *La lucha por la juridicidad*, vol. 3, pp. 199-211. Allende había tratado de impedir el voto en la Cámara. Orlando Letelier y Bernardo Leighton suplicaron en vano intentando impedir el voto. Más tarde, tanto Leighton como Tomic señalaron la acción de la Cámara como uno de los errores más grandes del Partido Demócrata Cristiano.

67. Para la fascinante narración, ver Fontaine, *Cómo llegaron las fuerzas armadas*.

comandante de la infantería naval, visitaron a Montero para notificarle que el Consejo Naval había decidido que él debía renunciar. Montero llamó inmediatamente al Presidente, quien insistió en que los tres fueran a verlo. Allí tuvo lugar un áspero intercambio en el cual el Presidente le dijo a Merino que sabía que estaba "en guerra" con la Armada. El 1º de septiembre, el ministro de Defensa, Orlando Letelier, citó a todos los almirantes al Ministerio, para que le explicaran uno por uno por qué ellos creían que Montero debía renunciar. Finalmente, después de emotivas sesiones con sus colegas, Montero solicitó que se le relevara de su cargo. Allende también cedió y acordó que el almirante entregaría el cargo a un sucesor el 7 de septiembre. (El Presidente después intentaría infructuosamente durante seis horas de convencer personalmente al almirante Merino para que comprometiera su respaldo al gobierno.)

La totalidad del sistema político se había reducido al Presidente y unos pocos colegas de confianza, actuando de crisis a crisis, minuto por minuto, veinticuatro horas al día, tratando de convencer y rogando a otros para que postergaran lo que ahora parecía inevitable. Varios de los mismos oficiales que más tarde autorizarían la persecución despiadada de los amigos de Allende y de sus seguidores, pasaron horas en conversaciones personales con el propio Presidente. Allende también había estado en contacto con el presidente de la Democracia Cristiana en un esfuerzo inútil para suspender el funesto voto en la Cámara de Diputados. Paralelamente, Allende llevaba a cabo arduas negociaciones con sectores de su pro-

pia coalición en un intento por lograr otra solución política. El mecanismo que se escogió fue el de un plebiscito, a celebrarse en la segunda semana de septiembre y en el cual se llamaría a la elección de una asamblea constitucional para resolver la crisis. El Partido Comunista insistía en la medida y el secretario general Luis Corvalán la apoyó enérgicamente.⁶⁸ Para disgusto de Corvalán, Allende persistía en tratar de que los reticentes socialistas compartieran su postura, aunque estaba decidido a proceder sin su apoyo si fuese necesario. A través de los buenos oficios del cardenal Silva Henríquez, hubo una conversación directa con los demócrata cristianos para conocer su opinión sobre el proyectado plebiscito. El general Pinochet y otros generales del Ejército que Allende consideraba leales fueron informados de sus planes el día 7 de septiembre. Durante ese fin de semana el ministro del Interior y otros colaboradores trabajaron intensamente en el texto del discurso del Presidente, anunciando el plebiscito, y la noche del 10 de septiembre aún tenían problemas legales que resolver.

Pero el golpe ya estaba en marcha. En ese mismo fin de semana altos oficiales de la Armada se reunieron en Valparaíso para coordinar sus acciones, confiados en que la oficialidad del Ejército estaba a favor y que el general Pinochet ahora estaría dispuesto a participar. Para asegurarse que las otras ramas estaban de acuerdo, dos altos oficiales navales viajaron a Santiago y aunque parezca increíble, tuvieron que volver a

68. Sobre la posición del Partido Comunista ver el resumen del próximo libro de Eduardo Labarca publicado en *Chile-América*, Nos. 12-13, noviembre-diciembre de 1975, pp. 75-77.

Valparaíso porque habían olvidado llevar dinero para el peaje. Después de cierta demora pudieron llevar a cabo su misión. Los generales Leigh y Pinochet firmaron un documento preparado por el almirante Merino fijando la fecha del golpe de Estado para la madrugada del 11 de septiembre de 1973.⁶⁹

El vuelco del Ejército parece haber sido un vuelco de último minuto del general Pinochet. Un gran número de oficiales de menor rango habían visitado ese mismo fin de semana a Orlando Letelier, el ministro de Defensa, para invitar a su ex colega de la Escuela Militar a un banquete la semana siguiente, al que habrían de asistir más de noventa oficiales. Conversaron cordialmente con el nuevo ministro de Defensa, sin reflejar de modo alguno el ambiente que reinaba en un cuerpo militar que ya estaba decidido a derrocar al gobierno y arrestar a sus líderes máximos, incluyendo al propio ministro de Defensa. Con el giro del general Pinochet, sin embargo, esta institución profesional pronto se puso en línea, sellando el destino del gobierno de la Unidad Popular.⁷⁰

69. Ver Fontaine, *Cómo llegaron las fuerzas armadas*, p. 20.

70. Los militares, sin embargo, hicieron algunos esfuerzos por asegurar la cohesión en las Fuerzas Armadas. Poco después del golpe se anunció que las Fuerzas Armadas habían actuado para impedir que el gobierno de Allende llevara a cabo el plan Z concebido para asesinar a gran cantidad de oficiales en la Parada Militar del 19 de septiembre de 1973. Y sin embargo, de acuerdo con los propios voceros militares, el plan Z sólo se descubrió después del golpe. Si acaso el plan fue efectivamente uno de tantos planes concebidos por un gran número de pequeños grupos (este plan Z también incluía el asesinato del propio Allende, cuestionando así, la versión de los militares que aducían que era el gobierno el que preparaba la acción), o bien una invención, fue utilizado para infundir miedo en el Ejército. Altos dirigentes del Partido Demócrata Cristiano que apoyaron el golpe militar cuando éste tuvo

El martes de la semana siguiente, los militares se movieron velozmente para deponer al gobierno elegido. El palacio presidencial y la residencia privada del Presidente se convirtieron en los blancos principales de las bombas y las tropas del Ejército. Allende murió en su oficina presidencial, la primera de muchas víctimas de un golpe militar destinado no a "restituir" las instituciones y los procedimientos democráticos sino a desmantelarlos con brutalidad y venganza. La real transformación de la política chilena no comenzó el 4 de septiembre de 1970 sino el 11 de septiembre de 1973.

Conclusión

Con la elección presidencial de 1970 accedió al poder, por primera vez en la historia de Chile, una coalición minoritaria controlada por partidos marxistas abocados a una trans-

lugar señalaron al autor que ellos no dudaban que el plan Z era una invención. Para el plan Z, véase la publicación oficial que la Junta sacó poco después del golpe para justificar sus acciones, *Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile*. Una versión que se publicó en inglés fue ampliamente difundida en los Estados Unidos. Según el U.S. Senate Committee on Intelligence, la CIA pagó los gastos de viaje de voceros pro-junta que viajaron al exterior para apoyar la acción militar. Véase *Covert Action in Chile*, pp. 40, 62. En entrevistas con el autor, otros participantes y observadores del período inmediato después del golpe también interpretaron la severidad de la represión como un mecanismo utilizado por las Fuerzas Armadas para asegurar lealtad. Incluso en la Isla Dawson, donde claramente no había posibilidad alguna de ser atacados, los militares fueron mantenidos bajo el permanente temor de un ataque inminente. De acuerdo con un oficial que dejó el país poco después del golpe, el general Oscar Bonilla tuvo que trabajar arduamente el 10 de septiembre para conseguir la lealtad de muchos oficiales. Véase *Chile-América*, N.º 5, 31 de marzo de 1975, p. 24.

formación fundamental de las estructuras económicas, sociales y políticas del país. Desde un principio, el experimento del Presidente Salvador Allende encontró numerosos obstáculos inherentes al sistema político altamente polarizado de Chile. El gobierno intentó cambiar la economía y redistribuir el ingreso a corto plazo, sin abandonar la tradicional política de las reivindicaciones. Los partidos del gobierno bregaban por distintos programas ideológicos y simultáneamente seguían participando en la política de competitividad electoral. En un proceso altamente dialéctico, los sectores comprometidos con el statu quo social y político reaccionaban en forma enérgica a cualquiera alteración de sus privilegios. El sistema polarizado sufrió aún mayor polarización a medida que las elecciones de suma cero y la presión de la competencia electoral contribuía a la erosión del débil centro político. Los obstáculos estructurales estaban acompañados por los obstáculos simbólicos. La escalada retórica de ambos lados dificultaba el que los líderes comprometidos con el sistema vigente pudieran percibir y entender lo que estaba sucediendo. Queda en claro que esta crisis fue fundamentalmente una crisis política, y que en Chile la crisis política precedió la crisis económica. Con el tiempo la movilización social se desbordaría, pero fue la contramovilización de aquellos que se sentían amenazados en un sistema que había perdido autoridad, la que finalmente contribuyó al quiebre de la democracia chilena.

Dadas las características del sistema chileno que estructuraban la acción humana, el quiebre de la democracia siguió, incluso a un ritmo mayor, la ruta descrita por Juan Linz en su

análisis de anteriores quiebres europeos. El desafío de sectores públicamente desleales al régimen democrático tradicional resultó ser menos importante que la abdicación de sus antiguos adherentes, atrapados en el fuego cruzado de ambos extremos. Los dirigentes optaron por la defensa de sus pequeños intereses personales y de grupos, determinados según los criterios de ventaja electoral, rehusando ver la importancia de preservar el régimen propiamente tal.

No cabe duda que las presiones a que estuvieron sometidos los demócratas de centro para mantener un consenso viable fueron enormes. Tanto el gobierno como la oposición se quejaban de estas presiones y dificultades, y sin embargo, cada lado fue incapaz de ver la gravedad de las presiones que soportaban los del lado contrario. Sus acciones sólo empeoraban la situación y, en consecuencia, las perspectivas de un acuerdo que salvara al régimen democrático.

Allende a menudo estaba demasiado dispuesto a ceder ante las presiones de la izquierda y continuamente daba signos ambivalentes. De este modo, debilitó, en la primera etapa de su gobierno, la posición de los sectores de la oposición que estaban genuinamente interesados en lograr un acuerdo que no constituyera una amenaza para el programa básico de la coalición de la Unidad Popular. La corrupción y el desorden del proceso político y el problema "insoluble" de la economía sólo dificultaron más las cosas. Los demócrata cristianos, a su vez, estaban intimidados por la amenaza política tanto de la derecha como de muchos de sus propios partidarios, y estaban obsesionados con la idea de presentar una postura de línea dura hasta el final. Ellos debieron haberse dado cuen-

ta más cabalmente de la necesidad de alcanzar un acuerdo cuando la coalición de gobierno estaba dispuesta a ello, en las cruciales negociaciones de junio y julio de 1972. Pero, aun más seriamente, ellos debieron haberse dado cuenta que el juego político había sufrido un dramático vuelco en la última etapa del gobierno de la Unidad Popular a raíz del resultado de las elecciones de 1973 y del golpe fallido del 29 de junio de ese mismo año. Al combatir la dudosa perspectiva del "totalitarismo marxista", hasta el amargo final, no supieron darse cuenta de cuán importante era para ellos el orden político democrático que creían estar defendiendo. Al no actuar con firmeza para estructurar una solución política, deterioraron seriamente la posición del Presidente y sus asesores, quienes estaban claramente preparados para lograr un acuerdo de mutua conveniencia. En el ambiente caótico que se vivía a mediados de 1973 este fracaso sólo aumentó el deterioro de la autoridad del gobierno y de las cúpulas de las elites políticas que cada vez detentaban menos poder. Las consiguientes tácticas de movilización y contramovilización, utilizadas en un vano esfuerzo por demostrar su poder efectivo, se convirtieron en un indicador de la pérdida de poder real. El recurrir a los llamados poderes neutrales sólo condujo a una confianza fatal en que las Fuerzas Armadas serían capaces de "resolver" la crisis. Y contrario a las expectativas de algunos "demócratas" ingenuos, incluyendo varios destacados demócrata cristianos, las Fuerzas Armadas de Chile no sólo se encargaron de destituir de su cargo a un presidente "inconstitucional": prescindieron del todo de la Constitución.

Pero los moderados de centro no fueron los únicos que

malinterpretaron la realidad política chilena. El escenario de la izquierda revolucionaria también era ilusorio. Los izquierdistas culpaban al gobierno por no acelerar el proceso político a fin de que se forzara una confrontación que habría conducido a la victoria de la clase obrera y a una genuina revolución socialista. Irónicamente, mientras los demócratas cristianos y los nacionales atacaban al gobierno por estar creando las condiciones necesarias para una dictadura de la izquierda, la izquierda revolucionaria atacaba al gobierno con igual vehemencia por su fracaso en avanzar en esa dirección. La izquierda revolucionaria se apoyaba en dos supuestos. En primer lugar, estaba convencida que la clase obrera, si contaba con la debida dirección, estaba dispuesta a entregarse en un compromiso a fondo que podía desembocar en una lucha de clase armada. Y segundo, suponían que durante la primera etapa del gobierno de la Unidad Popular, las "fuerzas reaccionarias" estaban divididas y que los militares eran neutrales, de modo que un esfuerzo masivo y rápido para movilizar a la clase obrera habría encontrado poca resistencia. No obstante, del análisis del caso chileno queda en claro que no habría sido posible lograr, en dos cortos años, las aspiraciones básicamente economicistas de la clase obrera e infundirles una conciencia de clase realmente revolucionaria. Los trabajadores de Chile esperaban mejorar sus condiciones de vida bajo este nuevo gobierno; no estaban preparados para dar su vida por una revolución que muchos de ellos pensaban que ya había sucedido.

Pero el análisis de la evidencia empírica del caso chile-

no demuestra claramente que el segundo supuesto tampoco tenía fundamento. La oposición estaba dividida durante la primera etapa del gobierno de Allende porque el sector progresista de la oposición estaba dispuesto a apoyar al gobierno; de hecho, para empezar permitieron que el gobierno accediera al poder. Es absurdo pensar que habrían mantenido su apoyo o neutralidad si el gobierno se hubiera embarcado en una obvia estrategia de intensificación del conflicto de clases. La contramovilización que se produjo al final, sólo habría ocurrido antes. Y más importante aun, en las Fuerzas Armadas no había ningún sector que apoyara una estrategia revolucionaria y que hubiera tolerado una movilización de trabajadores armados. El gobierno fue capaz de evitar una intervención militar por el tiempo que lo hizo, justamente porque se atuvo a los procedimientos básicos de la Constitución. Si Allende y sus colegas hubieran actuado drásticamente en 1971 para "consolidar el poder", la facción golpista de las Fuerzas Armadas se habría manifestado mucho antes. Aun si la clase obrera hubiera sido más revolucionaria de lo que fue, habría sido imposible en 1971 (como lo fue en 1973) organizar una fuerza militar capaz de desafiar a las Fuerzas Armadas de gran eficiencia profesional.

El hecho es que la izquierda revolucionaria, al intentar radicalizar el proceso político, contribuyó en gran medida a destruir precisamente el éxito de la estrategia del gobierno llamada la "vía chilena". Con sus acciones, la izquierda revolucionaria, que siempre había ridiculizado la posibilidad de una transformación socialista a través de medios pacíficos, se vio atrapada en una profecía autocumplida.

Es obvio que cualquier acuerdo para estructurar una transacción destinada a preservar el sistema chileno habría supuesto la aceptación por parte de la coalición de la Unidad Popular de cambios graduales, muchos de los cuales habrían quedado cortos respecto de las metas originales. Los demócrata cristianos, por su parte, tendrían que haber aceptado una transformación más fundamental del sistema vigente que la que muchos hubieran deseado. También es probable que un acuerdo habría significado detener las actividades de algunos grupos de la izquierda revolucionaria.

La clave no es que dicho desarrollo habría imposibilitado una transformación revolucionaria. En todo caso, una revolución fundamental y a corto plazo de tipo socialista simplemente no era posible. El trágico dilema del Chile actual es que ahora debe vivir con una tercera alternativa que es bastante peor para la mayoría de los actores políticos del escenario chileno y para la gran mayoría de la población: un gobierno militar autoritario. Los demócrata cristianos ahora se dan cuenta que la amenaza del gobierno de Allende era pequeña en comparación con la negación sistemática de las libertades políticas básicas y los derechos humanos bajo el gobierno del general Pinochet. Las elecciones han sido prohibidas, quemados los registros electorales, y han sido arrestados, perseguidos o exiliados una gran cantidad de dirigentes políticos. El partido ha perdido sus órganos de información y no le está permitido expresar sus opiniones, mucho menos ofrecer una alternativa de liderazgo político. La izquierda, por supuesto, ha sufrido mucho más. Muchos de sus líderes han sido torturados o asesinados. Militantes y aun simpatizantes han sido

sistemáticamente perseguidos, privados de sus trabajos y de sus medios de subsistencia. Dirigentes sindicales han sido arrestados y destituidos de sus cargos. La izquierda revolucionaria ha sido diezmada y algunos de sus líderes más destacados han muerto en reales y supuestos enfrentamientos. Obviamente están bastante peor hoy que bajo la democracia política. Los tribunales, que defendían con tanta elocuencia los derechos humanos cuando no existía una amenaza real, han consentido vergonzosamente a una violación de los derechos humanos sin precedentes en la historia de Chile como nación independiente.

La experiencia chilena ha mostrado cuán fácil es para una institución militar profesional y "neutral" el convertirse en un régimen militar represivo. Tan pronto como los militares concibieron a sus compatriotas como enemigos en contra de los cuales se debía librar una guerra total, toda medida represiva se hizo justificable. No es sorprendente que los militares hayan actuado como una fuerza de ocupación y tratado a toda la nación como si fuera un gigantesco regimiento. También es natural que una institución que se funda en los principios de jerarquía, orden y disciplina considere a la democracia política como un obstáculo para ganar una guerra. De hecho, los líderes militares han culpado explícitamente a la democracia por haber permitido que fuerzas "extranjeras" corrompieran un segmento del pueblo chileno. Para "sanear" la nación, ellos han tratado de extirpar todas aquellas políticas que en algún modo pudieran identificarse con una democracia débil o con el marxismo.

Es todavía demasiado pronto para decir lo que ocurrirá en Chile. En su esfuerzo por lograr una sociedad mejor y más justa, o para mantener los valores que tanto apreciaban, los chilenos contribuyeron a la destrucción de un sistema único de gobierno. El golpe de 1973 fue seguido por tal cantidad de asesinatos y represión que probablemente será imposible reestructurar en una manera similar las instituciones y procedimientos que se forjaron a través de generaciones. El problema no es sólo que para la junta militar será difícil retroceder a raíz de las inevitables demandas de venganza. La principal dificultad puede ser la de reestructurar el consenso centrista que demostró ser tan esquivo durante los últimos años de la democracia política chilena. Hasta ahora, los representantes de las diversas facciones chilenas parecen estar más interesados en reivindicar sus acciones y posiciones anteriores que en establecer puentes con el futuro.⁷¹

71. Para un resumen crítico de más de treinta obras que han sido publicadas desde entonces y que reflejan la reflexión previa y actual de una amplia gama de autores sobre la experiencia chilena, véase Arturo Valenzuela y Samuel Valenzuela, *Visions of Chile*, *Latin American Research Review*, 10 (3): 155-75.

INDICE TEMATICO

- 11 de septiembre de 1973, 280, 281
- 29 de junio de 1973, 249, 260, 265; intento de golpe, 270
- 4 de septiembre de 1970, 280
- Acusación constitucional, 208, 240
- aeropuertos militares, 270
- Agencia Central de Inteligencia (CIA), 108, 109, 138, 216, 241
- Agosto de 1972, 162
- agrupaciones estudiantiles, 50
- agrupaciones juveniles, 50
- Alessandri, Jorge, 46, 106, 113, 117, 122, 123, 124, 125, 127;

gobierno de, 77, 85, 98; candidato conservador, 119, 120, 121; presidencia, 46; elección de, 138

Alianza para el Progreso, 108

Alianzas pre-electorales, 46, 47

Allende, Salvador, 21, 29, 45, 46, 49, 59, 108, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 158, 164, 171, 178, 179, 186, 187, 188, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 209, 221, 222, 228, 233, 236, 237, 239, 240, 241, 243, 244, 246, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 269, 270, 273, 274, 277, 278, 279, 281, 282, 283; candidatura de, 38, 109; edecán naval de, 256; elección de, 78, 82, 113, 138; gabinete de, 30; gobierno de, 25, 46, 97, 105, 134, 146, 151, 159, 164, 165, 169, 177, 215, 276, 286, 287; ministros de, 247; política económica, 144; presidente, 140; triunfo de, 127; victoria electoral de, 146

Almeyda, Clodomiro, 254

Almond, Gabriel, 104

Altamirano, Carlos, 229, 249, 251

Alzamiento militar 1973, 27

América Latina, 67, 88, 108, 187

Angell, Alan, 102

apoyo electoral, 41, 59

área mixta, 197, 206

área privada, 178, 197

área social, 223

área estatal, 175, 197, 206, 229

áreas urbanas, 171

áreas económicas, 234

Argentina, 68, 74

Armada, 78, 269, 271, 277, 279; Consejo Naval, 278

aumentos de salarios, política de, 156

Aylwin, Patricio, 242, 245, 246, 255, 258

bajos ingresos, sectores de, 145

Balra, Senador Alberto, 134, 202

Banco Central, 66, 175, 176; créditos, 147

Banco Mundial, 158

Banco Interamericano de Desarrollo, 158, 253

Banco del Estado, 66

Bancos, estatización, 149

Blest, Clotario, 95

Bloqueo económico internacional, 162

Bonilla, Oscar, 275

Bossay, Senador Luis, 134, 202

Brasil, 74

Briones, Carlos, 254, 277

burocracia estatal, 178

Cámara de Diputados, 111, 112, 143, 192, 198, 276, 279

cambios socioeconómicos, 135

camioneros, 212

campaña del terror, 109

campaña electoral, 49

campesinos, 50, 132

campo económico, 227

Carta Fundamental, 198

Castillo, Fernando, 253

Cementerio Metropolitano, 268

Central Unica de Trabajadores (CUT), 50, 95, 163, 214, 255, 257, 269; concentración de la, 237

centros de madres, 103

Chuquicamata, mineros de, 169

Clase media, 23, 24, 41, 168, 213, 215, 229

Clase obrera, 55, 56, 57, 92, 95, 113, 166, 168, 215, 230, 234, 266, 285; defensa, 268; rural, 125; urbana, 125, 126

Clase trabajadora, 29, 184

Cobre, gran minería del, 203; minas de, 181; nacionalización del, 61, 69, 111, 149, 158, 191; precio del, 149, 155, 159

Código del trabajo, 102

colegios profesionales, 67

comandos comunales, 266

comandos campesinos, 266

comicios municipales de 1971, 152

comites de defensa y vigilancia, 266

comunistas, véase Partido Comunista

Concepción, 183, 184, 185, 187, 269, 272

Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, 205

Confederación democrática, 225

confederaciones nacionales, 50

conflicto armado, 182

conflicto de clases, 27

Congreso Nacional, 37, 42, 45, 63, 68, 69, 73, 74, 105, 111, 112, 113, 128, 129, 137, 144, 164, 165, 166, 191, 192, 197, 198, 199, 200, 206, 231, 237, 241, 247, 253, 258; mayoría parlamentaria, 197; Congreso unicameral, 164; Congreso unicameral, proyecto, 192

Conservadores, 110, 113

Constitución, 64, 78, 79, 129, 140, 198, 221; Constitución de

1925, 41

Contralor General 61, 63, 220

Contraloría General de la República, 62, 63, 64, 128, 164, 166, 219, 220, 223, 247

Control de precios, 147

Cordón Los Cerrillos, 270

Cordones comunales, 214; campesinos, 214; industriales, 214, 265

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), 59, 60, 66, 270

Corporaciones Norteamericanas, 138

Corte Suprema, 62, 243

Cortes de Apelaciones, 62

Corvalán, Luis, 211, 279

crédito, 149

crédito extranjero, 158

crisis económica, 236, 282

crisis constitucional, 235

crisis de legalidad, 243

crisis política, 282

CUT, véase Central Unica de Trabajadores

Debray, Regis, 144

Década de 1850, 22

déficit fiscal, 192

déficit balanza de pagos, 157

déficit, 157, 176

Democracia Cristiana, véase Partido Demócrata Cristiano

Democracia Radical, véase Partido Democracia Radical

derecho de propiedad, 220

desarrollo económico, 83

desempleo, 145, 148

Diciembre de 1971, 162

dificultades económicas y fiscales, 192

Dirección de vialidad, 270

Dirección del trabajo, 61

Economía socialista, 149

Economía Chilena, 162, 171

economía nacional, 59

economía de exportación, 22

educación, 147

Ejecutivo, 64

Ejecutivo, El, 63, 69, 140, 165; vetos, 111

Ejército, 77, 78, 261, 270, 277, 279, 280, 281

Ejército del pueblo, 267

El Siglo, 241

El Salvador, huelga de la mina, 169

El Teniente, 169; huelga de la mina, 243, 244

El Mercurio, 216, 248

elección complementaria, 108, 183, 192, 195

elección municipal de 1967, 152

elección municipal de 1971, 163, 178, 194

elecciones parlamentarias, 36, 41, 114, 122, 221, 224, 228, 233

elecciones parlamentarias de marzo de 1973, 210, 230

elecciones parlamentarias complementarias, 163

elección presidencial, 45, 46, 117

elección presidencial de 1970, 117, 152, 231, 281

elecciones, 46

elecciones presidenciales de 1976, 240

elecciones de 1973, 284

electorado chileno, 117

élites políticas, 53, 217

empleados públicos, huelgas, 171

empleados públicos, 178

empresa privada, 109

empresas extranjeras, 150

Enríquez, Miguel, 266

Escuela Nacional Unificada, 239, 240

Escuela Militar, 280

Estadio Nacional, 211

Estado, empresas requisadas, 150

Estado de sitio, 252

Estado, ingerencia en la sociedad, 22

Estado de emergencia, 242

Estado, industrias controladas, 150

Estados Unidos, 110, 133, 138, 161; círculos gubernamentales y políticos, 158

Estatización, 174; de las Industrias, 165, 180; Bancos, 149, 151

Estatuto de Garantías Constitucionales, 140, 141, 192, 194

Export Import Bank, 158

expropiaciones, 152

extrema derecha, 251

factores políticos, 104

factores económicos, 104

Falange Nacional, 107

Federación de la Unidad Popular, 225, 228

Federaciones Nacionales de la Industria y el Comercio, 133

Frei, Eduardo, 49, 51, 108, 110, 112, 114, 119, 122, 154, 245, 257; gabinete de, 30; gobierno de, 66, 67, 69, 77, 85, 95, 96, 98, 102, 103, 104, 105, 120, 136, 149, 237, 241, 255; ex-presidente, 275; presidencia de, 138, 139, 159, 187, 193

Frente Popular, 104

Frente de Acción Popular (FRAP), 38

Frente Popular, gobierno de, 96

Fuentealba, Renán, 194, 205, 241

Fuerza Aérea de Chile, 21, 263, 269, 270, 275

fuerzas armadas, 76, 77, 78, 133, 169, 218, 219, 221, 222, 236, 239, 250, 251, 254, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 268, 270, 273, 275, 284, 286; Constitucionalistas, 236; neutralidad, 221

fuerzas electorales, 110, 113

funcionarios norteamericanos, 158

gabinete civil, 237

gabinete militar, 234, 264

gasto fiscal, 87

gasto público, 63

gasto militar, 77

gasto social, 147

Gobierno chileno, 161

gobierno autoritario militar, 287

gobierno, 179

gobierno autoritario de derecha, 168

golpe de estado, 25, 29, 60, 230, 248, 249, 252, 257

golpe militar, 281

González Videla, presidente Gabriel, 42, 47

grupos de interés, 59

guarnición militar, 248

Guarnición de Santiago, 242

guerra civil, 212, 229, 254

Gumucio, Rafael Agustín, 208

Hamuy, 56

Herrera, Felipe, 253

huelgas, 178

Huerta, Ismael, 224

Huidobro, almirante Sergio, 277

Ibañez, Presidente Carlos, 43, 76, 90, 106; gobierno de, 76, 85, 96; Ibañista, Movimiento, 107

Iglesia, 22, 50, 53, 239

Impasse Constitucional, 204

importación, maquinaria, 155

importación, alimentos, 155

Indice de precios al consumidor, 71

indisciplina laboral, 175

Industria Textil, estatización, 220

industria, intervención estatal, 173

industrias estatizadas, 176

industrias, estatización, 172

industrias nacionales, 190

industrias estatales, 269

industrias claves, control estatal, 144

inflación, 71, 85, 149, 156, 169, 172, 218

instituciones comerciales, financieras e industriales, 194

instituciones sociales, económicas y políticas, 76

instituciones políticas, 105

instituciones chilenas, fragilidad, 141

instituciones públicas, 67

instituciones tradicionales, 136

Instituto de Desarrollo Agropecuario, 179

Intendentes, 247

intereses mineros y comerciales, nuevos, 22

intereses de los trabajadores, 181

intervención militar, 228, 264, 277, 286

interventores, 180

inversión interna, 155

inversión pública, 59, 155

izquierda, 28, 38, 55, 116, 121, 187, 221, 224, 228, 231, 234, 243, 245, 259, 264, 267, 271, 283, 287; extrema izquierda, 112, 251, 254

Izquierda Cristiana, 179, 196, 245

juego democrático, 24, 197

Julio 1971, 192

Junta Militar, 31, 289

Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), 213

Juntas vecinales, 50

juntas de vecinos, 103

Kennedy, gobierno de, 108

Landsberger, Henry, 91

legitimidad, instituciones, 24

Leigh, general Gustavo, 275, 280

Letelier, Orlando, 273, 278, 280

Ley de Reforma Agraria 1966, 66

Ley de control de armas, 269

Ley electoral, 36

leyes electorales, 89

Liberales, 113

Linz, Juan, 27, 28, 81, 82, 130, 168, 189, 219, 282

lucha de clases, 184

lucha armada, 267

Mac Daniel, Tim, 91

MacRae, Duncan, 54

Magliochetti, general Humberto, 275

Marcha de las cacerolas, 162, 211

marco institucional, 29

medios de comunicación, 166

mercado negro, 158

Merino, almirante José Toribio, 277, 280

militares, 76, 138, 224, 225, 228, 234, 236, 243, 249, 257, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 269, 274, 281, 285, 288; militares, fuerza "neutral", 221, 224; militares, incorporación al gabinete a los, 26, 259; instituciones militares, 223, 224; militar neutral, 178; ministros militares, 223, 224, 234; Operativos, 270; principio de neutralidad, 250, militares en retiro, 244

Millas, Orlando, 204, 229

Mineral de Chuquicamata, 181
minería, 221
Ministerio de la Vivienda, 67
Ministerio de Educación, 238
Ministerio de Obras Públicas, 244
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 67, 273, 274
Ministerio de Economía, 177
Ministerio de Hacienda, 176, 177
Ministerio de Agricultura, 67
Ministro de Educación, 238
Ministro de Minería, 222
Ministro de Economía, 202
Ministro del Interior, 164, 187
Ministro de Defensa, 269
Montero, almirante Raúl, 263, 272, 273, 277, 278
Movilización social, 88, 104, 105, 182;

movilización rural, 98

Movimiento izquierda revolucionario (MIR), 116, 132, 151, 177, 183, 185, 187, 188, 203, 215, 252, 266, 269, 271, 272

Movimiento Acción Popular MAPU, 179, 182, 245

movimiento obrero, 23, 95

nacionales, 226, 227

Naciones Unidas, 255

Nixon, Presidente, 138

obras públicas, 112, 221, 224

obras sanitarias, 147

obreros industriales, 127

Octubre de 1972, 169, 221, 243; Octubre de 1972, paro de 26, 240

oficina de presupuesto, 176

oposición, 258

orden socioeconómico, 130, 132, 133, 134

orden constitucional, 224

orden socioeconómico vigente, 129

organismos fiscales, 66, 98

organismos gubernamentales, 180

organismos estatales, 178

organizaciones sindicales, 67

organizaciones vecinales, 36

Osorno, 269

Parlamento, 23, 45, 47, 266

Paro de los transportistas, 212

Partido Demócrata Cristiano, 27, 36, 43, 53, 55, 65, 91, 92, 98, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 122, 128, 134, 135, 137, 140, 143, 154, 164, 167, 179, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 201, 202, 208, 209, 213, 217, 218, 226, 227, 229, 234, 235, 237, 241, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 283, 286, 287; fuerza electoral, 39; junta nacional, 237, 244, 246, triunfo en los 60, 39

Paro Nacional del 22 de agosto, 212

Paro nacional, 259

participación popular, 135

Partido Democracia Radical, 54, 137

Partido comunista, 38, 55, 110, 116, 134, 135, 180, 181, 182, 183, 185, 187, 204, 208, 211, 228, 229, 238, 241, 244, 253, 254, 267, 279; apoyo electoral, 41, 43; ilegalidad, 42, 96

Partido Conservador, 37, 47, 107

Partido de Izquierda Radical (PIR), 174, 179, 202, 203

Partido Liberal, 37, 107

Partido Nacional, 55, 113, 114, 117, 120, 135, 191, 192, 195, 208, 213, 231, 233, 238

Partido Radical, 41, 42, 54, 116, 134, 154, 179, 202, 231, 238

Partido Socialista, 38, 42, 55, 116, 132, 134, 154, 182, 184, 203, 223, 229, 233, 238, 244, 256, 257, 266, 271, 272

Partido Socialista Popular USOPO, 181

partidos de centro, 90

partidos de izquierda, 90

partidos políticos, carácter nacional, 23

partidos políticos, 130

partidos marxistas, 24
partidos centristas, 154
Patria y Libertad, 191, 227

Pearson, correlación simple, 122

Pérez Zujovic, Edmundo, 193, 194

Pinochet Ugarte, general Augusto, 264, 277, 279, 280; gobierno del general, 287

plebiscito, 144, 198, 201, 226, 228, 279

población rural, 98

poblaciones urbanas marginales, 103

Poder Ejecutivo, 128

Poder Judicial, 62, 63, 220

Poder Legislativo, 62, 69, 73, 74

poder popular armado, 267

política latinoamericana, 88

política partidista, 133

política chilena, 26, 45, 53, 58, 59, 177, 195

política chilena, polarización, 196

política gubernamental, 155

política económica, 145, 146, 162, 177

política de ingresos, 170

políticas públicas, 59

políticas de salarios, 103

Portes, Alejandro, 55

Prats, general Carlos, 221, 224, 236, 242, 248, 261, 263, 267,
273, 275, 277

prensa, 190

Presidente de la República, 185, 253, 263, 264

proceso político, 23, 25, 59, 82, 114, 285

proceso democrático, 134, 205

producción agrícola, 149

producción, batalla de la, 185

producción industrial, 173

Producto General Bruto per capita, 85

Producto Nacional Bruto, 148

Producto Geográfico Bruto, 72

productos norteamericanos, 161

productos extranjeros, importación, 149

profesionales universitarios, 56

programa económico, 146

programas de gobierno, 158

proletariado minero, 24

proletariado urbano, 24

propiedades agrícolas, 151

Puerto Montt, 193

Punta Arenas, 270

radicales, 106, 107, 110, 134, 178

redistribución del ingreso, 144, 147

Reforma Agraria, 50, 69, 111, 241
Reforma Constitucional, 69, 164, 197, 247
reformas 1970, 128
reformas, sector rural, 24
régimen democrático, 27, 28, 29, 135, 283
régimen militar represivo, 288
régimen autoritario, 28
relaciones cívico militares, 251
remuneraciones, 169
reparticiones públicas, 35
represión gubernamental, 102
represión policial, 102
República parlamentaria, 51, 88
reservas externas, 155, 162
Revolución de 1891, 22
Revolución cubana, 187

revolución chilena, 185

Rodríguez, Aniceto, 134, 256

Ruiz Danyau, general (A) César, 263, 273, 275

sabotaje económico, 169

salario mínimo, 147

salud, 147

Sartori, Giovanni, 28, 43, 44, 45, 114

Schneider, René, 138, 139

sector agrícola, sindicatos, 171

sector económico privado, 194

sector empresarial, 229

sector minero, políticas del, 223

sector público, 177; participación, 147

sector productivo, 161

sector rural, 66, 90, 104, 116, 136, 151, 231

sectores obreros, 116, 231

sectores populares, 55

seguridad social, 60, 69

Senado, 69, 112, 192, 208

servicios sociales y económicos, 65

Siglo XIX, 68

Silva Henríquez, Cardenal Raúl, 255, 279

sindicalización rural, 103

sindicalización obrera, 103

sindicalización campesina, 98

sindicatos profesionales, 94, 95, 96

sindicatos, 50, 53, 73, 102

sindicatos, industriales y fabriles, 92

sindicatos empleados particulares, 50

sindicatos empleados públicos, 50

sindicatos industriales, 171

sindicatos rurales, 96

sindicatos profesionales e industriales, 35

sistema capitalista, 133, 136

sistema partidario, 55

sistema político, 35, 44, 46, 51, 70, 82, 88, 104, 106, 111, 135, 136, 217, 258; polarización, 125, 225

sistema electoral, 52, 166

sistema socio-económico, 130

sistema de partidos, 73

sistema partidario, 48

sistema partidista competitivo, 193

sistemas políticos en América Latina 25

situación económica 25

socialismo, 135, 204; construcción del, 211; sociedad socialista, 127, 132, 143

socialista, 135, 182, 202, 203, 204, 229, 230, 251

sociedad civil, 50, 53

sociedad chilena 147, 177

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), 50

subsecretario del interior, 269

subsidios, 207

Tancozo, 261

Tapia Valdés, Jorge, 238

Tohá, José, 192

Tomic, Radomiro, 120, 122, 123, 127, 134, 186; candidato perdedor, 140

trabajadores, 132

transformaciones sociales y económicas, 135

transformaciones revolucionarias, 127

transportistas, 273

Tribunal Constitucional, 219, 221, 241, 247

tribunales, 63, 164, 219, 220

Tribunales de Justicia, 128

Unidad nacional, gabinete de, 235

Unidad Popular, 78, 87, 126, 134, 136, 145, 150, 152, 154, 158, 163, 172, 174, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 192, 195, 197, 201, 202, 203, 210, 211, 214, 218, 222, 224, 228, 231, 233, 235, 236, 237, 246, 256, 257, 262, 265, 272, 275, 280, 283, 284, 285, 287; candidato de la, 143; gobierno de, 21, 133, 145, 147, 148, 159, 163, 165, 169, 185, 216, 223, 227, 260, 277; medidas económicas, 148

universidades chilenas, 250

Universidad Católica, 250

Universidad de Chile, 163, 203; Federación de estudiantes, 208

Universidad de Concepción, 116

Valdés, Gabriel, 255, 257

Valparaíso, 178, 269, 279

Veto Presidencial, 199

vía chilena al socialismo, 248, 286

Viaux, general Roberto, 78; alzamiento militar del, 117

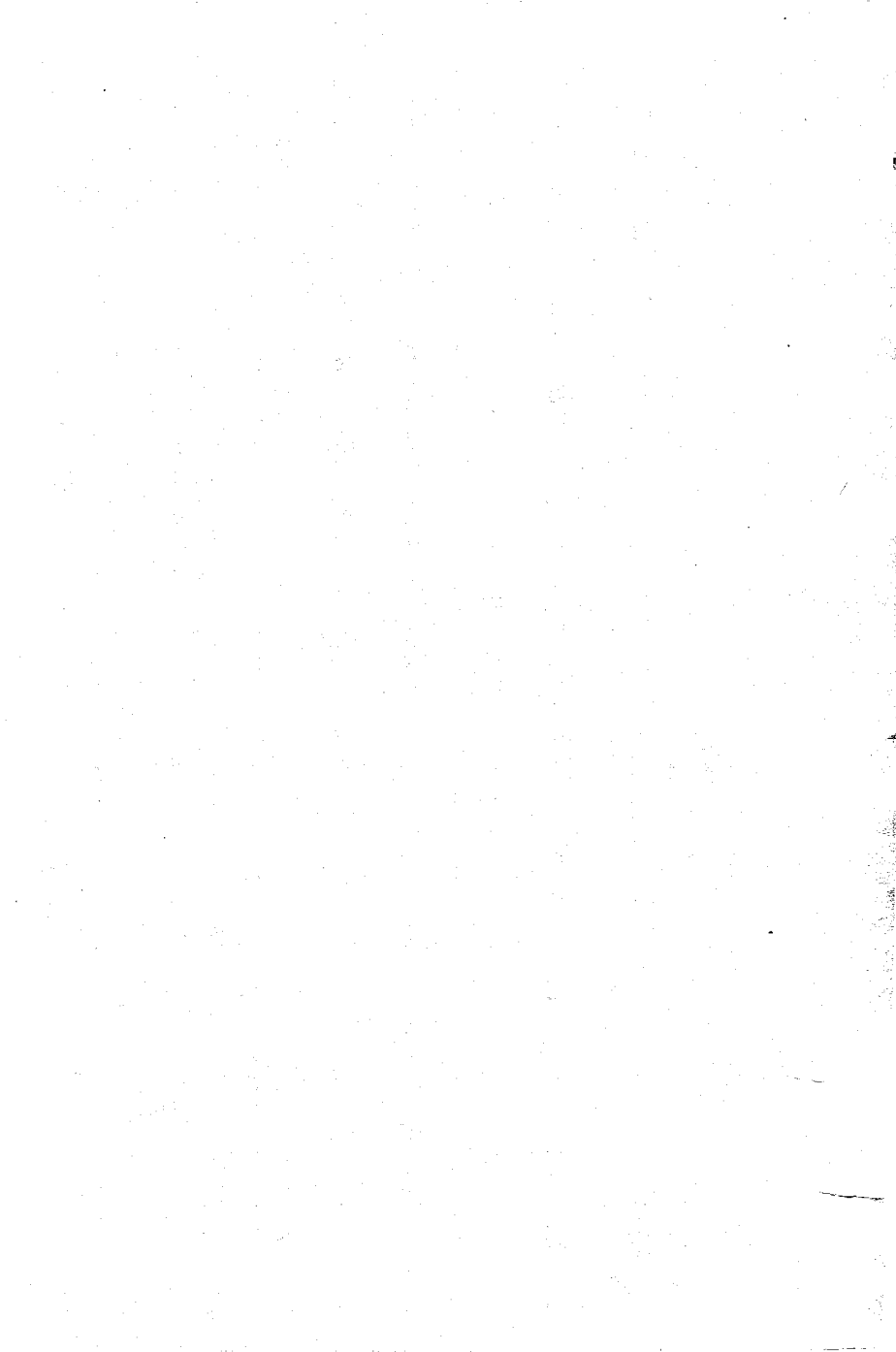
vida económica y política, 143

vivienda, 147

Voto rural, 127

Vuskovic, Pedro, 146, 155, 156, 177, 202, 204





El estudio del quiebre de los regímenes democráticos y la transición del autoritarismo a la democracia, ha llegado a ser una preocupación central en la sociología política contemporánea. El libro de Arturo Valenzuela sobre el quiebre chileno, vastamente conocido en círculos académicos internacionales por medio de su versión en el idioma inglés, pronto se estableció como una obra definitiva acerca de la crisis chilena y una contribución esencial para nuestra comprensión del proceso de derrumbe de regímenes.

del prefacio de Juan Linz, profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Yale.